



**ESCUELA INTERNACIONAL DE DOCTORADO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y
ECONÓMICAS.**

**SENTIDO Y REALIDAD DEL GASTO MILITAR
EN EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA Y SU
IMPACTO EN LAS ECONOMÍAS; ÉNFASIS EN EL
CASO ECUADOR.**

TESIS DOCTORAL

MARÍA GABRIELA CUEVA-JIMÉNEZ

DIRECTOR: DR. RONNY F. CORREA-QUEZADA

TUTOR: DR. JUAN R. CUADRADO-ROURA

MADRID, 2025

AGRADECIMIENTO

A Dios y mi María Auxiliadora, cuya guía ha iluminado mi camino a lo largo de esta jornada doctoral. Su gracia divina han sido la piedra angular de mi perseverancia.

A mi amado esposo, Julio Maximiliano Bolagay, tu amor infinito, comprensión y aliento me sostuvieron en los desafíos y triunfos de este camino. Tu fe en mí nunca titubeó, y por eso, estoy eternamente agradecida.

A mis amados padres, Melsens Cueva y Sonia Jiménez, sus sacrificios infinitos, aliento y creencia inquebrantable en mis capacidades han sido el cimiento de mi éxito. Su sabiduría, orientación y amor incondicional me han moldeado en la persona que soy hoy; a mis Hermanos, mis ángeles de luz, que a lo largo de mi vida su memoria me ha dado fuerza.

A mis amados hijos Kaél y Gael, su paciencia, comprensión y sacrificios han sido mi fuente de fuerza y motivación. Su apoyo inquebrantable y comprensión durante este exigente camino han sido verdaderamente invaluable.

Al PhD. Juan Ramón Cuadrado Roura y PhD. Ronny Correa Quezada, les extiendo mi más sincero agradecimiento por su inestimable mentoría, orientación y apoyo a lo largo de esta investigación. Su experiencia, estímulo y retroalimentación constructiva han sido fundamentales en la formación del resultado de esta tesis.

A todos aquellos que han contribuido de maneras vistas y no vistas, en los nombres de Jhoys Pacheco, Act. Carlos Contreras Cruz, PhD. Roberto Jiménez, PhD. Ana Tulcanaza, Rocío Bolagay, Karolina Mencías, quien con su estímulo y creencia en mis capacidades han sido profundamente apreciados. Este logro no hubiera sido posible sin cada uno de ustedes.

Con profunda gratitud,

María Gabriela Cueva Jiménez

RESUMEN

La presente investigación se centra en un análisis integral del gasto militar en América Latina, poniendo especial énfasis en el caso de Ecuador, con el propósito de entender las implicaciones económicas y sociales que este tipo de gasto genera en el contexto regional. A medida que los países destinan mayores recursos de sus presupuestos nacionales a instituciones dedicadas a la seguridad y defensa, surgen interrogantes sobre cómo estas asignaciones afectan no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo de sectores fundamentales. En este sentido, este estudio responde a la creciente preocupación sobre la capacidad de los gobiernos para equilibrar las demandas del sector defensa con las necesidades sociales de sus ciudadanos, y parte de la premisa de que el gasto militar tiene una naturaleza dual: por un lado, puede actuar como un catalizador para la generación de empleo y el desarrollo de la industria local, pero por otro, representa un posible desvío de recursos que podrían destinarse a sectores clave para el bienestar social.

En el plano económico, el análisis se sustenta en la utilización de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), así como de otras fuentes relevantes que permiten rastrear y examinar las tendencias del gasto militar a lo largo del tiempo, no solo en Ecuador sino también en otros países de la región. Estas fluctuaciones en el gasto, determinadas en gran medida por el contexto político, los desafíos de seguridad y las prioridades económicas de los gobiernos, hacen evidente la necesidad de llevar a cabo un estudio exhaustivo sobre las implicaciones tanto a corto como a largo plazo del gasto militar en las economías regionales. No obstante, aunque este estudio se fundamenta en una óptica económica, no se limita exclusivamente a ella. También se examinan las repercusiones del gasto militar en la seguridad nacional, el equilibrio social y la estabilidad regional, subrayando la importancia de adoptar una perspectiva multidimensional que permita entender de manera holística los efectos del gasto en defensa.

El enfoque metodológico de esta investigación es riguroso y se articula en torno a dos ejes principales: uno bibliométrico y otro econométrico. El enfoque bibliométrico se utiliza para recopilar, analizar y categorizar la literatura existente sobre el gasto militar y su relación con la economía, permitiendo identificar las tendencias predominantes en la investigación académica, así como los autores y estudios más influyentes. A través de este proceso, se

busca no solo rastrear la evolución del conocimiento sobre la materia, sino también identificar lagunas en la investigación que este estudio pueda ayudar a subsanar. El enfoque econométrico, por su parte, se centra en modelar y analizar la relación entre el gasto militar y diversas variables macroeconómicas, tales como el crecimiento del PIB, los niveles de empleo, la distribución del ingreso y el desarrollo social. Este análisis cuantitativo permite establecer correlaciones y posibles causalidades entre el gasto en defensa y los indicadores económicos, proporcionando una visión más completa de los impactos del gasto militar en el contexto ecuatoriano y, por extensión, en otros países de la región.

Los objetivos generales de la tesis incluyen el análisis de la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en Ecuador durante el período 1960-2021. A través de una serie de objetivos específicos, se busca evaluar si este gasto ha tenido efectos adversos en indicadores económicos clave, como el PIB, el empleo y la inversión social, en comparación con países que han priorizado la inversión en otros sectores estratégicos. Dos hipótesis guían el desarrollo de la investigación: la primera sugiere que el crecimiento económico impulsa el incremento del gasto militar, al generar mayores ingresos fiscales que permiten financiar inversiones en defensa. La segunda plantea que el gasto militar, en lugar de contribuir al desarrollo económico, ha tenido un impacto negativo en algunos indicadores clave de la economía ecuatoriana, lo cual se refleja en una menor inversión en otros sectores.

Se espera que los resultados de este estudio aporten al debate sobre la eficiencia del gasto militar en la región y sobre sus repercusiones no solo desde un enfoque estrictamente económico, sino también en términos de seguridad y desarrollo social. Se anticipa que los hallazgos de la investigación proporcionen una base sólida para la formulación de políticas públicas que busquen un equilibrio adecuado entre la necesidad de mantener una defensa nacional robusta y la obligación de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente en sectores que promuevan el bienestar general de la sociedad. En este sentido, se hace hincapié en la importancia de adoptar una visión a largo plazo que permita evaluar tanto los beneficios como los costos del gasto militar, y que considere tanto las necesidades de seguridad del Estado como las demandas sociales de la población.

Además, el presente estudio tiene relevancia no solo para Ecuador, sino para toda América Latina, ya que proporciona un marco comparativo que permite analizar las dinámicas del gasto militar en diferentes países de la región y extraer lecciones que pueden

ser aplicadas en contextos similares. A lo largo de la investigación, se plantea la necesidad de profundizar en el estudio de las interacciones entre el gasto militar y otros factores, como la estabilidad política y el bienestar social, y se proponen líneas futuras de investigación que puedan explorar con mayor detalle los efectos del gasto en defensa en áreas como la estabilidad institucional, la cohesión social y el desarrollo económico sostenible.

En definitiva, la investigación busca contribuir a una comprensión más amplia y matizada del impacto del gasto militar en América Latina, proporcionando herramientas analíticas que faciliten la toma de decisiones informadas por parte de los responsables de formular políticas en la región. Al ofrecer una visión detallada de los efectos del gasto militar, tanto en Ecuador como en otros países de la región, este estudio pretende generar un debate constructivo sobre cómo gestionar de manera óptima los recursos en defensa para promover un desarrollo económico y social inclusivo y sostenible.

DISEÑO/METODOLOGÍA

Para esta investigación se aplicó el método científico como marco metodológico principal. Este enfoque permitió describir las operaciones detalladas, tales como los enfoques, técnicas, procedimientos e instrumentos que se utilizaron para alcanzar los objetivos propuestos. Se llevó a cabo una revisión y tratamiento de fuentes documentales, incluyendo bibliografía y hemerografía relevante para la temática abordada. Además, se procedió a realizar consultas, análisis y procesamiento de bases de datos estadísticas pertinentes al tema del gasto militar y su impacto en las economías de América Latina, con especial atención en Ecuador. Finalmente, se emplearon modelos y técnicas econométricas para el análisis de los datos recopilados, permitiendo así una evaluación de las relaciones entre el gasto militar y los indicadores económicos en la región, específicamente en el caso ecuatoriano.

RESULTADOS

El análisis de la relación entre el gasto militar y el desarrollo económico en Ecuador, basado en un enfoque econométrico y bibliométrico, revela que no existe una relación directa

de largo plazo entre el aumento del gasto militar y el crecimiento económico sostenido. La revisión histórica de los datos entre 1960 y 2021 muestra que el gasto en defensa ha respondido principalmente a las fluctuaciones en los ingresos fiscales, particularmente los relacionados con el petróleo. En términos de causalidad, se identificó que los períodos de bonanza económica preceden un aumento en el gasto militar, sin que se observe una retroalimentación positiva del gasto en defensa hacia el crecimiento económico posterior.

En comparación con otros países latinoamericanos, Ecuador ha mostrado una menor capacidad para convertir el gasto militar en un factor de desarrollo económico estructural, a diferencia de países como Chile y Colombia, donde una planificación más estratégica ha permitido utilizar el gasto en defensa para promover la innovación tecnológica y la estabilidad regional.

ORIGINALIDAD/CONTRIBUCIÓN

Esta investigación ofrece una contribución original al abordar el impacto del gasto militar en seguridad y defensa en la economía de América Latina, con especial énfasis en el caso de Ecuador. Al extender el análisis a un período extenso que abarca desde 1960 hasta 2021, se proporciona una visión de cómo ha evolucionado esta relación a lo largo del tiempo en la región. Además, la revisión de la literatura permitirá no solo examinar la literatura existente sobre economía de la defensa, sino también identificar posibles lagunas en el conocimiento y áreas que requieren más investigación, lo que contribuirá al desarrollo futuro de este campo.

Asimismo, esta investigación se destaca por su enfoque integral, que incluye no solo el análisis del gasto militar en seguridad y defensa, sino también su relación con indicadores económicos. Este enfoque multidimensional proporciona una comprensión más completa de cómo el gasto militar impacta en la economía de los países latinoamericanos, permitiendo identificar no solo los efectos directos, sino también las implicaciones indirectas y secundarias en términos de crecimiento y desarrollo económico. Este enfoque contribuirá significativamente al conocimiento existente sobre este tema y proporcionará información valiosa para formuladores de políticas y académicos interesados en entender la compleja relación entre gasto militar y economía en la región.

IMPLICACIONES

Los resultados obtenidos tienen implicaciones tanto teóricas como económicas y sociales significativas. Desde una perspectiva teórica, contribuyen al cuerpo de conocimientos sobre la relación entre el gasto militar y la economía en América Latina, y su relación con el empleo y la balanza comercial, ofreciendo una visión más completa y detallada de esta dinámica. En términos económicos, los hallazgos pueden ser de gran utilidad para el desarrollo de los países de la región en el sector de defensa, proporcionando información valiosa para la formulación de políticas y la asignación eficiente de recursos en este ámbito. Además, estos resultados sugieren la necesidad de redefinir estrategias que estén alineadas con la situación social y económica específica de cada país, lo que podría contribuir a una gestión más efectiva de los recursos y a un mayor impacto positivo en el desarrollo económico y social de la región.

PALABRAS CLAVES

Gasto militar, América Latina, Economía, Seguridad y defensa, Crecimiento Económico, Ecuador.

ABSTRACT

The present research focuses on a comprehensive analysis of military spending in Latin America, with particular emphasis on the case of Ecuador, aiming to understand the economic and social implications that this type of expenditure generates in the regional context. As countries distribute greater resources from their national budgets to security and defense institutions, questions arise about how these allocations affect not only economic growth but also the development of key sectors. In this regard, this study responds to growing concerns about governments' ability to balance the demands of the defense sector with the social needs of their citizens, based on the premise that military spending has a dual nature: on one hand, it can act as a catalyst for job creation and local industry development; on the other, it represents a potential diversion of resources that could be directed to critical sectors for social well-being.

From an economic perspective, the analysis relies on data from the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) and other relevant sources that allow for the tracking and examination of military spending trends over time, not only in Ecuador but also in other countries in the region. These spending fluctuations, decided by political context, security challenges, and governments' economic priorities, underscore the need for a thorough study of the short- and long-term implications of military expenditure on regional economies. However, while this study is grounded in an economic perspective, it is not limited to it. It also examines the repercussions of military spending on national security, social balance, and regional stability, emphasizing the importance of adopting a multidimensional perspective that enables a holistic understanding of the effects of defense spending.

The methodological approach of this research is rigorous and structured around two main axes: bibliometric and econometric. The bibliometric approach is used to collect, analyze, and categorize the existing literature on military spending and its relationship with the economy, allowing for the identification of prevailing trends in academic research, as well as the most influential authors and studies. This process aims not only to trace the evolution of knowledge on the subject but also to find research gaps that this study can help fill. The econometric approach, on the other hand, focuses on modeling and analyzing the

relationship between military spending and various macroeconomic variables, such as GDP growth, employment levels, income distribution, and social development. This quantitative analysis enables the establishment of correlations and potential causalities between defense spending and economic indicators, providing a more comprehensive view of the impacts of military expenditure in the Ecuadorian context and, by extension, in other countries in the region.

The general objectives of the thesis include analyzing the relationship between military spending and economic growth in Ecuador during the period 1960-2021. Through a series of specific objectives, it seeks to evaluate whether this spending has had adverse effects on key economic indicators, such as GDP, employment, and social investment, compared to countries that have prioritized investment in other strategic sectors. Two hypotheses guide the development of the research: the first suggests that economic growth drives the increase in military spending by generating higher fiscal revenues that allow for defense investments. The second posits that military spending, instead of contributing to economic development, has had a negative impact on some key indicators of the Ecuadorian economy, reflected in lower investment in other sectors.

It is expected that the results of this study will contribute to the debate on the efficiency of military spending in the region and its repercussions not only from a strictly economic approach but also in terms of security and social development. The findings of the research are anticipated to provide a solid foundation for the formulation of public policies that seek an appropriate balance between the need to maintain robust national defense and the obligation to ensure that public resources are used efficiently in sectors that promote the general welfare of society. In this sense, emphasis is placed on the importance of adopting a long-term vision that evaluates both the benefits and costs of military spending and considers both the State's security needs and the social demands of the population.

Furthermore, this study is relevant not only to Ecuador but to all Latin America, as it provides a comparative framework that allows for the analysis of military spending dynamics in different countries in the region and the extraction of lessons that can be applied in similar contexts. Throughout the research, the need to deepen the study of interactions between military spending and other factors, such as political stability and social welfare, is highlighted, and future lines of research are proposed to explore in greater detail the effects

of defense spending on areas such as institutional stability, social cohesion, and sustainable economic development.

In conclusion, the research aims to contribute to a broader and more nuanced understanding of the impact of military spending in Latin America, providing analytical tools that facilitate informed decision-making by policymakers in the region. By offering a detailed view of the effects of military spending, both in Ecuador and other countries in the region, this study seeks to generate constructive debate on how to optimally manage defense resources to promote inclusive and sustainable economic and social development.

DESIGN/METHODOLOGY

The scientific method was applied as the main methodological framework. This approach allowed for a detailed description of operations, such as approaches, techniques, procedures, and instruments used to achieve the proposed objectives. A review and treatment of documentary sources, including relevant bibliography and periodicals on the topic at hand, was conducted. Additionally, queries, analysis, and processing of statistical databases pertinent to military spending and its impact on Latin American economies, with particular attention to Ecuador, were conducted. Finally, econometric models and techniques were employed for the analysis of collected data, thereby enabling an evaluation of relationships between military spending and economic indicators in the region, specifically in the Ecuadorian case.

RESULTS

The analysis of the relationship between military spending and economic development in Ecuador, based on an econometric and bibliometric approach, reveals that there is no long-term direct relationship between increased military spending and sustained economic growth. The historical review of data from 1960 to 2021 shows that defense spending has primarily responded to fluctuations in fiscal revenues, particularly those related to oil. In terms of causality, it was identified that periods of economic boom preceded an increase in military spending, without a positive feedback effect from defense spending on subsequent economic growth.

Compared to other Latin American countries, Ecuador has shown a lower ability to turn military spending into a factor for structural economic development, unlike countries such as Chile and Colombia, where more strategic planning has allowed defense spending to be used to promote technological innovation and regional stability.

ORIGINALITY/CONTRIBUTION

This research offers an original contribution by addressing the impact of military spending on security and defense in the economy of Latin America, with a special emphasis on the case of Ecuador. By extending the analysis to a period spanning from 1960 to 2021, it offers an insight into how this relationship has evolved over time in the region. Additionally, the literature review will not only examine the existing literature on defense economics but also find potential gaps in knowledge and areas requiring further research, which will contribute to the future development of this field.

Furthermore, this research is distinguished by its comprehensive approach, which includes not only the analysis of military spending on security and defense but also its relationship with economic indicators. This multidimensional approach provides a more complete understanding of how military spending affects the economies of Latin American countries, allowing for the identification of not only direct effects but also indirect and secondary implications in terms of economic growth and development. This approach will significantly contribute to the existing knowledge on this topic and provide valuable information for policymakers and academics interested in understanding the complex relationship between military spending and the economy in the region.

IMPLICATIONS

The results obtained have significant theoretical, economic, and social implications. From a theoretical perspective, they contribute to the body of knowledge on the relationship between military expenditure and the economy in Latin America, as well as its connection with employment and the trade balance, providing a more comprehensive and detailed view of this dynamic. Economically, the findings can be incredibly useful for the development of

countries in the region in the defense sector, offering valuable information for policy formulation and efficient resource allocation in this area. Moreover, these results suggest the need to redefine strategies aligned with the specific social and economic conditions of each country, which could contribute to more effective resource management and a greater positive impact on the region's economic and social development.

KEYWORDS

Military expenditure, Latin America, Economy, Security and defense, Economic growth, Ecuador.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

AGRADECIMIENTO	2
RESUMEN	3
DISEÑO/METODOLOGÍA.....	5
RESULTADOS	5
ORIGINALIDAD/CONTRIBUCIÓN.....	6
IMPLICACIONES	7
PALABRAS CLAVES.....	7
ABSTRACT	8
DESIGN/METHODOLOGY	10
RESULTS.....	10
ORIGINALITY/CONTRIBUTION	11
IMPLICATIONS	11
KEYWORDS	12
ÍNDICE DE TABLAS.....	18
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.....	18
CAPÍTULO No. 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	19
1.1. Formulación del problema.....	19
1.2. Justificación de la investigación.....	19
1.3. Objetivos de la tesis.....	20
1.4. Hipótesis	21
1.5. Estructura de la tesis.....	21
CAPÍTULO No. 2: REVISIÓN DE LITERATURA	25
2.1. Conceptualización del Gasto Militar	26
2.2. Teorías relacionadas al Gasto Militar.....	30
CAPÍTULO 3. APROXIMACIÓN AL GASTO MILITAR.....	34
3.1. El gasto público en seguridad y defensa.....	34
3.2. Análisis de la evidencia empírica sobre gasto militar y el crecimiento económico	51
3.3. Criterios de administración de recursos de la seguridad y defensa	56
3.4. Distribución de los recursos al interior de las fuerzas de seguridad y defensa	57
3.5. Problemas estructurales, democracia y gasto militar en América Latina.....	58
3.6. Política en el contexto actual.....	70

CAPÍTULO No. 4 - EL GASTO EN DEFENSA Y LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS. UNA VISIÓN DE CONJUNTO. RASGOS COMUNES Y DIFERENCIALES	80
4.1. Rasgos Comunes del Gasto Militar en América Latina	81
4.2. Ciclos de Expansión y Contracción del Gasto Militar	81
4.3. Dependencia de la Importación de Armamento	82
4.4. Diferencias en el Gasto Militar en América Latina.....	83
4.5. Impacto Económico del Gasto Militar.....	83
4.6. Relación con los Gobiernos Populistas y Autoritarios	84
4.7. Reflexiones Finales: El Futuro del Gasto Militar en América Latina	85
4.8. Conclusiones.....	85
CAPÍTULO No. 5: BASE DEL ANÁLISIS - FUENTES DE DATOS UTILIZADAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR	87
5.1. Metodología de la investigación.....	87
5.2. Población de estudio.....	87
5.3. Datos de la investigación.....	87
5.4. Análisis de cointegración y causalidad para series de tiempo.....	88
5.4.1. Cointegración	89
5.4.2. Causalidad.....	91
5.4.3. Pruebas de raíz unitaria.....	91
5.4.4. Análisis de cointegración y causalidad para datos de panel	92
5.5. Aportes del Capítulo.....	94
CAPÍTULO No. 6 - APLICACIÓN DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS ANALÍTICAS AL ESTUDIO DEL GASTO EN DEFENSA Y SEGURIDAD.....	95
6.1. Resultados basados en el análisis de series de tiempo	95
6.2. Resultados basados en el análisis con datos de panel.....	108
6.3. Discusión de resultados.....	111
6.4. Aportes del Capítulo.....	113
CAPÍTULO No. 7 - ANALISIS ESPECÍFICO DEL CASO DE ECUADOR	114
7.1. Contexto Histórico del Gasto Militar en Ecuador	117
7.2. Análisis Estadístico Descriptivo.....	120
7.3. Pruebas de Cointegración y Causalidad	124
7.4. Cointegración	124
7.5. Causalidad de Granger	128

7.6. Efectos del Gasto Militar en el Desarrollo Económico	131
CAPÍTULO No. 8 - IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN	135
8.1. Implicaciones teóricas	135
8.2. Implicaciones económicas	136
8.3. Implicaciones sociales	137
CAPÍTULO No. 9 - CONCLUSIONES Y CUESTIONES QUE REMARCAR.....	141
9.1. Conclusiones Generales de la Investigación	141
9.2. Conclusiones del Caso de Ecuador.....	143
9.3. Conclusiones para futuras investigaciones.....	144
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	147
ANEXOS	152
ANEXO No. 1: La Seguridad y Defensa en Latinoamérica.....	153
A1. Argentina	153
A2. Bolivia	155
A3. Brasil.....	157
A4. Chile.....	158
A5. Colombia	160
A6. Costa Rica.....	162
A7. Cuba.....	164
A8. Ecuador	166
A9. El Salvador	168
A10. Guatemala.....	170
A11. Haití	171
A12. Honduras.....	173
A13. México	175
A14. Nicaragua.....	176
A15. Panamá.....	178
A16. Paraguay	180
A17. Perú.....	182
A18. República Dominicana.	184
A19. Uruguay	186
A20. Venezuela	188

ANEXO No. 2: Capacidad Estratégica del sector defensa en Latinoamérica	190
B1. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Argentina	190
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	191
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	193
B2. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Bolivia.....	195
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	196
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	198
B3. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Brasil.....	200
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	201
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	203
B4. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Chile.....	205
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	206
Análisis Estructural del Gasto de Defensa.	208
B5. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Colombia.....	210
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	212
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	213
B6. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Costa Rica.....	215
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	216
B7. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Cuba.....	217
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	218
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	218
B8. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Ecuador	220
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	221
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	224
B9. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: El Salvador.....	225
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	226
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	228
B10. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Guatemala	230
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	231
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	232
B11. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Haití	234
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	235

Análisis Estructural del Gasto de Defensa	237
B12. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Honduras.....	239
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	240
B13. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: México	242
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	243
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	245
B14. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Nicaragua.....	247
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	248
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	250
B15. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Panamá.....	252
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	253
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	254
B16. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Paraguay	256
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	257
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	258
B17. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Perú.....	259
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	260
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	261
B18. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: República Dominicana.....	263
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	264
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	265
B19. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Uruguay	267
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	268
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	269
B20. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Venezuela	271
Análisis Tendencial del Gasto de Defensa	272
Análisis Estructural del Gasto de Defensa	273

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Cambios en los desafíos de seguridad y defensa globales.	43
Tabla 2: Fundamentos Conceptuales	51
Tabla 3: Ciudades más violentas de América Latina, según Niño (2020), año de referencia 2018.	61
Tabla 4: Mayores índices de criminalidad, y correspondiente índice de seguridad en países de América Latina, según Niño (2020), año de referencia 2019.	62
Tabla 5: Variables y fuentes de información	89
Tabla 6: Países y periodo de estudio.	89
Tabla 7: Estadísticas descriptivas.	98
Tabla 8: Pruebas de raíz unitaria	99
Tabla 9: Prueba de raíz unitaria con quiebres estructurales	101
Tabla 10: Pruebas de cointegración: traza y valor propio máximo	103
Tabla 11: Causalidad de Granger.	104
Tabla 12: Causalidad según el procedimiento de Toda y Yamamoto (1995)	106
Tabla 13: Pruebas de especificación de los modelos VAR.	108
Tabla 14: Medidas descriptivas.	108
Tabla 15: Pruebas de dependencia espacial.....	109
Tabla 16: Pruebas de raíz unitaria	109
Tabla 17: Pruebas de cointegración.....	110
Tabla 18: Causalidad.	111

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Gasto militar por región en dólares estadounidenses constantes.	35
Ilustración 2: Gasto militar como porcentaje del PIB	55
Ilustración 3: Costos del crimen por subregión, América Latina, según Jaitman (2017). Año de referencia 2014.	64
Ilustración 4: Costos del crimen, comparación internacional de países con más altas tasas y América Latina y el Caribe, según Jaitman (2017). Año de referencia 2014.....	65
Ilustración 5: Costos del Crimen por país de América Latina, de mayor a menor, según Jaitman (2017). Año de referencia 2014.	66
Ilustración 6: Gasto militar como porcentaje del PIB en el mundo y en América Latina, 1960-2020.....	72
Ilustración 7: Gasto militar como porcentaje del PIB en los países del mundo. Año de referencia 2022.	73

CAPÍTULO No. 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

1.1. Formulación del problema

El gasto militar y su impacto en el desarrollo económico y social ha sido objeto de un debate prolongado en la academia y en los círculos políticos. En América Latina, y particularmente en Ecuador, este tema adquiere una relevancia singular debido a la estructura de las economías de la región, las demandas de seguridad nacional, y las limitaciones presupuestarias a las que se enfrentan los gobiernos. La pregunta fundamental que aborda esta tesis es: ¿Cómo afecta el gasto militar en Ecuador a su economía, y cuáles son las implicaciones de este gasto en el contexto de América Latina?

El crecimiento económico, en cualquier país, es el resultado de decisiones estratégicas sobre el uso y asignación de recursos, y en el caso de Ecuador, el gasto militar ha sido una de las áreas más controvertidas en las últimas décadas. A medida que los gobiernos enfrentan la necesidad de garantizar la seguridad nacional, especialmente en una región que ha visto conflictos internos y tensiones internacionales, también enfrentan la presión de equilibrar estas necesidades con las exigencias de desarrollo social y económico.

Por lo tanto, esta tesis se propone no solo analizar cómo el gasto militar ha afectado al crecimiento económico en Ecuador, sino también evaluar si existe una relación de causalidad directa entre ambas variables. Además, se busca situar este análisis en el contexto más amplio de América Latina, lo que permitirá una comprensión comparativa y regional del fenómeno. Esto es especialmente relevante dado que la región ha experimentado periodos de alta inversión militar en respuesta a amenazas tanto internas como externas, lo que ha generado una serie de dinámicas económicas complejas y diversos enfoques en cuanto a la distribución de los recursos.

1.2. Justificación de la investigación

La justificación de esta investigación radica en la necesidad de comprender, de manera rigurosa y sistemática, los efectos del gasto militar en el desarrollo económico y social de Ecuador, en el marco de un análisis más amplio de América Latina. En el contexto

actual, donde la seguridad nacional es una prioridad creciente para muchos países de la región debido a factores como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la inestabilidad política, el gasto en defensa ha aumentado de manera significativa. Sin embargo, estos aumentos en el gasto militar pueden generar tensiones presupuestarias que afectan la capacidad de los gobiernos para invertir en otros sectores vitales.

Estudios previos han abordado la relación entre gasto militar y crecimiento económico, pero la mayoría de estos análisis se han centrado en grandes potencias militares o en contextos muy específicos, dejando un vacío en la literatura sobre cómo esta relación se manifiesta en economías en desarrollo como la de Ecuador. Además, existe una necesidad apremiante de entender cómo las dinámicas geopolíticas actuales, como la creciente influencia de actores no estatales y la presión internacional para aumentar el gasto en defensa, están reconfigurando las prioridades presupuestarias de los países latinoamericanos.

1.3. Objetivos de la tesis

Objetivo General:

Analizar la relación entre el gasto militar y el desarrollo económico en Ecuador y América Latina, con el fin de generar evidencia empírica y ofrecer recomendaciones para la formulación de políticas públicas que equilibren las necesidades de seguridad nacional y el crecimiento económico.

Objetivos Específicos:

1. Evaluar la relación entre el crecimiento económico y el gasto militar en Ecuador, analizando el impacto de este último en indicadores económicos clave para determinar su influencia en el desarrollo del país.
2. Realizar un análisis comparativo de las políticas de gasto militar en Ecuador y otros países de América Latina, identificando patrones comunes y diferencias que puedan estar asociadas a factores económicos, políticos o sociales.
3. Proponer recomendaciones para optimizar el uso de los recursos destinados a la defensa en Ecuador, orientadas a garantizar la seguridad nacional sin comprometer el crecimiento económico y el desarrollo social del país.

1.4. Hipótesis

Se plantean las siguientes hipótesis como guías para el desarrollo de la investigación:

Hipótesis 1. Existe una relación de causalidad unidireccional entre el gasto militar y el crecimiento económico a corto plazo. Durante un período específico a corto plazo, un aumento en el crecimiento económico conduce directamente a un aumento correspondiente en el gasto militar, lo que indica una relación causal unidireccional entre estas dos variables.

Hipótesis 2. En el caso específico de Ecuador, el aumento del gasto militar en seguridad y defensa durante el período 1960-2021 ha tenido un impacto negativo considerando la eficiencia de estos en relación con los indicadores económicos clave como el crecimiento del PIB y el desarrollo económico, en comparación con otros países de la región que han priorizado la inversión en otros sectores.

1.5. Estructura de la tesis

La estructura de la parte de una fundamentación teórica y conceptual, pasando por el análisis empírico y metodológico, hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones para la formulación de políticas. A continuación, se detalla la secuencia de capítulos:

Capítulo 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Este capítulo presenta el problema de la investigación, que se enfoca en el impacto del gasto militar en el desarrollo económico de Ecuador y América Latina. Se expone la importancia de analizar este fenómeno desde una perspectiva comparativa regional, y se plantean las hipótesis y los objetivos que guiarán el desarrollo de la tesis. También se justifica la relevancia del estudio en el contexto actual de la región, donde los países enfrentan la necesidad de equilibrar las demandas de seguridad y desarrollo social.

Capítulo 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA: Este capítulo explora las principales teorías económicas relacionadas con el gasto militar, incluyendo los enfoques neoclásico, keynesiano, institucionalista y marxista. Se analizan los fundamentos teóricos y doctrinales que explican la relación entre el gasto en defensa y el crecimiento económico, así como sus implicaciones en términos de seguridad nacional y desarrollo social.

Capítulo 3. APROXIMACIÓN AL GASTO MILITAR: Este capítulo examina la estructura y dinámica del gasto en seguridad y defensa, resaltando su papel central en las políticas públicas de los Estados. Dicho gasto se clasifica en tres categorías principales: defensa, orientada a proteger la soberanía territorial y garantizar la integridad nacional; seguridad interior, dirigida a prevenir el delito, fortalecer el orden público y combatir amenazas internas; y seguridad exterior, enfocada en la cooperación internacional y la preservación de la estabilidad regional ante desafíos externos.

Capítulo 4. BASE DEL ANÁLISIS – FUENTES DE DATOS Y METODOLOGÍA: En este capítulo se describe la metodología de la investigación, detallando las fuentes de datos utilizadas y los modelos econométricos aplicados para evaluar la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en Ecuador y otros países de América Latina. Se incluye un análisis de cointegración y causalidad para evaluar las interacciones entre estas variables.

Capítulo 5. EL GASTO EN DEFENSA Y LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS – RASGOS: COMUNES Y DIFERENCIALES: Este capítulo ofrece una visión de conjunto sobre el gasto militar en América Latina, destacando los patrones comunes y las diferencias entre los países de la región. Se examinan los ciclos de expansión y contracción del gasto militar, la dependencia de las importaciones de armamento y la relación entre las políticas de defensa y los regímenes políticos en la región.

Capítulo 6. APLICACIÓN DE TÉCNICAS ANALÍTICAS AL ESTUDIO DEL GASTO EN DEFENSA Y SEGURIDAD: En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis econométrico, tanto con series de tiempo como con datos de

panel. Se discuten las correlaciones identificadas entre el gasto militar y variables económicas clave, como el PIB, el empleo y la balanza comercial, comparando los resultados obtenidos en Ecuador con los de otros países latinoamericanos.

Capítulo 7. ANÁLISIS ESPECÍFICO DEL CASO DE ECUADOR: Este capítulo se enfoca exclusivamente en Ecuador, presentando un análisis detallado de la evolución del gasto militar en el país y su impacto en el desarrollo económico. Se incluyen pruebas de cointegración y causalidad para evaluar cómo el gasto en defensa ha influido en indicadores económicos como el crecimiento del PIB y el empleo.

Capítulo 8. IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN – LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: En este capítulo se discuten las implicaciones teóricas, económicas y sociales de los resultados obtenidos en la investigación. Además, se reconocen las limitaciones del estudio, como la disponibilidad de datos y la complejidad del tema. También se proponen posibles direcciones para futuras investigaciones en el campo del gasto militar y su impacto en la economía.

Capítulo 9. CONCLUSIONES Y CUESTIONES PARA REMARCAR: El capítulo final sintetiza los principales hallazgos de la tesis, destacando la relación entre el gasto militar y el desarrollo económico en Ecuador y América Latina. Se subrayan las diferencias regionales en las políticas de defensa y se ofrecen recomendaciones para la formulación de políticas públicas que promuevan un equilibrio entre la seguridad nacional y el desarrollo social sostenible.

En la estructura de este trabajo de investigación, se ha decidido incorporar los Anexos 1 y 2 (A y B) relacionados al gasto militar y la estructura de este en América Latina debido a su relevancia y al volumen de información que contienen, la cual complementa y enriquece el contenido principal del documento. Estos anexos permiten proporcionar detalles adicionales y datos específicos que, aunque fundamentales para la comprensión del estudio, podrían interrumpir la fluidez del texto principal. Al ser presentados de forma separada, se

facilita la lectura y comprensión general del trabajo, sin sacrificar la calidad ni profundidad del análisis.

La decisión de trasladar esta información a los anexos también responde a la necesidad de mantener la claridad y coherencia en la exposición. Los Anexos 1 y 2 incluyen materiales técnicos, tablas, gráficos y documentos que resultan imprescindibles para una evaluación exhaustiva del trabajo, pero que por su extensión o nivel de detalle podrían sobrecargar la parte central de la tesis. Al ubicarlos al final, se garantiza que el lector pueda acceder a ellos cuando lo considere necesario, sin perder la estructura ordenada del documento principal.

CAPÍTULO No. 2: REVISIÓN DE LITERATURA

El gasto militar en seguridad y defensa nacional puede tener un impacto significativo en la economía de los países de América Latina; este puede representar una gran parte del presupuesto de un país y puede afectar la disponibilidad de fondos para otros programas y proyectos gubernamentales.

El gasto militar también puede generar empleo y contribuir al desarrollo de la industria local. Por ejemplo, el gobierno puede contratar a empresas locales para producir equipos militares y suministros, lo que puede impulsar la economía del país (Castelar, 2009); sin embargo, también es importante tener en cuenta que el gasto militar puede desplazar a otros sectores de la economía, ya que los recursos financieros y materiales utilizados para la defensa podrían haber sido utilizados en otras áreas (Fraga, 2004).

Por otro lado, el gasto militar también puede tener un impacto negativo en la economía de un país si se realiza en exceso o si se utilizan fondos de manera ineficiente. Por ejemplo, el gasto militar puede aumentar la deuda del gobierno y reducir la inversión en otras áreas importantes, puede distraer la atención del gobierno de otras prioridades y necesidades importantes de la población.

El gasto militar, como objeto de estudio, es una categoría compleja que tiene implicaciones teóricas relacionadas con los conceptos de justicia y de derechos, así como con los análisis de la gestión pública y los aportes teóricos sobre los roles y fines del Estado. Simultáneamente este objeto se caracteriza de manera específica en los escenarios prácticos de los países, los cuales diseñan e implementan políticas públicas acordes con sus necesidades y con su visión frente a la importancia de la seguridad en su propio contexto. Sin duda, este indicador hace referencia a una variable fundamental del desarrollo, porque está en la base de la estabilidad de las instituciones y el bienestar de los ciudadanos de cada país (Scheetz, 1995).

Considerando la importancia del gasto militar para estos dos fines (la estabilidad y el bienestar) se describe la situación característica de la región latinoamericana y la pertinencia de los recursos destinados a la seguridad en el contexto de la democracia, evidenciando que no solo se debe valorar el peso en recursos destinados para los fines correspondientes, sino

también el costo de la violencia y la inseguridad, que es una carga para la ciudadanía (Kollias et al., 2017).

Del mismo modo, se abordan los fundamentos de las políticas públicas actuales en materia de seguridad y defensa, observando el rol principal que corresponde al Estado en la garantía de los derechos de los ciudadanos, aportando los recursos necesarios para las acciones en esta materia, así como las nuevas tendencias en la conceptualización y práctica de la seguridad, con un enfoque participativo e integral que satisface las expectativas de la población (Valiño Mayo & Abe, 1997).

Para los países es fundamental contar con recursos suficientes de defensa y seguridad que les garanticen poder conservar su estabilidad, así como avanzar en la investigación y desarrollo tecnológico a partir de los conocimientos específicos de las fuerzas militares, porque con ello, sus gobiernos logran generar mayores niveles de bienestar entre sus ciudadanos, lo cual es muy importante en el escenario de América Latina, en el que se presentan problemas estructurales que no han sido posible controlar a pesar de los esfuerzos económicos y estratégicos para hacerlo.

2.1. Conceptualización del Gasto Militar

La defensa nacional es el conjunto de medidas y acciones adoptadas por un estado para proteger su territorio, su población y sus intereses políticos, económicos y militares. Estas medidas pueden incluir la construcción de sistemas de defensa, como fortificaciones y sistemas de vigilancia, así como la formación y el entrenamiento de un ejército y otras fuerzas de seguridad (Giha Tobar et al., 1999).

La defensa nacional también puede incluir la participación en alianzas militares y el desarrollo de relaciones de defensa con otros países. Esto puede proporcionar un mayor grado de protección y seguridad a un país y puede ser especialmente importante en caso de amenazas externas o conflictos internacionales.

El gobierno es el principal responsable de la defensa nacional de un país y suele ser el encargado de fijar las políticas y estrategias de defensa y de asignar los recursos necesarios para implementarlas. Sin embargo, la defensa nacional no solo es responsabilidad del gobierno, sino que también implica la participación de la sociedad en su conjunto. Por

ejemplo, puede incluir programas de protección civil y de educación cívica destinados a preparar a la población para situaciones de emergencia o conflicto (Giha Tobar et al., 1999).

En el extenso estudio de los determinantes del crecimiento económico a largo plazo, se han identificado variables fundamentales, como la inversión en lo escrito por Manuelito & Jiménez (2013) y Serebrisky et al. (2015). Sin embargo, la importancia económica del gasto en defensa no se enfatiza de manera similar a Dunne (2005). Empíricamente, Barro (1989) presentó evidencia de que el gasto en defensa no es significativo para el crecimiento económico. De manera similar, Sala-i-Martin (2004) investigaron los determinantes del crecimiento económico con un número significativo de variables, incluido el gasto en defensa. Los resultados indicaron que, de 67 variables, 18 fueron significativas, pero ninguna estaba relacionada con el sector de defensa, lo que sugiere su irrelevancia (d'Agostino et al., 2020).

Por otro lado, la literatura sobre economía de la defensa ha generado una variedad de discusiones teóricas y especialmente empíricas sobre el efecto del gasto en defensa en el crecimiento económico, pero sin un consenso sólido. Teóricamente, se ha argumentado que hay varios canales a través de los cuales el gasto militar puede impactar el crecimiento económico. En este sentido, Sempere (2018) mencionó que el gasto en defensa puede tener un efecto económico favorable a través de la seguridad, ya que fomenta el comercio y la inversión, a través de la infraestructura y el capital humano que pueden ser accesibles para otros sectores, y a través del efecto multiplicador del gasto que impulsa la demanda agregada. De manera similar, Desli (2017) afirmaron que el gasto militar puede crear efectos de derrame debido a la investigación y desarrollo militar, y estimular la demanda agregada (a través del militarismo keynesiano), contribuyendo al crecimiento económico (Desli et al., 2017).

Según J. P. Dunne (2005), el sector de defensa afecta el crecimiento económico a través de la demanda, la oferta y la seguridad. En el lado de la demanda, los elementos esenciales son el nivel y la composición del gasto (el efecto multiplicador del gasto). En el lado de la oferta, se destaca la disponibilidad de factores de producción, y a través del efecto de seguridad, que promueve la inversión y la innovación y, consecuentemente, la producción. El canal de transmisión de los efectos económicos del gasto en defensa puede ser indirecto, a través de la inversión o el empleo Heo & Ye (2016). En este sentido, Barro (1989, 1991)

señaló que el gasto militar puede influir en la productividad del sector privado o en los derechos de propiedad y, consecuentemente, en la inversión privada. Heo & Ye (2016) mencionaron que el gasto en defensa puede generar empleo a través de la contratación de soldados en servicio activo, personal civil, empresas externas y subcontratistas que proporcionan bienes y servicios a lo militar (Acosta, 2019).

Por otro lado, el gasto asignado al sector de defensa refleja costos de oportunidad elevados, ya que puede desplazar gastos más productivos y necesidades públicas. Además, la investigación y el desarrollo militar pueden perturbar, sustituir o disminuir su contraparte civil por Cowan & Foray (1995), Desli (2017) y Sempere (2018). Según Cowan & Foray (1995), en el ciclo de vida de la tecnología, la investigación y el desarrollo militar son beneficiosos solo para la investigación y desarrollo civil durante la etapa de experimentación, donde surge un nuevo conocimiento general sobre tecnología emergente. En la fase de racionalización, donde el uso de tecnología se especializa en cada sector, la investigación y el desarrollo militar tienen poco valor para el sector civil. En este sentido, la investigación y el desarrollo militar ya no serían tan importantes para el sector civil (Dunne & Smith, 2020).

Los primeros estudios que analizaron el vínculo entre el gasto militar y el crecimiento económico pertenecen a Benoit (1973, 1978). El autor encontró una asociación positiva, principalmente proveniente del gasto en defensa. Investigaciones posteriores han cuestionado la validez de la hipótesis de Benoit, ya que un cuerpo sustancial de evidencia empírica indica que el gasto militar produce no solo efectos positivos, sino también negativos y neutrales. En consecuencia, existe evidencia que sugiere que en ciertas instancias, la relación causal se origina a partir del crecimiento económico, particularmente prevalente en naciones en desarrollo, en lugar de la suposición convencional de que el gasto militar impulsa el crecimiento económico. Además, esta investigación resalta la existencia de causalidad bidireccional en algunos casos, enfatizando la naturaleza intrincada y multifacética de la relación entre el gasto militar y la dinámica económica.

Sin embargo, algunos estudios posteriores que evaluaron el mismo vínculo confirmaron la hipótesis de Benoit, mientras que otros llegaron a conclusiones opuestas, e incluso hay evidencia que sugiere un efecto económico nulo. En términos de causalidad, hay evidencia de que la dirección de la causalidad proviene del crecimiento económico (principalmente en países en desarrollo) y no al revés, así como causalidad bidireccional. En

general, los diversos tipos de hallazgos contribuyen a la falta de consenso sobre el efecto económico del gasto militar. Respecto al efecto nulo, J. Dunne & Smith (2020), a través de técnicas econométricas para datos de panel, argumentaron que desde 1960 hasta 2014, no hay evidencia de una relación fuerte entre el gasto militar, el crecimiento económico y la inversión. Un grupo de países de la Unión Europea, J. Dunne & Nikolaidou (2012), concluyeron que el gasto en defensa no estimuló el crecimiento económico; por el contrario, puede tener un efecto negativo o nulo. En el caso de la economía de los Estados Unidos, Heo (2000, 2010) mencionó que los recursos asignados al sector de defensa no tienen efectos económicos significativos. A pesar de la gran cantidad de evidencia empírica sobre el vínculo entre el gasto militar y el crecimiento económico, no hay consenso, lo que puede explicarse por varias razones técnicas:

i) composición de la muestra, especificación del modelo y métodos de estimación Aziz & Asadullah, (2017); J. Dunne & Smith (2020);

ii) problemas de endogeneidad de la variable vinculada al sector de defensa que no se han abordado adecuadamente D'Agostino et al., (2017),

iii) heterogeneidad de la muestra y no linealidad de P. Dunne & Tian, (2013); Huang et al. (2017); y

iv) debilidades de los modelos teóricos, como el modelo de Feder-Ram, que es propenso a interpretaciones erróneas, y su estimación econométrica contiene problemas de sesgo simultáneo.

Alternativamente, los modelos Barro y Solow aumentados ofrecen mejores resultados en comparación con el modelo de Feder-Ram por J. P. Dunne & Otros (2005). Por lo tanto, es necesario analizar la evidencia empírica y los hallazgos sobre la relación entre el gasto militar y el desempeño económico.

El gasto militar es el conjunto de inversiones y recursos económicos destinados a la defensa y seguridad de un país. Esto incluye el desarrollo, adquisición y mantenimiento de equipamiento militar, así como la formación y el pago de personal militar y civil. También puede incluir proyectos de infraestructura y construcción necesarios para apoyar las operaciones militares.

El nivel de gasto militar de un país puede variar ampliamente y puede ser influenciado por factores como la política de seguridad nacional, el tamaño y la capacidad de la fuerza

militar, y el entorno internacional en el que se encuentra el país. Algunos países tienen altos niveles de gasto militar debido a la presencia de conflictos armados o a la necesidad de proteger su soberanía y sus intereses nacionales. Otros países tienen niveles más bajos de gasto militar debido a la falta de amenazas inmediatas o a la adopción de una política de no-intervención en asuntos internacionales (Scheetz, 1995).

El gasto militar también puede tener un impacto significativo en la economía y el presupuesto de un país. Puede ser una fuente importante de empleo y puede contribuir al desarrollo de tecnologías y capacidades industriales.

2.2. Teorías relacionadas al Gasto Militar

Enfoque Neoclásico

El enfoque neoclásico en economía aborda el gasto militar desde la perspectiva del costo de oportunidad, evaluando la eficiencia en la asignación de recursos para maximizar el bienestar general. Desde este enfoque, el gasto militar se considera un bien público, necesario para garantizar la seguridad nacional, pero que compite con otros usos potenciales de los recursos públicos. La premisa central es que cada unidad monetaria invertida en defensa no puede ser utilizada en estos otros sectores, lo que requiere un análisis riguroso para determinar si los beneficios obtenidos del gasto en defensa justifican los recursos asignados (Diaz & Fonfría Mesa, 2018).

Uno de los conceptos clave en el enfoque neoclásico es la eficiencia en la asignación de recursos. Este enfoque pone énfasis en la necesidad de evaluar si el gasto militar genera un retorno social y económico igual o superior al que podría obtenerse en otras áreas de inversión pública. Por ejemplo, la inversión en educación, que genera beneficios a largo plazo en términos de mayor productividad laboral y crecimiento económico sostenido, puede tener un impacto más positivo en el bienestar económico general que ciertos tipos de gasto militar. Asimismo, la inversión en infraestructura puede mejorar la eficiencia productiva y reducir los costos operacionales en la economía.

En este sentido, el análisis neoclásico también subraya la importancia de la efectividad del gasto. No todo gasto militar es igualmente productivo, y es crucial evaluar qué áreas del gasto en defensa proporcionan mayores beneficios para la seguridad nacional.

Inversiones en tecnología avanzada y en capacidades estratégicas pueden tener un impacto significativamente mayor en la seguridad nacional y el crecimiento económico que el gasto en programas militares menos eficientes o en aquellos marcados por la corrupción y la mala gestión. Estos problemas, tal como lo señala Barry Buzan (1984), pueden tener implicaciones negativas no solo para la seguridad nacional, sino también para el equilibrio económico y social, al desviar recursos hacia programas ineficaces (Buzan, 1984).

Enfoque Keynesiano

El enfoque keynesiano considera el gasto militar como una herramienta del gasto público que puede estimular la economía mediante efectos multiplicadores. Este enfoque, basado en la teoría de John Maynard Keynes, propone que, en situaciones de recesión económica, el gasto estatal, incluido el gasto militar, puede jugar un papel crucial para compensar la caída de la inversión privada y el consumo, lo que puede estabilizar la economía y fomentar el crecimiento.

El gasto militar, dentro de este marco, tiene un impacto importante al inyectar dinero en la economía, lo cual puede crear empleo y aumentar la demanda de bienes y servicios. Este proceso, conocido como efecto multiplicador, sugiere que cada unidad monetaria gastada por el gobierno genera más de una unidad monetaria en actividad económica. Los salarios pagados a personal militar, la compra de equipamiento y las contrataciones de servicios son ejemplos claros de cómo el gasto militar puede impulsar otras áreas de la economía, creando un ciclo virtuoso de consumo y producción.

No obstante, aunque el enfoque keynesiano resalta el potencial del gasto militar para estimular la demanda agregada y reducir el desempleo, también reconoce las limitaciones de este tipo de gasto. A largo plazo, un gasto militar excesivo puede llevar a desequilibrios fiscales y aumentar la deuda pública, lo que puede requerir ajustes en el futuro. Además, la eficiencia en la gestión del gasto militar es crucial para evitar desperdicio de recursos. Tal como lo señala Barry Buzan, una mala gestión del gasto en defensa puede afectar no solo la economía, sino también la legitimidad y estabilidad del sistema político (Sisco & Chacón, 2004).

Enfoque Institucionalista

El enfoque institucionalista pone énfasis en cómo las instituciones políticas y sociales influyen en la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico. Este enfoque, desarrollado por varios autores, entre ellos Buzan, sostiene que la economía está profundamente influenciada por el contexto institucional, donde las leyes, normas y estructuras de poder desempeñan un papel crucial en la determinación de cómo se asignan los recursos y cómo se definen las prioridades de gasto (Buzan, 1984).

Desde la perspectiva institucionalista, las relaciones de poder y los intereses creados pueden influir en las decisiones de gasto militar, lo que puede llevar a una asignación ineficiente de los recursos. Por ejemplo, en muchos países, el complejo militar-industrial ejerce una gran influencia sobre las decisiones de gasto, promoviendo proyectos militares costosos que benefician a grupos de interés específicos en detrimento del bienestar económico general. Buzan señala que las dinámicas internas dentro de un sistema de seguridad están moldeadas por la influencia de estas estructuras y que la corrupción y la ineficiencia en la gestión de la defensa pueden ser especialmente perjudiciales en entornos institucionales débiles (Sisco & Chacón, 2004).

Además, este enfoque resalta cómo las decisiones de gasto militar reflejan los valores y prioridades de una sociedad. En algunos contextos, una preocupación excesiva por la seguridad nacional puede llevar a desviar recursos que podrían ser más eficaces en el desarrollo de sectores sociales críticos. Según Buzan, la seguridad y el bienestar social deben ser vistos como conceptos interconectados, y un desequilibrio en la asignación de recursos puede debilitar tanto la economía como la legitimidad política (Sisco & Chacón, 2004).

Enfoque Marxista

El enfoque marxista analiza el gasto militar dentro del contexto de las relaciones de clase y la acumulación de capital. Desde esta perspectiva, el gasto militar no solo se justifica por las necesidades de defensa nacional, sino que también se entiende como un mecanismo para mantener el orden económico y social, protegiendo los intereses de las élites capitalistas.

Marx sostuvo que el estado y sus instituciones sirven para preservar los intereses de la clase dominante, y el gasto militar es una herramienta clave en este proceso.

El gasto militar, según el enfoque marxista, sirve para absorber el excedente de capital, evitando crisis de sobreproducción al canalizar recursos hacia la industria militar. Este fenómeno, que mantiene altos niveles de demanda en ciertos sectores de la economía, también puede fomentar la innovación tecnológica y el desarrollo industrial. Sin embargo, el beneficio económico de este gasto tiende a concentrarse en sectores específicos, lo que puede aumentar las desigualdades sociales y económicas. En este sentido, Buzan sostiene que el gasto militar, en lugar de promover un desarrollo equitativo, a menudo refuerza las estructuras de poder existentes y perpetúa los desequilibrios dentro del sistema (Sisco & Chacón, 2004).

Además, el enfoque marxista critica cómo el gasto militar desplaza los recursos de áreas esenciales como la educación y la salud, exacerbando las tensiones sociales y las desigualdades. Este tipo de gasto prioriza la seguridad del estado por encima de las necesidades de la clase trabajadora, lo que, desde la perspectiva marxista, refleja las prioridades del sistema capitalista, orientado a proteger los intereses de las élites económicas.

CAPÍTULO 3. APROXIMACIÓN AL GASTO MILITAR

3.1. El gasto público en seguridad y defensa

La estructura del gasto público en seguridad y defensa varía dependiendo de cada país y de sus prioridades en materia de seguridad nacional. Sin embargo, en general, este tipo de gasto se divide en tres grandes áreas:

Defensa: comprende el conjunto de actividades destinadas a la protección del territorio y la soberanía del país. Esto incluye el mantenimiento y la modernización de las Fuerzas Armadas, la adquisición de armamento y equipamiento militar, la investigación y el desarrollo de tecnologías de defensa, la formación de personal especializado, entre otros.

Seguridad interior: se refiere a la prevención y el control del delito y la violencia en el interior del país. Esto incluye la labor de las fuerzas de seguridad pública, como la policía, la gendarmería, la guardia nacional, entre otros. También se incluyen aquí los gastos en materia de prevención y atención de desastres naturales, emergencias sanitarias, y otros riesgos que pueden poner en peligro la seguridad de la población.

Seguridad exterior: hace referencia a las acciones que se llevan a cabo para proteger los intereses del país en el ámbito internacional, como la diplomacia, la inteligencia, el control de fronteras, entre otros. También se incluyen aquí los gastos en materia de cooperación internacional en materia de seguridad, como la participación en misiones de paz y seguridad en otros países.

Es importante destacar que el gasto público en seguridad y defensa es uno de los más importantes y controvertidos en muchos países. A continuación, se presenta análisis estructural del gasto militar de los países de América Latina en el periodo del 1960-2021.

Durante las últimas décadas, el gasto en defensa ha sido un tema importante en la mayoría de los países de América Latina. En términos generales, el gasto en defensa en la

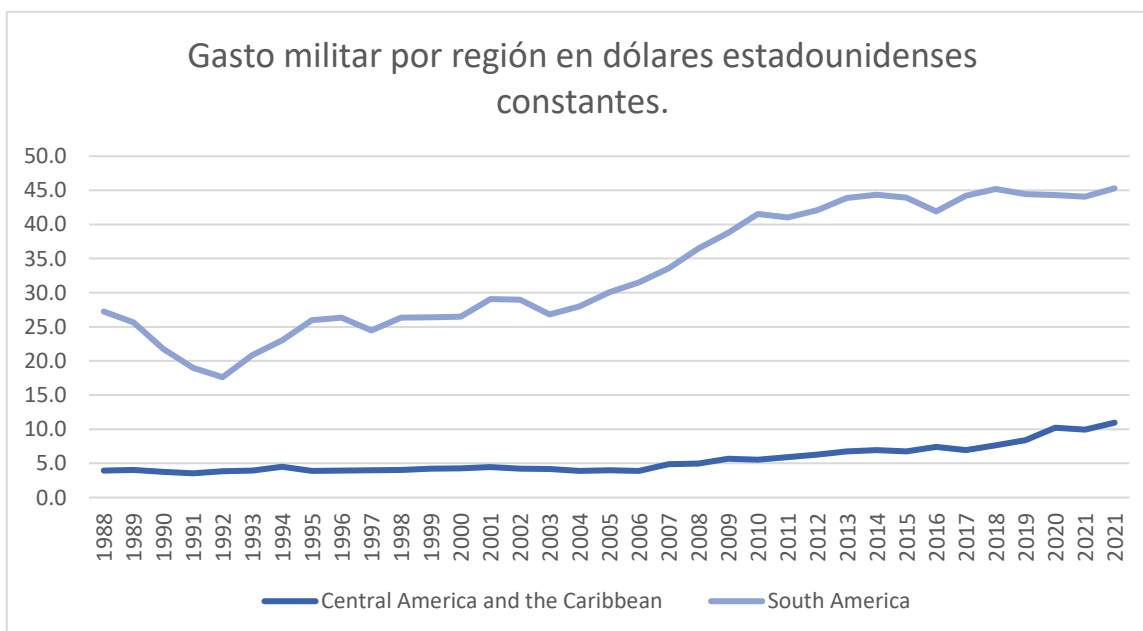
región ha estado influenciado por factores como la seguridad interna, la amenaza de conflictos internacionales y la necesidad de modernización de las fuerzas armadas.

En términos tendenciales, se ha observado una disminución del gasto en defensa en América Latina en los últimos años. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar en América Latina se redujo en un 3.1% en 2020 en comparación con el año anterior. Este descenso se debe en parte a la situación económica global derivada de la pandemia del COVID-19, pero también refleja una tendencia a la baja en los últimos años.

En cuanto a la estructura del gasto en defensa en la región, se ha observado un aumento en la inversión en tecnología y equipamiento militar. Esto se debe en gran parte a la necesidad de modernizar las fuerzas armadas y de adaptarse a las nuevas amenazas que enfrentan los países de la región, como el terrorismo y el crimen organizado.

En el análisis estructural, se pueden identificar diferencias significativas entre los países de la región en cuanto al gasto en defensa. Por ejemplo, algunos países como Brasil, México y Colombia tienen un gasto militar significativamente mayor que otros países de la región.

Ilustración 1: Gasto militar por región en dólares estadounidenses constantes.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

La economía de la defensa es un área especializada, que se ha limitado a círculos profesionales que analizan el gasto de defensa y seguridad en una perspectiva dinámica. Esto quiere decir que los desarrollos teóricos se fundamentan en las teorías sobre el Estado, consideradas situacionalmente, en términos de las diferencias de época y lugar, tomando en cuenta las correspondientes situaciones características de los enfoques aplicados en los diferentes países del mundo, según sus capacidades fiscales.

La investigación de Fonfría (2014) es un estudio referente sobre este tipo de análisis teórico – prácticos en dos dimensiones muy específicas en el gasto público en seguridad y defensa: presupuestación y financiamiento, indicando que, pese a la sistemática reducción de este gasto, como se verificó en el apartado anterior, sigue siendo un componente muy importante del gasto público total de los países, y del PIB mundial, lo que amerita su observación permanente. La perspectiva financiera señalada (presupuesto público y asignación de recursos) implica elementos teóricos que son fundamentos clave de los estudios (Jiménez Vega, 2015).

Aunque el estudio de Fonfría (2014) está delimitado al caso de España, incluye análisis comparativos temporales del gasto mundial por regiones y el de la Unión Europea, así como una síntesis de formulaciones teóricas que enmarcan el análisis del gasto en seguridad y defensa. El primero de estos elementos implica el significado de estos conceptos, que en la teoría económica implica el término “bien” y su carácter “público”. Ruiz (2020) también enfocó su investigación a la conceptualización de estos conceptos como “bien común”, desde la perspectiva del derecho. Al respecto, ofrece una definición pertinente, citando a reputados teóricos del campo académico de la justicia, como Joseph Tomas Delos:

“En su sentido más general, la seguridad es “la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación” (Delos, en Le Fur, et al (1975)).

Si se precisara la noción de seguridad -continúa el autor- concluiríamos que es esencialmente una noción societaria, en el sentido de que la seguridad está ligada a un hecho de organización social: está seguro aquel que tiene la garantía de que su situación no será modificada sino por procedimientos

societarios y consecuencias regulares, conformes a la regulación, legítimos conformes a la ley” (Ruiz, 2020; 30).

Tomando en cuenta lo anterior, cuando la seguridad y la defensa se conciben como bienes que los ciudadanos consideran muy importantes para su desarrollo, se comprende que estos se demanden bajo ciertas condiciones, que implican la confianza y la legitimidad del Estado, para satisfacer las necesidades sociales en este sentido. Los ciudadanos se abstienen de asumir responsabilidades de garantizarse a sí mismos estos bienes con sus propios medios y concretan entre sí y con las instituciones el monopolio de su producción, bajo unos estándares de equidad, suficiencia y justicia.

El concepto de “monopolio” corresponde a su tipología “natural” (Pindyck y Rubinfeld, 2009), el cual es un caso de este tipo de organizaciones (que en esta situación particular corresponde al de instituciones oficiales) en que una sola de ellas tiene toda la producción a su cargo, implicando un menor costo operativo y social, en comparación con los mercados con múltiples ofertas. Es posible que otros actores sociales estén interesados en proveer seguridad para sí mismos y para terceros, pero ello se puede dar solo mediante dos procesos.

El primero de ellos corresponde a una seguridad limitada y complementaria a la de los organismos oficiales, la cual debe cumplir con las debidas autorizaciones según la legislación de cada país. En este sentido, las empresas de seguridad privada deben organizarse y cumplir unos requisitos, que implican la imposibilidad de sustituir la autoridad legítima del Estado para brindar seguridad, por lo que operan en interacción directa con las entidades públicas que si desempeñan esta función (Grautof y Miranda, 2009).

El segundo comprende una serie de actividades ilícitas que precisamente por esta naturaleza implican la ineficiencia y el mayor costo que cuando se ofrece el bien por medio del monopolio natural, pues a la larga, la ilegalidad conlleva desequilibrios y consecuencias negativas en el uso de la fuerza y nuevos costos para los organismos legales que tienen que incluir en sus funciones las actividades necesarias para combatir los abusos, la exlimitación y el crimen, cuando unos actores sociales utilizan la violencia para garantizarse una posición privilegiada en detrimento del resto de la sociedad, a lo que se suma la inconveniencia de la suplantación del Estado frente a los derechos de las personas.

El uso exclusivo de la fuerza, o el monopolio legítimo de la fuerza, o el derecho propio de tener armas, por parte del Estado, es un requisito del orden democrático que se basa en las normas del derecho internacional, para mitigar las situaciones de conflicto, violencia y guerra en defensa de todos los ciudadanos. Como estas condiciones se establecen para todo tipo de Estados, especialmente los que están en periodos de paz y que se desenvuelven en democracia, esta condición se relaciona con la defensa de la nación y de los ciudadanos. Las formas clásicas de esta exclusividad implican la guerra, la solución de conflictos internos por medios coercitivos y otros, como la legítima defensa (Hernández, 1998).

Es importante mencionar que posterior a las guerras mundiales y con el desescalamiento de las acciones directas en favor de la perspectiva de amenazas al orden internacional, se desarrolla el derecho internacional moderno, en el cual se enfatiza más en la prohibición del uso de la fuerza, lo que a diferencia del tiempo previo, en que se prescribió las posibilidades y justificaciones para recurrir a la guerra, indica circunstancias, motivos y acciones que deben ser prevenidas y eliminadas dentro del actuar bélico, en el sentido de intentar limitar la solución de los conflictos mundiales mediante el uso de las armas. Bajo estos enfoques se produjeron los lineamientos en Derechos Humanos y en Derecho Internacional Humanitario (Hernández, 1998).

De este modo, siempre que esté en las manos exclusivas del Estado, el concepto de bien implica que la seguridad y la defensa se pueden “crear” intencionalmente, a través de una serie de políticas concertadas, lo que a su vez permite que se pueden asignar, distribuir y reproducir dentro de la sociedad del mismo modo de otros productos públicos generados por las instituciones, lo que se relaciona con la segunda dimensión del concepto de bien “público”, pues el uso de dicho producto es tanto individual como colectivo. Es decir, que funciona, por ejemplo, como el medio ambiente sano; cada persona se puede beneficiar por separado, pero el suministro del bien se genera para todos por igual, y todos pueden disfrutarlo simultáneamente.

En consecuencia, dado que el bien seguridad y defensa tiene un actor social que lo produce y lo distribuye entre la sociedad, esto es resultado de que otros actores sociales lo demandan (Jiménez, 2015), sencillamente, porque lo necesitan, por lo que estos conceptos se entienden también como satisfactores de las necesidades de las personas y comunidades, algo que está en la base de los fundamentos para la asignación de recursos para este fin y

además, para optimizar los procesos institucionales necesarios para brindarlo de la mejor forma posible, con calidad y eficiencia. Por tanto, desde el punto de vista económico, el concepto de bien público es un fundamento esencial de la investigación del gasto en seguridad y defensa.

Este enfoque es consistente con una perspectiva que enfatiza la dimensión interna de este tipo de gasto. Tradicionalmente el gasto militar se relacionó con la intención de los gobiernos de los países de prevenir las consecuencias de amenazas externas, en el contexto de los conflictos bélicos mundiales y la búsqueda de un posicionamiento en la escala de países con más poder para protegerse e incluso incidir en las decisiones globales por cuenta de su capacidad militar. Sin embargo, con el tiempo, y especialmente en el caso de los países latinoamericanos, las amenazas que proliferaron fueron internas, y esto implicó que se necesitara adecuar el gasto público en un concepto más amplio de seguridad y defensa, de acuerdo con la situación característica de cada país.

Al respecto de las situaciones prevalentemente internas que requieren del uso de la fuerza por parte del Estado, Hernández (1998) señala las condiciones de uso de la fuerza por las autoridades establecidas, enfocándose en organizaciones que violan los derechos humanos y causan amenazas contra la población civil indefensa, de acuerdo con los protocolos internacionales, especialmente definidos por parte de la Organización de las Naciones Unidas – ONU, con el fin de evitar la propagación de los conflictos y la profundización de las consecuencias, para que no haya un escalamiento que conlleve costos sociales, políticos y económicos y para que no se expandan a otros escenarios.

Lo anterior no desconoce que las amenazas externas se continúan presentando a lo largo de la historia, sino que pone el énfasis en una nueva dimensión de la planificación y la gestión del gasto público en seguridad y defensa basada en la situación específica de cada país en el tiempo, pues bajo circunstancias tradicionales, los gobernantes, en particular los soberanos en épocas antiguas, tenían un control efectivo de la población mediante diversas estrategias de coerción social, política y económica, pero ello fue cambiando y se fueron gestando amenazas de una parte de la sociedad sobre otra, que no podían ser descuidadas (Hernández, 1998).

En contraste, mientras las políticas de seguridad de corte externo propenden por la defensa del territorio y de la soberanía política y económica de los países, las que ponen

énfasis en lo interno, buscan la consolidación de la presencia del Estado dentro de todo el territorio, proteger a la población de los actores ilegales y combatir la ilegalidad en sus diferentes expresiones, como los diversos tipos de tráfico, la violencia y la coerción, los crímenes de odio, la explotación económica, la explotación sexual y todas las amenazas contra la vida y el bienestar de las personas.

La incidencia de estas problemáticas es diferente en cada país, lo que hace necesario considerar que las políticas de gasto en seguridad y defensa sean diseñadas de forma específica, atendiendo las prioridades en materia de la protección de las personas y sus bienes, sin descuidar la prevención ante el desarrollo de nuevas dimensiones de la violencia, bajo una perspectiva de seguridad integral, que atiende tanto los hechos de violencia, como sus causas y la evolución de estos. Esto no desconoce que, en la actualidad, los Estados deban desarrollar acciones diplomáticas para enfrentar desafíos globales de seguridad, implicando el cumplimiento de objetivos de control sobre amenazas internacionales.

De otro lado, estos conceptos también se estudian desde la perspectiva de las políticas públicas en la ciencia política. La seguridad y la defensa son una política de Estado, ya que implica un tema central en el ejercicio del poder público, tanto a nivel interno como en las relaciones internacionales. De hecho, sólo los Estados poderosos tienen la capacidad económica y de gestión para sostener un sistema de defensa acorde a su situación institucional, lo cual no tiene que ver necesariamente con la existencia de conflictos, guerras y problemas de inseguridad, sino por el contrario, con la prevención y advertencia antes de que estos se produzcan.

El gasto en seguridad y defensa es por definición un asunto de finanzas públicas, pues todos los Estados desearían tener sistemas avanzados a nivel tecnológico y humano, pero esto solo puede ser garantizado mediante la existencia de recursos económicos suficientes para sustentarlo. La escasez de recursos restringe las posibilidades de expandir, profesionalizar e innovar en el sector de la defensa (Cubillos et al., 2020). El poder político está estrechamente relacionado con el poder de defensa, de modo que los diferentes gobiernos de los países están interesados en crear sólidos sistemas en este campo.

Este tópico de la investigación tiene sus orígenes en los más antiguos enfoques sobre la administración pública, pues incluso cuando predominaban las monarquías como sistemas de gobierno, se postulaba que una de las principales tareas de los soberanos era la

conformación de ejércitos fuertes capaces de resistir y de hacer invasiones que les permitieran expandir sus reinos, así como garantizar la obediencia de los súbditos mediante las acciones que consideraran necesarias para ello (Alvear, 2019). Posteriormente, en los conflictos bélicos mundiales, los sistemas de seguridad y defensa desarrollados se convirtieron en una necesidad para los gobernantes, de forma que pudieran garantizar protección a sus ciudadanos, al punto de que las alianzas militares se hicieron pertinentes para conjurar las amenazas (Bosemberg, 2006).

En la actualidad y en concordancia con el significado de bien público, los gobiernos comprometidos con la calidad de vida de los ciudadanos consideran la seguridad y defensa como una de las prioridades, para garantizar la participación y la sana convivencia en su territorio, de forma que puedan propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo de la sociedad. Por tanto, este enfoque se desarrolla en términos de los análisis de políticas públicas y en especial, de los fines del Estado, lo cual tiene amplias repercusiones en los debates académicos, pues el tema del alcance de las actuaciones del sector público en la sociedad es controversial, ya que el enfoque liberal considera que dicho alcance no puede traspasar los límites de la intervención económica (Stiglitz, 2000).

Es necesario considerar estas dimensiones a la luz de la situación actual en el escenario globalizado, porque si bien se han dado cambios en los enfoques de la gestión pública local e internacional esto no implica desconocer que el crimen y la violencia también evolucionan y crecen generando nuevos retos para la seguridad en los países, que incluso deben enfrentar en conjunto a las organizaciones transnacionales ilícitas. Como lo explica Salazar (2019) el contexto político y económico mundial ha implicado la aparición de nuevos conflictos y la intensificación de delitos que requieren la atención de los gobiernos de los países, para evitar las consecuencias de hechos violentos en sus territorios.

En la actualidad se presentan guerras modernas o de cuarta generación, en las cuales los enemigos ya no son naciones entre sí, sino organizaciones del crimen que afectan regiones o incluso, que tienen incidencia a nivel mundial, como el narcotráfico, el terrorismo, los traficantes de especies, de personas, de armamento y las nuevas estructuras de la ilegalidad en el ciberespacio, o diversas expresiones combinadas del crimen organizado en el escenario global, con capacidad de afectar con sus actuaciones a diferentes comunidades alrededor del mundo, lo que implica impactos simultáneos en varios países, con efectos regionales e

incluso continentales y mundiales. A pesar de que la mayor parte de la humanidad se ha concientizado de las ventajas de la paz y la solución pacífica de conflictos, sigue existiendo un sector importante de entidades con vocación por el delito, que asumen estrategias cada vez más sofisticadas (Salazar, 2019).

Para comprender la resignificación de los retos de la seguridad y la defensa en el escenario de la globalización, a continuación se puede observar un cuadro comparativo en Tabla No. 1 que expone los cambios desde los conflictos convencionales y sus procesos, a las nuevas circunstancias de lo que se denomina la “guerra asimétrica” en la cual no existen puntos de referencia o frentes para adelantar los enfrentamientos, sino que se desarrolla a través de múltiples puntos en los que se llevan acciones principalmente por sorpresa, articulando diversas actividades sistemáticas, no solo de violencia directa, sino también simbólica, o hechos complementarios en los que se busca ocultar el carácter violento, presentándolos como actos de divulgación de opiniones o protestas.

Este tipo de procesos comprenden un conflicto violento como en el pasado, pero integran actores que realizan las operaciones directamente tanto como un conjunto de apoyos a nivel político, social y mediático, generando amenazas sobre la estabilidad, más allá de los hechos violentos tradicionales. La guerra asimétrica se genera contra el orden establecido más allá de un único país, por lo que pueden ser atacados países aliados en algún propósito común, como la lucha contra el terrorismo, e incluso a comunidades que apoyan determinadas políticas, sin importar en dónde se encuentren ubicadas, como ha sucedido en los casos de ataques a medios de comunicación o a organizaciones sin fines de lucro que luchan contra la discriminación y la violencia.

Tabla 1: Cambios en los desafíos de seguridad y defensa globales.

Variable	Características de la guerra convencional	Características de la guerra asimétrica
Capacidad operativa	Relativamente similar, intentando suplir debilidades en capacidad operativa y equiparar su poder, con estrategias para el uso de su armamento.	No intentan colocarse en el mismo nivel operativo. Buscan utilizar herramientas tecnológicas como prioridad, explosivos y otros elementos de alto potencial destructivo.
Zona de influencia	Tienen un territorio establecido y delimitado	Se movilizan en un sector geográfico más o menos delimitado, pero pueden cambiar de zona de acuerdo con las circunstancias.
Adversarios o rivales	Diferenciados, son habitantes de una acción que tienen en común un sentido de pertenencia al territorio.	Se los diferencia por sus creencias y concepciones ideológicas extremistas. Físicamente, es difícil diferenciarlos porque viven ocultos entre varias sociedades en varias naciones.
Mecanismos de combate	Se utilizan armamentos y esquemas de pelea establecidas por tradición, evitando la confrontación con civiles.	No hay distinción entre civiles y grupos de seguridad, por lo que utilizan la oportunidad como arma principal.
Objetivos	El objetivo principal es la derrota del enemigo para disuadir en sus decisiones por medio de la presión militar.	Sus objetivos pueden variar entre células o subestructuras. Sus integrantes tienen una férrea convicción sobre sus creencias religiosas, políticas, ideológicas y sociales (o todas a la vez).
Actores	Países: fuerzas armadas, habitantes y decisores políticos.	Los mismos que en una guerra convencional; y otros considerados como no estatales (guerrillas, terroristas, subversivos, entre otros).
Instrucción en combate	Formal, en estrategia y combate militar.	Formal, en caso de disidentes de organismos de seguridad estatales. En general, tienen cursos en ciertas habilidades específicas, que adaptan para las acciones a ejecutar.
Financiamiento	Designación de fondos del presupuesto del estado.	Fondos que provienen de diferentes fuentes; actividades ilegales o líderes económicos que comparten la ideología del grupo irregular.
Temporalidad	Constante, en un tiempo determinado.	Acciones discontinuas, intermitentes.

Elaboración: La autora

Fuente: Salazar (2019; 34).

Pese a lo formulado sobre las amenazas globales actuales, en la época contemporánea, especialmente en los países en desarrollo como los de América Latina, se enfatiza en la dimensión interna de las políticas de seguridad y defensa, en un sentido positivo, que trasciende el control social y se enfoca en el servicio al ciudadano. Los Estados que desean profundizar las relaciones de confianza con la ciudadanía, deciden mostrar el compromiso que tienen con el desarrollo, brindando condiciones de seguridad y defensa para sus ciudadanos. Con ello evidencian que en la práctica están dispuestos a invertir en su protección, garantizando condiciones para que tengan calidad de vida, además de acoger la demanda social por este bien, lo que se relaciona con los elementos mencionados anteriormente.

Entonces, el nivel de inversión en seguridad y defensa depende de múltiples factores, entre los que se encuentran las necesidades de la sociedad en esta materia, pero también, el acuerdo social sobre la relevancia de este tema. Esto implica considerar una variable como la “cultura de la defensa” (Calduch, 2018), que indica la importancia que algunos gobiernos, en diferentes contextos, le atribuyen al control de los factores que generan violencia y a las consecuencias que estos tienen sobre el bienestar social, explicando la tendencia hacia la asignación de recursos para estos fines.

Una conclusión destacada en los estudios, como en el caso de Fonfría (2014) es que el gasto público en seguridad y defensa está definido en la práctica de los países, por el criterio de “prioridad”, es decir, que depende sustancialmente de la visión y perspectiva de la sociedad y los gobiernos que la representan, por atender una necesidad (en la dimensión que ésta se visualice, pues hay una percepción de inseguridad) y del lugar que le otorguen frente a otros gastos, porque suele verse en contradicción con otras dimensiones del gasto público, por ejemplo, hacer políticas sociales en vez de invertir en seguridad.

Por una parte, existe una necesidad objetiva de protección de los ciudadanos, pero igualmente, esta situación está en la base de una preferencia por la seguridad con respecto a otros bienes. Con el concurso de la sociedad, los gobiernos deben definir el conjunto de estrategias constitutivas de las políticas públicas, dando mayor o menor importancia a estas según su tipo. Dadas estas circunstancias, resulta paradójico que la tendencia de estos gastos sea hacia su disminución.

Esto puede explicarse en el hecho de que los gobiernos encuentran dificultades de financiamiento, por lo que deben articular las políticas sectoriales de seguridad y defensa con el resto de las políticas públicas, creando una gama integral de estrategias dentro de la planificación para el desarrollo. En el estudio de la hacienda pública, la capacidad para generar ingresos por parte de las instituciones oficiales depende tanto del nivel de desarrollo económico alcanzado (Arenas y Mosqueira, 2021), como del marco normativo en que se definen los instrumentos de recaudo y otras estrategias de financiamiento para las políticas públicas (Podestá, 2020).

Una de las estrategias de financiamiento que ha tomado fuerza desde la Segunda Guerra Mundial es la cooperación internacional, para fines de defensa y otros temas claves del desarrollo (Chiani y Scartascini, 2009). En este conflicto bélico, los países adquirieron mayor conciencia sobre la necesidad de actuar en conjunto frente a las amenazas mundiales, y tuvieron razón, pues como se observó anteriormente, la violencia y el crimen también evolucionaron y han aprovechado las nuevas circunstancias de la globalización para generar amenazas por fuera de las fronteras de los países, lo que exige de estos que adelanten estrategias conjuntas.

En este sentido, ha surgido un campo temático específico que se ha hecho más relevante con el tiempo y es el de la seguridad internacional. Los países desarrollados han encontrado que no solo deben garantizar condiciones de seguridad en sus propios países para garantizar bienestar a sus ciudadanos, sino que también es necesario que apoyen la seguridad mundial porque ningún lugar del planeta está a salvo si persisten las amenazas globales. De acuerdo con ello, destinan recursos de cooperación para apoyar a los países que no cuentan con suficientes recursos para enfrentar eficazmente las organizaciones violentas en sus territorios. El liderazgo internacional y la participación efectiva de los gobiernos de los países es necesaria para contrarrestar la inseguridad y la violencia de gran escala.

A pesar de su especificidad, el gasto en seguridad y defensa hace parte del conjunto integral de estrategias de desarrollo que planifica y ejecuta un gobierno durante el periodo para el que es elegido, en los sistemas democráticos, como los de América Latina. Esto porque a pesar de las intenciones y necesidades que tengan, deben ajustar sus decisiones a la disponibilidad presupuestaria y a la combinación de factores del desarrollo, lo que se relaciona con un tercer elemento de la investigación sobre el tema.

Este elemento es la correlación existente entre el gasto en seguridad y defensa con diversas variables macroeconómicas características de los países. Existen varios estudios destinados a medir e interpretar la incidencia del gasto en seguridad y defensa sobre el crecimiento económico de los países. En el sentido en que se presentaron los análisis del primer apartado de esta investigación, las mediciones se establecen en términos de los costos asociados a lo contrario: la inseguridad y la violencia.

Toda vida que se pierde a causa de la violencia representa un costo social que no se puede medir, así como un costo económico que representa lo que se dejó de crear y producir por medio de dicha vida.

Es comprensible que el gasto en seguridad y defensa incide en la mitigación de estos costos, por lo que, en consecuencia, tiene una incidencia en el crecimiento de los países y en su calidad de vida. Fonfría & Otros (2013) realizaron un tratado sobre economía de la defensa, que hace un especial énfasis en la relación entre estas variables, con fundamento en análisis empíricos, concluyendo que la relación entre dicho gasto y el cambio en el Producto Interno Bruto de los países corresponde a una función de largo plazo, lo que implica que los resultados actuales dependen de la inversión en varios periodos anteriores.

Las conclusiones se desarrollan en dos sentidos complementarios: la consolidación del gasto en seguridad y defensa es un factor que tiene efectos positivos en la economía de los países y, en consecuencia, la limitación de estos gastos aumenta el riesgo económico y social. Estas circunstancias pueden constatarse en las experiencias de los países, como en el caso de América Latina, donde hay varios países que tienen situaciones de violencia crónica, los cuales han tenido que llevar a cabo significativas inversiones en este campo. Los casos de Colombia, Chile, Argentina y México se destacan en la región.

Al respecto, la investigación de Vargas y Godoy (2013) para el caso colombiano, se acopla a las formulaciones de Fonfría & Otros (2013), al mostrar que los cambios en el crecimiento de Colombia están relacionados con la situación característica de su conflicto interno, por lo que este país ha tenido que incrementar el gasto en seguridad y defensa, buscando contrarrestar la violencia, lo cual evidencia que, sin esta estrategia fiscal, el país habría tenido todavía consecuencias más drásticas. Esto significa que el gasto público correspondiente a la defensa no sólo ha generado los efectos previstos para el control de las consecuencias del conflicto característico de este país, sino también que se han generado

condiciones de bienestar que se reflejan en el mejoramiento de los indicadores económicos, evidenciando un impulso hacia el desarrollo.

Estos autores enfatizan que el análisis de la relación entre el gasto en seguridad y defensa y el crecimiento económico no debe limitarse a una perspectiva directa, sino que requiere la consideración de diversas variables adicionales. Entre estas variables se encuentran el empleo y la ocupación, la disponibilidad de mano de obra, la tecnología, la demanda interna de bienes y servicios, así como los gastos que realizan los actores sociales en materia de seguridad. Es crucial destacar la importancia del comportamiento de la inversión y la distribución de bienes y servicios, especialmente en áreas afectadas por la violencia.

Es esencial reconocer que la seguridad y la defensa no pueden ser comprendidas de manera independiente de otras dimensiones del desarrollo de un país. Estos aspectos son fundamentales para garantizar las condiciones de bienestar que sustentan la democracia, la paz y la convivencia.

De este modo, si bien el gasto en seguridad y defensa no se traduce de manera inmediata en crecimiento, si es un factor que incide significativamente, tanto a nivel de los recursos involucrados, como al propiciar dinámicas en otras variables como las mencionadas. La sostenibilidad del crecimiento si tiene que ver con este gasto, pero son imprescindibles las inversiones que mejoren las condiciones de vida para controlar las causas de la violencia (Vargas y Godoy, 2013). Esto porque como se infiere de lo anterior, estos bienes son imprescindibles para que la sociedad pueda contar con las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades cotidianas, para reducir los costos de los actores sociales al tener que financiar su propia seguridad y para evitar la pérdida de infraestructura, bienes, salud y vida para los ciudadanos.

De forma concluyente, el gasto en seguridad y defensa representa un costo de oportunidad, en el sentido de la distribución del gasto público en general, lo que implica la necesidad de implementar la eficiencia en su ejecución, pero, además, los recursos correspondientes generan efectos positivos en la conservación de bienes públicos como la tecnología y la infraestructura, como también directamente en la calidad de vida, productividad y permanencia de la fuerza de trabajo. Es decir, que si no existiera la inseguridad y la violencia los recursos se deberían destinar a otros fines del Estado, pero

como los actores que las generan siempre están presentes en la sociedad, es imprescindible destinar recursos para prevenir y mitigar las consecuencias de estas problemáticas.

Estas consideraciones evidencian que el tema del gasto en seguridad y defensa es un asunto comprendido dentro de la política pública, como parte de los análisis específicos de los fines y atribuciones del Estado, de acuerdo con el rol que debe jugar en la sociedad, como organismo rector del desarrollo, garante de los derechos y del bienestar de los ciudadanos. Para el cumplimiento de los objetivos sociales que le corresponden, el Estado puede y debe tomar recursos generados por la sociedad, para destinarlos a las estrategias, políticas y actividades consecuentes con la situación social. El Estado gestiona el financiamiento necesario para funcionar y para llevar a cabo el plan de desarrollo específico de cada gobierno elegido democráticamente, pero puede fallar o incluso malversar intencionalmente los recursos, lo que implica una ineficiencia en el gasto.

Lamentablemente, muchos países de América Latina han tenido que padecer los efectos de la corrupción, que suelen estar correlacionados con la violencia, de modo que los esfuerzos por lograr la calidad en el gasto son necesarios para mejorar el cumplimiento de las políticas y generar los resultados previstos. En materia del gasto público en seguridad y defensa es necesario tener en cuenta los criterios de buenas prácticas, transparencia y efectividad, porque se trata de recursos públicos, pero también, de forma relevante, de recursos destinados a garantizar la vida, la dignidad, el bienestar y la protección de los bienes de las personas.

La eficiencia es un factor determinante en el nivel de impacto del gasto público en seguridad y defensa sobre el crecimiento, pues la calidad de dicho gasto hace que la relación entre estas variables se profundice, por la mejor asignación de recursos y por la orientación al resultado. De hecho, la investigación de Vargas y Godoy (2013) para el caso Colombiano identifica dos periodos en que el efecto es diferente. Entre 1993 y 2003 la situación de violencia era cruda y los resultados del gasto moderados, pero a partir de ese entonces, hasta 2012 cuando concluye el estudio, un cambio de estrategia por parte de las instituciones se reflejaron tanto en el PIB como en la inversión, especialmente del exterior, y el empleo, con un nivel de crecimiento considerable entre el 4.0% y el 6.0% anual, e incluso de casi el 9.0% en 2006.

Estas consecuencias son adicionales a las que justifican el nivel de recursos que este país ha tenido que destinar a la seguridad y defensa, que comprenden incluso aportes de cooperación internacional, puesto que las necesidades de financiamiento han sido altas, dadas las circunstancias específicas del conflicto colombiano. La principal conclusión del estudio es bastante clara con relación a los efectos de la inversión realizada, aunque los autores la expresan de forma condicional:

“Sí parece existir evidencia suficiente, para justificar que el gasto en defensa participe en niveles promedios del 3.3% del PIB, sin embargo, (hace falta profundizar más) para argumentar que el gasto militar puede ofrecer a la economía nacional un bien objetivamente importante para su desarrollo como lo es la estabilidad o la seguridad frente a amenazas internas. En este sentido, en presencia de amenazas internas reales, el aumento del gasto militar sí parece neutralizar el efecto negativo que éstas tienen sobre el crecimiento económico” (Vargas y Godoy, 2013; 253).

Si bien Colombia es un caso atípico por la intensidad y persistencia de su conflicto interno, precisamente por ello este país presenta una evidencia significativa sobre los efectos del gasto público en seguridad y defensa, que además de generar impactos favorables y directos en la vida y bienestar de las personas, se traduce en cambios positivos en los indicadores económicos, señalando que este es ante todo una inversión que arroja resultados en cuanto a la mitigación de la violencia, pero también a largo plazo, puesto que el desarrollo es un proceso que parte de unas bases sólidas, las cuales permiten que los países puedan alcanzar niveles de crecimiento que faciliten la inversión, el empleo, la productividad, el consumo y el bienestar, lo cual genera a su vez recursos para continuar generando desarrollo.

De acuerdo con esto, se observa que los estudios en el tema del gasto público en seguridad y defensa dan evidencias de lo formulado teóricamente, sobre la capacidad de este tipo de gasto para impulsar el desarrollo no solo de modo directo por las condiciones de bienestar que se producen, sino también de forma indirecta y a largo plazo, porque los beneficios de un contexto saludable en términos de democracia, paz, libertad y desarrollo, se traducen en decisiones económicas de los ciudadanos que generan inversión, empleo, productividad y competitividad, haciendo sostenible el bienestar a medida que se fortalecen las capacidades y el tejido social para la convivencia.

Por tanto, este tipo de gasto no debe ser interpretado solamente por su pertinencia en cuanto a los problemas de inseguridad y violencia que requieren una solución urgente, sino por su correlación con las variables del desarrollo, por la prevención de costos asociados a la infraestructura y los bienes, así como de la salud y vida de los ciudadanos, por lo que es pertinente evitar una visión de carga ante una necesidad, ya que no se trata solo de atender situaciones puntuales, sino de contar con una política integral de seguridad, con prevención y atención apropiada ante los hechos, que es fundamental para la calidad de vida.

Considerando lo expuesto anteriormente, los principales elementos teóricos que respaldan el análisis de la seguridad y la defensa. Estos elementos se han presentado de acuerdo con su énfasis particular, reconociendo la interrelación entre ellos. Por consiguiente, los hechos y conceptos que fundamentan el gasto en estos ámbitos son multidimensionales, integrando diversos enfoques y adaptándose a las experiencias específicas de cada país en un momento determinado.

Como puede observarse en los diferentes enfoques de la seguridad y la defensa presentados en la Tabla No. 2, estos explican los fundamentos teóricos en los que se basan los niveles de gasto en estos fines, aplicado para América Latina y el Caribe con prospectiva al 2025 los cuales comprenden dimensiones económicas y de hacienda pública específicas para abordar las políticas públicas en esta materia. Cada vez con mayor frecuencia se utilizan metodologías basadas en modelos económicos, donde el gasto es la variable objetivo, para la cual se analizan las dimensiones de conveniencia asociadas a mayor o menor nivel de gasto.

Tabla 2: Fundamentos Conceptuales

	<p>La seguridad y la defensa es un bien público, por lo que tiene una demanda (por parte de los ciudadanos, para satisfacer una necesidad) y una oferta, generada por las instituciones oficiales. Por ende, la “producción” de este bien implica el monopolio natural, emanado del contrato social, pues solo a un actor del nivel del Estado se le delega el poder único y universal de administrar estos bienes.</p>
<p>Gasto público en Seguridad y Defensa</p>	<p>La seguridad y la defensa es una política de Estado, que implica ejercer el poder en los escenarios nacional e internacional. Es un concepto que ha evolucionado a lo largo de los años, llegando a ser una estrategia de acercamiento, compromiso y confianza con los ciudadanos, evidenciando un nivel de cultura de la seguridad en la sociedad.</p>
	<p>La seguridad y la defensa es una variable fundamental en la contribución al crecimiento económico, el desarrollo y la profesionalización e innovación en el sector. En este sentido, si se maneja de modo eficiente tiene efectos significativos sobre dicho crecimiento, pero también, sobre otras variables como el empleo, la inversión, el consumo, además de los resultados directos que justifican el gasto en estos fines, asegurando el control de hechos violentos y sus consecuencias.</p>

Elaboración: La Autora.

Fuente: Cepal Equidad, desarrollo y ciudadanía (2000)

Este tipo de formulaciones teóricas parten de que el gasto de defensa y seguridad se justifica por los efectos que causa en la estabilidad a nivel integral: social, económico y político, ya que la presencia de fenómenos asociados a la violencia impacta el desarrollo de una sociedad, por lo que deben atenderse tanto los hechos, como las causas y los riesgos, lo cual explica los desarrollos de la investigación en esta materia, cuyas bases se encuentran en el estudio pionero de Viñas (1984), quien estableció diversos campos de estudio que parten de los conceptos de la defensa nacional.

3.2. Análisis de la evidencia empírica sobre gasto militar y el crecimiento económico

La evidencia empírica sobre el vínculo entre el gasto militar y el crecimiento económico es extensa. Yildirim & Öcal (2016) estudiaron el efecto económico del gasto militar desde una perspectiva amplia (128 países) mediante métodos de econometría espacial

y el modelo de crecimiento de Solow aumentado para el período de 2000-2010. Los hallazgos indican un efecto positivo del gasto militar en el crecimiento económico con una dependencia espacial significativa. Kollias & Otros (2017) analizaron el vínculo entre el gasto militar, el crecimiento económico y la inversión utilizando la metodología del vector autorregresivo panel (PVAR) para 65 países desde 1971 hasta 2014. Los autores también desagregaron la información en subgrupos panel clasificados por nivel de ingresos. En el grupo de ingresos altos, encontraron que el efecto económico del gasto militar es positivo, lo cual puede explicarse por la demanda efectiva y los efectos de derrame generados en el sector de la industria de defensa. En los países de ingresos medio y bajo, ocurre lo contrario; el crecimiento económico tiene un efecto positivo en el gasto militar, lo que sugiere que a medida que la economía crece, más recursos están disponibles para el sector de defensa.

También se han encontrado efectos negativos. Por ejemplo, Huang & Otros (2017) estudiaron la causalidad entre el gasto militar y el crecimiento económico en 77 países desde 1996 hasta 2014, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del país a través del Índice de Desarrollo Humano (IDH). Encontraron que la causalidad es bidireccional, negativa, no lineal y varía con el tiempo y entre los países. A medida que el IDH aumenta, la causalidad negativa del sector de defensa sobre el crecimiento económico y viceversa disminuye. De manera similar, Chang et al., (2011), para diferentes grupos de países desde el enfoque de causalidad desde 1990 hasta 2006, encontraron que no hay un vínculo causal entre las variables de interés en los grupos de países de ingresos altos e ingresos medios. Sin embargo, en los países de bajos ingresos, el gasto militar afecta negativamente el crecimiento económico.

Heo & Ye (2016) estudiaron los efectos económicos directos e indirectos del gasto militar en el crecimiento económico en 161 países desde 1990 hasta 2012. Utilizando regresiones aparentemente no relacionadas (SUR), encontraron que el efecto del sector de defensa es negativo y estadísticamente significativo; sin embargo, la magnitud del coeficiente es extremadamente pequeña, lo que sugiere un impacto casi insignificante. P. Dunne & Tian (2013), utilizando un modelo de crecimiento exógeno y métodos para datos de panel dinámicos en 106 países desde 1988 hasta 2010, identificaron que el efecto del gasto militar en el crecimiento económico es negativo y significativo a corto y largo plazo. Los hallazgos son consistentes en diferentes especificaciones de muestra y variables independientes.

Aziz & Asadullah (2017), para un panel de países desde 1990 hasta 2013 y a través de técnicas econométricas como mínimos cuadrados ordinarios (OLS), efectos fijos, efectos aleatorios y el método generalizado de momentos (GMM), concluyeron que el efecto económico del gasto militar es negativo y estadísticamente significativo. De manera similar, D'Agostino & Otros (2017), utilizando el estimador de grupo de media combinada (PMG) y el método de efectos fijos dinámicos para datos de panel de países desde 1970 hasta 2014, mostraron un efecto económico negativo a largo plazo del gasto militar en el crecimiento económico. Los resultados son robustos a diferentes especificaciones de período de estudio y países.

D'Agostino & Otros (2019), empleando el método de variables instrumentales para controlar la endogeneidad del gasto en defensa, en un panel de 109 países de bajos ingresos desde 1998 hasta 2012, encontraron evidencia a favor de un efecto económico negativo significativo del gasto militar, que ha sido subestimado por el método OLS. Los resultados son robustos a la heterogeneidad y diferentes especificaciones de tiempo. D'Agostino & Otros (2020), por su parte, implementaron el enfoque de retardo distribuido autorregresivo (ARDL) para datos de panel desde 1984 hasta 2014. Encontraron que tanto el gasto militar como la corrupción tienen un efecto económico negativo significativo a largo plazo.

Desli & Otros (2017) construyeron un panel de 138 países desde 1988 hasta 2013. Además, los autores desagregaron la información en subgrupos según el nivel de ingresos y aplicaron métodos econométricos de cointegración y causalidad. Los resultados confirmaron una relación de largo plazo en la muestra completa formada por países desarrollados y en desarrollo, pero en los países menos desarrollados, las pruebas tienden a rechazar principalmente la hipótesis de cointegración. Con respecto a la causalidad, a largo plazo, hay una relación bidireccional entre la muestra general y los países en desarrollo, mientras que, en los países desarrollados, es unidireccional desde el crecimiento económico hacia el gasto militar. A corto plazo, no hay causalidad para el grupo de países menos desarrollados, y en el resto de los grupos, la causalidad proviene del crecimiento económico hacia el gasto militar.

Específicamente para el caso de América Latina, Kung & Min (2013), utilizando causalidad de Granger, siguiendo el procedimiento Bootstrap, para 16 economías latinoamericanas desde 1988 hasta 2010, encontraron que el gasto militar causa crecimiento

económico en el caso de Nicaragua y Belice. Por el contrario, el crecimiento causa gasto militar para Ecuador y Bolivia; mientras que para los países restantes (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), no hay evidencia de causalidad. Kollias & Otros (2017), obtuvieron hallazgos los mismos que se basan en la especificación de diversas muestras con diferentes números de países:

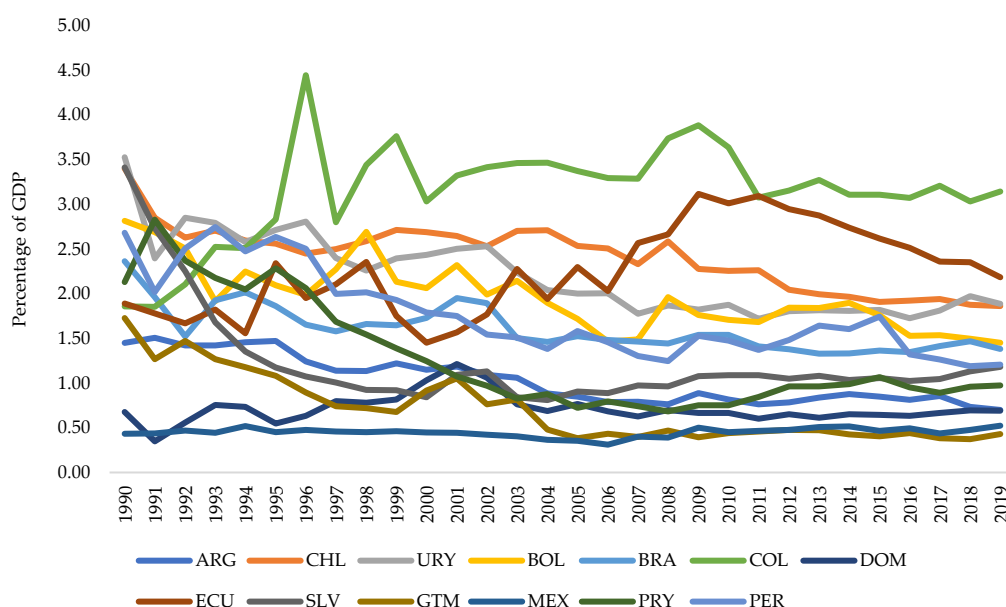
- i) 46 países en total con información disponible para el período de interés;
- ii) 25 países de la OCDE; y,
- iii) 17 países de la OCDE.

Además, desagregaron todo el período en dos subperíodos, el primero que abarca la era de la Guerra Fría (1960-1985) y el segundo correspondiente al período posterior a la Guerra Fría (1986-2014); además de las variables de interés (gasto militar y crecimiento económico), agregaron inversión y emplearon métodos de cointegración, causalidad lineal y causalidad no lineal para un análisis de series temporales en 13 economías latinoamericanas desde 1961 hasta 2014. Los resultados indicaron que hay al menos un vector de cointegración para cada país; sin embargo, en términos de causalidad, no todos los países mostraron una relación de causalidad en al menos una dirección; por lo tanto, los autores concluyeron que, en términos generales, el vínculo de causalidad es débil.

Paul Dunne (1996) comprender la relación y causalidad entre el crecimiento económico y el gasto en defensa es especialmente importante en economías en desarrollo, principalmente en aquellas donde el tipo de cambio juega un papel importante y donde los recursos financieros públicos son limitados. Además, la participación del gasto militar en el PIB de algunos países de América Latina no es insignificante, especialmente considerando que son economías en desarrollo con importantes necesidades públicas. Durante las últimas tres décadas (período de 1990-2019), el país con el mayor gasto militar, en promedio, fue Colombia, con una cifra igual al 3.14% del PIB, seguido por Chile, Ecuador y Uruguay, donde la participación del gasto militar superó el 2.0% de su PIB. Por otro lado, el país que ha asignado menos recursos al sector de defensa es México, distribuyendo en promedio el 0.45% como porcentaje del PIB. Si consideramos el último año del período de estudio (2019), el comportamiento del gasto no difirió del promedio observado durante las tres décadas, ya que Colombia continúa con la asignación de los recursos más altos para el sector de la defensa

(3.14% del PIB), seguido de Ecuador (2.18%), y Uruguay (2.06%). Acerca de los demás países que forman parte de este estudio, en el último año, Chile, Bolivia, Brasil, Perú y El Salvador destinaron recursos de defensa de cifras inferiores al 2.0%; mientras que Paraguay, Argentina, República Dominicana, México y Guatemala, el gasto militar es inferior al 1.0% como porcentaje del PIB (Banco Mundial, 2023) (Diagrama No. 2).

Ilustración 2: Gasto militar como porcentaje del PIB



Nota: Argentina (ARG), Bolivia (BOL), Brazil (BRA), Chile (CHL), Colombia (COL), Dominican Republic (DOM), Ecuador (ECU), El Salvador (SLV), Guatemala (GTM), Mexico (MEX), Paraguay (PRY), Peru (PER), and Uruguay (URY).

Elaboración: La Autora.

Fuente: Banco Mundial

Por medio del análisis, Perú, Colombia y Ecuador comparten fronteras y, en consecuencia, preocupaciones de seguridad comunes como el tráfico de drogas, el contrabando y la actividad guerrillera. Estas amenazas han llevado a un aumento del gasto militar en estos países, con el objetivo de fortalecer sus capacidades de defensa y seguridad nacional.

En el caso de Perú, su gasto militar históricamente se ha dirigido a combatir el tráfico de drogas y controlar su extensa frontera con Colombia, donde las actividades de grupos guerrilleros y narcotraficantes han representado una amenaza para la seguridad interna.

Además, Perú ha enfrentado desafíos relacionados con el crimen organizado y el terrorismo, especialmente en áreas rurales y fronterizas.

Colombia, por otro lado, ha enfrentado décadas de conflictos internos con grupos armados ilegales como las FARC y el ELN, además de desafíos relacionados con el narcotráfico. El gasto militar en Colombia se ha centrado en combatir estas amenazas internas, así como en proteger sus fronteras y garantizar la estabilidad en la región.

En el caso de Ecuador, aunque no ha enfrentado conflictos internos tan intensos como Perú y Colombia, ha experimentado tensiones fronterizas con Perú en el pasado y comparte preocupaciones similares con respecto a la seguridad regional. El gasto militar de Ecuador se ha centrado en fortalecer sus capacidades de defensa y vigilancia fronteriza, así como en abordar amenazas como el tráfico de drogas y el contrabando.

Por lo tanto, la hipótesis del estudio es:

Hipótesis 1. Existe una relación de causalidad unidireccional entre el gasto militar y el crecimiento económico a corto plazo. Durante un período específico a corto plazo, un aumento en el crecimiento económico conduce directamente a un aumento correspondiente en el gasto militar, lo que indica una relación causal unidireccional entre estas dos variables.

Hipótesis 2. En el caso específico de Ecuador, el aumento del gasto militar en seguridad y defensa durante el período 1960-2021 ha tenido un impacto negativo considerando la eficiencia de estos en relación con los indicadores económicos clave como el crecimiento del PIB y el desarrollo económico, en comparación con otros países de la región que han priorizado la inversión en otros sectores.

3.3. Criterios de administración de recursos de la seguridad y defensa

Viñas Martín (1984) en su estudio sobre Seguridad y defensa establece la importancia de la gestión pública y la modernización institucional, resulta crucial para la planificación, ejecución y evaluación del gasto en seguridad y defensa, centrándose en la optimización de los procesos de las entidades oficiales y los gobiernos. Esto debe realizarse en un marco que priorice la transparencia, eficiencia, eficacia y efectividad. Los criterios de administración de recursos de seguridad y defensa son principios y estándares que guían la toma de decisiones

y la aplicación de recursos en el sector de seguridad y defensa de un país. Estos criterios pueden ser utilizados por los gobiernos, los militares y otras instituciones encargadas de la seguridad y la defensa para asegurar que los recursos disponibles se utilizan de manera efectiva y eficiente (Viñas Martín, 1984).

Algunos ejemplos de criterios de administración de recursos de seguridad y defensa incluyen:

- (a) Eficiencia: Utilizar los recursos de manera eficiente para obtener el mayor beneficio posible.
- (b) Efectividad: Utilizar los recursos de manera que se alcancen los objetivos y metas establecidos.
- (c) Equilibrio: Equilibrar los recursos entre las diferentes necesidades y prioridades de seguridad y defensa.
- (d) Transparencia: Asegurar que la aplicación de recursos sea clara y comprensible para todas las partes interesadas.
- (e) Responsabilidad: Asegurar que los responsables de la aplicación de recursos sean responsables y rindan cuentas por su uso.
- (f) Sostenibilidad: Asegurar que la aplicación de recursos sea sostenible a largo plazo y no comprometa la capacidad futura del país para protegerse y defenderse.

Estos criterios pueden ser utilizados de manera individual o en combinación para guiar la administración de recursos en el sector de seguridad y defensa y asegurar que se tomen decisiones informadas y responsables.

3.4. Distribución de los recursos al interior de las fuerzas de seguridad y defensa

Tal y como se requiere al interior de la planificación pública en general, dentro del sector defensa específicamente, deben abordarse las diferentes áreas operativas y sus necesidades para llevar a cabo una asignación eficiente de recursos que permita desarrollar un gasto efectivo para el logro de los objetivos misionales. A nivel de las entidades, la planificación del gasto y el seguimiento estricto de los lineamientos de la ejecución financiera es un tema recurrente en la investigación empírica, la mayor parte de las veces, llevada a cabo por personal delegado dentro de las mismas instituciones, porque las políticas de gestión

de la calidad implican la autoevaluación y el mejoramiento a partir de evidencias tomadas de cada caso particular.

La distribución de los recursos al interior de las fuerzas de seguridad y defensa es el proceso de aplicación de recursos, como el personal, el equipamiento y el presupuesto, entre las diferentes unidades y divisiones de una fuerza de seguridad o defensa. Esta distribución de recursos puede ser realizada por el gobierno, el comando militar o cualquier otra institución encargada de la administración de recursos en el sector de seguridad y defensa.

Por otra parte, la distribución de los recursos al interior de las fuerzas de seguridad y defensa se realiza con el objetivo de asegurar que se utilicen de manera efectiva y eficiente y que se alcancen los objetivos y metas establecidos. Para hacer esto, es necesario considerar las necesidades y prioridades de las diferentes unidades y divisiones de la fuerza y asegurar que se distribuyan los recursos de manera equilibrada.

3.5. Problemas estructurales, democracia y gasto militar en América Latina

Si bien la existencia de múltiples formas de funcionamiento de la democracia evidencia que ésta es un sistema complejo con características diferentes en cada país en que se aplica, es también cierto que ésta puede describirse según unas condiciones muy específicas, como la libertad, la participación y las políticas que buscan garantizar los derechos de los ciudadanos. Originalmente, los modelos democráticos se limitaron a la elección representativa de gobernantes, pero con el tiempo, fueron introduciendo nuevos procesos de acción directa y articulación de la sociedad, para expresarse e incidir en las decisiones de carácter público (Brugué, Martins y Pineda, 2020).

En las democracias actuales, la sociedad participa y toma decisiones dentro de organismos públicos con el fin de concertar políticas e implementarlas, aunque los procesos también tienen debilidades. De este modo, este sistema propende por contar con espacios y mecanismos para la participación y adopta las estrategias que comparten las mayorías, para garantizar el bienestar social. Los instrumentos son variados y dependen de las capacidades de los ciudadanos para crearlos y aprovecharlos, en la búsqueda del bien común.

Uno de los principales pilares del bien común es la seguridad, puesto que ésta permite el disfrute del orden y la justicia, garantizando un entorno apropiado para que las personas

puedan ejercer sus derechos con libertad (Ruiz, 2020). Por tanto, este derecho está relacionado con el bienestar de la sociedad, porque permite la vida y la convivencia, estando en la base del disfrute de los demás derechos de los ciudadanos (Ruiz Rodríguez, 2020).

Debe considerarse que las funciones de las fuerzas militares, y por ende el gasto militar, están asociados con la seguridad, pues en palabras de Griffiths (2017; 132): “la función de defensa es parte constitutiva de la seguridad en el sentido amplio del término, y que es permanente tanto en la paz, como en circunstancias extremas, en la guerra”, de lo que se infiere que las acciones militares se ajustan a su lugar y a su tiempo (Griffiths Spielman, 2017)

Con esto se expresa que las actuaciones de estos organismos de defensa de los países no se limitan solo a actuaciones bélicas en contextos particulares de guerra, que son relativamente excepcionales, sino que cumplen una misión permanente e importante dentro de la sociedad, al estudiar las condiciones mediante las cuales se producen los crímenes de las organizaciones delictivas, como las de los traficantes, y brindar soluciones para garantizar la estabilidad social de sus países, en todas las coyunturas históricas que van enfrentando.

De lo anterior también se desprende que las actuaciones de las fuerzas militares no se dan solo en la perspectiva de logros en las batallas y conflictos bélicos, sino que están en la base del bienestar social en todo momento. De acuerdo con Meneghetti (2022) en un estudio de la década de los setenta, realizado por Benoit se mostró las correlaciones entre las tasas de gasto militar y las de crecimiento económico en los países menos desarrollados, generando un importante debate alrededor de la importancia de este gasto en el bienestar en términos del desarrollo de los países, más allá del resultado directo sobre las condiciones de vida más seguras para las personas y sus bienes (Meneghetti, 2022).

Este estudio se considera un hito inicial, y hasta la actualidad, existe la discusión académica de si esta evidencia empírica es generalizable y concluyente, debido a cuestiones metodológicas, pero sin duda, la investigación sobre el gasto militar evidenció rutas analíticas sobre la pertinencia de esta variable para la seguridad, la garantía de otros derechos y el desarrollo de los países, pues al contar con condiciones favorables para la convivencia ciudadana, las personas pueden trabajar sin tener mayores riesgos de seguridad, se puede ser más productivo y se logra enfocar los recursos disponibles hacia fines de bienestar (Viñas Martín, 1984).

De modo concomitante, los investigadores también han abordado el tema de los costos de la violencia y la inseguridad. Pino Abad (2021) estudia las dinámicas de estas problemáticas en Centroamérica, señalando que no se trata solo de mirar las cantidades que se asignan a este concepto en cada país, sino que es necesario identificar las graves consecuencias económicas de la violencia, además de las sociales, con las cuales observar la pertinencia de estas partidas, y por extensión, observar si son suficientes para poder cumplir el objetivo de garantizar la seguridad.

No obstante, si se trata solamente de valorar las cifras, Pino Abad (2021) señala que las cantidades asignadas al gasto público y en particular al gasto en seguridad y defensa están afectados por la baja capacidad económica de los gobiernos latinoamericanos para solventar sus necesidades, más cuando se presentan situaciones de crisis, que afectan a la mayoría de los países de la región, pues en la actualidad, es mayor la integración e interconexión entre ellos y el mundo, haciendo más fácil la transmisión de las consecuencias de estas situaciones (Pino Abad, 2021).

El caso centroamericano también es estudiado por Santos, Amador, Amaya y Menjívar (2020) quienes enfatizan en el concepto de eficiencia del gasto, pues la administración de los recursos por parte del Estado debe permitir contrarrestar los problemas característicos de la región, generalizables a toda América Latina, como el nivel de los homicidios y diversos delitos, algunos de ellos muy graves, como todos los relacionados con el tráfico, que incluyen las drogas ilícitas, las armas, las personas, e incluso la fauna silvestre. Los autores muestran, igualmente, cómo el gasto en seguridad está relacionado con la pobreza, el desempleo la desigualdad y la tasa de homicidios, extensivo a otros indicadores de calidad de vida (Santos et al., 2020).

El hecho de no contar con recursos suficientes para enfrentar los desafíos de la seguridad, en el escenario de la mayoría de los países latinoamericanos en que los problemas de inseguridad y violencia se recrudecen con el tiempo, hace que los costos tanto en vidas que se pierden, en las repercusiones sociales sobre la calidad de vida de los ciudadanos y los impactos negativos para los países, específicamente, en materia económica, sean también elevados y consolidados a medida que pasa el tiempo. Se trata de una reproducción sistemática de la violencia que se amplifica según las circunstancias (Perotti et al., 2014).

Los costos económicos de la violencia también son analizados por Rettberg (2020) y Jaitman (2017). Al adoptar la agenda del desarrollo del milenio, los países latinoamericanos desarrollaron una serie de políticas que les permitió tener tasas de crecimiento considerables, alrededor del 4%, así como disminuir la pobreza, mejorar la salud y el acceso a la educación, así como mejorar, aunque de modo heterogéneo, la calidad de vida (Rettberg, 2020). Sin embargo, el nivel del crimen empeoró, al punto que la Organización Mundial de la Salud [OMS] consideró que la violencia de la región es epidémica (Jaitman, 2017).

Este fenómeno se manifiesta de diversas formas, iniciando por la violencia homicida cuyo nivel es muy importante en la región latinoamericana, desprendiéndose de situaciones heterogéneas, pero igualmente graves, como los conflictos armados y las secuelas de estos, el comercio de drogas ilícitas, el pandillismo en Centroamérica y Brasil, la delincuencia común e incluso la violencia intrafamiliar y entre comunidades, que describe una larga tradición de resolución inadecuada de conflictos. Con respecto a la incidencia de los homicidios, en la Tabla No. 3 se presentan los resultados compilados por Niño (2020). de las diez ciudades de la región en que se presentan mayor indicador de estos crímenes en el año 2018 (Niño, 2020).

Tabla 3: Ciudades más violentas de América Latina, según Niño (2020), año de referencia 2018.

<i>Posición</i>	<i>Ciudad</i>	<i>País</i>	<i>Homicidios</i>	<i>Habitantes</i>	<i>Tasa por cada mil habitantes</i>
1	Los Cabos	México	305	328.215	111.33
2	Caracas	Venezuela	3387	3'046.104	111.19
3	Acapulco	México	910	853.646	106.63
4	Natal	Brasil	1378	1.313.573	102.56
5	Tijuana	México	1897	1.882.192	100.77
6	La Paz	México	259	305.445	84.79
7	Fortaleza	Brasil	3270	3.917.279	83.48
8	Victoria	México	301	361.078	83.32
9	Guayana	Venezuela	728	906.879	80.28
10	Belém	Brasil	1743	2.411.761	71.38

Elaboración: La autora

Fuente: Niño (2020, 210).

Como puede observarse, la mayor tasa de homicidios corresponde a ciudades de México, Brasil y Venezuela, que paradójicamente, son países suramericanos, en los cuales se registra mayor violencia y la inseguridad que en los centroamericanos, como se verá más adelante. Esto quiere decir que los indicadores de estos países son más heterogéneos a nivel regional, donde los lugares más afectados son las ciudades, mientras que, en otros lugares, las problemáticas mencionadas no están demasiado concentradas en algunas ciudades, sino que corresponden a situaciones más generalizadas dentro del territorio. Esto puede verificarse en la información presentada en la Tabla No. 2, sobre los índices de criminalidad y de seguridad conforme a Niño (2020).

Tabla 4: Mayores índices de criminalidad, y correspondiente índice de seguridad en países de América Latina, según Niño (2020), año de referencia 2019.

Posición	País	Índice de criminalidad	Índice de seguridad
1	Venezuela	83.23	16.77
2	Honduras	76.84	23.16
3	Trinidad y Tobago	74.04	25.96
4	Brasil	70.24	29.76
5	El Salvador	68.08	31.92
6	Puerto Rico	65.53	34.47
7	Perú	65.28	34.72
8	Jamaica	65.28	34.72
9	Argentina	62.55	37.45
10	República Dominicana	61.35	38.65

Elaboración: La autora
Fuente: Niño (2020, 210).

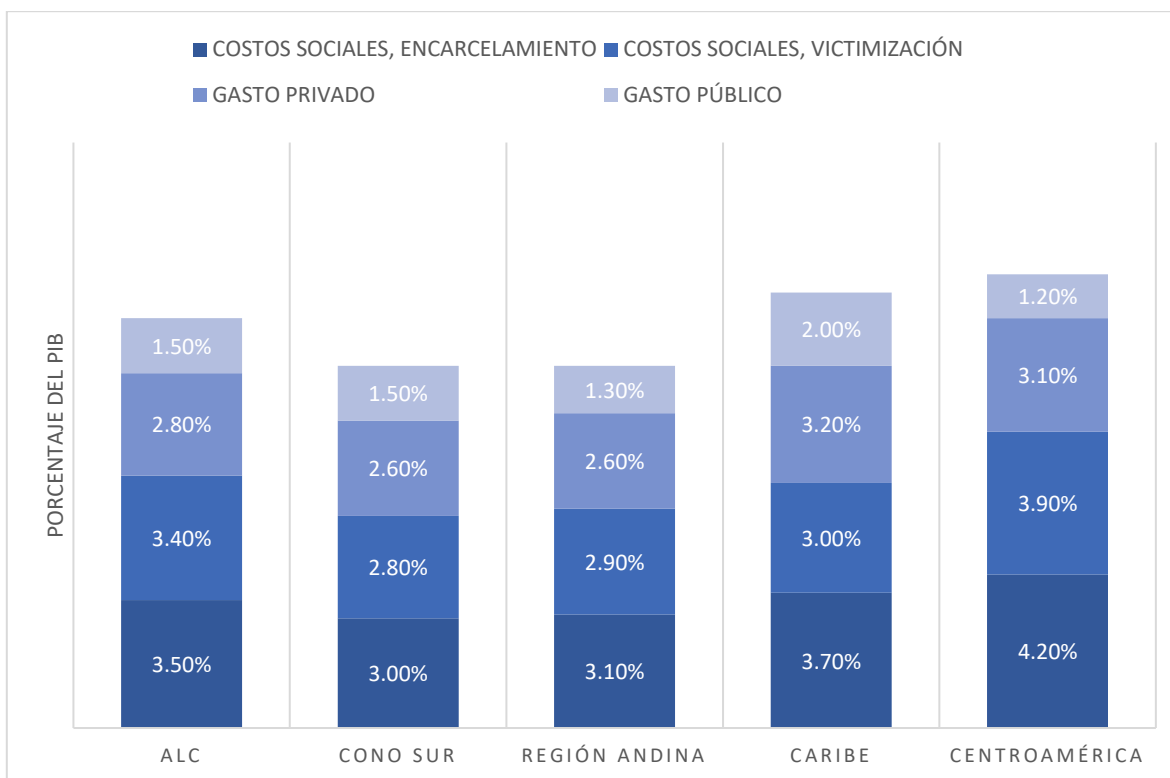
Entre los países con más alta incidencia de la criminalidad, aparecen Honduras y El Salvador entre los cinco primeros puestos, lo que muestra que, por este factor, estos dos países aportan hechos violentos que permiten clasificar a Centroamérica como un lugar bastante inseguro y violento, con altos costos sociales y económicos asociados a estas problemáticas. Igualmente se constata que la criminalidad tiene una relación inversa con la seguridad, por lo que la inversión en estrategias de seguridad si tiene impacto sobre los delitos que se cometen en los países latinoamericanos, algo que también se puede verificar en el resto de los países del mundo (Fonfría, 2013).

En la región latinoamericana se combinan de modo sistemático los fenómenos de violencia generados por el crimen organizado y las manifestaciones propias de la comisión de delitos comunes, con costos humanos, pero también económicos. Los conflictos en el continente tienen alta incidencia y letalidad, habiéndose desarrollado principalmente en las zonas rurales, pero con alta repercusión a nivel urbano, en especial, por la combinación de factores mencionados, con algunos casos críticos, como se pudo observar en la Tabla No. 1, donde se registraron las ciudades más afectadas (Rettberg, 2020).

Los costos asociados a los delitos, la inseguridad y la mala resolución de conflictos tienen que ver con los daños directos sobre los bienes de las personas, pero también con las condiciones que tienen que asumir para evitar e incluso para participar en las actividades para protegerse, los hogares y las empresas gastan más para protegerse y reducen sus inversiones según los escenarios que deban enfrentar, por lo que hay amplias pérdidas de productividad y de calidad de vida, en este sentido, tales costos se pueden clasificar en sociales referidos especialmente a las víctimas, en incurridos por el sector privado, y los correspondientes al gasto del gobierno, que incluyen por ejemplo, tener que construir y sostener el sistema penitenciario (Jaitman, 2017).

Para el año 2014, Jaitman (2017; 24) estima que los costos sociales, están altamente asociados con los homicidios (el ingreso perdido por este concepto), con una participación del 0.32% del Producto Interno Bruto (PIB), de América Latina que al sumarse con los costos por crímenes no letales y por las pérdidas de productividad de la población carcelaria, se aumentan hasta el 0.61% del PIB. De igual modo, se estima que los costos en que tiene que incurrir el sector privado para protegerse de la inseguridad y la violencia está entre el 0.8 y el 1.4% del PIB (Jaitman, 2017; 26). En los diagramas No. 1, 2 y 3 se presenta una visión detallada sobre los costos totales del crimen en subregiones latinoamericanas, la comparación de estos costos a nivel internacional y el análisis comparativo de costos por países, respectivamente. Estos diagramas evidencian claramente la incidencia de la problemática en la región. La información contenida en ellos demuestra la magnitud de los costos asociados a la inseguridad y la violencia. De esta manera, se infiere la importancia de adelantar esfuerzos materiales y de formular políticas que permitan superar esta situación crítica (Jaitman, 2017).

**Ilustración 3: Costos del crimen por subregión, América Latina, según Jaitman (2017).
Año de referencia 2014.**

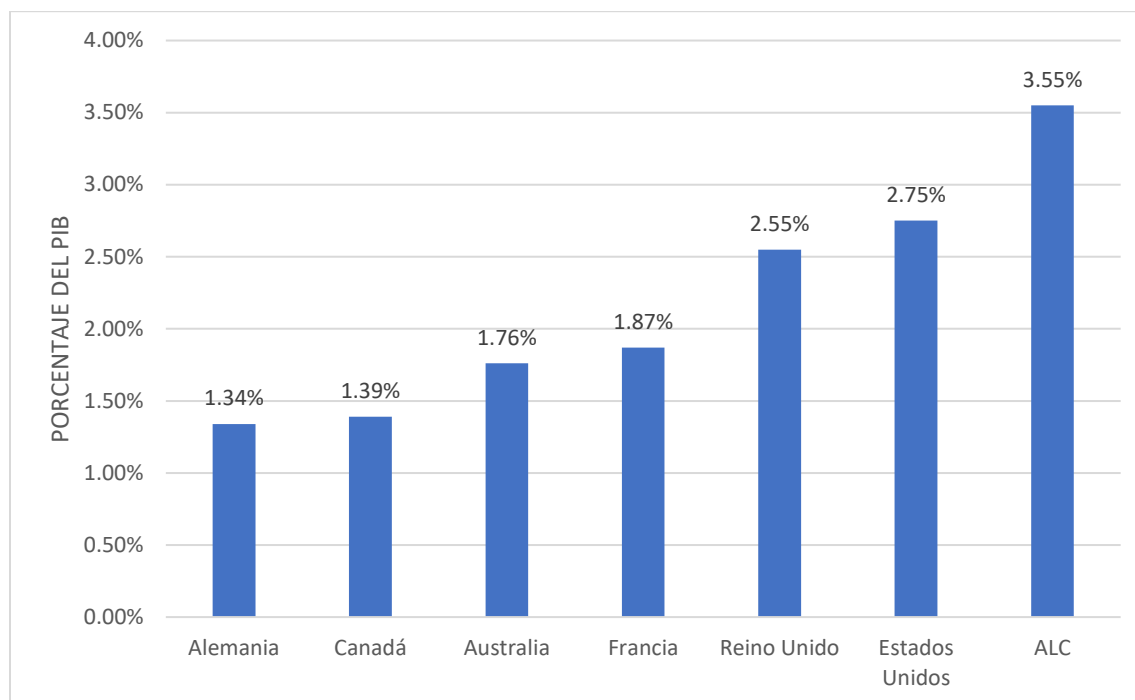


Elaboración: La autora
Fuente: Jaitman (2017, 28).

De la información del diagrama No. 3 se infiere que la región centroamericana es la que mayor incidencia de crímenes, mientras que paradójicamente es la que menor gasto público tiene en comparación con las demás.

Esta situación es característica de América latina, como se observa en el diagrama No. 2, en el que se muestra el peso de los costos del crimen sobre el PIB correspondiente, siendo América Latina la que presenta el indicador más alto, de un 3.55% del PIB, un punto por encima del Reino Unido, país que tiene el tercer nivel más alto y 0.8 puntos porcentuales sobre el nivel de Estados Unidos, que es un país que tiene también problemas estructurales de violencia, especialmente relacionado con homicidios masivos.

Ilustración 4: Costos del crimen, comparación internacional de países con más altas tasas y América Latina y el Caribe, según Jaitman (2017). Año de referencia 2014.

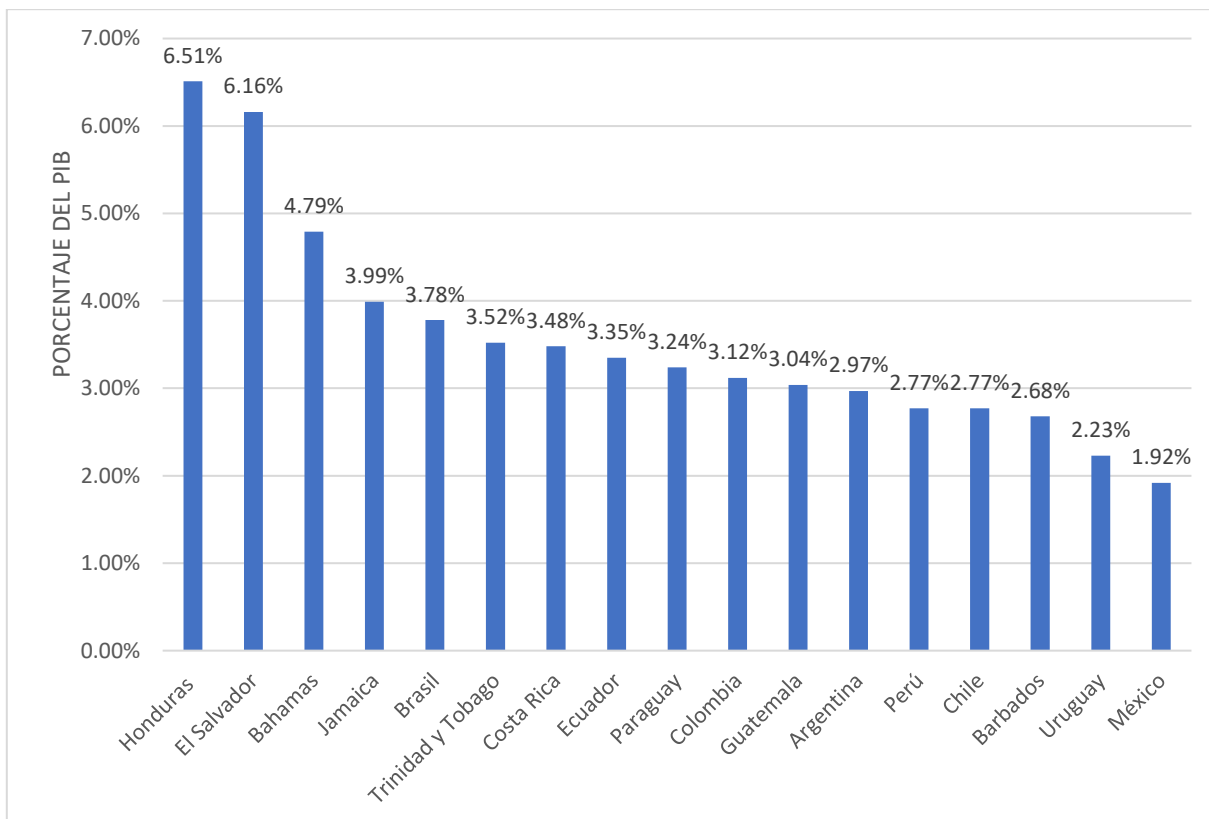


Elaboración: La autora

Fuente: Jaitman (2017, 29).

Estos costos están heterogéneamente distribuidos, como se observa en el diagrama No. 4, considerando tasas cercanas del 2% hasta el 6.5% en los diferentes países de la región. Los países más afectados son Honduras y Salvador, que son los que contribuyen a la diferencia observada en el caso centroamericano, pero en general, todos los países tienen altas tasas de costo, incluido México que tiene la más baja y es todavía superior a la de Alemania, Canadá, Australia y Francia, países que tienen tasas altas, razón por la cual Jaitman (2017) los toma en cuenta dentro de la comparación (Jaitman, 2017).

Ilustración 5: Costos del Crimen por país de América Latina, de mayor a menor, según Jaitman (2017). Año de referencia 2014.



Elaboración: La autora
 Fuente: Jaitman (2017, 29).

Ante este panorama, es comprensible que se justifique la inversión pública de los países en el mejoramiento de las condiciones de seguridad para los ciudadanos. Es posible que las circunstancias de cada país expliquen la cantidad de recursos que se destinan a la defensa, la seguridad y la justicia, y que, por las condiciones de persistencia de fenómenos violentos en varios países de América Latina, éstos puedan ir en aumento. Sin embargo, además de las circunstancias, existen visiones políticas que inciden en dicha cantidad asignada.

Adicionalmente, esto no significa que el solo aumento de los recursos sea la solución a estas profundas problemáticas estructurales de la región, las cuales han sido históricamente relevantes y tienden a profundizarse con el tiempo, pues la inversión debe traducirse en políticas eficientes que permitan solucionar los problemas. De hecho, en la región se han

realizado varios esfuerzos económicos para justicia, seguridad y defensa, pero las problemáticas suelen ser persistentes.

Según Rettberg (2020) la región latinoamericana sigue siendo la más violenta del mundo, con una alta incidencia de homicidios, violencia urbana, justicia por mano propia o lo que es lo mismo, que los ciudadanos recurran a la violencia en diferentes circunstancias suplantando las funciones de seguridad y justicia correspondientes a los Estados, desconociendo las instituciones. En este contexto también persisten múltiples conflictos sociales entre diferentes sectores que se confrontan y que pueden llegar a expresiones muy violentas, lo que se relaciona con la integralidad del gasto en seguridad, involucrando a los actores sociales de cada país, que están vivenciando la inseguridad de forma constante, en sus diferentes manifestaciones (Rettberg, 2020).

Rettberg (2020), también plantea que existen unos grupos sociales especialmente vulnerables ante la violencia, como las mujeres y los jóvenes, así como los activistas de diferentes causas, especialmente de derechos humanos, para todos los cuales, es importante que el Estado destine recursos de seguridad, que permitan garantizar derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la libre movilidad por el territorio, y otros que se ven afectados según las circunstancias (Rettberg, 2020).

Esto significa que, a pesar que el gasto en seguridad y defensa pueda haber crecido en algunos países, sigue siendo bajo con relación a las necesidades, por lo que se necesitan instrumentos para poder aumentar los recursos, lo que implica nuevos esfuerzos fiscales y tributarios para fortalecer los programas de seguridad y justicia, incluyendo impuestos de destinación específica, pues incluso algunos actores sociales están teniendo que cubrir sus propios gastos en seguridad, siendo necesario fortalecer el presupuesto público para estos fines (Pino Abad, 2021, pero bajo la perspectiva de eficacia y efectividad del gasto planteada por Santos et al, (2020), para el caso centroamericano, puesto que la solución de las problemáticas no depende solo de contar con recursos, los cuales no pueden ser ilimitados, sino muy especialmente, de la forma en que estos se utilicen, al respecto, estos autores plantean:

“para algunos países de la región gastar más en seguridad ciudadana les permite obtener buenos resultados, para otros no sucede de la misma manera debido a que aún no han aprendido a invertir, sino a gastar. Los

resultados de evaluar cuánto se gasta y qué se logra no siempre son iguales para todos los países, por lo que cada uno debe ser consciente de su situación y plantear soluciones ajustadas a la realidad” (Santos, et al., 2020; 34).

De este modo se observa, que si bien se necesitan más recursos, la existencia de los mismos no es suficiente, sino que se requiere de la integralidad de las políticas, de modo que se planifiquen estrategias idóneas para enfrentar las causas estructurales asociadas a la violencia y la inseguridad, para que las acciones en este sentido puedan ser sostenibles en el tiempo; porque lo que se ha logrado verificar en los países de la región, es que los importantes logros para garantizar los derechos de los ciudadanos a un ambiente seguro y digno se ven opacados por nuevos y más profundos hechos de violencia, que se van acumulando sistemáticamente a medida que pasa el tiempo, por la historia social y política característica de América Latina (Alesina & Spolaore, 2006).

En el caso de los países de la región se ha podido constatar que existen debilidades en la correcta gestión de los recursos, encontrándose problemáticas como el hecho de que los sistemas de investigación de delitos no cuentan con suficientes medios tecnológicos y de personal para atender la complejidad de los hechos característicos de cada país, o que hay desconexión entre los sistemas policivos y de justicia, o que hay corrupción dentro de las mismas instituciones.

También existe una débil priorización de la inversión y que la estigmatización y marginación de las políticas, para determinados grupos de ciudadanos, contribuye al fortalecimiento de las organizaciones delictivas (Muggah, 2017). Esto y la inseguridad en sí misma han contribuido al aumento de la desconfianza de la población frente a las instituciones y su capacidad para garantizar derechos y justicia en diversos casos, por lo que se ha dado una ruptura entre la sociedad y el Estado, en el contexto de las políticas de seguridad y defensa.

Al respecto, Chinchilla y Vorndran (2018) indican que se debe actualizar los marcos jurídicos para garantizar una nueva institucionalidad, regulando todos los aspectos conceptuales, metodológicos, operativos que incorporen una visión integral, que no se centra en el delito, sino en la seguridad misma, lo que implica también la reorganización institucional del sector de defensa y seguridad, definiendo las atribuciones de las autoridades

administrativas y de las que propiamente son militares, así como los espacios y alcances de la participación ciudadana (Chinchilla & Vorndran, 2018).

Igualmente los autores Chinchilla & Vorndran (2018) consideran que es pertinente la adopción de buenas prácticas de gestión pública en el contexto de las políticas de seguridad y defensa, para que en el desarrollo de las etapas de planificación se puedan incorporar los análisis más detallados de la situación de cada país en particular, así como de propuestas, pero con una visión más amplia, al convocar y lograr la participación de diferentes actores sociales, más allá de la planificación tradicional en las instituciones, donde solo los especialistas tenían la oportunidad de plantear soluciones, mientras que las comunidades que están directamente afectadas no eran tenidas en cuenta.

De hecho, en la primera recomendación de su investigación¹, plantean que “la seguridad ciudadana y justicia requiere un sistema especializado de gestión con visión estratégica y liderazgo” (Chinchilla y Vorndran, 2018; 34), lo que no desconoce el importante rol de los especialistas, que en el caso de las fuerzas militares compilan conocimientos determinantes para la lucha contra el crimen y el diseño de estrategias a partir de la información de inteligencia, sino que considera la necesidad de utilizar como insumo la participación de las personas que están en el día a día en contacto con los hechos delictivos.

En este sentido, tanto en el fortalecimiento de los equipos especializados, como en las actividades que facilitan la participación comunitaria, es necesario fortalecer los presupuestos destinados a la seguridad y a la defensa del país, de sus instituciones y ciudadanos, del mismo modo que también lo es la eficiencia y la efectividad en la gestión financiera de los recursos disponibles, porque de ello dependerá que en adelante no se tengan que enfrentar los mismos problemas que parecen no tener solución, sino precisamente encontrar salidas viables que permitan cambiar las condiciones estructurales y las tendencias del crimen, permitiendo un ambiente seguro y adecuado para la realización de las personas en su cotidianidad.

¹ Las recomendaciones son diez: 1) sistema especializado de gestión, 2) equilibrio entre las acciones preventivas y de control, 3) rendición de cuentas, 4) asignación eficiente de recursos humanos y financieros, 5) información de calidad y acceso al conocimiento aplicado, 6) uso del enfoque del ciclo de las políticas públicas en la planificación, 7) formación de gestores especializados, 8) reforzar el aprendizaje y el intercambio de experiencias, 9) coordinación interinstitucional y 10) gobernanza participativa incorporando la sociedad civil (Chinchilla y Vorndran, 2018).

3.6. Política en el contexto actual

La seguridad debe ser garantizada por el Estado. Esta idea es aceptada desde las diferentes corrientes políticas, puesto que incluso, los teóricos que propenden por el Estado mínimo y eficiente, de la corriente neoliberal, están de acuerdo con que esta es una función inherente a las instituciones y que es una de las pocas, junto con la justicia, en que el monopolio del poder debe ser ejercido por el sector público para regular y garantizar el derecho a este bien para todos los ciudadanos.

“Es así como la función del Estado, de acuerdo con el Consenso de Washington, debe estar restringida a unas pocas actividades como la provisión de la seguridad nacional y la administración de justicia, en que deben prevalecer herramientas legales que permitan velar por el cumplimiento de los contratos”(Castañeda & Díaz-Bautista, 2017).

Más allá de la idea general del Consenso, de que el Estado se limite a la garantía de bienes mínimos que son colectivos, desde una perspectiva general, el Estado debe garantizar los derechos de las personas, lo que corresponde en términos de Griffiths (2017; 159) a “velar por el bien común”, lo que implica dotar a la sociedad de bienes y servicios que le garanticen su bienestar, siendo la defensa y la seguridad bienes apreciados para la convivencia de los ciudadanos en condiciones apropiadas para desenvolverse con libertad y proteger a sus familias (Griffiths Spielman, 2017).

Esto implica una visión integral de la seguridad, que trasciende la lucha contra los delitos, pues más allá de los actos criminales específicos, la sociedad necesita instrumentos de convivencia, resolución de conflictos, justicia y bienestar que corresponden a la garantía de derechos de los ciudadanos en un escenario de estabilidad social, económica y política, como lo señalan Chinchilla y Vorndran (2018). Los delitos efectivamente deben continuar siendo combatidos, pero la seguridad implica este proceso, como el de participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas en este tema, por parte de los ciudadanos.

La sociedad aprecia este derecho porque no puede proporcionarse este bien a sí misma, sin afectar las atribuciones de las instituciones oficiales. Esto no quiere decir que los ciudadanos no incurran en gastos de seguridad, pues como se observó en el apartado anterior, son altos los costos que deben sufragar ante las circunstancias que les toca vivir. Pero los

ciudadanos no deben tomar la justicia por mano propia, ya que precisamente ello se traduce en inseguridad, de modo que todas las acciones que realicen en este sentido deben estar en el marco de la ley y articuladas con los organismos de seguridad del Estado.

La seguridad contribuye al orden social, por lo que los ciudadanos están dispuestos a acatar las normas de la democracia siempre que a cambio la reciban como el bien común (Ruiz Rodríguez, 2020), por lo que se muestran favorables incluso a aportar económicamente para que esta pueda garantizarse para todos, más cuando se trata de sociedades que han sufrido las consecuencias de la violencia y de la inseguridad, por lo que hay mayor consciencia de la necesidad de prevenir los hechos relacionados con estas. Como lo expresa Rettberg (2020), la violencia en América Latina es una situación de larga data y debe evitarse que situaciones como las recientes crisis que generan mayor pobreza, tengan un impacto negativo en la profundización de este problema (Rettberg, 2020).

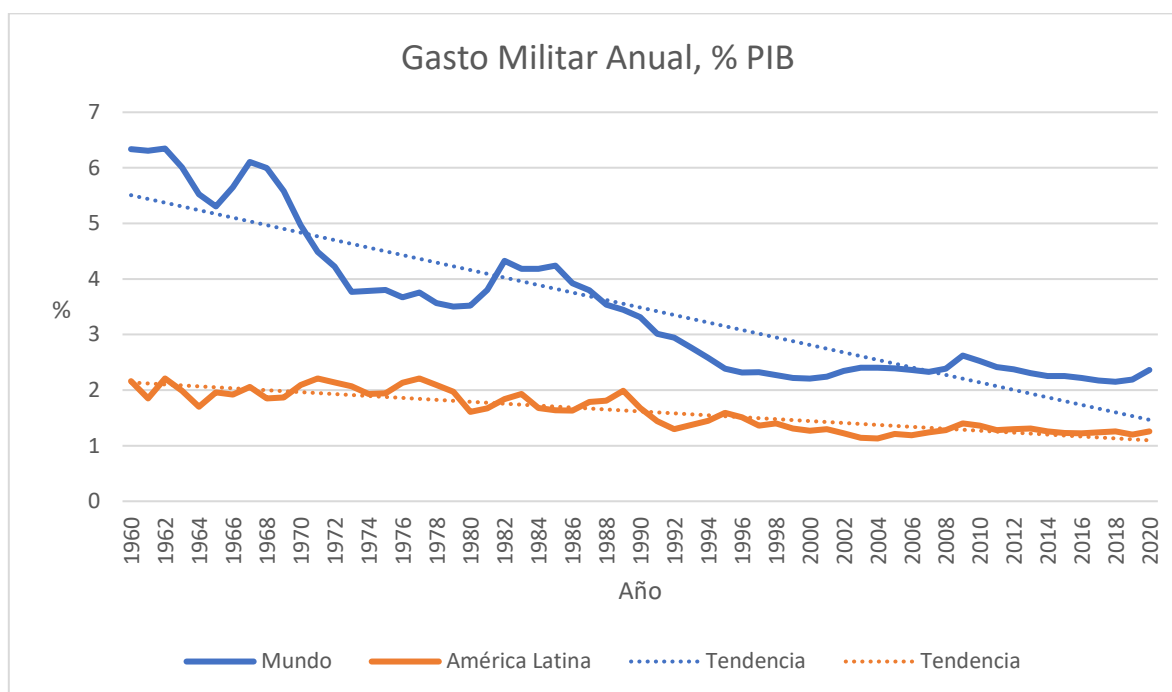
Es por esto por lo que los países democráticos desarrollan políticas de seguridad que permitan salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos, con el fin de garantizar la convivencia y un entorno adecuado para las personas, especialmente, para la niñez y la juventud. El gasto militar que contribuye a la seguridad y a la defensa de los países debe ocupar un lugar central en las agendas de los diferentes países, más cuando se enfrentan problemáticas estructurales como las que se han mencionado. En la región latinoamericana esto ha implicado un importante esfuerzo en modernización de la gestión pública y de las políticas (Edwards, 2009).

Dadas las circunstancias de los países de América Latina, la gestión de la seguridad y la justicia combina tanto las estrategias de prevención y abordaje de las causas estructurales de la violencia, como el control del crimen y de los hechos violentos, aplicando los lineamientos de sus respectivos sistemas de justicia, que a futuro, debe darse en una perspectiva de equilibrio” (Chinchilla & Vorndran, 2018) lo cual es importante para que las políticas no continúen siendo réplicas de las estrategias ya agotadas en el pasado, pero sin que haya una sustitución de la prevención y la contención, en vez de una complementariedad.

En los países latinoamericanos, pese a los diferentes enfoques y énfasis en los programas de desarrollo en los gobiernos recientes, se encuentra que, en la actualidad, ninguno de estos puede dar un cambio a la condición de los problemas de violencia e inseguridad, por lo que han debido comprometerse tanto con recursos como con estrategias

para aumentar la seguridad y la defensa dentro de sus territorios, y para cooperar con medidas regionales y globales con las que se busca hacer frentes comunes para combatir los delitos transnacionales, especialmente, los diversos tipos de tráfico. Sin embargo, la realidad está lejos de lo que es necesario para la región, siguiendo una tendencia mundial de disminución de los gastos militares, como se puede observar en el diagrama No. 6.

Ilustración 6: Gasto militar como porcentaje del PIB en el mundo y en América Latina, 1960-2020.



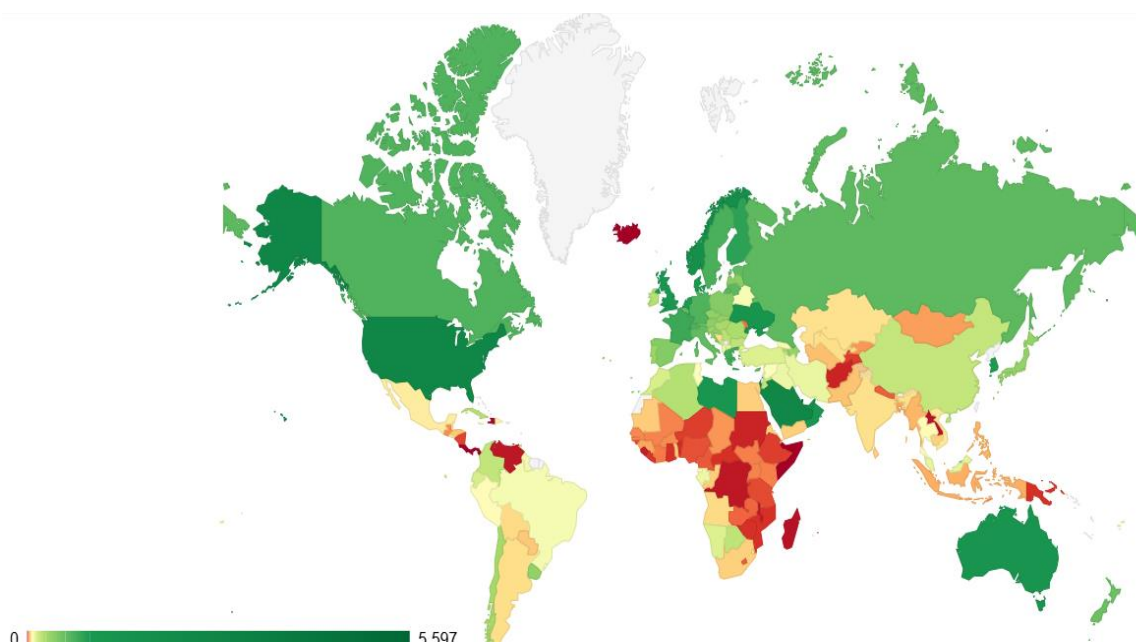
Elaboración: La autora

Fuente: Banco Mundial Data Base 2022

En este diagrama se evidencia, que pese a todos los elementos que sustentan la importancia del gasto en seguridad y defensa, paradójicamente, la tendencia mundial ha sido a su disminución durante los últimos sesenta años, pasando de 6.3% del PIB mundial en 1960 a tan solo el 2.4% en el año 2020, sufriendo la más vertiginosa caída hasta el año 1995, cuando se estabilizó entre el 2.0% y el 2.6%. En el caso de América Latina, la tendencia observada es casi estable, descendiendo entre 2.21% (máximo nivel en 1962 y en 1971) hasta el 1.0% . Si bien es cierto que la región parte de un nivel muy bajo en comparación con el total de países del mundo, debe recordarse que no tuvo una participación muy activa en la

carrera armamentista que se desplegó durante el periodo de la guerra fría, aunque las cifras indican que la inversión militar en este lapso iba decayendo con el tiempo (BBC News Mundo, 2019).

Ilustración 7: Gasto militar como porcentaje del PIB en los países del mundo. Año de referencia 2022.



Fuente: Banco Mundial (2022).

No obstante, aunque el gasto militar anual como porcentaje del PIB no se reduce drásticamente en la región, su bajo nivel inicial y la sistemática disminución, aunque sea pequeña, indica que los recursos no son suficientes para enfrentar la dimensión de los problemas de inseguridad y violencia característicos de sus países. De hecho, como se observa en el diagrama No. 7, la región latinoamericana está en una de las áreas sombreadas más claras indicando que los países invierten muy poco en gasto militar, comparado con los demás países del mundo, con excepción de Colombia, aunque este país está en un nivel medio.

En contraste con la insuficiencia de recursos, marcada por la estabilidad del gasto militar como porcentaje del PIB, la nueva planificación e implementación de políticas de seguridad incluye programas novedosos y actuales en resolución de conflictos, reinserción, reincorporación, formación de la niñez y la juventud, convivencia ciudadana, además de los

aspectos más tradicionales de la defensa, la seguridad y la justicia, que requieren de la profesionalización del personal de fuerzas militares y la adopción de modernas tecnologías de investigación y acción. Chinchilla y Vorndran (2018) aseguran que el capital humano de las fuerzas militares es clave para el desarrollo de las reformas de seguridad, no sólo por su interés en el proceso, sino por el conocimiento acumulado con relación a su contexto y necesidades de la población en esta materia (Chinchilla & Vorndran, 2018).

En las actuales circunstancias, la profesionalización tiende a superar una etapa de autoritarismo en el ejercicio de la seguridad y la defensa, para adoptar estrategias de integralidad de pedagogía, servicio y participación de la ciudadanía (Chinchilla & Vorndran, 2018). Autores como Muggah (2017) señalan que el incremento y recrudecimiento del crimen en la región latinoamericana son evidencia de que las medidas represivas y de contención frente al delito se han quedado cortas, por lo que se resignifica y entra en auge un nuevo concepto de seguridad, que implica dimensiones sociales y de negociación tendientes a dar una solución al problema, incluso, asumiendo costos para frenar la violencia (Posada et al., 2000).

Las nuevas estrategias son complementarias a las funciones tradicionales de los organismos de las fuerzas militares, por lo que corresponden a políticas que también requieren de un financiamiento adicional, aumentando las necesidades de gasto. Las medidas de seguridad ciudadana y pública buscan también salvaguardar las instituciones mediante consensos y prácticas pedagógicas, que implican la inclusión y la activa participación de la sociedad, bajo la premisa de consciencia no sólo sobre las ventajas de la seguridad, sino del rol que todos los ciudadanos deben asumir para apoyar a las instituciones.

Esto comprende innovación y diversificación en los sistemas penales y de justicia, poniendo énfasis en los mecanismos conciliatorios, así como estrategias centradas en las familias y los jóvenes, especial población en riesgo. Igualmente, se relaciona con la necesidad de profesionalizar más a las fuerzas militares, dando lugar a reformas en la formación y a dotaciones más apropiadas para los escenarios de intervención que deben asumir, tanto en la confrontación del delito, como en la interacción directa con la comunidad (Muggah, 2017).

La pertinencia de la inversión en las fuerzas armadas de un país, específicamente en su preparación y profesionalización se desprende de la capacidad de este organismo social para incidir en la estabilidad nacional, contrarrestando todos los factores disruptivos que

pueden amenazar las instituciones, y por ende, la calidad de vida de los ciudadanos, y esto no solo tiene que ver con el escenario de guerra, que es sólo una situación excepcional y temporal en las historias de los países, sino principalmente, con el rol que el personal militar y de policía asumen para la convivencia en la sociedad, pues como lo explica Griffiths (2017), estas entidades son un instrumento para preservar la paz y prevenir situaciones de alteración del orden, que afecten la vida y el bienestar de las personas (Griffiths Spielman, 2017).

Las fuerzas militares están organizadas para enfrentar los hechos de violencia y participar en la guerra, protegiendo las instituciones y los ciudadanos, en etapas clave de la historia de cada país, cuando estos eventos han sucedido, pero esto no es contradictorio con el hecho de que prestan servicios permanentes y necesarios cuando el tiempo es de paz, lo cual es en verdad su función principal, precisamente porque es la que más se desarrolla a lo largo del tiempo (Griffiths, 2017). La paz está en la base del desarrollo de las sociedades, porque la guerra destruye lo que se ha logrado construir, mientras que el tiempo de paz es un tiempo de creación, de trabajo productivo y de convivencia (Griffiths Spielman, 2017).

En tiempo de paz las fuerzas militares cumplen un papel protagónico en la prevención de la violencia y la guerra, de modo que desarrollan actividades muy especializadas de inteligencia e investigación, lo que requiere de una formación rigurosa por parte del personal, así como de la adopción de tecnología avanzada para el desarrollo de sus funciones, como se ha mencionado, lo que representa altos costos por el grado de especialidad, siendo imprescindible que sean cubiertos por el Estado, debido a que se trata de la provisión del bien común de la seguridad.

En cuanto a las innovaciones tecnológicas, la mayoría de las cuales están aplicadas a los contextos operativos de las fuerzas militares y a la ingeniería, existe un conjunto amplio de resultados de investigación. Cubillos y otros (2020) muestran que, en el mundo, estas instituciones están a la vanguardia del cambio tecnológico, con fines de protección, seguridad y defensa, ya que las mejoras de tecnología permiten contar con herramientas actualizadas y con mayor versatilidad y capacidad para el cumplimiento de las misiones militares (Cubillos et al., 2020).

En este sentido, los conocimientos no solo se limitan a armamentos, sino que aportan en el conocimiento social sobre vehículos, aptos para múltiples terrenos, aeronaves, comunicaciones, logística, robótica, sensores y también en entrenamiento personal. Los

países más desarrollados del mundo tienen las más altas inversiones militares, pero no son gastos enfocados simplemente en el funcionamiento de las fuerzas, sino que se destinan a la investigación y a la formación de más alto nivel para los integrantes de estos organismos, aunque los logros en la innovación no son exclusivos de estos países, sino que han sido adelantados en diferentes países del mundo, gracias a la acumulación de conocimientos que permiten los equipos de trabajo y la experiencia (Cubillos et al., 2020).

Adicionalmente, en situaciones catastróficas, las fuerzas militares cumplen roles de atención social que son muy importantes para recomponer el orden y restituir los derechos de la población, por ejemplo, mediante el apoyo médico, la logística de distribución de alimentos y bienes de primera necesidad, la ayuda humanitaria en situaciones catastróficas, incluyendo la intervención con niños y heridos, y la búsqueda de personas en desastres, todo lo cual también implica una resignificación del rol de esta institución, sin descuidar la función original para la que fue creada. Griffiths (2017) resalta que el papel de estas fuerzas toda vez que en los países suceden eventos calamitosos es clave para la recuperación de las poblaciones y para la reconstrucción de los lugares, cuando es el caso (Griffiths Spielman, 2017).

Del mismo modo, a nivel internacional, las fuerzas de los diferentes países desarrollan operaciones de apoyo para atender situaciones humanitarias y de desastres, extendiendo la solidaridad hacia los contextos que así lo requieran, siendo los encargados de desarrollar múltiples actividades según sus capacidades de despliegue, adaptabilidad, flexibilidad y conocimientos de intervención en este tipo de situaciones (Griffiths, 2017), por lo que sus presupuestos deben permitir esta condición de estar siempre listos para cualquier eventualidad (Griffiths Spielman, 2017).

El gasto militar, por tanto, debe ser planificado tanto para cubrir los costos necesarios de la profesionalización y las actividades de investigación y defensa en tiempos de paz, como para enfrentar y contrarrestar los diferentes fenómenos específicos de la violencia en sus respectivos países, como es el caso de los tipos de tráfico a los que se ha hecho alusión anteriormente. Es decir que se deben considerar gastos tanto para el funcionamiento habitual y especializado de estos organismos, como para las inversiones específicas que se requieran de acuerdo con la situación particular de cada país (Valiño Mayo & Abe, 1997).

Finalmente, en contextos como el latinoamericano, donde efectivamente suceden hechos significativos de violencia en la cotidianidad, la percepción de inseguridad es todavía mayor que la relación de este tipo de hechos, por lo que la nueva gestión de las políticas de seguridad contribuye a que los ciudadanos puedan dimensionar mejor la situación y participar, de acuerdo con la ley y su integración con las autoridades, en las acciones de mejora que puedan contribuir a la prevención del crimen y a mitigar sus consecuencias, creando un ambiente más favorable y mayor colaboración con las instituciones.

Para Chinchilla y Vorndran (2018) este tipo de iniciativas que cambian la perspectiva de las políticas de seguridad buscan la integralidad que implica una visión compartida sobre la situación y las soluciones a nivel del Estado y de la sociedad, el respeto por los derechos humanos y la coordinación multisectorial, con la participación de nuevos y más actores y con una resignificación del rol de las instituciones oficiales. Esto implica el uso de nuevos instrumentos de gestión gubernamental, tanto a nivel nacional como local, generando estrategias de planificación participativa, así como en la implementación y evaluación de las acciones. (Chinchilla & Vorndran, 2018)

Las estrategias participativas también contribuyen a que se reduzca la corrupción, porque mejora la veeduría ciudadana y la rendición de cuentas, además de que se restaura la relación armónica entre los ciudadanos y el Estado y se fortalecen los lazos ciudadanos organizados en la lucha contra la criminalidad y la violencia (Muggah, 2017). La misma sociedad, cansada y preocupada por las dinámicas de estos problemas, busca los canales de participación y apoya las políticas públicas en este sentido. Todavía queda mucho por recorrer en este sentido, pero la consolidación de presupuestos suficientes y bien gestionados en el campo de la seguridad y la defensa generará las condiciones básicas para que finalmente se puedan alcanzar los objetivos previstos para estas políticas.

Por su parte, Niño (2020) también plantea diversas estrategias para reducir la inseguridad y la violencia, partiendo de un sistema de gestión con visión estratégica, el cual comprende la optimización y uso eficiente de los recursos, el impulso a la cultura de la legalidad y la reforma al diseño institucional, en el mismo sentido de Chinchilla y Vorndran (2018). El sistema incluye el fortalecimiento de la inteligencia estratégica por parte de los organismos especializados de la seguridad y la defensa, enfatizando en la prevención.

Del mismo modo, el autor Niño (2020) pone de relieve que el éxito de las políticas públicas en esta materia depende de la promoción de una contracultura de la violencia, puesto que esta conducta puede evitarse, por lo que en la región se deben privilegiar las narrativas que no profundicen la estigmatización y costumbres de la historia de los países latinoamericanos en esta problemática, sino que propendan por el cambio de paradigmas, donde la sociedad se concientice de que puede llegar a ser una comunidad con una convivencia armónica.

“Muchos de los países de América Latina que sufren del flagelo del crimen y la violencia que generan inseguridad, poseen segmentos poblacionales que han construido relaciones de poder y de conducta basados en la ilegalidad. Al parecer la violencia y la pertenencia a estructuras criminales en algunos casos otorgan prestigios subalternos y ascenso social. En este orden de ideas, por más que existan operaciones policiales y militares encaminadas a la desarticulación de las empresas criminales, los resultados serán marginales, pues los estímulos para ser criminal seguirán siendo los protagonistas del aumento de criminales” (Niño, 2020; 224).

Es en este sentido en que la nueva política de seguridad y defensa basada en la integralidad, los derechos, la convivencia y el bienestar se plantea la disputa con el crimen por las personas que se ven envueltas en el espiral de la violencia por condiciones de vulnerabilidad, pero que el Estado puede recuperar para la ciudadanía, mediante las estrategias más actuales pedagógicas y de participación, porque el delito se controla con acciones directas frente a los hechos, pero se previene evitando que la población se vea abocada a participar por diversas circunstancias que pueden ser contrarrestadas mediante las estrategias integrales.

Otro de los aspectos que Niño (2020) considera de vital importancia para la nueva política de seguridad y defensa es el conjunto de acciones necesarias para garantizar la coherencia entre el control del crimen y la justicia, debido a que son pertinentes medidas que eviten la repetición de los hechos, la reincidencia y la posible agudización de las problemáticas, porque cuando estas no se manejan del modo apropiado tienden a crecer, afectando cada vez más a la población víctima de estas problemáticas.

Del mismo modo, las estrategias de mejoramiento de la confianza y la articulación entre la ciudadanía y el Estado son pertinentes, entre lo cual se destaca la transparencia y la rendición de cuentas, que sirven como motivadores para la participación, puesto que las personas pueden comprender la dinámica de los procesos, los recursos invertidos, las políticas implementadas y los esfuerzos realizados, haciéndose más conscientes de que su participación contribuirá a una mejor calidad de vida para todos, mediante un entorno más seguro para la convivencia y el desarrollo social y productivo.

Este tipo de estrategias son pertinentes, porque el gasto militar es muy importante e incide en el fortalecimiento de las comunidades y de su relación con las instituciones, por lo que se requiere tanto de recursos como de una gestión efectiva, tendiente a garantizar los resultados previstos para la política de seguridad y defensa, sin la cual, como se ha explicado a lo largo de este capítulo, no se puede concebir una sociedad con justicia, convivencia, prosperidad y calidad de vida.

A diferencia de lo que sostienen algunos autores como Joseph Stiglitz, Linda Bilmes, Paul Collier y Todd Sandler, el gasto militar no afecta las finanzas públicas, ni resta inversión en otros sectores, sino que manejado adecuadamente complementa las políticas sociales y permite contar con un entorno seguro y armónico para el desarrollo de todas las actividades humanas y comunitarias. Su importancia también implica la generación de conocimientos tecnológicos avanzados en diferentes áreas, sobre los que se sustenta una operación idónea de las fuerzas militares, tanto en tiempo de guerra, como de paz.

CAPÍTULO No. 4 - EL GASTO EN DEFENSA Y LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS. UNA VISIÓN DE CONJUNTO. RASGOS COMUNES Y DIFERENCIALES

El gasto en defensa en América Latina ha sido una constante a lo largo de las últimas décadas, influido no solo por consideraciones de seguridad nacional, sino también por factores económicos, políticos y sociales. Los países de la región han tenido que equilibrar la necesidad de mantener unas Fuerzas Armadas capaces de garantizar la soberanía territorial y la estabilidad interna con las presiones presupuestarias derivadas de la necesidad de invertir. Sin embargo, el gasto en defensa no se ha comportado de manera uniforme en la región, y la asignación de recursos a este sector ha dependido de una combinación de factores que varían según el país y el contexto histórico.

Este capítulo busca ofrecer una visión de conjunto sobre el gasto militar en América Latina, destacando los rasgos comunes y las diferencias entre los países de la región. Se analizará cómo las decisiones sobre el gasto militar no solo están influenciadas por factores económicos, sino también por consideraciones políticas, geopolíticas y sociales. Asimismo, se explorará el impacto que este gasto ha tenido en el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos, destacando los casos de aquellos que han logrado un mayor equilibrio entre el gasto en defensa y el desarrollo de otros sectores clave.

Adicional, en este capítulo se presenta una visión general del gasto militar en América Latina, destacando tanto los elementos comunes como las diferencias entre los países de la región. No obstante, antes de abordar el apartado 4.1, es crucial señalar que los comentarios y análisis que se desarrollan a continuación provienen de un análisis previo y detallado realizado país por país, basado en datos extraídos de la base de datos del SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Esta información ha sido procesada y organizada para ofrecer una visión precisa y contextualizada de la situación de cada nación en términos de gasto en defensa.

Como complemento significativo en los Anexos 1 y 2 contienen los cuadros, gráficos y documentos relevantes obtenidos del SIPRI, y constituyen la base esencial para la elaboración de los comentarios, análisis y conclusiones presentados en este capítulo y en los siguientes. Gracias a la exhaustiva recopilación y tratamiento de estos datos, se ha podido

construir un panorama más claro sobre las dinámicas que influyen en el gasto en defensa en la región, lo que permite profundizar en cómo este gasto interactúa con otros factores clave del desarrollo económico y social de América Latina.

4.1. Rasgos Comunes del Gasto Militar en América Latina

La Función Dual de las Fuerzas Armadas

Uno de los elementos comunes más destacados en la región es la función dual de las Fuerzas Armadas, que no solo cumplen un rol en la defensa externa, sino que también son actores clave en el mantenimiento del orden interno y en la gestión de crisis. En muchos países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas son llamadas a intervenir en situaciones de emergencia interna, como desastres naturales, crisis humanitarias y disturbios sociales. Este fenómeno se ha observado en países como Brasil, donde el Ejército ha sido desplegado para combatir la violencia en las favelas y para apoyar la gestión de grandes eventos internacionales, como el Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. De manera similar, en Ecuador, las Fuerzas Armadas juegan un papel crucial en la protección de las fronteras y en operaciones de seguridad interna, especialmente en áreas de conflicto o donde existe presencia de grupos armados ilegales.

Este rol dual de las Fuerzas Armadas ha llevado a que los gobiernos latinoamericanos justifiquen una porción considerable de su presupuesto en defensa bajo el argumento de que no solo es necesario para la defensa externa, sino también para el mantenimiento de la estabilidad interna. Este razonamiento es particularmente evidente en países como Colombia, donde las Fuerzas Armadas han sido esenciales en la lucha contra las insurgencias y el narcotráfico, y en México, donde el Ejército ha sido desplegado para combatir los cárteles del narcotráfico.

4.2. Ciclos de Expansión y Contracción del Gasto Militar

Otro rasgo común en los países latinoamericanos es la volatilidad en los niveles de gasto militar, la cual está estrechamente relacionada con las fluctuaciones económicas, especialmente en aquellos países con economías dependientes de la exportación de recursos

naturales. En economías como la de Venezuela y Ecuador, que dependen en gran medida de los ingresos provenientes de la exportación de petróleo, el gasto militar ha seguido un patrón de expansión durante los períodos de altos precios del crudo, y de contracción cuando los precios disminuyen. Por ejemplo, durante el boom de los precios del petróleo en la primera década del siglo XXI, Venezuela aumentó significativamente su gasto militar, destinando grandes sumas a la compra de armamento avanzado y a la modernización de sus Fuerzas Armadas. Sin embargo, con la caída de los precios del petróleo en la década siguiente, el gasto militar se redujo drásticamente, lo que afectó la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Ecuador, el patrón ha sido similar. Durante los años de bonanza petrolera, el país pudo incrementar su gasto militar, especialmente en la década de 2000, cuando los ingresos fiscales permitieron financiar proyectos de modernización en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a medida que los ingresos petroleros disminuyeron, el gasto militar se redujo considerablemente, lo que afectó la capacidad del país para mantener una inversión sostenida en defensa.

4.3. Dependencia de la Importación de Armamento

Un tercer rasgo común en la región es la dependencia de la importación de armamento. La mayoría de los países latinoamericanos no poseen industrias militares suficientemente desarrolladas para abastecer las necesidades de sus Fuerzas Armadas, lo que los obliga a depender de proveedores extranjeros para la adquisición de equipo militar. Esta dependencia genera una serie de desafíos, no solo en términos de costo, sino también en cuanto a la sostenibilidad a largo plazo del gasto militar. Las fluctuaciones en el tipo de cambio y los acuerdos bilaterales pueden afectar la capacidad de los países para adquirir armamento y mantener la modernización de sus ejércitos.

Una excepción notable a esta tendencia es Brasil, que ha desarrollado una industria militar más robusta, capaz de producir armamento y tecnología avanzada para sus Fuerzas Armadas. Brasil ha sido un líder en la región en cuanto a la producción de aviones de combate, submarinos y tecnología militar, lo que le ha permitido reducir su dependencia de proveedores externos y aumentar su autonomía en materia de defensa.

4.4. Diferencias en el Gasto Militar en América Latina

Enfoques Estratégicos Diferenciales

A pesar de los rasgos comunes, existen diferencias significativas en la manera en que los países latinoamericanos asignan sus recursos de defensa, lo que está determinado por sus contextos geopolíticos y sus prioridades estratégicas. En el caso de Colombia, el gasto militar ha estado centrado en la lucha contra las insurgencias internas, como las FARC y el ELN, y en el combate al narcotráfico. Durante décadas, Colombia ha destinado un porcentaje considerable de su presupuesto a la modernización de sus Fuerzas Armadas, con el apoyo financiero y logístico de Estados Unidos, en el marco del Plan Colombia. Esto ha permitido a Colombia mejorar significativamente sus capacidades militares y reducir la influencia de los grupos insurgentes, aunque a un costo alto en términos sociales y económicos.

Por otro lado, Chile ha adoptado un enfoque más estratégico y de largo plazo, invirtiendo en la modernización de sus Fuerzas Armadas con una visión de proyección regional. Gracias a la Ley Reservada del Cobre, Chile ha asegurado un financiamiento continuo para sus Fuerzas Armadas, lo que le ha permitido adquirir tecnología de punta y mantener una capacidad operativa elevada. Este enfoque ha convertido a Chile en una potencia militar regional, con una influencia significativa en el Pacífico Sur.

4.5. Impacto Económico del Gasto Militar

El impacto del gasto militar en el desarrollo económico también varía significativamente entre los países de la región. En economías más estables y diversificadas, como las de Chile y Brasil, el gasto militar ha sido un motor de desarrollo tecnológico y ha contribuido a la creación de empleo en sectores especializados. La inversión en tecnología militar en Brasil, por ejemplo, ha impulsado el desarrollo de la industria aeronáutica, lo que ha tenido efectos positivos en la economía nacional.

En el caso de Venezuela, el gasto militar se incrementó significativamente durante la presidencia de Hugo Chávez, con una fuerte inversión en la compra de armamento avanzado y el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, gran parte de este gasto fue financiado por los altos ingresos provenientes del petróleo, lo que hizo al país vulnerable a

las fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos. Con la caída de los precios del petróleo y la crisis económica que siguió, Venezuela no pudo mantener estos niveles de gasto, lo que condujo a un deterioro de las capacidades militares y a una crisis humanitaria severa, donde sectores clave como la educación, la salud y la infraestructura fueron severamente desfinanciados.

En Ecuador, el gasto militar ha seguido una trayectoria similar a la de Venezuela en términos de dependencia de los ingresos petroleros. Sin embargo, a diferencia de Venezuela, Ecuador ha mostrado mayor moderación en la asignación de recursos a la defensa. Aunque ha habido momentos de altos niveles de gasto en defensa, como durante la guerra con Perú en 1995, Ecuador ha buscado equilibrar las necesidades de seguridad con las de desarrollo social. A pesar de esto, el impacto positivo del gasto militar en la economía ha sido limitado, ya que los recursos se han destinado más a la compra de armamento que a la creación de industrias locales o al fomento del desarrollo tecnológico.

4.6. Relación con los Gobiernos Populistas y Autoritarios

Otro factor diferencial en el gasto militar en América Latina es su relación con la política interna, particularmente en países con gobiernos populistas o autoritarios. En estos contextos, el gasto militar tiende a aumentar como una forma de consolidar el poder político y de mantener el control interno. En países como Nicaragua y Venezuela, los gobiernos han utilizado las Fuerzas Armadas no solo para la defensa nacional, sino también como un instrumento de control social y político. En estos casos, el gasto militar se justifica como una medida de seguridad interna frente a posibles levantamientos o amenazas políticas, lo que desvía recursos de otras áreas prioritarias como la inversión en bienestar social.

Por el contrario, en democracias más consolidadas como Uruguay y Costa Rica, el gasto militar es significativamente menor. Costa Rica, en particular, abolió su ejército en 1948 y ha destinado los recursos previamente asignados a la defensa a sectores como la educación y la salud, lo que ha generado un impacto positivo en el desarrollo humano y en los indicadores sociales del país. Este contraste subraya cómo los regímenes políticos y sus percepciones de amenaza influyen directamente en la asignación del gasto militar, y cómo

diferentes enfoques en la seguridad pueden conducir a resultados muy distintos en términos de desarrollo.

4.7. Reflexiones Finales: El Futuro del Gasto Militar en América Latina

El gasto militar en América Latina sigue siendo un tema complejo que involucra múltiples factores económicos, políticos y sociales. A pesar de los rasgos comunes observados, como la volatilidad del gasto en función de los ciclos económicos y la dependencia de las importaciones de armamento, las diferencias entre los países son significativas. Los países que han logrado una planificación estratégica a largo plazo, como Chile y Brasil, han podido usar el gasto militar como una herramienta para impulsar el desarrollo tecnológico y fortalecer su posición regional. En contraste, otros países, como Venezuela y Nicaragua, han utilizado el gasto militar principalmente para consolidar el poder político, a menudo en detrimento del desarrollo económico y social.

La relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en la región varía significativamente según el contexto político y económico de cada país. En algunos casos, el gasto militar ha sido utilizado como una herramienta para impulsar el desarrollo tecnológico y fortalecer la industria nacional, mientras que en otros ha sido una carga fiscal que ha desviado recursos de sectores más productivos. De cara al futuro, será crucial que los países latinoamericanos encuentren un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad nacional y la importancia de destinar recursos suficientes a sectores que promuevan un desarrollo económico y social sostenible.

4.8. Conclusiones

Este capítulo ha demostrado que, si bien existen rasgos comunes en la manera en que los países latinoamericanos gestionan su gasto militar, las diferencias en términos de sus impactos económicos y sociales son significativas. Países como Chile y Brasil han logrado un equilibrio estratégico que les ha permitido usar el gasto en defensa como una herramienta para el desarrollo, mientras que otros, como Venezuela y Nicaragua, han priorizado el gasto

militar como una forma de consolidar el poder interno, a menudo con consecuencias negativas para el desarrollo económico y social.

La necesidad de una planificación más coherente y estratégica del gasto militar en América Latina es evidente. Los países deben encontrar maneras de reducir su dependencia de las importaciones de armamento y fomentar el desarrollo de industrias locales que puedan generar empleo y mejorar la competitividad tecnológica. Además, es crucial que las decisiones sobre el gasto militar se tomen en el contexto de una visión más amplia del desarrollo, que reconozca la importancia de invertir en sectores sociales clave.

En última instancia, el futuro del gasto militar en América Latina dependerá de la capacidad de los países para gestionar sus recursos de manera eficiente y equilibrada, asegurando tanto la seguridad nacional como el bienestar de sus ciudadanos.

CAPÍTULO No. 5: BASE DEL ANÁLISIS - FUENTES DE DATOS UTILIZADAS, MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR

5.1. Metodología de la investigación

La metodología de investigación cuantitativa empleada en este estudio se centra en analizar de manera exhaustiva el impacto del gasto militar en seguridad y defensa en la economía de América Latina, con un enfoque específico en el caso de Ecuador desde 1960 hasta 2021. Para alcanzar este propósito, se llevará a cabo un estudio bibliométrico detallado que permita revisar y analizar la literatura existente sobre economía de la defensa y su relación con el gasto en seguridad y defensa, en los países latinoamericanos.

5.2. Población de estudio

La población de estudio de esta investigación comprende a los países de América Latina, con un enfoque específico en el caso de Ecuador. Se abarcará un extenso período que va desde 1960 hasta 2021, con el fin de capturar las dinámicas y cambios a lo largo del tiempo en relación con el gasto militar en seguridad y defensa y su impacto económico.

5.3. Datos de la investigación

Los datos utilizados en este estudio son de fuente secundaria y han sido obtenidos principalmente del Banco Mundial y del SIPRI (Instituto Internacional de Estocolmo de Investigación para la Paz). Estas fuentes son reconocidas por su fiabilidad y exhaustividad en la recopilación de datos relacionados con la economía, el gasto militar y la seguridad a nivel global.

El Banco Mundial proporciona una amplia gama de indicadores macroeconómicos que son fundamentales para analizar el impacto del gasto militar en la economía de América Latina, incluyendo datos sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

Por otro lado, el SIPRI recopila y analiza datos sobre el gasto militar a nivel mundial, lo que permite obtener información detallada sobre el gasto en seguridad y defensa en los

países de la región latinoamericana. Esto incluye datos sobre el presupuesto militar y otras categorías relacionadas con la seguridad nacional.

La utilización de estas fuentes de datos secundarios garantiza la calidad y la consistencia de la información utilizada en el estudio. Además, permite comparar y contrastar los datos de diferentes países latinoamericanos a lo largo del período de estudio, lo que facilita el análisis de tendencias y la identificación de patrones comunes en relación con el gasto militar y su impacto económico.

En conjunto, la combinación de datos del Banco Mundial y del SIPRI proporciona una base sólida y confiable para llevar a cabo el análisis bibliométrico, así como los análisis econométricos necesarios para cumplir con los objetivos de investigación establecidos.

5.4. Análisis de cointegración y causalidad para series de tiempo.

Para conocer la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico se sigue un enfoque de cointegración con la finalidad de verificar si existe una relación de largo plazo entre las variables de interés. Además, debido a que la cointegración implica causalidad (aunque al revés no necesariamente), se implementan las pruebas de causalidad de Granger (1969) y Toda y Yamamoto (1995).

Las variables de interés son el crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, gasto militar y formación bruta de capital fijo (inversión). Todas las variables se miden en precios constantes de 2015 y se transforman a logaritmos. La información se recopila para el periodo 1960-2019, no obstante, hay países donde el horizonte temporal de estudio difiere debido a la disponibilidad de información. El PIB per cápita y la inversión se obtienen del Banco Mundial, y el gasto militar se obtiene de la base de datos de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). En la Tabla No. 5 se resume variables y fuentes de información.

Tabla 5: Variables y fuentes de información

Variables		Nomeclatura	Fuente
Variable dependiente	PIB per cápita	lnpib_pc	Banco Mundial
Variables independientes	Gasto militar	lngm	Stockholm International Peace Research Institute
	Formación bruta de capital fijo	lnfbkf	Banco Mundial

Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Debido a la restricción en la información, los países correspondientes a la región latinoamericana son 13 y en la Tabla No. 6 se resumen con el respectivo periodo de estudio.

Tabla 6: Países y periodo de estudio.

Países	Periodo de estudio
Ecuador	1960-2019
República Dominicana	1960-2019
El Salvador	1990-2019
Guatemala	1960-2019
México	1960-2019
Argentina	1962-2019
Bolivia	1968-2019
Brasil	1970-2019
Chile	1980-2019
Colombia	1965-2019
Paraguay	1962-2019
Perú	1960-2019
Uruguay	1972-2019

Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

5.4.1. Cointegración

La cointegración permite identificar si existe o no una relación de largo plazo estable entre las variables de interés. En el caso de no existir, se debe estimar los modelos econométricos con variables estacionarias para evitar caer en una regresión espuria. Se sigue el enfoque de Johansen y Juselius (1990), debido a que es más adecuado para probar cointegración entre más de dos variables, en comparación con el enfoque de Engle-Granger (Levendis, 2018, p.364). En ese sentido, se especifica un Vector Autorregresivo (VAR,

idóneo para especificar un sistema donde todas las variables son endógenas) en niveles; la siguiente ecuación econométrica es la representación vectorial del VAR a estimar:

$$Y_t = \mu + \beta_1 Y_{t-1} + \dots + \beta_k Y_{t-k} + e_t \quad (1)$$

Donde Y_t es el vector de las variables de interés (lnpib_pc, lngm y lnfbkf), Y_{t-k} es el vector con las variables rezagadas k veces. El número de rezagos (k) se basa en el criterio de información de Akaike. β es la matriz de los parámetros y e_t es el vector del término de error. Si existe cointegración entonces el modelo de la ecuación (1) puede expresarse en forma de un modelo de corrección de errores (VECM):

$$\Delta Y_t = \mu + \Pi Y_{t-1} + \Gamma_1 \Delta Y_{t-1} + \dots + \Gamma_k \Delta Y_{t-k} + e_t \quad (2)$$

Donde Π contiene los parámetros de velocidad de ajuste (α) y los coeficientes de los vectores cointegrantes (β). Para conocer el número de vectores cointegrantes se realiza las pruebas de valor propio máximo y de traza sobre la ecuación del VECM en la que se incluye los términos de constante y tendencia determinística del parámetro de velocidad de ajuste ($\mu + \rho t$) y del modelo ($\gamma + \tau t$), dando lugar a la siguiente ecuación VECM:

$$\Delta Y_t = r1 \Delta Y_{t-k} + \alpha(\beta Y_{t-k} + \mu + \rho t) + (\gamma + \tau t) + e_t \quad (3)$$

Las dos pruebas para cointegración son diferentes y presentan cinco casos: 1) $\mu = \rho = \gamma = \tau = 0$; 2) $\gamma = \tau = \rho = 0$; 3) $\rho = \tau = 0$; 4) $\tau = 0$; y, 5) μ, ρ, γ, τ diferentes de 0. De manera específica, el presente estudio se basa en el caso 3 que incluye una constante no restringida en el modelo.

La prueba de valor propio máximo es secuencial y plantea como hipótesis nula que el rango de $\hat{\pi}$ es r , mientras que la alternativa sugiere que es $r+1$. En ese sentido, la hipótesis nula indica que $r=0$ y la alternativa que $r=1$, si no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula entonces se concluye que no hay cointegración; por el contrario, si se rechaza la hipótesis nula, se replantean las hipótesis indicando que $r=1$ y la alternativa que $r=2$. Bajo estas nuevas hipótesis, si no se puede rechazar la hipótesis nula significa que existe un vector cointegrante, mientras que, si se rechaza se vuelven a replantear las hipótesis hasta que no se pueda rechazar la hipótesis nula.

La prueba de la traza también es secuencial y plantea como hipótesis nula que el rango es r mientras que la alternativa sugiere que el rango es mayor a r . En otras palabras, la hipótesis nula afirma que $r=0$ y la hipótesis alternativa que $r>0$. Si no se puede rechazar la nula significa que no hay cointegración, en contraste, si se rechaza se vuelven a plantear las

hipótesis con un rango más grande en donde la hipótesis nula sugiere que $r=1$ y la alternativa que $r>1$, si no se puede rechazar la nueva hipótesis nula se concluye que hay un vector cointegrante; por otra parte, si se rechaza se vuelve a plantear las hipótesis con un rango más amplio hasta que no se pueda rechazar la hipótesis nula.

En suma, en las dos pruebas, el número de vectores cointegrantes es igual al rango de π . La evidencia a favor de cointegración implica que existe causalidad en al menos una dirección (aunque la presencia de causalidad no implica una relación de equilibrio a largo plazo), por consiguiente, se implementa pruebas de causalidad.

5.4.2. Causalidad

Las pruebas de causalidad corresponden a Granger (1969) y Toda Yamamoto (1995). Para la primera, se especifica un VAR multivariado con las variables $I(0)$ para garantizar procesos estacionarios y evitar una regresión espuria. Con base a esa formulación se prueba si los coeficientes son estadísticamente iguales a cero, en tal caso se puede afirmar que no existe una relación causal en el sentido de Granger.

En la segunda, Toda y Yamamoto (1995) [TY] sugieren la formulación de un VAR con las variables en niveles, independientemente de que las series sean procesos integrados o cointegrados de un orden arbitrario d . Para la especificación del modelo se debe determinar el número de rezagos óptimos (k) (con base en criterios de información como Akaike y Schwarz) y el orden de integración más alto en las series (d_{\max}). Posteriormente, se estima el VAR de orden $(k + d_{\max})$ en niveles, a partir del cual se realiza la prueba de Granger, pero sin tomar en cuenta los rezagos adicionales generados por el mayor orden de integración de las series (d_{\max}). La inclusión de rezagos adicionales (d_{\max}) permite que las fórmulas asintóticas tradicionales para calcular errores estándar y valores p sean válidas (Levendis, 2018, pp339-340).

5.4.3. Pruebas de raíz unitaria

Dada la importancia de conocer el orden de integración de las series de tiempo en los métodos utilizados, se implementan las pruebas de Dickey Fuller Aumentada [DFA] (Dickey

Fuller, 1979) y Phillips y Perron [PP] (1988). La prueba DFA consiste en aumentar retardos en la variable dependiente diferenciada, lo que permite tener en cuenta la correlación serial del término de error (Gujarati y Porter, 2010, pp.757), tal como se especifica en la siguiente ecuación:

$$\Delta Y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \delta Y_{t-1} + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Delta Y_{t-i} + e_t \quad (4)$$

La elección del número de rezagos óptimo se realiza con base en el criterio de información de Aikake. Por otro lado, la prueba PP utiliza los errores estándar de Newey y West (1987), que la vuelve robusta ante la correlación serial; los rezagos que ocupa se basan en Newey - West. Ambas pruebas plantean como hipótesis nula la presencia de raíz unitaria en la serie de tiempo y como hipótesis alternativa afirman que la serie fue generada por un proceso estacionario. Los casos se prueban son: $\beta_1 \neq 0$ y $\beta_2 = 0$; y, $\beta_2 \neq 0$.

Las tradicionales pruebas de raíz unitaria (DFA y PP) ignoran los efectos de los quiebres estructurales por los que se implementa la prueba de Zivot y Andrews (1992) que permite probar si la serie contiene raíz unitaria con ausencia de quiebres estructurales (hipótesis nula) versus la hipótesis alternativa que sugiere que la serie es generada por un proceso estacionario con un quiebre estructural determinado endógenamente.

5.4.4. Análisis de cointegración y causalidad para datos de panel

El análisis siguiendo el enfoque de cointegración y causalidad para series de tiempo permite analizar el vínculo entre el gasto militar y crecimiento económico de manera individual para cada país y con un horizonte temporal más amplio; sin embargo, las estimaciones econométricas con datos de panel son más eficientes y permiten abordar la heterogeneidad no observada entre las unidades transversales (Das, 2019). En ese sentido, se construye un panel de datos de trece economías latinoamericanas (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay) para el periodo 1990-2019. Se sigue el enfoque de cointegración y causalidad para datos de panel, utilizando las mismas variables del análisis de series de tiempo (lnpib_pc, lngm, lnfbkf).

Previo al análisis de cointegración y causalidad es fundamental abordar la dependencia espacial, puesto que permitirá elegir e implementar adecuadamente las pruebas de raíz unitaria, cointegración y causalidad (Tugcu, 2018). En ese sentido, se emplea la prueba LM de Breusch y Pagan (1980), debido a que el tamaño de la dimensión temporal es superior al número de unidades individuales de la sección cruzada; para mayor robustez, también se implementa la prueba CD de Pesaran (2004). En las dos pruebas, la hipótesis nula indica ausencia de dependencia transversal.

En presencia del fenómeno de dependencia espacial, se utilizan las siguientes pruebas de raíz unitaria para datos de panel con la finalidad de identificar el orden de integración de las series: i) prueba CIPS de Pesaran (2007) que flexibiliza el supuesto de independencia espacial impuesto en las pruebas de raíz unitaria de primera generación; ii) prueba de Breitung (2000), siguiendo el procedimiento de Breitung y Das (2005) para obtener resultados robustos a la correlación espacial; y, iii) prueba de Im, Pesaran y Shin (2003) para paneles heterogéneos pero restando los promedios de las unidades transversales para aminorar el impacto de la dependencia espacial (Levin, Lin, y Chu, 2002). La hipótesis nula, en las tres pruebas, afirma que las series contiene raíz unitaria.

Posterior al análisis de correlación espacial y estacionariedad, se implementa varias pruebas para verificar si existe alguna relación de equilibrio a largo plazo entre las variables de interés. Por consiguiente, se implementan las siguientes cinco pruebas: i) Kao (1999); ii) Pedroni (1999, 2004); iii) Westerlund (2005); iv) Maddala y Wu (1999); y, v) Westerlund (2007). Kao (1999) propone cuatro pruebas de tipo Dickey-Fuller (DF) y una de tipo Dickey-Fuller aumentada (DFA); la hipótesis nula es la misma para todas las pruebas y afirma la ausencia de cointegración. Pedroni (1999 y 2004) sugiere cuatro pruebas con el parámetro autorregresivo común para todos los paneles y tres pruebas donde el término autorregresivo es específico para cada panel; la hipótesis nula indica que no existe cointegración. Por su parte, Westerlund (2005) plantea dos pruebas no paramétricas de no cointegración y que se basan en los residuos. En las primeras tres pruebas se aplica el método de Levin, Lin y Chu (2002) para disminuir el impacto de la dependencia espacial. La cuarta prueba es la desarrollada por Maddala y Wu (1999) de tipo Johansen-Fisher. La quinta prueba es la propuesta por Westerlund (2007), la cual se basa en un modelo de corrección de errores y ofrece resultados robustos frente a la dependencia espacial mediante el procedimiento de

Bootstrap. Las dos pruebas verifican como hipótesis nula la ausencia de una relación de equilibrio a largo plazo.

En relación con el enfoque de causalidad, se implementa la prueba de Dumitrescu y Hurlin (2012). Los autores proponen un estadístico que tiene buenas propiedades en tamaños de muestra pequeños y, en presencia de dependencia transversal para obtener resultados más robustos, permite aplicar el procedimiento de *bootstrap* para calcular los valores probabilísticos. El estadístico requiere que las series sean estacionarias.

5.5. Aportes del Capítulo

Los resultados obtenidos en este capítulo reflejan una comprensión profunda de las dinámicas del gasto en defensa en América Latina, a partir de una metodología rigurosa que combina análisis cuantitativo y cualitativo. Los hallazgos subrayan la variabilidad del gasto militar en la región, tanto en términos absolutos como relativos, y cómo este está condicionado por una compleja interacción de factores económicos, políticos y sociales.

Uno de los aspectos más novedosos de este análisis es la identificación de patrones de gasto que no solo dependen de las presiones geopolíticas o de seguridad, sino también de la configuración interna de cada país, lo que añade una capa de complejidad al entendimiento general del gasto militar en América Latina. Este enfoque permite observar no solo las similitudes, sino también las singularidades de cada contexto nacional, lo que ofrece una perspectiva más matizada de la región.

El rigor de la metodología empleada, que se basa en datos oficiales del SIPRI y un análisis detallado país por país, otorga una base sólida a las conclusiones. La validación cruzada de los datos y el enfoque comparativo utilizado aseguran la fiabilidad de los resultados obtenidos. De este modo, el capítulo contribuye de manera significativa al campo de estudio del gasto en defensa, tanto en América Latina como en el ámbito global, abriendo nuevas vías para futuras investigaciones y políticas públicas.

CAPÍTULO No. 6 - APLICACIÓN DE LAS DISTINTAS TÉCNICAS ANALÍTICAS AL ESTUDIO DEL GASTO EN DEFENSA Y SEGURIDAD

En el presente capítulo se expone los resultados de la propuesta metodológica. En la subsección 6.1. se presenta los resultados relacionados con el análisis de series de tiempo; y, en la 6.2. se muestra los hallazgos mediante el enfoque de datos de panel. La discusión de resultados se presenta en el subapartado 6.3.

6.1. Resultados basados en el análisis de series de tiempo

El análisis estadístico comienza mostrando una serie de medidas descriptivas que ofrecen una visión preliminar de las variables clave antes de proceder con las pruebas econométricas más rigurosas, como las de raíz unitaria, cointegración y causalidad. Estas medidas incluyen la media, desviación estándar, valores mínimos y máximos, entre otros, y proporcionan una perspectiva inicial sobre las tendencias y variaciones en el gasto militar, la inversión y el PIB per cápita en varios países de América Latina. La Tabla No. 7 refleja esta información y destaca las diferencias entre las economías estudiadas (CUEVA-JIMÉNEZ et al., 2024).

Observaciones Generales sobre el Número de Observaciones

Es importante notar que el número de observaciones varía significativamente entre los países debido a las limitaciones en la disponibilidad de datos. En muchos casos, estas limitaciones pueden estar relacionadas con problemas de transparencia, recopilación de información incompleta o simplemente la falta de registros históricos que permitan la construcción de series temporales completas. Un ejemplo claro de esto es el caso de Chile, donde la muestra se ha reducido intencionalmente para obtener una buena especificación en los modelos VAR (Vectores Autorregresivos). A pesar de esta restricción, Chile cuenta con un número considerable de observaciones, alcanzando 40 registros, lo cual proporciona una base sólida para el análisis econométrico posterior.

En contraste, el caso más limitado en términos de datos es El Salvador, con un total de 30 observaciones. Aunque este número es menor en comparación con otros países, sigue

siendo adecuado para realizar análisis econométricos robustos, ya que se cumple el número mínimo de observaciones requerido para ejecutar las pruebas estadísticas con suficiente poder. Estos casos reflejan los desafíos que enfrentan las economías emergentes y en desarrollo en cuanto a la disponibilidad de datos históricos confiables, un problema recurrente en muchos estudios empíricos sobre América Latina.

Comportamiento de las Medias: Inversión, Gasto Militar y PIB per cápita

En términos de los promedios (medias) de las variables estudiadas, los resultados sugieren que, en la mayoría de los países, la inversión presenta el valor promedio más alto en comparación con el gasto militar y el PIB per cápita. Esto es consistente con la estructura de muchas economías en desarrollo, donde una parte significativa del producto nacional se destina a la inversión, tanto pública como privada, como un mecanismo para fomentar el crecimiento económico a largo plazo. La inversión en infraestructuras, tecnología y desarrollo industrial tiende a ser prioritaria en estos países debido a la necesidad de cerrar la brecha con economías más avanzadas (CUEVA-JIMÉNEZ et al., 2024).

El gasto militar, aunque considerable, suele tener una menor participación relativa en el presupuesto general, lo cual refleja la asignación de recursos hacia áreas prioritarias de inversión económica en lugar de sectores de defensa. Sin embargo, esto no significa que el gasto militar sea insignificante, ya que, en muchos países latinoamericanos, las fuerzas armadas y la seguridad juegan un papel central en la estabilidad política y social, como es el caso de Colombia, donde el gasto militar ha sido históricamente elevado debido a los conflictos internos.

Una excepción notable es el caso de Ecuador, donde el gasto militar muestra una media inferior a la del crecimiento económico (medido a través del PIB per cápita). Este comportamiento puede estar relacionado con las políticas fiscales adoptadas por Ecuador, donde, en años recientes, ha habido una mayor contención en el gasto militar para liberar recursos destinados a otros sectores clave, como infraestructura, salud y educación. Esto contrasta con el patrón observado en otros países de la región donde, si bien el gasto militar es moderado, sigue superando el crecimiento económico en términos absolutos.

Desviación Estándar: Variabilidad en la Inversión y el PIB per cápita

Al examinar la desviación estándar, que mide la dispersión o variabilidad de los datos en relación con su media, se observan algunas diferencias significativas entre los países. La República Dominicana muestra la mayor desviación estándar en lo que respecta a la inversión, lo que indica una alta variabilidad en los niveles de inversión a lo largo del tiempo. Esta variabilidad puede estar relacionada con fluctuaciones en la política económica y cambios en las condiciones del mercado, como la inversión extranjera directa o los ciclos de infraestructura pública. Las economías que dependen en mayor medida de la inversión extranjera y del turismo, como la República Dominicana, tienden a mostrar mayores fluctuaciones en este rubro, especialmente ante crisis económicas globales o cambios en las condiciones geopolíticas.

Por el contrario, la menor desviación estándar se observa en el PIB per cápita de El Salvador, lo cual refleja una mayor estabilidad en los niveles de ingreso por habitante en comparación con otras economías latinoamericanas. Esta estabilidad puede estar relacionada con la estructura económica de El Salvador, que, aunque menos dinámica que otras economías de la región, ha mostrado un crecimiento más constante y menos volátil a lo largo del tiempo. Este comportamiento también puede reflejar una menor exposición a fluctuaciones externas, dado que El Salvador no cuenta con grandes sectores exportadores que puedan verse afectados significativamente por las crisis globales.

Valores Mínimos y Máximos: Gasto Militar y Crecimiento Económico

En cuanto a los valores mínimos, se observa que en la mayoría de los países el valor más bajo corresponde al crecimiento económico. Esto es esperable, ya que los países en desarrollo, como los de América Latina, enfrentan ciclos económicos más volátiles y periodos de contracción, lo que explica los valores negativos o bajos en esta variable.

En términos de valores máximos, todos los países muestran los valores más altos en la inversión, lo que refleja la importancia que tiene este componente en el impulso del desarrollo económico. La inversión es vista como el principal motor del crecimiento en economías emergentes, y los gobiernos suelen priorizar proyectos de infraestructura, energía y tecnología que requieren grandes sumas de capital.

Tabla 7: Estadísticas descriptivas.

País	VARIABLES	Observaciones	Media	Desviación Estándar	Mínimo	Máximo
Ecuador	lnpib_pc	60	8.317	0.261	7.836	8.735
	lngm	60	6.892	0.734	5.458	7.988
	lnfbkf	60	23.044	0.543	22.089	24.061
República Dominicana	lnpib_pc	60	8.054	0.506	7.169	9.013
	lngm	60	19.236	0.443	18.001	20.263
	lnfbkf	60	21.896	1.225	19.214	23.846
El Salvador	lnpib_pc	30	8.056	0.154	7.765	8.320
	lngm	30	19.230	0.245	18.935	19.882
	lnfbkf	30	21.933	0.214	21.267	22.227
Guatemala	lnpib_pc	60	7.985	0.210	7.526	8.358
	lngm	60	19.423	0.452	18.486	20.170
	lnfbkf	60	22.239	0.586	20.995	23.075
México	lnpib_pc	60	8.890	0.263	8.268	9.222
	lngm	60	21.555	0.654	20.235	22.642
	lnfbkf	60	25.466	0.712	23.647	26.303
Argentina	lnpib_pc	58	9.234	0.177	8.852	9.561
	lngm	58	22.477	0.440	21.809	23.414
	lnfbkf	58	24.566	0.431	23.811	25.337
Bolivia	lnpib_pc	52	7.641	0.193	7.380	8.084
	lngm	52	19.608	0.483	18.253	20.299
	lnfbkf	52	21.590	0.627	20.672	22.853
Brasil	lnpib_pc	50	8.790	0.217	8.177	9.129
	lngm	50	23.217	0.595	21.864	24.002
	lnfbkf	50	26.058	0.326	25.159	26.689
Chile	lnpib_pc	40	8.991	0.418	8.306	9.540
	lngm	40	21.863	0.329	21.309	22.336
	lnfbkf	40	23.736	0.920	22.070	24.897
Colombia	lnpib_pc	55	8.235	0.308	7.653	8.765
	lngm	55	21.673	0.964	20.294	23.040
	lnfbkf	55	23.801	0.700	22.402	24.973
Paraguay	lnpib_pc	58	8.156	0.400	7.363	8.754
	lngm	58	19.049	0.538	17.740	19.773
	lnfbkf	58	21.657	0.944	19.354	22.817
Perú	lnpib_pc	60	8.229	0.248	7.874	8.787
	lngm	60	21.699	0.560	20.918	22.996
	lnfbkf	60	23.209	0.761	21.946	24.598
Uruguay	lnpib_pc	48	9.157	0.303	8.734	9.692
	lngm	48	20.601	0.216	19.984	21.242
	lnfbkf	48	22.386	0.494	21.394	23.175

Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

En la Tabla No. 8 se presenta los resultados de la prueba de DFA y PP. En términos generales, los resultados sugieren que las series son integradas I(1) con la salvedad de la fbkf de El Salvador y el PIB per cápita de Bolivia (CUEVA-JIMÉNEZ et al., 2024).

Tabla 8: Pruebas de raíz unitaria

País	Variables	Pruebas de raíz unitaria	Niveles		Primera diferencia				Orden de Integración		
			Constante y sin tendencia $\beta_1 \neq 0; \beta_2 = 0$	Tendencia $\beta_2 \neq 0$	Constante y sin tendencia $\beta_1 \neq 0; \beta_2 = 0$	Tendencia $\beta_2 \neq 0$					
Ecuador	lnpib_pc	DFA	-1.293	-2.088	-3.801	*	-3.830		I(1)		
		PP	-1.254	-1.808	-5.255	*	-5.275	*	I(1)		
	lngm	DFA	-1.463	-2.518	-7.368	*	-7.341	*	I(1)		
		PP	-1.344	-2.568	-7.365	*	-7.336	*	I(1)		
	lnfbkf	DFA	-0.778	-1.771	-6.869	*	-6.807	*	I(1)		
		PP	-0.728	-1.725	-6.843	*	-6.777	*	I(1)		
República Dominicana	lnpib_pc	DFA	-0.125	-1.968	-7.591	*	-7.519	*	I(1)		
		PP	0.314	-1.991	-7.588	*	-7.519	*	I(1)		
	lngm	DFA	-0.132	-1.288	-4.854	*	-5.150	*	I(1)		
		PP	-0.404	-1.583	-6.386	*	-6.557	*	I(1)		
	lnfbkf	DFA	-1.872	-3.568	-5.915	*	-5.904	*	I(1)		
		PP	-1.300	-2.941	-9.101	*	-9.226	*	I(1)		
El Salvador	lnpib_pc	DFA	-1.445	-4.587	*	-4.499	*	-4.572	*	I(1)	
		PP	-0.838	-2.394		-4.548	*	-4.618	*	I(1)	
	lngm	DFA	-2.310	-3.725		-3.543		-4.559	*	I(1)	
		PP	-2.606	-2.760		-3.480		-4.528	*	I(1)	
	lnfbkf	DFA	-3.121	-3.510	*	-3.635		-3.497	*	I(0)	
		PP	-3.834	*	-3.551	*	-4.067	*	-4.071		I(0)
Guatemala	lnpib_pc	DFA	-1.569	-2.772		-3.041		-3.050	*	I(1)	
		PP	-1.314	-1.898		-3.737	*	-3.733		I(1)	
	lngm	DFA	-2.400	-2.082		-5.138	*	-5.382	*	I(1)	
		PP	-2.212	-1.888		-9.231	*	-9.518	*	I(1)	
	lnfbkf	DFA	-1.404	-2.772		-3.915	*	-3.895		I(1)	
		PP	-1.618	-2.420		-5.202	*	-5.189	*	I(1)	
México	lnpib_pc	DFA	-2.820	*	-2.444		-6.127	*	-6.607	*	I(1)
		PP	-2.983		-2.134		-6.116	*	-6.567	*	I(1)
	lngm	DFA	-1.178		-2.302		-5.784	*	-5.777	*	I(1)
		PP	-1.209		-2.631		-9.737	*	-9.770	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-3.051		-3.131		-6.597	*	-7.012	*	I(1)
		PP	-3.032		-2.541		-6.573	*	-6.990	*	I(1)
Argentina	lnpib_pc	DFA	-2.087		-2.742		-6.733	*	-6.729	*	I(1)
		PP	-1.540		-2.370		-6.732	*	-6.728	*	I(1)
	lngm	DFA	-2.051		-2.353		-3.975	*	-4.149	*	I(1)
		PP	-1.599		-1.697		-5.541	*	-5.588	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-1.677		-2.678		-4.212	*	-4.168	*	I(1)
		PP	-1.535		-2.576		-6.181	*	-6.118	*	I(1)
Bolivia	lnpib_pc	DFA	-1.186		-2.673		-2.841	*	-3.538		I(1)
		PP	0.409		-0.641		-2.647	*	-2.786		I(2)
	lngm	DFA	-3.361		-4.028		-3.972	*	-4.261	*	I(1)

		PP	-2.977		-3.087		-7.284	*	-7.540	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-0.516		-2.129		-3.915	*	-3.899		I(1)
		PP	-0.003		-1.899		-5.444	*	-5.413	*	I(1)
Brasil	lnpib_pc	DFA	-1.844		-3.512	*	-3.538	*	-3.527	*	I(1)
		PP	-3.204		-3.628		-4.487	*	-4.686	*	I(1)
	lngm	DFA	-2.235		-4.595	*	-6.073	*	-6.199	*	I(1)
		PP	-2.045		-3.388	*	-6.034	*	-6.169	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-1.985		-3.459	*	-3.799	*	-3.734		I(1)
		PP	-2.650	*	-3.084		-4.359	*	-4.361	*	I(1)
Chile	lnpib_pc	DFA	-2.029		-0.657		-5.033	*	-5.061	*	I(1)
		PP	-0.368		-2.187		-4.117	*	-4.068		I(1)
	lngm	DFA	-0.832		-2.570		-5.380	*	-5.609	*	I(1)
		PP	-0.275		-1.724		-5.488	*	-5.662	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-0.378		-2.995		-5.298	*	-5.226	*	I(1)
		PP	-0.495		-2.389		-5.335	*	-5.274	*	I(1)
Colombia	lnpib_pc	DFA	-0.991		-2.906		-3.627	*	-3.627		I(1)
		PP	-0.819		-2.127		-4.212	*	-4.193	*	I(1)
	lngm	DFA	-0.170		-1.864		-5.901	*	-5.823	*	I(1)
		PP	-0.038		-2.951		-9.532	*	-9.452	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-0.935		-3.277	*	-4.318	*	-4.280	*	I(1)
		PP	-1.135		-2.764		-4.837	*	-4.793	*	I(1)
Paraguay	lnpib_pc	DFA	-1.724		-2.057		-3.411		-3.563		I(1)
		PP	-1.523		-1.596		-4.456	*	-4.568	*	I(1)
	lngm	DFA	-2.104		-2.048		-8.149	*	-8.205	*	I(1)
		PP	-2.156		-2.106		-8.160	*	-8.230	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-2.966		-2.501		-4.158	*	-4.718	*	I(1)
		PP	-2.877	*	-1.975		-5.308	*	-5.889	*	I(1)
Perú	lnpib_pc	DFA	0.002		-0.898		-4.591	*	-4.745	*	I(1)
		PP	-0.103		-0.848		-4.493	*	-4.521	*	I(1)
	lngm	DFA	-1.734		-2.027		-8.039	*	-8.030	*	I(1)
		PP	-1.969		-2.213		-8.032	*	-8.024	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-0.508		-2.181		-5.106	*	-5.060	*	I(1)
		PP	-0.718		-2.422		-5.161	*	-5.114	*	I(1)
Uruguay	lnpib_pc	DFA	0.092		-2.234		-4.037	*	-4.088		I(1)
		PP	-0.210		-2.108		-3.695	*	-3.648		I(1)
	lngm	DFA	-2.005		-1.900		-6.863	*	-6.727	*	I(1)
		PP	-3.644	*	-3.832		-7.105	*	-6.988	*	I(1)
	lnfbkf	DFA	-2.131		-3.221	*	-3.577	*	-3.523		I(1)
		PP	-1.827		-2.349		-4.181	*	-4.176		I(1)

Nivel de significancia: * 0.01; 0.05; * 0.10.

Elaboración: La autora

En la Tabla No. 9 se presenta los resultados de la prueba de ZA. La mayor parte de las series son I(1) con la excepción del PIB per cápita de Bolivia que es I(2). Al cotejar las pruebas DFA, PP y ZA, se parte que todas las series son I (1) con la respectiva exclusión del Bolivia, donde el PIB per cápita es I (2).

Tabla 9: Prueba de raíz unitaria con quiebres estructurales

País	Variables	Tipo de ruptura	Niveles			Primera diferencia		Orden de Integración	
			Estadístico t		Año	Estadístico t	Año		
Ecuador	lnpib_pc	Intercepto	-3.621		1973	-5.672	*	1977	I(1)
		Tendencia	-2.932		1975	-5.309	*	1974	I(1)
		Ambos	-3.545		1973	-6.545	*	1977	I(1)
	lngm	Intercepto	-3.797		1999	-7.846	*	2002	I(1)
		Tendencia	-3.234		1976	-7.370	*	1970	I(1)
		Ambos	-3.834		1999	-8.051	*	2002	I(1)
	lnfbkf	Intercepto	-3.206		1983	-7.859	*	2000	I(1)
		Tendencia	-2.082		1998	-6.920	*	1984	I(1)
		Ambos	-3.259		1983	-7.962	*	2001	I(1)
República Dominicana	lnpib_pc	Intercepto	-3.288		1984	-8.000	*	1977	I(1)
		Tendencia	-2.229		2004	-7.750	*	1986	I(1)
		Ambos	-3.365		1984	-8.105	*	1974	I(1)
	lngm	Intercepto	-2.760		1982	-8.159	*	1992	I(1)
		Tendencia	-3.291		1991	-6.373	*	1988	I(1)
		Ambos	-4.041		1987	-8.082	*	1992	I(1)
	lnfbkf	Intercepto	-3.718		1970	-6.480	*	1976	I(1)
		Tendencia	-3.627		1972	-5.960	*	1982	I(1)
		Ambos	-4.353		1981	-6.622	*	1976	I(1)
El Salvador	lnpib_pc	Intercepto	-5.373	*	2001	-6.500	*	1996	I(1)
		Tendencia	-5.027	*	2015	-6.130	*	2000	I(1)
		Ambos	-5.360		2009	-6.070	*	2002	I(1)
	lngm	Intercepto	-2.944		2003	-5.275		1995	I(1)
		Tendencia	-3.835		1994	-5.381	*	2000	I(1)
		Ambos	-2.903		1994	-6.978	*	2003	I(1)
	lnfbkf	Intercepto	-5.718	*	2009	-5.288		1996	I(1)
		Tendencia	-3.300		1994	-5.151	*	1997	I(1)
		Ambos	-4.529		2009	-5.326		2011	I(1)
Guatemala	lnpib_pc	Intercepto	-4.835		1982	-5.512	*	1980	I(1)
		Tendencia	-2.542		2004	-4.609		1983	I(1)
		Ambos	-5.904	*	1982	-5.476		1980	I(1)
	lngm	Intercepto	-3.599		1975	-10.245	*	2006	I(1)
		Tendencia	-3.402		1983	-9.904	*	2005	I(1)
		Ambos	-3.603		1981	-10.157	*	2006	I(1)
	lnfbkf	Intercepto	-3.952		1982	-6.166	*	1987	I(1)
		Tendencia	-2.975		2006	-5.826	*	1983	I(1)
		Ambos	-4.559		1982	-6.943	*	1986	I(1)
México	lnpib_pc	Intercepto	-2.966		1972	-7.859	*	1982	I(1)
		Tendencia	-3.868		1980	-6.869	*	1987	I(1)
		Ambos	-4.842	*	1983	-7.789	*	1982	I(1)
	lngm	Intercepto	-4.112		1972	-10.574	*	2007	I(1)
		Tendencia	-3.686		1977	-9.969	*	1989	I(1)
		Ambos	-4.924	*	1986	-10.673	*	2007	I(1)
	lnfbkf	Intercepto	-2.764		1983	-7.559	*	1982	I(1)
		Tendencia	-4.081		1969	-7.364	*	1984	I(1)
		Ambos	-4.708		1982	-7.581	*	1982	I(1)
Argentina	lnpib_pc	Intercepto	-4.170		2005	-7.622	*	1991	I(1)
		Tendencia	-3.589		1991	-6.960	*	1977	I(1)
		Ambos	-3.771		2006	-7.927	*	2003	I(1)
	lngm	Intercepto	-2.985		1989	-6.612	*	1980	I(1)

		Tendencia	-3.155		1977	-5.860	*	1991	I(1)
		Ambos	-3.402		1984	-7.076	*	1977	I(1)
	Infbkf	Intercepto	-4.397		1981	-6.468	*	1991	I(1)
		Tendencia	-3.608		1990	-5.870	*	1982	I(1)
		Ambos	-4.389		1981	-6.727	*	2003	I(1)
Bolivia	Inpib_pc	Intercepto	-4.035		1979	-4.202		1978	I(2)
		Tendencia	-4.471		1986	-3.998		1981	I(2)
		Ambos	-4.598		1982	-5.936	*	1987	I(1)
	Ingm	Intercepto	-3.301		1986	-7.826	*	1982	I(1)
		Tendencia	-4.360	*	1976	-7.412	*	1983	I(1)
		Ambos	-6.489	*	1982	-7.789	*	1982	I(1)
	Infbkf	Intercepto	-4.362		1980	-5.750	*	1979	I(1)
		Tendencia	-3.409		1984	-5.563	*	1981	I(1)
		Ambos	-4.239		1980	-6.482	*	1984	I(1)
Brasil	Inpib_pc	Intercepto	-4.304		1990	-5.695	*	1981	I(1)
		Tendencia	-3.761		1999	-5.760	*	1982	I(1)
		Ambos	-4.419		2010	-6.186	*	1984	I(1)
	Ingm	Intercepto	-6.417	*	1987	-6.547	*	1993	I(1)
		Tendencia	-5.023	*	2011	-6.737	*	1978	I(1)
		Ambos	-6.202	*	1987	-6.924	*	1982	I(1)
	Infbkf	Intercepto	-4.463		2006	4.881		1981	I(1)
		Tendencia	-3.925		1993	-4.954	*	1978	I(1)
		Ambos	-4.662		2010	-5.444		1984	I(1)
Chile	Inpib_pc	Intercepto	-5.631	*	1991	-5.541	*	1987	I(1)
		Tendencia	-7.209	*	1998	-9.489	*	1987	I(1)
		Ambos	-6.711	*	1999	-8.881	*	1987	I(1)
	Ingm	Intercepto	-3.198		1988	7.555	*	1993	I(1)
		Tendencia	-3.963		1990	-6.401	*	2005	I(1)
		Ambos	-4.169		1988	-7.712	*	1992	I(1)
	Infbkf	Intercepto	-4.941		1992	-6.369	*	1987	I(1)
		Tendencia	-6.140	*	1997	-8.903	*	1987	I(1)
		Ambos	-5.988	*	1999	-8.687	*	1987	I(1)
Colombia	Inpib_pc	Intercepto	-3.486		2010	-5.042		2003	I(1)
		Tendencia	-3.121		2003	-4.370	*	1983	I(1)
		Ambos	-4.309		1998	-5.059	*	2003	I(1)
	Ingm	Intercepto	-4.509		1993	-8.328	*	1978	I(1)
		Tendencia	-3.614		2010	-8.192	*	1994	I(1)
		Ambos	-4.261		1993	-8.785	*	1997	I(1)
	Infbkf	Intercepto	-3.989		1998	-5.576	*	2001	I(1)
		Tendencia	-3.726		2003	4.862		1999	I(1)
		Ambos	-5.601	*	1999	-5.548		2001	I(1)
Paraguay	Inpib_pc	Intercepto	-3.149		1998	-5.847	*	1982	I(1)
		Tendencia	-3.393		1979	-4.681		2000	I(1)
		Ambos	-3.546		1977	-6.283	*	1982	I(1)
	Ingm	Intercepto	-4.269		1997	-9.117	*	2004	I(1)
		Tendencia	-2.373		1983	-8.762	*	2000	I(1)
		Ambos	-3.601		1997	-9.031	*	2004	I(1)
	Infbkf	Intercepto	-4.710	*	1976	-7.113	*	1982	I(1)
		Tendencia	-3.927		1980	-6.179	*	1999	I(1)
		Ambos	-4.965	*	1976	-6.999	*	1982	I(1)
Perú	Inpib_pc	Intercepto	-2.967		1988	-5.513	*	1993	I(1)
		Tendencia	-3.718		1999	-4.950	*	1984	I(1)
		Ambos	-6.679	*	1988	-5.608	*	1993	I(1)
	Ingm	Intercepto	-5.258		1988	-9.151	*	1978	I(1)

Uruguay	lnfbkf	Tendencia	-2.424		2004	-8.678	*	1989	I(1)
		Ambos	-4.911	*	1988	-9.194	*	1992	I(1)
		Intercepto	-4.678	*	1983	-5.593	*	1993	I(1)
		Tendencia	-4.046		2002	-5.389	*	2010	I(1)
		Ambos	-4.869	*	1988	-5.704	*	2005	I(1)
	lnpib_pc	Intercepto	-4.980		1982	-4.331		1981	I(0)
		Tendencia	-4.213	*	2003	-4.224	*	1983	I(1)
		Ambos	-4.875	*	1982	-4.641		1986	I(0)
	lngm	Intercepto	-5.108		2012	-7.84	*	1982	I(1)
		Tendencia	-5.632	*	2007	-6.653	*	2003	I(1)
Ambos		-5.558		2003	-7.506	*	1982	I(1)	
lnfbkf	Intercepto	-7.035	*	1983	-4.312		1991	I(0)	
	Tendencia	-5.173	*	1986	-4.181	*	1983	I(1)	
	Ambos	-5.799	*	1983	-5.420		1986	I(1)	

Nivel de significancia: * 0.01; 0.05; * 0.10.

Elaboración: La autora

Una vez identificado el orden de integración de las series se procede a presentar las pruebas para cointegración en la Tabla No. 10. Pocos son los países que sugieren al menos un vector cointegrante. En ese sentido, para El Salvador, Argentina, Chile y Uruguay, existe un vector cointegrante, según la prueba de la traza y el valor propio máximo. En el caso de Guatemala y Brasil, la prueba de la traza indica que existe un vector cointegrante, mientras que, la prueba del valor propio máximo sugiere todo lo contrario.

Tabla 10: Pruebas de cointegración: traza y valor propio máximo

Países	Rango máximo (r)	Estadístico de la traza	valores críticos		Estadístico del valor propio máximo	valores críticos	
			5%	1%		5%	1%
Ecuador	0	17.0274	29.68	35.65	11.455	21.0	25.5
República Dominicana	0	17.7317	29.68	35.65	12.920	21.0	25.5
El Salvador	0	34.6123	29.68	35.65	26.671	21.0	25.5
	1	7.9410	15.41	20.04	7.872	14.1	18.6
Guatemala	0	29.8814	29.68	35.65	19.107	21.0	25.5
	1	10.7743	15.41	20.04	6.823	14.1	18.6
México	0	23.9314	29.68	35.65	9.126	21.0	25.5
Argentina	0	41.5754	29.68	35.65	30.444	21.0	25.5
	1	11.1315	15.41	20.04	9.776	14.1	18.6
Bolivia	-	-	-	-	-	-	-
Brasil	0	34.1985	29.68	35.65	18.878	21.0	25.5
	1	15.3203	15.41	20.04	9.393	14.1	18.6
Chile	0	34.4153	29.68	35.65	21.433	21.0	25.5
	1	12.9823	15.41	20.04	12.121	14.1	18.6
Colombia	0	24.5906	29.68	35.65	17.079	21.0	25.5
Paraguay	0	1.3518	29.68	35.65	15.581	21.0	25.5
Perú	0	26.4925	29.68	35.65	19.272	21.0	25.5
Uruguay	0	34.5210	29.68	35.65	22.969	21.0	25.5
	1	11.5521	15.41	20.04	11.245	14.1	18.6

Elaboración: La autora

Debido a que la prueba para cointegración indica mayormente no existir relaciones de largo plazo, se especifica los modelos VAR para causalidad de Granger en diferencias para evitar una regresión espuria. Los resultados se presentan en la Tabla No. 11. Se evidencia que, en países como Ecuador, México, Brasil, Chile y Perú, la dirección de causalidad en el sentido de Granger va desde PIB per cápita hacia el gasto militar. En Bolivia y Uruguay la relación causal es unidireccional desde el gasto militar hacia el PIB per cápita; mientras que en República Dominicana y Argentina existe causalidad bidireccional entre las dos variables de interés. En El Salvador, Guatemala, Colombia y Paraguay, no se identificó causalidad entre el PIB per cápita y el gasto militar.

Tabla 11: Causalidad de Granger.

País	Equation (Y)	Excluded (X)	Estadístico F	Probabilidad
Ecuador	D_lnpib_pc	D.lngm	0.888	0.350
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	0.147	0.703
	D_lngm	D.lnpib_pc	4.231	0.045
	D_lngm	D.lnfbkf	5.349	0.025
	D_lnfbkf	D.lnpib_pc	1.068	0.306
	D_lnfbkf	D.lngm	0.720	0.400
República Dominicana	D_lnpib_pc	D.lngm	3.194	0.080
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	2.064	0.157
	D_lngm	D.lnpib_pc	11.892	0.001
	D_lngm	D.lnfbkf	7.227	0.010
	D_lnfbkf	D.lnpib_pc	0.381	0.540
	D_lnfbkf	D.lngm	0.767	0.386
El Salvador	D_lnpib_pc	D.lngm	1.342	0.285
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	1.742	0.202
	D_lngm	D.lnpib_pc	1.569	0.234
	D_lngm	D.lnfbkf	1.720	0.206
	D_lnfbkf	D.lnpib_pc	6.424	0.007
	D_lnfbkf	D.lngm	0.196	0.824
Guatemala	D_lnpib_pc	D.lngm	1.067	0.352
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	0.732	0.486
	D_lngm	D.lnpib_pc	1.772	0.181
	D_lngm	D.lnfbkf	0.348	0.708
	D_lnfbkf	D.lnpib_pc	1.330	0.274
	D_lnfbkf	D.lngm	3.125	0.053
México	D_lnpib_pc	D.lngm	1.693	0.199
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	0.023	0.880
	D_lngm	D.lnpib_pc	4.096	0.048
	D_lngm	D.lnfbkf	1.939	0.170
	D_lnfbkf	D.lnpib_pc	0.013	0.911
	D_lnfbkf	D.lngm	3.830	0.056
Argentina	D_lnpib_pc	D.lngm	2.250	0.082
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	1.255	0.305

	D_lngm	D.lnpib_pc	13.611	0.000
	D_lngm	D.lnfbkf	11.221	0.000
	D.lnfbkf	D.lnpib_pc	1.526	0.215
	D.lnfbkf	D.lngm	1.904	0.130
Bolivia	D2_lnpib_pc	D.lngm	5.664	0.007
	D2_lnpib_pc	D.lnfbkf	0.038	0.963
	D_lngm	D2.lnpib_pc	1.513	0.232
	D_lngm	D.lnfbkf	0.848	0.436
	D.lnfbkf	D2.lnpib_pc	2.094	0.136
	D.lnfbkf	D.lngm	1.911	0.161
Brasil	D_lnpib_pc	D.lngm	0.966	0.440
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	0.617	0.653
	D_lngm	D.lnpib_pc	2.368	0.073
	D_lngm	D.lnfbkf	1.694	0.176
	D.lnfbkf	D.lnpib_pc	2.574	0.056
	D.lnfbkf	D.lngm	1.414	0.252
Chile	D_lnpib_pc	D.lngm	1.760	0.190
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	5.088	0.013
	D_lngm	D.lnpib_pc	0.899	0.418
	D_lngm	D.lnfbkf	2.062	0.145
	D.lnfbkf	D.lnpib_pc	10.413	0.000
	D.lnfbkf	D.lngm	4.359	0.022
Colombia	D_lnpib_pc	D.lngm	0.701	0.502
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	0.475	0.625
	D_lngm	D.lnpib_pc	1.271	0.290
	D_lngm	D.lnfbkf	1.600	0.213
	D.lnfbkf	D.lnpib_pc	0.031	0.969
	D.lnfbkf	D.lngm	1.377	0.263
Paraguay	D_lnpib_pc	D.lngm	0.025	0.874
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	0.292	0.592
	D_lngm	D.lnpib_pc	1.314	0.257
	D_lngm	D.lnfbkf	0.269	0.606
	D.lnfbkf	D.lnpib_pc	0.099	0.755
	D.lnfbkf	D.lngm	1.396	0.243
Perú	D_lnpib_pc	D.lngm	1.802	0.136
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	0.384	0.857
	D_lngm	D.lnpib_pc	5.832	0.000
	D_lngm	D.lnfbkf	2.015	0.099
	D.lnfbkf	D.lnpib_pc	0.355	0.876
	D.lnfbkf	D.lngm	2.699	0.035
Uruguay	D_lnpib_pc	D.lngm	4.917	0.004
	D_lnpib_pc	D.lnfbkf	1.083	0.382
	D_lngm	D.lnpib_pc	2.052	0.112
	D_lngm	D.lnfbkf	2.916	0.038
	D.lnfbkf	D.lnpib_pc	4.150	0.009
	D.lnfbkf	D.lngm	2.569	0.058

Hipótesis nula: X no causa en el sentido de Granger a Y.

Elaboración: La autora

Los resultados encontrados con la prueba de Granger no difieren de manera importante con los hallazgos de causalidad siguiendo el procedimiento de TY (Tabla No. 12).

Así pues, para el caso de Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay se confirma la misma dirección de causalidad observada con Granger; y, en Colombia y Paraguay no se evidencia causalidad, similar a las conclusiones obtenidas con la prueba de Granger. Lo novedoso con TY es que para Republica Dominicana la dirección de causalidad va desde el PIB hacia el gasto militar; en Guatemala va desde el gasto militar hacia el PIB; en Perú es bidireccional; y, en México y Chile no hay causalidad.

Tabla 12: Causalidad según el procedimiento de Toda y Yamamoto (1995)

País	Equation (Y)	Excluded (X)	Estadístico F	Probabilidad F
Ecuador	lnpib_pc	lngm	0.807	0.452
	lnpib_pc	lnfbkf	0.005	0.995
	lngm	lnpib_pc	3.886	0.027
	lngm	lnfbkf	2.031	0.143
	lnfbkf	lnpib_pc	0.629	0.538
	lnfbkf	lngm	0.512	0.603
República Dominicana	lnpib_pc	lngm	2.683	0.108
	lnpib_pc	lnfbkf	2.539	0.117
	lngm	lnpib_pc	5.739	0.020
	lngm	lnfbkf	3.749	0.059
	lnfbkf	lnpib_pc	1.434	0.237
	lnfbkf	lngm	6.172	0.016
El Salvador (*)	-	-	-	-
Guatemala	lnpib_pc	lngm	2.452	0.076
	lnpib_pc	lnfbkf	2.408	0.080
	lngm	lnpib_pc	1.769	0.167
	lngm	lnfbkf	0.361	0.781
	lnfbkf	lnpib_pc	0.551	0.650
	lnfbkf	lngm	2.733	0.055
México	lnpib_pc	lngm	1.243	0.270
	lnpib_pc	lnfbkf	0.086	0.771
	lngm	lnpib_pc	2.603	0.113
	lngm	lnfbkf	1.101	0.299
	lnfbkf	lnpib_pc	0.097	0.756
	lnfbkf	lngm	3.281	0.076
Argentina	lnpib_pc	lngm	2.591	0.067
	lnpib_pc	lnfbkf	0.437	0.728
	lngm	lnpib_pc	3.109	0.038
	lngm	lnfbkf	3.400	0.027
	lnfbkf	lnpib_pc	0.664	0.579
	lnfbkf	lngm	2.200	0.104
Bolivia	lnpib_pc	lngm	3.489	0.019
	lnpib_pc	lnfbkf	0.986	0.430
	lngm	lnpib_pc	1.451	0.242
	lngm	lnfbkf	0.335	0.852
	lnfbkf	lnpib_pc	6.399	0.001
	lnfbkf	lngm	3.254	0.025
Brasil	lnpib_pc	lngm	1.131	0.361
	lnpib_pc	lnfbkf	0.926	0.462

	lngm	lnpib_pc	2.240	0.089
	lngm	lnfbkf	1.266	0.306
	lnfbkf	lnpib_pc	3.863	0.012
	lnfbkf	lngm	1.273	0.303
Chile	lnpib_pc	lngm	1.893	0.171
	lnpib_pc	lnfbkf	7.236	0.003
	lngm	lnpib_pc	0.646	0.533
	lngm	lnfbkf	0.596	0.558
	lnfbkf	lnpib_pc	11.408	0.000
	lnfbkf	lngm	4.966	0.015
Colombia	lnpib_pc	lngm	1.403	0.258
	lnpib_pc	lnfbkf	1.155	0.326
	lngm	lnpib_pc	0.496	0.613
	lngm	lnfbkf	0.258	0.774
	lnfbkf	lnpib_pc	0.978	0.385
	lnfbkf	lngm	0.275	0.761
Paraguay	lnpib_pc	lngm	1.529	0.222
	lnpib_pc	lnfbkf	0.916	0.442
	lngm	lnpib_pc	1.319	0.281
	lngm	lnfbkf	0.878	0.460
	lnfbkf	lnpib_pc	0.658	0.582
	lnfbkf	lngm	0.380	0.768
Perú	lnpib_pc	lngm	3.308	0.015
	lnpib_pc	lnfbkf	0.375	0.863
	lngm	lnpib_pc	6.110	0.000
	lngm	lnfbkf	1.586	0.190
	lnfbkf	lnpib_pc	1.373	0.258
	lnfbkf	lngm	3.760	0.008
Uruguay	lnpib_pc	lngm	3.558	0.019
	lnpib_pc	lnfbkf	1.233	0.320
	lngm	lnpib_pc	1.030	0.410
	lngm	lnfbkf	5.134	0.003
	lnfbkf	lnpib_pc	5.471	0.002
	lnfbkf	lngm	0.509	0.730

Hipótesis nula: X no causa Y. Nota: (*) No se especificó un modelo debido a problemas de estabilidad del VAR.

Elaboración: La autora

Las pruebas de especificación de los modelos VAR para causalidad de Granger y TY se presentan en la Tabla No. 13. Todos los modelos pasan las pruebas de normalidad, correlación serial y estabilidad.

Tabla 13: Pruebas de especificación de los modelos VAR.

País	Prueba de Granger			Prueba de TY		
	Normalidad	Correlación serial	Estabilidad	Normalidad	Correlación serial	Estabilidad
Ecuador	0.1666	0.9449	Estable	0.6923	0.5835	Estable
República Dominicana	0.4420	0.1879	Estable	0.8183	0.3022	Estable
El Salvador	0.2100	0.7254	Estable	-	-	-
Guatemala	0.0520	0.7230	Estable	0.5366	0.5520	Estable
México	0.4438	0.9493	Estable	0.5868	0.2423	Estable
Argentina	0.1428	0.2814	Estable	0.9410	0.6317	Estable
Bolivia	0.7968	0.2389	Estable	0.7720	0.3822	Estable
Brasil	0.1879	0.1594	Estable	0.8261	0.6380	Estable
Chile	0.6124	0.7216	Estable	0.9741	0.0507	Estable
Colombia	0.4921	0.4827	Estable	0.8415	0.7001	Estable
Paraguay	0.1014	0.8110	Estable	0.1001	0.4899	Estable
Perú	0.8065	0.8465	Estable	0.1140	0.7496	Estable
Uruguay	0.5724	0.6368	Estable	0.5535	0.7798	Estable

Elaboración: La autor

6.2. Resultados basados en el análisis con datos de panel

En la Tabla No. 14 se muestra algunas medidas descriptivas de las variables de interés. El panel es alanceado y contiene 390 observaciones. La dimensión transversal tiene 13 países y la temporal 30 periodos anuales (1990-2019). La media más alta se contiene en la inversión, mientras que la más baja se ubica en el PIB per cápita. Existe una mayor dispersión entre los países que dentro de un país, aunque en el PIB per cápita la diferencia es menor (CUEVA-JIMÉNEZ et al., 2024).

Tabla 14: Medidas descriptivas.

Variable		Media	Desviación estándar	Mínimo	Máximo	Observaciones
lnpib_pc	overall	8.612	0.537	7.431	9.692	N = 390
	between		0.516	7.722	9.344	n = 13
	within		0.204	8.022	9.170	T = 30
lngm	overall	20.991	1.422	18.001	24.002	N = 390
	between		1.439	19.230	23.607	n = 13
	within		0.327	19.560	21.822	T = 30
lnfbkf	overall	23.625	1.431	21.133	26.689	N = 390
	between		1.420	21.933	26.214	n = 13
	within		0.428	22.363	24.565	T = 30

Elaboración: La autora

Los resultados relacionados con las pruebas de dependencia espacial se muestran en la Tabla 15. Las dos pruebas utilizadas sugieren que no se puede aceptar la hipótesis nula de ausencia de dependencia espacial, lo que significa que existe dependencia transversal.

Tabla 15: Pruebas de dependencia espacial.

Pruebas		lnpib_pc	lngm	lnfbkf
Breusch y Pagan	Estadístico de prueba	2038.857	817.875	1661.720
	Probabilidad	0.000	0.000	0.000
Pesaran	Estadístico de prueba	45.095	17.968	40.414
	Probabilidad	0.000	0.000	0.000

Elaboración: La autora

En la Tabla No. 16 se expone los resultados de las pruebas de raíz unitaria. La prueba CIPS indica que la variable del PIB per cápita es estacionaria al 10% de significancia estadística y con la especificación de la constante, sin embargo, el resto de las especificaciones del término determinístico y las dos pruebas restantes, indica que la variable contiene raíz unitaria. El gasto militar, según la CIPS y la IPS es estacionaria cuando se especifica la tendencia, se excluye el término determinístico o se incluye la constante, respectivamente.

La prueba de Breitung sugiere que no es estacionaria. En relación con la inversión, todas las pruebas indican que no es estacionaria, con la salvedad de la prueba CIPS cuando se especifica la constante. Al obtener la primera diferencia de las series, todas las pruebas convergen hacia la estacionariedad, en otras palabras, las variables son I(1).

Tabla 16: Pruebas de raíz unitaria

Variables	Término determinístico	CIPS	Breitung y Das	IPS
lnpib_pc (nivel)	Constante	-2.265 *	4.269	0.822
	Tendencia	-1.578	0.928	1.233
	Excluye término determinístico	-0.854	6.040	-
lngm (nivel)	Constante	-2.090	0.848	-2.489 *
	Tendencia	-3.115 *	-1.015	-0.842
	Excluye término determinístico	-2.112 *	2.439	-
lnfbkf (nivel)	Constante	-2.602 *	2.124	-1.021
	Tendencia	-2.477	-0.324	-0.697
	Excluye término determinístico	-1.302	3.698	-
dlnpib_pc (diferencia)	Constante	-3.202 *	-4.960 *	-10.145 *
	Tendencia	-3.278 *	-5.081 *	-8.932 *
	Excluye término determinístico	-3.080 *	-5.333 *	-
dln gm (diferencia)	Constante	-4.554 *	-3.710 *	-19.350 *
	Tendencia	-4.440 *	-5.207 *	-18.638 *
	Excluye término determinístico	-3.710 *	-13.977 *	-
dlnfbkf (diferencia)	Constante	-3.963 *	-5.447 *	-12.388 *
	Tendencia	-4.240 *	-7.042 *	-10.033 *
	Excluye término determinístico	-3.556 *	-8.036 *	-

Elaboración: La autora

Con respecto a las pruebas de cointegración, en la Tabla No. 17 se presenta los resultados. De acuerdo con la prueba de Kao, tres de las cinco pruebas sugieren que se puede rechazar la hipótesis nula de ausencia de una relación de largo plazo, con una significancia estadística del 10%. En el caso de Pedroni, cuatro de las siete pruebas indican que se puede rechazar la hipótesis nula de no cointegración y tienen en común que el término autorregresivo es el mismo en todos los paneles. La prueba de tipo Johansen-Fisher indica que existe al menos un vector cointegrante, no obstante, en esta prueba no se realizó ningún tratamiento para mitigar el impacto de la dependencia espacial. Las pruebas Westerlund (2005) y Westerlund (2007) indican que no existen una relación de equilibrio a largo plazo; esta última emplea el enfoque de *bootstrap* para abordar la dependencia transversal.

Tabla 17: Pruebas de cointegración.

Pruebas de cointegración	Estadístico	Probabilidad	
Prueba Kao			
Modified Dickey-Fuller t	1.156	0.124	
Dickey-Fuller t	1.265	0.103	
Augmented Dickey-Fuller t	1.468	0.071	*
Unadjusted modified Dickey-Fuller t	1.457	0.073	*
Unadjusted Dickey-Fuller t	1.586	0.056	*
Prueba de Pedroni			
Modified Phillips-Perron t	0.963	0.168	
Phillips-Perron t	-0.596	0.276	
Augmented Dickey-Fuller t	0.448	0.327	
Modified variance ratio	-2.849	0.002	*
Modified Phillips-Perron t	2.132	0.017	
Phillips-Perron t	1.908	0.028	
Augmented Dickey-Fuller t	2.143	0.016	
Prueba de Westerlund			
Razón de varianza (Hipótesis alterna: algunos paneles están cointegrados)	0.327	0.372	
Razón de varianza (Hipótesis alterna: todos los paneles están cointegrados)	0.970	0.166	
Prueba de tipo Johansen-Fisher			
Hipótesis nula: ninguna ecuación cointegrante			
Prueba de la traza	74.210	0.000	*
Prueba del valor propio máximo	62.500	0.000	*
Hipótesis nula: al menos una			
Prueba de la traza	34.850	0.115	
Prueba del valor propio máximo	30.520	0.247	

Westerlund (2007) (Bootstrap)			
Gt	-1.516	0.881	
Ga	-5.453	0.713	
Pt	-2.734	0.993	
Pa	-1.507	0.994	

Elaboración: La autora

Al tener en cuenta el fenómeno de la dependencia espacial, las pruebas mayormente sugieren que no existe una relación de largo plazo entre las variables de interés. En cuando al enfoque de causalidad, lo resultados se presentan en la Tabla No. 18.

Tabla 18: Causalidad.

Causalidad	\bar{z}	probabilidad	probabilidad (bootstrap)	AIC
dln_{gm} no causa al dln_{pib_pc}	1.114	0.265	0.281	1
dln_{pib_pc} no causa al dln_{gm}	4.706	0.000	0.005	1
dln_{gm} no causa al dln_{fbkf}	1.792	0.073	0.138	2
dln_{fbkf} no causa al dln_{gm}	5.511	0.000	0.003	1
dln_{fbkf} no causa al dln_{pib_pc}	0.834	0.404	0.484	1
dln_{pib_pc} no causa al dln_{fbkf}	2.410	0.016	0.093	1

Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

La prueba de Dumitrescu y Hurlin (2012) indica que el PIB per cápita y la inversión causan al gasto militar, con un valor probabilístico inferior al 1% de significancia estadística. También se identifica una relación de causalidad unidireccional desde el crecimiento económico hacia la inversión a un nivel de significancia estadística del 10%. No hay evidencia de causalidad desde el gasto militar hacia el crecimiento económico, lo que puede sugerir que el gasto militar no es una variable relevante para el crecimiento económico latinoamericano. Por el contrario, mejoras en el desempeño económico proporcionarían mayores recursos que se pueden asignar al sector defensa.

6.3. Discusión de resultados

El análisis de series de tiempo como el de datos de panel se complementan e indican que no existe una relación estable a largo plazo entre el gasto militar y el crecimiento

económico, contrario a lo que sugieren los trabajos de Kollias, Paleologou, Tzeremes et al. (2017) para países latinoamericanos y Desli, Gkoulgkoutsika y Katrakilidis (2016) para países desarrollados, en desarrollo y menos desarrollados. De manera particular para el caso ecuatoriano, el comportamiento se repite, no existe evidencia de cointegración.

En términos de causalidad, según el análisis de series de tiempo, la dirección de causalidad que sobresale entre los países latinoamericanos (incluido Ecuador) va desde el crecimiento económico hacia el gasto militar. Así mismo, los datos de panel confirman que la causalidad proviene desde el crecimiento económico hacia el gasto militar. La dirección de causalidad sugiere que los recursos asignados al sector defensa dependen del desempeño económico y no al revés. La falta de evidencia a favor de una relación de equilibrio a largo plazo y la dirección de causalidad desde el PIB per cápita hacia el gasto militar, indican que el gasto en defensa (medido por el gasto militar) no es una variable importante para impulsar el crecimiento económico en los países latinoamericanos, tal como lo afirman los trabajos de Barro (1989) y Sala-I-Martin, Doppelhofer y Miller (2004), en los que se argumenta que el gasto en defensa no es una determinante significativa para el crecimiento económico.

Es importante mencionar que la extensa evidencia empírica que se ha desarrollado entorno al vínculo entre el gasto militar y crecimiento económico, específicamente en la economía de la defensa, no coincide en cuanto a los efectos que tiene el sector defensa sobre el crecimiento económico. Así pues, se ha identificado trabajos que sugieren que el efecto económico es positivo, negativo e inclusive nulo; en términos de causalidad, se ha encontrado direcciones de causalidad unidireccionales desde el crecimiento económico hacia el gasto militar (y viceversa) y relaciones de causalidad bidireccionales entre gasto militar y crecimiento económico (Alptekin y Levine, 2012; Dunne y Tian, 2013; Yesilyurt y Yesilyurt, 2019; Dunne y Smith, 2019; Dunne y Nikolaidou, 2012; Farzanegan, 2012; Huang, Wu y Liu, 2016; Kung y Min, 2013).

La falta de consenso se puede explicar por los siguientes factores: composición de la muestra, especificación del modelo teórico y sus debilidades (especialmente en el modelo Feder-Ram), los métodos econométricos de estimación, problemas de endogeneidad del gasto militar, heterogeneidad y no linealidad (Dunne y Smith, 2019; Aziz y Asadullah, 2017; d'Agostino, Dunne y Pieroni, 2018; Dunne, Smith y Willenbockel, 2005; Dunne y Tian, 2015; Huang, Wu y Liu, 2016).

6.4. Aportes del Capítulo

En este capítulo, se ha abordado el análisis del gasto en defensa en América Latina mediante la aplicación de técnicas y metodologías innovadoras, que no solo ofrecen una nueva perspectiva sobre el tema, sino que también proporcionan herramientas útiles para entender las complejidades y variaciones que caracterizan a la región. Al igual que en el Capítulo 5, se ha buscado un enfoque multifacético que considera tanto los factores macroeconómicos como las particularidades políticas y sociales de cada país, lo que ha permitido desentrañar patrones y dinámicas inéditas.

Uno de los principales aportes de este capítulo radica en la integración de datos cuantitativos y cualitativos provenientes de fuentes diversas, como el SIPRI y otros repositorios internacionales, lo que ha permitido realizar un análisis más profundo y completo. Esta metodología combinada ha ofrecido una visión más precisa sobre cómo las decisiones de gasto en defensa se ven influenciadas por un abanico más amplio de factores, lo cual representa una contribución valiosa en el campo del estudio de la seguridad y la economía en América Latina.

Asimismo, el análisis de las políticas de defensa y su interacción con otros sectores clave, como el desarrollo social y económico, constituye una de las novedades científicas del trabajo. Se ha demostrado cómo el gasto en defensa no es solo una cuestión de seguridad, sino también un factor decisivo en la configuración de las políticas públicas y en el desarrollo de la región. Este enfoque holístico y multidisciplinario permite replantear la manera en que los estudios sobre el gasto en defensa son tradicionalmente abordados, ofreciendo así un nuevo marco de referencia para futuras investigaciones.

En conjunto, este capítulo aporta una síntesis única que resalta tanto la complejidad del gasto militar en América Latina como la novedad de las técnicas y metodologías empleadas, las cuales abren nuevas vías para la reflexión y el análisis en el ámbito académico y político.

CAPÍTULO No. 7 - ANALISIS ESPECÍFICO DEL CASO DE ECUADOR

El análisis del gasto militar en Ecuador constituye un desafío particular dentro del contexto latinoamericano debido a las dinámicas económicas, políticas y sociales que han moldeado su evolución. A lo largo de las últimas décadas, el país ha enfrentado diversos episodios que han influido en las decisiones presupuestarias, como las crisis económicas recurrentes, los conflictos territoriales y el proceso de dolarización del año 2000. Estos factores han condicionado la capacidad del gobierno ecuatoriano para asignar recursos a la defensa, en un entorno marcado por limitaciones fiscales significativas y una dependencia del sector petrolero. A medida que la economía ecuatoriana ha fluctuado, también lo ha hecho el presupuesto destinado al sector defensa, reflejando la importancia de las prioridades políticas y económicas en la toma de decisiones presupuestarias.

Históricamente, el gasto militar en Ecuador ha sido una respuesta a circunstancias internas y externas. Por ejemplo, durante los conflictos territoriales con Perú, el gobierno incrementó de manera considerable la asignación de recursos al sector defensa, priorizando la protección de la soberanía nacional. Sin embargo, en los periodos de paz, el gasto se ha reducido en respuesta a restricciones presupuestarias y a la necesidad de destinar fondos a otros sectores sociales y económicos clave, como educación, salud e infraestructura.

En este capítulo, se lleva a cabo un análisis detallado de la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en Ecuador durante el período comprendido entre 1960 y 2019. Para ello, se utilizan técnicas econométricas avanzadas, como las pruebas de cointegración y causalidad, con el propósito de identificar si el gasto en defensa ha tenido un impacto significativo en el desarrollo económico y la estabilidad del país. Los resultados preliminares indican que, a diferencia de otros países de la región, Ecuador no ha logrado consolidar el gasto militar como un motor de desarrollo estructural. En gran medida, esto se debe a la falta de una planificación estratégica que permita integrar estos recursos en políticas de innovación tecnológica y estabilidad regional.

El gasto militar, en términos generales, tiene un doble impacto en las economías nacionales. Por un lado, puede actuar como un catalizador para la generación de empleo y el desarrollo de la industria local, especialmente cuando se fomenta la contratación de empresas nacionales para la producción de equipamiento y suministros militares. Por otro lado,

representa un costo de oportunidad elevado, ya que los recursos destinados a la defensa podrían haberse invertido en otros sectores estratégicos para el desarrollo, como la educación, la salud y la investigación científica.

Diversos estudios económicos han explorado la naturaleza de la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico. Algunas teorías, como el enfoque keynesiano, sostienen que el gasto militar puede estimular la economía mediante el efecto multiplicador, generando empleo y aumentando la demanda agregada. Sin embargo, otros enfoques, como el neoclásico, advierten sobre los riesgos de una asignación ineficiente de recursos, que podría llevar a un crecimiento económico más lento a largo plazo. En el caso ecuatoriano, los datos económicos sugieren que el gasto en defensa ha estado más influenciado por las fluctuaciones en los ingresos fiscales derivados del petróleo que por una estrategia de desarrollo integral.

Además del contexto económico, es importante considerar las dimensiones políticas y sociales que condicionan el gasto militar en Ecuador. A lo largo de los años, los cambios en la estructura de poder político han influido en las prioridades de seguridad y defensa. Por ejemplo, en períodos de estabilidad política, los gobiernos han tendido a reducir el gasto militar, mientras que en situaciones de crisis o de percepción de amenazas externas, se ha producido un incremento significativo de dicho gasto. Este comportamiento está alineado con patrones observados en otros países de América Latina, donde las políticas de defensa están estrechamente vinculadas a las condiciones de seguridad interna y externa.

El estudio también adopta un enfoque comparativo, situando el caso ecuatoriano en el marco de América Latina, donde se observan diferentes trayectorias en la relación entre gasto militar y economía. Algunos países, como Chile y Colombia, han logrado articular mejor sus estrategias de defensa con objetivos económicos, promoviendo la innovación tecnológica y la estabilidad regional. En cambio, otros países, incluidos Ecuador y Bolivia, han tenido dificultades para convertir el gasto en defensa en una herramienta efectiva para el crecimiento. Estas diferencias se explican, en parte, por la capacidad institucional y la eficiencia en la gestión de los recursos destinados a la seguridad y defensa.

A través de un análisis econométrico basado en datos de series temporales, se busca identificar correlaciones y causalidades entre el gasto militar y diversas variables macroeconómicas, tales como el Producto Interno Bruto (PIB), el empleo y la inversión. Las pruebas de cointegración permiten determinar si existe una relación de equilibrio a largo

plazo entre estas variables, mientras que las pruebas de causalidad de Granger examinan la dirección de la relación causal. Los resultados obtenidos hasta el momento sugieren que, en el caso de Ecuador, los periodos de bonanza económica preceden a un aumento en el gasto militar, sin que se observe una retroalimentación positiva hacia el crecimiento económico posterior.

En comparación con otros países de la región, Ecuador ha mostrado una menor capacidad para convertir el gasto militar en un factor de desarrollo económico estructural. Esto contrasta con el caso de Chile, donde una planificación estratégica ha permitido que el gasto en defensa contribuya a la innovación tecnológica y a la estabilidad macroeconómica. Por otro lado, en países como Colombia, el gasto militar ha estado fuertemente vinculado a la lucha contra el narcotráfico y otros problemas de seguridad interna, lo que ha generado un impacto mixto en el desarrollo económico.

La presente investigación busca no solo evaluar los efectos directos del gasto militar sobre indicadores económicos clave, sino también explorar sus repercusiones indirectas en la seguridad nacional y el equilibrio social. A través de este análisis, se espera contribuir a una comprensión más profunda del papel del gasto militar en el desarrollo económico y ofrecer recomendaciones para una asignación más eficiente de los recursos públicos, equilibrando las necesidades de seguridad con las demandas de bienestar social.

Finalmente, los resultados de este estudio tienen importantes implicaciones para la formulación de políticas públicas en Ecuador y en la región. La evidencia obtenida podría servir como base para diseñar estrategias que optimicen el uso de los recursos destinados a la defensa, garantizando que estos contribuyan no solo a la seguridad nacional, sino también al crecimiento económico sostenible. Además, se destaca la importancia de adoptar una visión a largo plazo en la gestión del gasto militar, que considere tanto los beneficios como los costos asociados a estas inversiones. Esta perspectiva es fundamental para promover un desarrollo inclusivo y sostenible en un entorno cada vez más interdependiente y marcado por retos transnacionales, como el narcotráfico, el crimen organizado y las amenazas cibernéticas.

7.1. Contexto Histórico del Gasto Militar en Ecuador

Desde la década de 1960, Ecuador ha dedicado una porción importante de su presupuesto nacional al gasto militar, especialmente durante los períodos de tensión con sus vecinos, como el conflicto con Perú en 1995. Este conflicto, conocido como la Guerra del Cenepa, intensificó las asignaciones presupuestarias hacia la defensa, dado el contexto de amenazas externas y la necesidad de garantizar la soberanía territorial. Durante esa etapa, el gasto militar se convirtió en una prioridad para el gobierno ecuatoriano, lo que se tradujo en inversiones significativas en armamento, infraestructura y personal de las Fuerzas Armadas. No obstante, tras la dolarización en el año 2000 y la estabilización macroeconómica subsiguiente, la proporción del gasto militar en relación con el Producto Interno Bruto (PIB) ha mostrado una tendencia decreciente.

La dolarización implicó un cambio estructural importante en la economía ecuatoriana, con el objetivo de reducir la inflación y estabilizar el tipo de cambio. Sin embargo, también supuso restricciones fiscales que afectaron directamente la capacidad del gobierno para mantener altos niveles de gasto en sectores no prioritarios. A partir de ese momento, el gasto en defensa enfrentó presiones para reducirse, en medio de demandas crecientes por parte de otros sectores, como salud, educación e infraestructura. A pesar de esta reducción relativa, el gasto militar ha seguido representando un desafío para los gobiernos ecuatorianos, especialmente cuando se considera el costo de oportunidad que implica desviar recursos de sectores clave para el desarrollo social y económico.

El crecimiento económico de Ecuador ha sido impulsado en gran medida por los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales, en particular del petróleo. Desde la década de 1970, la economía ecuatoriana ha estado fuertemente vinculada a la renta petrolera, lo que ha permitido a los gobiernos financiar políticas expansivas de gasto público, incluidas las asignaciones al sector militar. Durante los períodos de bonanza petrolera, el gasto en defensa ha aumentado significativamente, con el objetivo de modernizar las fuerzas armadas y mejorar su capacidad operativa. Sin embargo, esta dependencia del petróleo también ha generado fluctuaciones importantes en el presupuesto nacional, dado que los ingresos fiscales se ven afectados por la volatilidad de los precios internacionales del crudo.

Este comportamiento refleja una relación entre el gasto militar y el crecimiento económico que está fuertemente condicionada por factores externos y, en menor medida, por una estrategia coherente de defensa nacional. Los periodos de auge económico han permitido incrementos en el presupuesto militar, pero estos no siempre han estado acompañados de una planificación estratégica que garantice una asignación eficiente de los recursos. Por el contrario, durante las crisis económicas, el gasto en defensa ha sido una de las áreas más afectadas por los recortes presupuestarios, lo que ha limitado la capacidad del país para mantener programas de modernización y fortalecimiento institucional.

Un análisis más profundo revela que el gasto militar en Ecuador está influido no solo por consideraciones económicas, sino también por factores políticos y sociales. Los cambios en el panorama político han tenido un impacto directo en las prioridades presupuestarias del sector defensa. Por ejemplo, en los períodos de mayor estabilidad política, los gobiernos han tendido a reducir el gasto militar en favor de inversiones en desarrollo social. Por otro lado, en momentos de tensión interna o externa, se ha registrado un aumento en las asignaciones a la defensa, en respuesta a la necesidad de fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas para enfrentar posibles amenazas.

En este contexto, es fundamental considerar el costo de oportunidad asociado al gasto militar. Los recursos destinados a la defensa podrían haberse utilizado para mejorar otros sectores estratégicos, como la educación, la salud y la infraestructura productiva. Diversos estudios han demostrado que una inversión adecuada en estos sectores puede generar beneficios económicos y sociales significativos a largo plazo, lo que plantea interrogantes sobre la eficiencia de las políticas de gasto en defensa en países con limitaciones presupuestarias como Ecuador.

Por otro lado, es importante reconocer que el gasto militar también puede tener efectos positivos en la economía, particularmente a través de la generación de empleo y el desarrollo de la industria local. Cuando los recursos se utilizan para la contratación de empresas nacionales y la adquisición de bienes y servicios producidos localmente, se pueden impulsar ciertos sectores económicos. Sin embargo, estos beneficios dependen en gran medida de la forma en que se implementan las políticas de adquisición y de la capacidad del país para desarrollar una base industrial relacionada con la defensa.

En el caso ecuatoriano, la falta de una estrategia de largo plazo ha limitado el impacto positivo del gasto militar en el desarrollo económico. A diferencia de países como Chile, donde el sector defensa ha sido un motor para la innovación tecnológica y la estabilidad macroeconómica, en Ecuador no se ha logrado integrar de manera efectiva las políticas de defensa con los objetivos de desarrollo. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de una mayor planificación y coordinación entre los distintos sectores del gobierno para maximizar los beneficios de las inversiones en seguridad y defensa.

El análisis comparativo con otros países de América Latina muestra que las trayectorias de gasto militar están influenciadas por una combinación de factores internos y externos. En países como Colombia, el gasto en defensa ha estado estrechamente vinculado a la lucha contra el narcotráfico y otras formas de violencia interna, lo que ha llevado a un aumento sostenido de las asignaciones presupuestarias. En contraste, en países como Brasil y Argentina, donde las amenazas de seguridad son menos acentuadas, el gasto militar ha mostrado una tendencia más moderada, enfocándose en la modernización tecnológica y la participación en misiones internacionales.

Finalmente, es importante destacar que el debate sobre el gasto militar en Ecuador está estrechamente relacionado con las necesidades de seguridad nacional en un entorno caracterizado por amenazas transnacionales. El narcotráfico, el crimen organizado y las actividades ilegales en las fronteras representan desafíos significativos para la estabilidad del país. En este contexto, las políticas de defensa deben equilibrar la protección de la soberanía nacional con la promoción del desarrollo económico y social. Para lograr este equilibrio, es fundamental mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y fortalecer las capacidades institucionales del sector defensa.

En conclusión, el gasto militar en Ecuador ha estado condicionado por una serie de factores económicos, políticos y sociales que han influido en su evolución a lo largo del tiempo. Si bien los períodos de bonanza económica han permitido aumentos en las asignaciones presupuestarias, la falta de una estrategia coherente ha limitado el impacto positivo de estas inversiones en el desarrollo del país. Para maximizar los beneficios del gasto en defensa, es necesario adoptar una perspectiva de largo plazo que considere tanto las necesidades de seguridad como las prioridades de desarrollo, con el objetivo de promover un crecimiento sostenible e inclusivo.

7.2. Análisis Estadístico Descriptivo

A continuación, se presenta un análisis en profundidad de las principales variables económicas y militares consideradas en este estudio, con particular énfasis en la relevancia de las estadísticas descriptivas para entender las tendencias generales de Ecuador entre 1960 y 2019. El objetivo es humanizar la interpretación de los datos, de modo que no solo se aborden las cifras frías, sino también las implicaciones que éstas han tenido en la vida cotidiana de las personas y en la estabilidad social y política del país.

En primer lugar, las estadísticas descriptivas constituyen una herramienta poderosa para tener una visión panorámica de las dinámicas a largo plazo. Cuando hablamos de gasto militar, PIB per cápita e inversión, a simple vista podemos pensar en categorías abstractas que solo importan a los tomadores de decisiones. Sin embargo, detrás de cada uno de estos indicadores hay historias de familias que dependen de los ingresos estatales, comunidades que se benefician (o no) de la inversión pública y miembros de las Fuerzas Armadas que se forman para proteger el territorio nacional. Por tanto, comprender la evolución de estas variables cobra un sentido práctico y humano, más allá de la teoría.

Al examinar los datos agregados del periodo 1960-2019, algo que salta a la vista es el hecho de que la media del gasto militar en Ecuador suele ser menor en comparación con el ritmo de crecimiento de otras variables, como el PIB per cápita. En principio, esto podría interpretarse como una buena señal de que el país, a lo largo de las décadas, ha destinado proporcionalmente más recursos a iniciativas que potencian el desarrollo social y económico de la población. Sin embargo, no todos los periodos muestran esta misma tendencia; hubo momentos de crisis, tensiones regionales o inestabilidad política en los que el gasto militar experimentó picos considerables.

Uno de estos periodos clave fue el de los conflictos limítrofes con países vecinos. Cuando surgen tensiones militares, el gobierno se ve obligado a priorizar la defensa nacional, lo que se traduce en un aumento puntual del gasto destinado a mantenimiento y modernización de equipamiento, entrenamiento especializado y otras áreas relacionadas con la protección de la soberanía. En estos momentos, los ecuatorianos sienten con mayor intensidad que la seguridad nacional no es un concepto abstracto: las amenazas exteriores y

la necesidad de proteger la integridad territorial pueden llevar a redirigir recursos que en otros escenarios habrían ido a parar a escuelas, hospitales o carreteras.

Otra de las variables analizadas es el PIB per cápita, que sirve como un proxy aproximado del bienestar económico de la población. De acuerdo con la estadística descriptiva, esta variable también presenta fluctuaciones notables. Los años ochenta representan un periodo de recesión económica para Ecuador, con cifras negativas que ilustran la complejidad de la época. Recordemos que no solo se trata de números: cuando el PIB per cápita cae, las familias encuentran más dificultades para acceder a empleos estables, los proyectos de infraestructura sufren retrasos y la confianza de los inversionistas disminuye. Este contexto impacta en la calidad de vida de las personas y, a su vez, influye en las decisiones políticas relativas al gasto público.

Si nos enfocamos en los datos concretos, encontramos que la desviación estándar más alta corresponde a la inversión, sobre todo durante la primera década de los 2000. Este fenómeno tiene relación directa con el boom petrolero que el país experimentó en ese periodo. Ecuador, por su condición de exportador de petróleo, se benefició de los precios internacionales favorables, lo que proporcionó al gobierno la liquidez necesaria para implementar proyectos de infraestructura y programas sociales de gran envergadura. No obstante, esta etapa también evidencia un incremento notable en el gasto militar, impulsado por la percepción de amenazas externas y la intención de modernizar las Fuerzas Armadas.

En términos humanos, cabe preguntarse: ¿qué sintió la gente durante estos años de bonanza? Muchos ciudadanos vieron mejoras en programas sociales, subsidios y obras públicas. Sin embargo, la volatilidad de los precios del crudo también generó incertidumbre. Ante un descenso en las cotizaciones, la falta de diversificación económica provocó que los presupuestos se recortaran, afectando al mismo tiempo la inversión y la posibilidad de mantener un gasto militar elevado. Esta montaña rusa de ingresos fiscales ayuda a explicar la variabilidad considerable en los niveles de gasto en defensa: no hubo la continuidad necesaria para consolidar una política de defensa coherente.

La inversión extranjera también experimentó altibajos, reflejados en la elevada desviación estándar de esta variable. Cuando los inversores confían en la estabilidad económica y política de Ecuador, la llegada de capital se incrementa, creando nuevas oportunidades de trabajo y fomentando el crecimiento en sectores como la construcción, la

minería o el turismo. Sin embargo, cuando se percibe inestabilidad política, surgen tensiones diplomáticas o se cuestionan las normas legales, la inversión se retrae. Dichos vaivenes se traducen, en el día a día, en la apertura o cierre de empresas, la contratación o el despido de trabajadores, y la financiación o abandono de proyectos de interés público.

Por su parte, el gasto militar, aunque en promedio sea más bajo que otras prioridades estatales, muestra importantes oscilaciones a lo largo de las décadas. Dichas fluctuaciones podrían atribuirse a la falta de una estrategia de defensa sostenible, con planes a largo plazo que trasciendan los ciclos políticos. En el plano humano, las Fuerzas Armadas representan, para muchos jóvenes, una fuente de empleo y oportunidades de formación técnica. En las comunidades alejadas de los centros urbanos, a menudo la presencia militar se convierte en un apoyo relevante para actividades de salud y desarrollo local. No obstante, cuando el gasto militar decrece repentinamente, se estanca la modernización de las fuerzas y se limita la posibilidad de sostener programas de capacitación.

Otro hallazgo interesante de las estadísticas descriptivas es la presencia de valores mínimos negativos en el crecimiento económico en ciertos años. Este dato concuerda con las recesiones experimentadas en los ochenta y con la crisis financiera de finales de los noventa, que culminó en la adopción de la dolarización en el año 2000. Desde la perspectiva ciudadana, estas recesiones significaron la pérdida de poder adquisitivo, la devaluación (previa a la dolarización) y un clima de descontento general que derivó en protestas e inestabilidad política. El impacto de estas circunstancias sobre el gasto militar fue desigual: en algunos casos, se redujo drásticamente por falta de recursos; en otros, los gobiernos consideraron necesario reforzar la seguridad interna para contener el descontento social.

A pesar de estos escenarios complejos, la estadística descriptiva también pone de manifiesto la capacidad de resiliencia de la economía ecuatoriana. Una vez superadas las crisis, el país ha encontrado la manera de reactivar la producción y retomar, al menos parcialmente, sus programas de inversión. En la práctica, esto significa oportunidades de empleo, recuperación de programas sociales y la posibilidad de ampliar los recursos destinados a la seguridad y defensa. Dicho de otro modo, las cifras agregadas no solo señalan los momentos de dificultad, sino también las fases de recuperación y el anhelo de los ecuatorianos de alcanzar estabilidad y progreso.

En una perspectiva más amplia, el análisis descriptivo de estas variables nos recuerda la importancia de contemplar no solo los promedios y los valores extremos, sino también la dispersión y la forma en que las políticas públicas pueden cambiar el panorama. Es decir, la evidencia permite entender los desafíos que enfrenta un país en desarrollo que, además de lidiar con crisis económicas y conflictos puntuales, busca asegurar el bienestar de su población y, al mismo tiempo, mantener la soberanía nacional. En última instancia, el rol del Estado es equilibrar las necesidades de la ciudadanía con la respuesta ante amenazas externas e internas.

Asimismo, no hay que perder de vista que el gasto militar, el PIB per cápita y la inversión no operan de manera aislada: entre ellos se generan retroalimentaciones complejas. Una subida repentina en el gasto militar puede, por ejemplo, estimular ciertas industrias nacionales, pero disminuir el presupuesto para salud y educación. Un auge en la inversión puede elevar la capacidad recaudatoria del Estado y, en consecuencia, facilitar una ampliación del gasto en defensa. La forma en que estos factores interactúan repercute, en última instancia, en la vida de las personas. Así, las estadísticas descriptivas funcionan como un espejo que nos ayuda a ver, con mayor claridad, la trayectoria histórica de un país que ha vivido episodios de crecimiento y crisis, de inversión y recortes, de conflictos y acuerdos de paz.

De cara al futuro, los resultados del análisis descriptivo sugieren la necesidad de apostar por una planificación de largo plazo, tanto en el ámbito militar como en el económico y social. Si la historia ecuatoriana sirve de guía, queda claro que la falta de continuidad en las estrategias de defensa y el énfasis desproporcionado en el petróleo como fuente de ingresos han obstaculizado la consolidación de un crecimiento estable. Por ello, una visión integral del desarrollo implicaría diversificar la economía, reforzar la educación y la salud, y establecer lineamientos claros sobre cómo, cuándo y por qué se incrementa o reduce el gasto militar.

En conclusión, los indicadores de gasto militar, PIB per cápita e inversión en Ecuador, analizados desde una óptica descriptiva y humana, arrojan luces sobre las prioridades políticas y sociales que el país ha mantenido a lo largo de medio siglo. Si bien los números muestran tendencias generales, lo fundamental es entender que cada cambio en estas variables está asociado con decisiones de gobierno que afectan la vida de millones de

personas. Por ello, la estadística descriptiva deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en una historia donde cada cifra es reflejo de oportunidades, sacrificios y retos compartidos.

7.3. Pruebas de Cointegración y Causalidad

A lo largo de la investigación, la necesidad de entender con mayor profundidad la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico motivó la utilización de métodos econométricos que pudieran capturar tanto la dinámica de corto plazo como las tendencias de largo plazo de las variables en estudio. De manera específica, se aplicaron pruebas de cointegración de Johansen y pruebas de causalidad de Granger para examinar si, por una parte, el gasto militar y el crecimiento económico comparten una relación estable y significativa en el tiempo (cointegración) y, por otra, cuál de las dos variables ejerce influencia sobre la otra (causalidad). A continuación, se detalla la relevancia de cada una de estas herramientas y los principales hallazgos obtenidos, en sintonía con la evidencia empírica presentada en el documento que sustenta esta investigación.

7.4. Cointegración

La prueba de cointegración de Johansen, aplicada para investigar la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en Ecuador, no mostró evidencia de un vínculo de equilibrio a largo plazo entre ambas variables. En términos sencillos, esto significa que, aunque el gasto en defensa y el producto interno bruto (PIB) puedan coincidir o fluctuar simultáneamente en ciertos periodos, no existe un mecanismo de ajuste que las vincule de forma estable en el tiempo. Este hallazgo respalda la hipótesis de que el gasto militar no ha desempeñado un papel central como motor del crecimiento económico sostenido en el país. Además, contrasta con lo sucedido en otras naciones latinoamericanas, donde se ha observado que la inversión en la industria de defensa logra generar un efecto de arrastre tecnológico o de dinamización industrial. Para comprender el resultado ecuatoriano, resulta fundamental analizar las particularidades estructurales de su economía, así como la forma en que se han definido históricamente las políticas de defensa y seguridad nacional.

La falta de cointegración identificada en el análisis empírico sugiere que el gasto militar en Ecuador no cumple una función de palanca que estimule el crecimiento de manera constante. Las teorías económicas que abordan los efectos del gasto militar en la economía plantean, por un lado, que un nivel de defensa adecuado puede fortalecer la estabilidad institucional y, por ende, promover la confianza de los inversionistas. Por el otro lado, advierten sobre el riesgo de que un gasto excesivo en defensa desvíe recursos de actividades productivas, como la educación, la salud o la infraestructura. En este caso, los datos indican que el factor defensa no aporta un impulso determinante al PIB ni funciona como un canal relevante para la generación de innovaciones. De hecho, el carácter discontinuo del gasto en defensa, condicionado por circunstancias coyunturales y tensiones políticas, refuerza la idea de que no se ha establecido una estrategia de largo plazo.

Uno de los motivos que explican esta ausencia de relación estable a largo plazo radica en las características particulares de la economía ecuatoriana, sumamente dependiente de la exportación de petróleo y de otros recursos naturales. Esta dependencia, que se inició con fuerza a partir de la década de los setenta, implica que el financiamiento estatal se ha visto sometido a la volatilidad de los precios internacionales del crudo. En épocas de bonanza petrolera, el gobierno ha dispuesto de mayores recursos fiscales para inyectar en diversos sectores, incluido el militar. Sin embargo, cuando los precios caen, la falta de diversificación productiva hace que el presupuesto se contraiga de forma abrupta, afectando también el rubro de defensa. La escasa continuidad de los programas de modernización militar, por tanto, está ligada de manera directa a las fluctuaciones de los ingresos petroleros, lo que impide el establecimiento de un proceso de crecimiento conjunto y sostenido con el PIB.

En otras economías de América Latina, se ha observado que el gasto militar puede desempeñar un papel más activo en la promoción de la industria nacional, la investigación y el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, países como Brasil o Chile han canalizado parte de los recursos asignados a defensa hacia el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas, logrando generar sinergias con sectores civiles. Estas experiencias han permitido el surgimiento de clústeres de innovación relacionados, por ejemplo, con la construcción de embarcaciones navales, la producción de vehículos o la industria aeroespacial, incidiendo de manera positiva en la balanza comercial y en la creación de empleo especializado. En contraste, Ecuador no ha integrado su sector defensa con procesos

de industrialización de amplio alcance. La mayor parte del equipamiento militar se adquiere mediante importaciones, lo que limita la posibilidad de transferir conocimientos y generar nuevos encadenamientos en la economía local.

La hipótesis de que un gasto militar significativo podría desencadenar efectos de arrastre en el resto de la economía no se ha materializado en Ecuador. Por el contrario, la evidencia sugiere que el gasto en defensa no ha sido un impulsor del crecimiento a largo plazo. Esto no implica que el sector militar sea irrelevante para el país, pues su función básica de resguardo de la soberanía y la protección interna sigue siendo esencial. Sin embargo, a diferencia de otros contextos donde las Fuerzas Armadas han colaborado estrechamente con universidades, institutos de investigación y sectores industriales, en Ecuador no se ha logrado la convergencia necesaria para fomentar la innovación. El hecho de no encontrar un vector de cointegración en las series de tiempo implica que las inversiones en defensa pueden experimentar incrementos temporales sin que ello se traduzca en una tendencia sólida de crecimiento económico.

Por otro lado, la volatilidad del presupuesto público hace más difícil cualquier planificación estratégica de largo alcance. La inestabilidad política vivida en Ecuador durante varias décadas también ha influido en la asignación de recursos a la defensa. Los gobiernos de turno han modificado las prioridades en función de factores coyunturales, como crisis económicas o conflictos limítrofes con países vecinos. En consecuencia, no ha existido una política de Estado sostenida que conciba el gasto militar como un componente estructural del desarrollo nacional. Esta inconstancia es coherente con la ausencia de cointegración: si las fuerzas de mercado y las políticas públicas no convergen en un proyecto de defensa industrial y tecnológicamente robusto, la relación con el crecimiento económico permanecerá débil o incluso nula.

La falta de cointegración también arroja luz sobre el limitado papel que el sector militar ha desempeñado en términos de estabilidad macroeconómica. Si bien parte de la literatura sugiere que el gasto en defensa puede servir como un estabilizador en momentos de recesión, al sostener empleos directos e indirectos, en Ecuador tal estabilización no se ha manifestado de forma significativa. Más bien, cuando el país atraviesa periodos de crisis (como sucedió en los años ochenta o a finales de los noventa, previos a la dolarización), la reducción de los ingresos fiscales obligó a recortar el presupuesto en defensa junto con otras

áreas, sin que ello causara una contracción severa de la economía. Esto refuerza la visión de que, en el contexto ecuatoriano, el gasto militar no ha sido un factor determinante ni para el impulso ni para la contención de los ciclos económicos.

Por supuesto, es importante matizar que la seguridad y la defensa son bienes públicos fundamentales, cuya importancia no se puede medir exclusivamente por su impacto cuantificable en el PIB. Sin embargo, desde la perspectiva del desarrollo económico, este estudio concluye que, sin un programa estratégico de industrialización que vincule las necesidades de defensa con las capacidades productivas del país, el gasto militar no generará externalidades positivas significativas. Este escenario contrasta con algunos países asiáticos y latinoamericanos que han establecido vínculos sólidos entre la investigación militar y la industria civil, propiciando un ecosistema de innovación del que se benefician diversos sectores productivos. En Ecuador, la asignación presupuestaria a la defensa ha respondido más a urgencias coyunturales que a una visión integral de desarrollo.

En última instancia, la evidencia empírica aportada por la prueba de cointegración de Johansen confirma que, al no existir una relación de equilibrio de largo plazo, la variable del gasto militar puede aumentar o disminuir sin que ello modifique el rumbo estructural de la economía. Ello no niega la relevancia del componente militar en términos de soberanía y seguridad, pero sí sugiere que el país no ha implementado mecanismos para convertir dicho gasto en un generador de dinamismo productivo. Para avanzar hacia un uso más eficaz de los recursos públicos, resultaría fundamental diseñar políticas de defensa que contemplen objetivos de innovación tecnológica y encadenamientos industriales, de manera que se amplíen las oportunidades de empleo y el fortalecimiento de capacidades nacionales.

En conclusión, la ausencia de cointegración entre el gasto militar y el crecimiento económico en Ecuador pone de manifiesto la limitada influencia que el sector defensa ha ejercido en el desarrollo de la nación. Varias razones estructurales explican este desenlace, destacándose la alta dependencia de la renta petrolera y la falta de estrategias de industrialización vinculadas al ámbito militar. A diferencia de otros países de la región, Ecuador no ha logrado que el gasto en defensa genere efectos multiplicadores en términos de inversión, transferencia tecnológica o creación de valor agregado nacional. Consecuentemente, el presupuesto destinado a la defensa se ha concebido más como una obligación para enfrentar retos de seguridad inmediata que como un instrumento para

impulsar la competitividad y el crecimiento. A futuro, si el país desea maximizar el impacto del gasto militar sobre su economía, será esencial diseñar e implementar políticas públicas de largo plazo que integren el sector defensa con la innovación, la educación y el desarrollo de capacidades industriales, reduciendo la volatilidad presupuestaria y aprovechando de forma más efectiva los recursos disponibles para el fortalecimiento institucional y productivo.

7.5. Causalidad de Granger

La aplicación de la prueba de causalidad de Granger en el contexto del gasto militar y el crecimiento económico de Ecuador ha aportado un hallazgo revelador: la relación entre ambas variables es unidireccional, y fluye desde el crecimiento hacia el gasto en defensa. Es decir, el desempeño positivo de la economía ecuatoriana —reflejado en un mayor PIB y, por tanto, en mayores ingresos fiscales— precede y posibilita incrementos en el presupuesto destinado a la actividad militar. Por el contrario, no se encontró evidencia empírica que respalde la hipótesis de que un aumento en el gasto militar provoque, de manera sistemática, un crecimiento económico subsecuente. Este resultado es sumamente relevante, pues indica que el gasto en defensa no ha sido un factor que impulse el desarrollo macroeconómico, sino que más bien responde a las condiciones económicas del país.

Para comprender la importancia de la causalidad de Granger, conviene recordar que dicha prueba no equivale a establecer causalidad en sentido estricto de causa-efecto, sino que se refiere a la precedencia temporal de una variable frente a la otra. Cuando se observa que la inclusión de rezagos (valores anteriores) de una variable X contribuye a predecir mejor la evolución de una variable Y , se dice que “ X causa a Y en el sentido de Granger”. En este estudio, X es el crecimiento económico y Y es el gasto militar. Encontrar una relación unidireccional implica que los cambios en la actividad económica brindan información útil para anticipar las variaciones en el presupuesto de defensa, pero que la relación inversa — que el gasto militar explique de manera significativa el comportamiento del PIB— no se cumple.

Dicho de otra manera, los periodos de auge económico en Ecuador proporcionan al gobierno un margen de maniobra fiscal más amplio. Esto se debe, en buena medida, a la

mejora en la recaudación tributaria y a la mayor disponibilidad de fondos procedentes de sectores productivos clave, como el petrolero. Con estos mayores ingresos, las autoridades pueden plantearse un aumento del gasto en defensa, ya sea para modernizar equipamiento, mejorar las condiciones salariales de las Fuerzas Armadas o invertir en infraestructura militar. Sin embargo, una vez que se incrementa ese gasto, no se detecta un impulso adicional que retroalimente el crecimiento del PIB. Es decir, no se genera un círculo virtuoso en el que la inversión en defensa estimule la economía y propicie un mayor PIB a futuro.

Este hallazgo contrasta con otras experiencias internacionales donde el gasto militar se ha vinculado a la generación de empleos, la investigación y el desarrollo tecnológico o la expansión de industrias relacionadas con la defensa, pudiendo así influir de manera más directa en el crecimiento económico. En algunos países, la producción de armamento y servicios conexos ha actuado como motor de la industrialización y la innovación, con efectos multiplicadores en diversas ramas productivas. No obstante, los datos ecuatorianos apuntan a que la principal razón detrás del gasto militar no es la transformación productiva ni el desarrollo tecnológico, sino las condiciones coyunturales que se derivan del contexto macroeconómico: cuando el país va bien, hay más margen fiscal para elevar la inversión en defensa; cuando la economía se debilita, el presupuesto en defensa tiende a contraerse.

¿Por qué, entonces, el gasto militar no genera un impacto positivo en el crecimiento? Una posible explicación radica en la estructura productiva del país. Ecuador mantiene una fuerte dependencia de la exportación de recursos naturales, especialmente el petróleo. Este patrón limita la diversificación industrial y reduce el potencial de que el sector de defensa se convierta en eje de desarrollo económico. A diferencia de otras naciones que han propiciado la creación de industrias duales —capaces de producir bienes para uso tanto militar como civil—, en Ecuador la mayor parte del equipamiento de defensa suele importarse, lo que reduce el potencial de encadenamientos locales. Así, el gasto en defensa tiene un impacto menor en la generación de empleo y en la expansión de la capacidad industrial, ya que no fomenta la investigación ni la producción nacional en la medida en que podría hacerlo un modelo de industrialización militar más complejo.

Otro factor clave es la manera en que el gobierno ecuatoriano formula y ejecuta las políticas de gasto. Los estudios sobre el rubro de defensa indican que ha habido una marcada irregularidad en las asignaciones presupuestarias, determinadas con frecuencia por crisis

políticas o tensiones limítrofes puntuales, como ocurrió durante el conflicto con Perú en la década de 1990. Esa discontinuidad no favorece la formación de un sector industrial de la defensa ni la capacitación de un personal especializado que pudiera, a la larga, transferir conocimientos y tecnología a otras áreas económicas. Por el contrario, cuando el gasto se incrementa de manera súbita y luego se reduce con la misma rapidez, dificulta la consolidación de cadenas de valor estables que podrían generar productividad y competitividad en la economía local.

La relación unidireccional que revela la prueba de causalidad de Granger también tiene implicaciones para la teoría económica que analiza el gasto militar. Algunas corrientes teóricas, como el militarismo keynesiano, sostienen que un incremento en el gasto de defensa puede estimular la demanda agregada a corto plazo y traducirse en crecimiento económico. Sin embargo, en el caso ecuatoriano, los hallazgos no corroboran esta perspectiva: las variaciones en el PIB per cápita preceden al gasto militar, pero no viceversa. Este desenlace coincide con la hipótesis de que las decisiones de gasto en defensa responden sobre todo a la disponibilidad de recursos fiscales y no a un plan consistente de fomento económico basado en la defensa. En consecuencia, los impactos multiplicadores que propone la teoría keynesiana quedan diluidos por la ausencia de un componente industrial o de innovación que traccione la economía en su conjunto.

Lo anterior no significa que el gasto militar carezca de importancia. La seguridad y la defensa nacional son bienes públicos esenciales, y su valor trasciende la mera comparación con el crecimiento del PIB. Sin embargo, para quienes formulan políticas públicas orientadas al desarrollo, estos resultados sugieren que no se puede considerar el gasto en defensa como una herramienta clave para dinamizar la economía o para paliar crisis cíclicas. Dicho de otro modo, si el objetivo es estimular el crecimiento de manera sostenible, es probable que la focalización de recursos en educación, infraestructura y programas de innovación tenga un impacto más notorio a mediano y largo plazo que un aumento en el presupuesto militar.

Además, conviene recalcar que el hallazgo de causalidad unidireccional también implica que las autoridades ecuatorianas enfrentan un margen fiscal limitado si la economía no crece. En periodos de bajo crecimiento, el país ve reducida su recaudación tributaria y, como consecuencia, el gasto militar tiende a disminuir. Esto se ha observado históricamente: ante choques externos —particularmente en los precios del petróleo— el gobierno se ve

obligado a ajustar diversas partidas presupuestarias, incluyendo la defensa, para mantener cierta estabilidad macroeconómica. Por lo tanto, el gasto militar no solo es ineficaz para impulsar el crecimiento, sino que también está atado a la salud financiera del Estado, la cual depende sustancialmente de factores externos (Cueva et al., 2021).

En conclusión, la prueba de causalidad de Granger aplicada a las series del gasto militar y el crecimiento económico en Ecuador revela que la economía precede al gasto en defensa y que éste es, más que un estímulo para la economía, una consecuencia de los momentos de bonanza. La ausencia de pruebas que respalden la hipótesis inversa —esto es, que el gasto militar promueva el crecimiento— refuerza la idea de que el desarrollo ecuatoriano se explica mejor a través de otros rubros de inversión y sectores productivos. Así, mientras no existan políticas claras que integren el sector defensa con la industrialización, la investigación o la innovación tecnológica, el presupuesto militar seguirá siendo reactivo más que proactivo. Este hallazgo posee relevancia estratégica para el diseño de políticas públicas, al subrayar que las mejoras en seguridad y defensa no deben concebirse como un sustituto de la necesidad de promover una diversificación económica más amplia y una gestión fiscal que priorice aquellas áreas con mayor impacto en la producción y el bienestar de la sociedad ecuatoriana.

7.6. Efectos del Gasto Militar en el Desarrollo Económico

El período comprendido entre 2005 y 2014 representó una fase de crecimiento económico importante para Ecuador. Gracias a un entorno internacional favorable y a la alta cotización de las materias primas, especialmente el petróleo, el gobierno dispuso de recursos fiscales adicionales que le permitieron financiar múltiples programas de inversión social. El país experimentó mejoras en indicadores como la reducción de la pobreza, la ampliación de la cobertura sanitaria y el aumento de la esperanza de vida. La construcción de infraestructura vial y la expansión de servicios educativos y de salud tuvieron un papel protagónico en el discurso oficial y en la percepción ciudadana sobre el desempeño económico del país. Durante estos años, el Estado ecuatoriano apostó por un modelo de desarrollo que, en teoría, buscaba equilibrar el bienestar social con la estabilidad macroeconómica.

No obstante, mientras se fortalecían los sectores sociales, el gasto militar también mostró un crecimiento notable. Este incremento en el presupuesto de defensa generó interrogantes acerca de la eficiencia de la asignación de recursos, dada la relativa ausencia de conflictos armados fronterizos o tensiones geopolíticas graves en la región. La idea de invertir en armas, equipamiento y entrenamiento militar en un contexto de estabilidad geopolítica llevó a cuestionar si esos recursos pudieran haber tenido un mayor impacto si se hubieran dirigido hacia áreas de desarrollo productivo, diversificación económica o profundización de programas sociales. De forma más amplia, surgió el debate sobre la necesidad de un equilibrio apropiado entre las demandas del sector militar y las prioridades del desarrollo nacional.

En una economía relativamente pequeña y dependiente de la renta petrolera, como la ecuatoriana, la concentración de recursos públicos en la defensa puede tener repercusiones de largo plazo. La volatilidad de los precios del petróleo hizo que, durante el auge de 2005-2014, hubiera una abundancia transitoria de ingresos. Sin embargo, al tratarse de una fuente de financiamiento sujeta a fluctuaciones globales, resultaba arriesgado emprender incrementos permanentes en sectores como el militar sin una planificación de sostenibilidad. Esa inestabilidad presupuestaria puede dificultar la continuidad de proyectos clave y exponer al país a desequilibrios en épocas de contracción económica. Además, destinar una porción significativa del presupuesto a la defensa tiende a limitar las inversiones en otros ámbitos esenciales para el desarrollo, como la educación técnica y superior o la innovación.

Durante estos años de bonanza, se registraron mejoras tangibles en la calidad de vida de la población, en parte gracias a la ampliación de programas sociales. De acuerdo con datos oficiales, la reducción de la pobreza tuvo un avance significativo, y se observó un alza en la tasa de escolarización y en las prestaciones de salud. Sin embargo, cabe preguntarse si la magnitud de estos logros podría haber sido mayor de haberse destinado una fracción mayor de los recursos a dichos sectores, en lugar de expandir el gasto militar. Existen antecedentes que señalan que, cuando los países se enfrentan a una disyuntiva presupuestaria y optan por la inversión social, los beneficios a largo plazo suelen ser más pronunciados, impulsando la formación de capital humano y reduciendo las desigualdades.

Los estudios comparativos con otras naciones latinoamericanas son especialmente ilustrativos. Chile, por ejemplo, ha mantenido durante varios años una política de

diversificación económica y una focalización más clara en el desarrollo de sectores estratégicos, como la minería y los servicios especializados. Esto le ha permitido, pese a las tensiones limítrofes históricas, sostener un gasto militar relativamente estable y focalizado, mientras se destinan esfuerzos más continuos al ámbito social y productivo. Por su parte, Colombia, con un contexto interno complejo marcado por décadas de conflicto armado, ha impulsado reformas orientadas a la industrialización de ciertos sectores relacionados con la defensa, logrando cierta generación de empleo y tecnología. En ambos casos, la intención ha sido buscar un equilibrio, aunque no exento de desafíos, entre el fortalecimiento de la defensa y la prosperidad económica.

En contraste, Ecuador no ha integrado de manera sistemática el gasto militar dentro de un plan de industrialización o de creación de capacidades tecnológicas. Como consecuencia, la compra de armamento y el mantenimiento de las Fuerzas Armadas no han logrado generar un efecto multiplicador notable en el resto de la economía. La falta de sinergias con el sector productivo y la ausencia de encadenamientos industriales, por ejemplo, en áreas como la industria aeronáutica o naval, limitan el potencial del gasto militar para contribuir al desarrollo de nuevos nichos de mercado y a la creación de empleo calificado. Al no sostenerse en un proyecto de innovación, la inversión militar termina siendo, en buena medida, un rubro que se suma al gasto público sin retribuciones sustanciales en términos de productividad.

Esto lleva a reflexiones sobre la eficiencia en la gestión de los recursos públicos en un país con restricciones estructurales. Por un lado, no se puede negar la importancia de contar con instituciones de defensa sólidas para garantizar la soberanía nacional y la estabilidad interna. Por otro lado, es legítimo preguntarse si la prioridad en materia de desarrollo pasa por seguir incrementando el presupuesto de defensa frente a la necesidad de fortalecer sectores clave —educación, sanidad, infraestructura productiva— que impulsen la competitividad y reduzcan la vulnerabilidad externa de la economía. La historia reciente del país ha demostrado que las épocas de bonanza petrolera pueden acabar abruptamente, dejando proyectos inconclusos y limitando la capacidad de maniobra del Estado en momentos de crisis.

La experiencia de 2005 a 2014 plantea la importancia de una planificación de largo plazo que considere el papel del gasto militar en relación con la estrategia económica global.

Si bien la relativa estabilidad geopolítica en la región disminuye la necesidad de un gasto militar expansivo, la prevención y la capacidad de respuesta ante eventuales amenazas siguen siendo necesarias. Así, se requiere un planteamiento que armonice la seguridad nacional con los objetivos de desarrollo sostenible, garantizando que cada dólar invertido reporte beneficios claros para la sociedad. Diversificar la economía, invertir en innovación y fomentar la competitividad podrían ser alternativas más rentables en el mediano plazo, al tiempo que se asegura un nivel de defensa adecuado. Los ejemplos de países que han logrado equilibrar la inversión en defensa y el desarrollo productivo indican que, con una visión estratégica, es posible obtener resultados positivos en ambas áreas. Sin embargo, ello exige coherencia política, continuidad en los planes de gobierno y una institucionalidad robusta que vigile el uso eficiente de los recursos públicos, especialmente en un contexto económico tan fluctuante como el ecuatoriano.

CAPÍTULO No. 8 - IMPLICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN, LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

8.1. Implicaciones teóricas

Las implicaciones teóricas derivadas de la investigación sobre la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en los países latinoamericanos ofrecen una perspectiva valiosa para comprender mejor los vínculos entre la política de defensa y la economía en esta región. Estas implicaciones pueden dividirse en varias áreas clave que afectan tanto a la teoría económica como a la teoría de la seguridad nacional.

En primer lugar, los hallazgos desafían las suposiciones convencionales sobre el papel del gasto militar como motor del crecimiento económico. La teoría económica clásica a menudo sugiere que el aumento del gasto en defensa puede estimular la demanda agregada y generar efectos positivos en la economía, a través de la creación de empleo, la inversión en tecnología y la promoción de la industria local. Sin embargo, la investigación revela que esta suposición puede no ser válida en el contexto latinoamericano, donde el crecimiento económico parece determinar la capacidad del gobierno para financiar el gasto militar, en lugar de ser impulsado por este último.

Este hallazgo tiene implicaciones importantes para la teoría del crecimiento económico, ya que sugiere que los factores endógenos, como la inversión, la innovación y la productividad, son más determinantes para el desarrollo económico que el gasto en defensa. Esto plantea preguntas sobre la eficacia de las políticas que priorizan el gasto militar sobre otras formas de inversión que pueden tener un impacto más directo en el crecimiento sostenible a largo plazo.

En segundo lugar, los resultados también cuestionan las teorías sobre la relación entre el gasto militar y la seguridad nacional. Tradicionalmente, se ha argumentado que un mayor gasto en defensa puede mejorar la capacidad de un país para protegerse de amenazas internas y externas, lo que a su vez puede contribuir a un entorno más estable y seguro para el crecimiento económico. Sin embargo, la investigación sugiere que la dirección de causalidad va en sentido contrario en muchos casos: es el crecimiento económico el que impulsa el gasto militar, no al revés.

Esta observación plantea preguntas sobre la efectividad de las estrategias de seguridad que dependen en gran medida del aumento del gasto en defensa. Si el crecimiento económico es un factor determinante en la capacidad de un país para financiar su defensa, entonces las políticas de seguridad deberían centrarse en mejorar las condiciones económicas internas y fomentar un entorno propicio para la inversión y el desarrollo, en lugar de depender exclusivamente del aumento del presupuesto militar.

Además, la falta de una relación significativa entre el gasto militar y el crecimiento económico también puede tener implicaciones teóricas para la teoría de la elección pública. Esta rama de la economía examina cómo se asignan los recursos públicos y cómo afectan las decisiones del gobierno al bienestar social. Los hallazgos sugieren que la asignación de recursos hacia el gasto militar puede no ser la opción más eficiente para promover el desarrollo económico y mejorar el bienestar de la población. Esto plantea preguntas sobre la racionalidad de las decisiones de gasto del gobierno en el contexto de la seguridad nacional y el crecimiento económico.

8.2. Implicaciones económicas

Las implicaciones económicas derivadas de la investigación sobre la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en los países latinoamericanos son de suma importancia y ofrecen una visión profunda sobre cómo las decisiones de gasto público y la asignación de recursos pueden afectar el desarrollo económico de la región.

Los hallazgos que muestran la falta de una relación significativa a largo plazo entre el gasto militar y el crecimiento económico desafían las suposiciones tradicionales sobre el papel del sector de defensa en el estímulo económico. Históricamente, se ha argumentado que el aumento del gasto en defensa puede actuar como un motor para la economía al generar demanda agregada a través de la contratación de personal, la inversión en tecnología y la promoción de la industria local. Sin embargo, la investigación sugiere que, en el contexto latinoamericano, esta relación no es tan directa como se pensaba, lo que plantea preguntas sobre la eficacia de las políticas que priorizan el gasto militar sobre otras formas de inversión.

En segundo lugar, las conclusiones que indican que la dirección de causalidad va desde el crecimiento económico hacia el gasto militar tienen importantes implicaciones para

la gestión de recursos y la asignación de presupuesto. Tradicionalmente, se ha argumentado que un aumento en el gasto militar puede estimular la demanda agregada y, por lo tanto, impulsar el crecimiento económico. Sin embargo, este estudio sugiere que, en realidad, es el crecimiento económico el que proporciona al gobierno los recursos necesarios para invertir en defensa.

En tercer lugar, las implicaciones para la política económica son significativas. Los resultados de la investigación sugieren que la promoción del crecimiento económico sostenible debe ser la principal prioridad de las políticas públicas en la región. En lugar de depender del aumento del gasto militar como motor del desarrollo, los gobiernos latinoamericanos podrían beneficiarse más de enfoques que fomenten un clima propicio para la inversión y el desarrollo económico sostenible. Esto podría implicar políticas que promuevan la estabilidad macroeconómica, la mejora del clima de negocios, la inversión en infraestructura y la capacitación de la fuerza laboral.

Para el caso específico del Ecuador, las implicaciones económicas son particularmente relevantes. En un contexto donde las decisiones sobre el gasto público son críticas, comprender la verdadera relación entre el gasto militar y el crecimiento económico puede guiar políticas más efectivas y eficientes. Aunque el país enfrenta desafíos en materia de seguridad y defensa, este estudio sugiere que abordar estos problemas no necesariamente requiere un aumento significativo del gasto militar. En su lugar, podrían explorarse estrategias que prioricen la inversión en sectores que impulsen el crecimiento económico de manera más directa y sostenible.

8.3. Implicaciones sociales

Las implicaciones sociales derivadas de la investigación sobre la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en los países latinoamericanos son de suma importancia, ya que ofrecen una visión crítica sobre cómo estas dinámicas afectan a la sociedad en su conjunto.

En primer lugar, los hallazgos que indican la falta de una relación significativa entre el gasto militar y el crecimiento económico plantean interrogantes sobre la distribución equitativa de recursos en la sociedad. En muchos países latinoamericanos, el gasto militar

representa una parte considerable del presupuesto nacional, lo que podría implicar recursos que se desvían de áreas críticas.

Además, la dirección de causalidad que va desde el crecimiento económico hacia el gasto militar sugiere que un aumento en la inversión en defensa está vinculado más estrechamente a la capacidad del país para generar riqueza que a la necesidad real de seguridad. Esto plantea preguntas sobre las prioridades de gasto del gobierno y si estas están alineadas con las necesidades y demandas de la población en términos de seguridad, bienestar y desarrollo humano.

En segundo lugar, las implicaciones para la gestión de recursos y la asignación de presupuesto tienen repercusiones directas en la sociedad. Si bien tradicionalmente se ha argumentado que el aumento del gasto militar puede estimular la demanda agregada y, por ende, el crecimiento económico, este estudio sugiere que esta suposición puede no ser válida para los países latinoamericanos. Esto plantea la cuestión de si los recursos destinados al gasto militar podrían ser redirigidos hacia áreas que beneficien más directamente a la sociedad.

En tercer lugar, para el caso específico del Ecuador y otros países de la región, entender la verdadera relación entre el gasto militar y el crecimiento económico es crucial para garantizar políticas públicas efectivas y equitativas. Si bien es cierto que el país enfrenta desafíos en materia de seguridad y defensa, este estudio sugiere que abordar estos problemas no necesariamente requiere un aumento significativo del gasto militar. En cambio, podrían explorarse estrategias que prioricen la inversión en áreas que impacten positivamente en la vida cotidiana de los ciudadanos y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

En términos más generales, la investigación ofrece una perspectiva crítica sobre cómo el gasto militar afecta la sociedad en su conjunto. Sus conclusiones sugieren que la promoción del crecimiento económico sostenible debe ser la prioridad principal de las políticas públicas, y que el gasto militar, lejos de ser un motor para el desarrollo, está más bien influenciado por el desempeño económico de un país. Esto subraya la importancia de garantizar que las decisiones de gasto del gobierno estén alineadas con las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su conjunto.

A pesar de los avances significativos logrados en esta investigación, es importante reconocer que existen algunas limitaciones que podrían haber influido en los resultados

obtenidos. Además, esta exploración también abre la puerta a futuras líneas de investigación que podrían ampliar nuestro entendimiento sobre la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en América Latina y más allá.

8.4. Limitaciones

1. Alcance Geográfico Limitado: Aunque esta investigación se centró en los países latinoamericanos, sería interesante expandir el análisis a otras regiones del mundo para ver si los hallazgos son consistentes o si existen diferencias significativas en otras partes del globo.

2. Datos Limitados: La disponibilidad y la calidad de los datos pueden haber limitado el alcance y la precisión del análisis. En algunos casos, los datos sobre el gasto militar pueden ser opacos o difíciles de obtener, lo que podría haber afectado la robustez de los resultados.

3. Otras Variables No Consideradas: Aunque esta investigación se centró en el gasto militar y el crecimiento económico, existen otras variables relevantes que podrían influir en esta dinámica, como la inversión extranjera, el comercio internacional, la estabilidad política, entre otras. La inclusión de estas variables podría proporcionar una imagen más completa de la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico.

4. Causalidad No Observada: Aunque se encontró una dirección de causalidad unidireccional desde el crecimiento económico hacia el gasto militar, es importante tener en cuenta que la causalidad puede ser más compleja de lo que sugieren los análisis realizados. Puede haber factores no observados que influyen tanto en el gasto militar como en el crecimiento económico, lo que podría sesgar los resultados.

5. Contexto Histórico y Cultural: El contexto histórico y cultural de cada país puede influir en la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico. Estas diferencias contextuales no siempre pueden ser capturadas por los modelos estadísticos y podrían requerir un análisis más cualitativo y contextualizado.

8.5. Futuras Líneas de Investigación

1. Análisis Longitudinal: Realizar un análisis longitudinal a lo largo de varios períodos de tiempo podría ayudar a comprender mejor cómo evoluciona la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico a lo largo del tiempo y si existen cambios significativos en esta dinámica.

2. Estudio de Casos: Realizar estudios de casos detallados en países específicos podría proporcionar una comprensión más profunda de los mecanismos subyacentes que vinculan el gasto militar y el crecimiento económico en diferentes contextos políticos, económicos y sociales.

3. Análisis Multinivel: Explorar la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico a nivel regional o subnacional podría revelar patrones y dinámicas que no son evidentes a nivel nacional.

4. Incorporación de Variables Contextuales: Incluir variables contextuales adicionales, como la estabilidad política, los conflictos armados internos o externos, y las relaciones internacionales, podría proporcionar una comprensión más completa de la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico.

5. Comparaciones Internacionales: Realizar comparaciones internacionales entre diferentes regiones del mundo podría ayudar a identificar patrones globales y diferencias regionales en la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico.

6. Estudio de Mecanismos Causales: Investigar los mecanismos causales subyacentes que vinculan el crecimiento económico con el gasto militar, como el efecto del gasto militar en la inversión pública, la tecnología y la industria de defensa, podría proporcionar información valiosa sobre los canales a través de los cuales opera esta relación. Esta investigación marca un punto de partida importante en el estudio de la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en América Latina, pero aún queda mucho trabajo por hacer para comprender completamente esta dinámica compleja y su impacto en el desarrollo económico y la seguridad nacional. Con una consideración cuidadosa de las limitaciones y la exploración de futuras líneas de investigación, podemos seguir avanzando en nuestro entendimiento de este tema crítico.

CAPÍTULO No. 9 - CONCLUSIONES Y CUESTIONES QUE REMARCAR

9.1. Conclusiones Generales de la Investigación

La presente investigación ha explorado exhaustivamente la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en los países latinoamericanos, con un enfoque específico en el caso ecuatoriano. A través del uso de técnicas de cointegración y pruebas de causalidad aplicadas tanto a series de tiempo como a datos de panel, se ha llegado a conclusiones significativas que contribuyen al entendimiento de esta dinámica crucial para la política económica y de defensa en la región.

El análisis del gasto militar en Ecuador, y su relación con el crecimiento económico, no puede ser completamente comprendido desde una perspectiva puramente económica. Si bien los factores económicos y cuantitativos ofrecen una base sólida para el estudio, es fundamental considerar también otros elementos clave, como los factores políticos, sociológicos y estratégicos, que influyen de manera significativa en la toma de decisiones sobre el gasto en defensa. Las decisiones sobre el gasto militar no son meramente asignaciones presupuestarias; están profundamente influenciadas por el contexto político, la percepción de amenazas externas e internas, y las estructuras sociales. Por lo tanto, cualquier análisis integral sobre el impacto del gasto militar debe incorporar una perspectiva más amplia que reconozca la complejidad de los factores que afectan esta variable.

El análisis de cointegración reveló de manera consistente la falta de una relación de largo plazo entre el gasto militar y el crecimiento económico en los países latinoamericanos, lo cual incluye de manera destacada al Ecuador. Este hallazgo desafía suposiciones previas y sugiere que, a pesar de las inversiones en defensa, el crecimiento económico no se ve impulsado de manera significativa por el gasto en esta área.

En términos de cointegración, los resultados econométricos indican que no existe una relación de largo plazo entre el gasto militar y el crecimiento económico en Ecuador. Esta conclusión refuerza la idea de que, aunque el gasto militar puede fluctuar a corto plazo en función de los ingresos fiscales, no actúa como un motor clave para el crecimiento económico

sostenido. Este hallazgo es coherente con los análisis realizados en el Capítulo 4, donde se observó que el gasto militar es una variable más reactiva a las condiciones económicas que proactiva en términos de impulsar el desarrollo.

Por otro lado, las pruebas de causalidad de Granger realizadas muestran que el crecimiento económico precede a las variaciones en el gasto militar, pero no al revés. Esto sugiere que Ecuador aumenta su gasto militar cuando el crecimiento económico lo permite, pero este aumento no genera un efecto positivo sobre el crecimiento futuro. En otras palabras, el gasto en defensa se ha expandido en periodos de bonanza económica, pero no ha actuado como una palanca para mejorar los indicadores de desarrollo económico a largo plazo.

En comparación con otros países de América Latina, Ecuador presenta ciertas particularidades en cuanto a la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico. Mientras que en países como Chile o Colombia el gasto militar ha jugado un papel más estratégico en términos de seguridad y desarrollo tecnológico, en Ecuador, el gasto en defensa ha sido más errático y altamente influenciado por los ingresos petroleros.

En términos de causalidad, los resultados son aún más reveladores. Se encontró que la dirección de causalidad va desde el crecimiento económico hacia el gasto militar en países como Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay, según tanto el procedimiento de Granger como el de Toda y Yamamoto. Este hallazgo sugiere que un mayor crecimiento económico conduce a un aumento en el gasto militar, y no al revés. La prueba de causalidad para datos de panel confirma esta tendencia, mostrando que la causalidad es unidireccional y proviene del PIB per cápita hacia el gasto militar en los países latinoamericanos.

Estos hallazgos tienen implicaciones profundas para la formulación de políticas públicas en la región. En primer lugar, desafían la noción común de que el aumento del gasto militar puede ser un motor para el crecimiento económico. Más bien, sugieren que el desempeño económico de un país determina la cantidad de recursos disponibles para el sector de defensa. En otras palabras, un crecimiento económico robusto proporciona al gobierno los medios para invertir más en defensa, en lugar de que un aumento en el gasto militar conduzca al crecimiento económico.

Estos resultados también tienen implicaciones importantes para la gestión de recursos y la asignación de presupuesto. Mientras que tradicionalmente se ha argumentado que el aumento del gasto militar puede estimular la demanda agregada y, por ende, el crecimiento

económico, este estudio sugiere que esta suposición puede no ser válida para los países latinoamericanos. En lugar de comprometer recursos escasos en aumentos sustanciales del gasto militar, los gobiernos podrían beneficiarse más de enfoques que fomenten un clima propicio para la inversión y el desarrollo económico sostenible.

9.2. Conclusiones del Caso de Ecuador.

El análisis histórico del caso ecuatoriano demuestra que el gasto militar en el país ha estado fuertemente condicionado por la dependencia de ingresos provenientes de recursos naturales, particularmente el petróleo. Si bien en épocas de bonanza fiscal el gasto militar ha mostrado un incremento notable, no se ha logrado establecer una relación directa y sostenida entre este aumento y un impacto positivo en el crecimiento económico. Los datos revelan que el gasto en defensa ha sido más reactivo a las fluctuaciones económicas que un motor de desarrollo estructural.

Ecuador presenta limitaciones en la capacidad de transformar el gasto militar en un instrumento para promover la innovación tecnológica y el fortalecimiento económico. A diferencia de países como Chile y Colombia, donde la inversión en defensa ha sido utilizada de forma estratégica, en Ecuador este gasto ha carecido de una planificación a largo plazo que maximice su impacto en el desarrollo económico y social.

Las decisiones sobre el gasto militar en Ecuador han sido influenciadas por contextos políticos internos y presiones sociales, lo que ha generado desequilibrios en la asignación de recursos. En algunos casos, estas decisiones han priorizado la estabilidad política sobre el desarrollo de sectores críticos como la educación y la salud, afectando negativamente indicadores clave de bienestar social.

El país ha realizado esfuerzos por fortalecer sus capacidades estratégicas, pero estas se mantienen limitadas en comparación con otros países de la región. Esto refleja la necesidad de desarrollar políticas más eficaces que integren objetivos de seguridad nacional con metas de desarrollo económico.

El gasto militar en Ecuador no ha logrado consolidarse como un catalizador del desarrollo social. Para mejorar esta situación, es fundamental implementar una planificación estratégica que priorice la eficiencia del gasto y su alineación con objetivos de largo plazo.

Esto incluye fortalecer la coordinación entre instituciones gubernamentales, fomentar la transparencia en el uso de recursos y promover una evaluación constante de las políticas implementadas.

Para el caso ecuatoriano, estos hallazgos son particularmente relevantes. En un contexto donde las decisiones sobre el gasto público son críticas, entender la verdadera relación entre el gasto militar y el crecimiento económico puede guiar políticas más efectivas y eficientes. Si bien es cierto que el país enfrenta desafíos en materia de seguridad y defensa, este estudio sugiere que abordar estos problemas no necesariamente requiere un aumento significativo del gasto militar.

9.3. Conclusiones para futuras investigaciones.

En términos más generales, esta investigación ofrece una perspectiva sólida y fundamentada sobre la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en los países latinoamericanos. Sus conclusiones sugieren que la promoción del crecimiento económico sostenible debe ser la prioridad principal de las políticas públicas, y que el gasto militar, lejos de ser un motor para el desarrollo, está más bien influenciado por el desempeño económico de un país.

Para futuras investigaciones, será interesante profundizar en las razones detrás de esta falta de relación significativa entre el gasto militar y el crecimiento económico en la región. Además, estudiar cómo otros factores, como la inversión extranjera, el comercio internacional y las políticas fiscales, interactúan con el gasto militar y el crecimiento económico podría arrojar luz adicional sobre esta dinámica compleja.

Esta investigación ha contribuido de manera significativa al entendimiento de la relación entre el gasto militar y el crecimiento económico en los países latinoamericanos, ofreciendo conclusiones sólidas y relevantes que tienen importantes implicaciones para la formulación de políticas públicas en la región.

Una coincidencia relevante es que, al igual que en otras naciones de la región, el gasto militar en Ecuador ha sido más una respuesta a las circunstancias políticas y económicas que una herramienta proactiva de desarrollo. Sin embargo, a diferencia de países con una estrategia de defensa más coherente y estable, Ecuador ha mostrado una falta de continuidad

en sus políticas de gasto militar, lo que ha reducido su efectividad como motor de crecimiento económico.

Una de las principales limitaciones de este estudio es la disponibilidad y calidad de los datos. Si bien se utilizaron las mejores fuentes disponibles, como el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y bases de datos del Banco Mundial, la información sobre el gasto militar en Ecuador a veces es incompleta o inconsistente, especialmente en los primeros años del periodo de análisis (década de 1960 y 1970). Estas inconsistencias pueden haber afectado la precisión de los resultados econométricos, especialmente en el análisis de largo plazo.

Otra limitación importante es la complejidad intrínseca del gasto militar como variable de estudio. No es posible captar todos los matices de las decisiones sobre defensa desde un análisis exclusivamente económico o cuantitativo. Las decisiones sobre el gasto militar están influenciadas por factores políticos, geopolíticos, y sociológicos, que no pueden ser plenamente capturados en un análisis econométrico. Este trabajo se centra en el impacto económico, pero no aborda en profundidad cómo factores como las relaciones internacionales, la percepción de amenazas y las alianzas estratégicas pueden afectar las decisiones sobre el gasto en defensa.

Finalmente, el enfoque de este estudio se ha centrado principalmente en el impacto del gasto militar en el crecimiento económico, sin analizar en detalle las implicaciones estratégicas y de seguridad. La relación entre gasto militar y seguridad nacional es compleja y multifacética, y un enfoque más amplio que incluya análisis de la estrategia de defensa de Ecuador podría aportar una comprensión más integral.

A partir de los hallazgos de esta investigación, surgen varias reflexiones finales que pueden servir como base para futuros estudios.

Dado que el gasto militar es un fenómeno influenciado por múltiples factores, futuros análisis deben integrar enfoques multidisciplinarios que incluyan no solo el componente económico, sino también aspectos políticos, sociológicos y de seguridad estratégica. Por ejemplo, la interacción entre el gasto militar y la política exterior de Ecuador, o el papel de las fuerzas armadas en la estabilización interna, son áreas que requieren mayor estudio.

Un enfoque comparativo más exhaustivo entre Ecuador y otros países de América Latina, tomando en cuenta variables geopolíticas y de seguridad, podría ayudar a entender

mejor por qué el gasto militar ha tenido efectos diferentes en cada país. Un análisis que contemple tanto los factores económicos como los factores geopolíticos y de seguridad interna permitiría una comprensión más integral de la eficacia del gasto militar en distintos contextos.

Finalmente, es importante que futuros estudios se centren en la eficiencia del gasto militar, analizando no solo cuánto se gasta, sino también cómo se gasta. ¿Está el gasto militar de Ecuador alineado con los objetivos estratégicos y de seguridad del país? ¿Existe una transparencia adecuada en la asignación de estos recursos? Estas preguntas pueden ayudar a mejorar la planificación presupuestaria y maximizar los beneficios del gasto militar en términos de desarrollo económico y estabilidad nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, L. E. (2019). ECONOMÍA DE LA DEFENSA ECUATORIANA: EFICIENCIA EN EL GASTO MILITAR. *Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa*, IV(5), 140–152.
- Alesina, A., & Spolaore, E. (2006). Conflict, defense spending, and the number of nations. *European Economic Review*, 50(1), 91–120.
<https://doi.org/10.1016/j.eurocorev.2004.06.003>
- BBC News Mundo. (2019). Violencia en América Latina . In *Bbc News Mundo* (pp. 1–3).
<https://www.bbc.com/mundo/topics/cdr561024qtr/page/2>
- Buzan, B. (1984). *Peace , Power , and Security : Contending Concepts in the Study of International Relations* *. 21(2), 109–125.
- Castañeda, V. M., & Díaz-Bautista, Ó. (2017). El Consenso de Washington : algunas implicaciones para América Latina The Washington Consensus : some Implications for Latin America implicações para América Latina. *Apuntes Del CENES*, 36(63), 15–41.
- Castelar, A. (2009). Judiciário e economia no Brasil. In *Judiciário e economia no Brasil*.
<https://doi.org/10.7476/9788579820199>
- Chinchilla, L., & Vorndran, D. (2018). Seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Desafíos e innovación en gestión y políticas públicas en los últimos 10 años. *Bid*, 43.
- Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial. (2018). Doctrina Aeroespacial Básica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. *Fuerza Aérea Ecuatoriana*, 53(9), 1–72.
- Cubillos, A. A. E., Calderón, J. A. A., & Suescún, Ó. Y. B. (2020). Technological innovations in the world's military forces: A preliminary review. *Revista Científica General Jose Maria Cordova*, 18(29), 213–235.
<https://doi.org/10.21830/19006586.537>
- CUEVA-JIMÉNEZ, M. G., CORREA-QUEZADA, R., TULCANAZA-PRIETO, A. B., & CUEVA-RODRÍGUEZ, L. (2024). Crecimiento Económico Y Gasto Militar En El Ecuador: Un Enfoque De Cointegración Y Causalidad. *Regional and Sectoral Economic Studies*, 24(1), 91–110.
- Cueva, M., Guayasamín, M., & Zúñiga, D. (2021). Dinámicas económicas para el desarrollo local. Una aproximación a la eficiencia del gasto militar en la economía

- ecuatoriana. *Sigma*, 08(2), 8–14.
- d'Agostino, G., Dunne, J. P., Lorusso, M., & Pieroni, L. (2020). Military Spending, Corruption, Persistence and Long Run Growth. *Defence and Peace Economics*, 31(4), 423–433. <https://doi.org/10.1080/10242694.2020.1751503>
- Desli, E., Gkoulgkoutsika, A., & Katrakilidis, C. (2017). Investigating the Dynamic Interaction between Military Spending and Economic Growth. *Review of Development Economics*, 21(3), 511–526. <https://doi.org/10.1111/rode.12268>
- Díaz, C. A., & Fonfría Mesa, A. (2018). Economía de la Defensa. *Economía y Defensa En Tiempos de Post Acuerdo*, IV(5), 450.
- Dunne, J. P., & Smith, R. P. (2020). Military Expenditure, Investment and Growth. *Defence and Peace Economics*, 31(6), 601–614. <https://doi.org/10.1080/10242694.2019.1636182>
- Editorial, C., & Eissa, S. (2017). Defensa Nacional: consideraciones para un enfoque analítico. *Relaciones Internacionales*, 26(53), 246. <https://doi.org/10.24215/23142766e021>
- Edwards, C. (2009). *Special-Interest Spending*. April.
- Epiro, A. G., Borrelli, M., & Gabriel, A. (1981). *Crónica y la economía argentina durante los años de Martínez de Hoz (1976 – 1981) Tesina de Grado*.
- Ferrer, A. C. N.-A. 00 / 5377. (1999). *La economía argentina: las etapas de su desarrollo y problemas actuales*. 280. <http://iaiweb1.iai.spk-berlin.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=465862829%5Cnhttp://iaiweb1.iai.spk-berlin.de:80/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=465862829>
- Fonfría, A. (2013). El gasto en defensa en España. Una nota metodológica. *Revista Del Instituto Español de Estudios Estratégicos*, 1(1), 1–24. https://www.mendeley.com/catalogue/da7431ee-1882-398f-ba90-455000f6d053/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.4&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B2cd98109-266b-4cdb-a830-9a99ef766736%7D
- Fraga, R. (2004). El gasto en defensa en Iberoamérica. *Análisis Del Real Instituto Elcano*, 44, 11. <http://biblioteca.ribei.org/id/eprint/506>
- Furtado, C. (1957). *Perspectivas da Economia Brasileira*. 45.
- Giha Tobar, Y., Riveros Reyes, H., & Soto Velasco, A. (1999). El gasto militar en

- Colombia: aspectos macroeconómicos y microeconómicos. *Revista de La Cepal* 69, 163–179.
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12194/069163180.pdf?sequence=1>
- Gonzalvo-Cirac, M. (2013). La población de Costa Rica, 1750-2000. Una historia experimental. *Población y Salud En Mesoamérica*, 10(2).
<https://doi.org/10.15517/psm.v10i2.8519>
- Grautof, M., & Miranda, C. (2009). Análisis del gasto militar desde la perspectiva de la economía de la defensa: El caso colombiano 1950-2006. *Ecos de Economía*, 13(28), 199–237.
- Griffiths Spielman, J. (2017). Fuerzas Armadas: ¿preparadas solo para la guerra o efectivo instrumento para, además, asegurar la paz y seguridad estatal? *Estudios Internacionales*, 49(187), 131–161. <https://doi.org/10.5354/0719-3769.2017.47031>
- Jaitman, L. (2017). The Costs of Crime and Violence. *Inter-American Development Bank*, 53–79. [https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4249/Ideas for Development in the Americas, Volume 30: The Costs of Crime and Violence.pdf?sequence=1%5Cn](https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/4249/Ideas%20for%20Development%20in%20the%20Americas,%20Volume%2030:%20The%20Costs%20of%20Crime%20and%20Violence.pdf?sequence=1%5Cn)
- Jiménez Vega, R. (2015). Las nuevas demandas de seguridad. *Opera*, 17, 127–147.
<https://doi.org/10.18601/16578651.n17.07>
- Kollias, C., Paleologou, S. M., Tzeremes, P., & Tzeremes, N. (2017). Defence expenditure and economic growth in Latin American countries: evidence from linear and nonlinear causality tests. *Latin American Economic Review*, 26(1), 1–25.
<https://doi.org/10.1007/s40503-017-0039-4>
- Lorenzo, A. F., Laborde, Z. B., Manolo, D., & Calderón, P. (2020). La economía de la defensa: de la teoría a la realidad en América Latina. *RISTI*, 680–692.
- Meller, P. (2017). *Un siglo de economía política chilena (1890-1990): Un clásico de las ciencias sociales*.
- Meneghetti, K. (2022). *La teoría de los juegos y el análisis económico de los conflictos durante la guerra fría*. 0–24.
- Molina, I. (2007). Educación y sociedad en Costa Rica: de 1821 al presente (una historia no autorizada). *Diálogos: Revista Electrónica de Historia*, 8(2), 148–356.

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2384584>

- Muggah, R. (2017). *El auge de la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe*. 1–23.
- Niño, C. (2020). Seguridad ciudadana en América Latina: gobernanzas criminales y dimensiones de la violencia. In *Manual De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales* (Issue August). <https://doi.org/10.22518/book/9789585511972/ch08>
- Ordóñez, M. D., & Cruz, G. (2017). La inteligencia militar ecuatoriana en la sociedad del riesgo. *URVIO - Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 4299(21), 56. <https://doi.org/10.17141/urvio.21.2017.2964>
- Perotti, R., Alesina, A., Canova, F., Favero, C., Gambetti, L., Lippi, M., Primiceri, G., Ravn, M., & Rossi, B. (2014). *Nber Working Paper Series Defense Government Spending Is Contractionary, Civilian Government Spending Is Expansionary*. <http://www.nber.org/papers/w20179>
- Pino Abad, M. (2021). La jurisdicción especial de las comisiones militares ejecutivas y permanentes en las postrimerías del Antiguo Régimen. In *Historia. Instituciones. Documentos* (Issue 48, pp. 351–378). <https://doi.org/10.12795/hid.2021.i48.12>
- Posada, P., Esteban, C., P, C. E. P., & González, F. (2000). EL GASTO EN DEFENSA, JUSTICIA Y SEGURIDAD. *Revista Institucional*, 2(2), 53–75.
- Rettberg, A. (2020). *Revista de Estudios Sociales.pdf*.
- Rocchi Fernando. (2000). El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el periodo 1880-1916. *Nueva {Historia} {Argentina}; El Progreso, La Modernización y Sus Límites (1880-1916)*, 5, 15–70.
- Ruiz Rodríguez, V. (2020). Derecho, bien común, seguridad y justicia. *Revista de Filosofía Universidad Iberoamericana*, 52(149), 12–45. <https://doi.org/10.48102/rdf.v52i149.41>
- Santos, F., Amador, L., Amaya, N., & Menjívar, J. S. (2020). Eficiencia Del Gasto Público En Seguridad Ciudadana: Un Análisis Para Centroamérica. *Economía y Administración (E&A)*, 11(2), 25–38. <https://doi.org/10.5377/eya.v11i2.10518>
- Scheetz, T. (1995). La necesaria reforma militar argentina. *Nueva Sociedad*, 138, 132–141. http://www.nuso.org/upload/articulos/2437_1.pdf
- Sforzi, F., Pérez, M., Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Centro de Estudios Económicos., A. V., Carvajal Burbano, A., Palmitesta, L., Augusto, C., Silva,

- V., Han, E. S., & goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2001). ¿Modelos alternativos de desarrollo o modelos alternativos al desarrollo? *Apuntes Del Cenes*, 1(47), 117–132. <https://doi.org/10.25100/prts.v0i14.1095>
- Sisco, C., & Chacón, O. (2004). *Barry Buzan y la teoría de los complejos de seguridad*. 125–146.
- Valiño Mayo, A., & Abe, V. C. (1997). El Gasto En Defensa En La Economía Publica. *Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid*, 1–35. https://www.mendeley.com/catalogue/e0c7155c-c222-38fe-894c-198924af1603/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.4&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7B035e4e33-d283-4095-8de4-a1ffd8fff143%7D
- Viñas Martín, A. (1984). Economía de la Defensa y Defensa Económica: Una propuesta reconceptualizadora. *Revista de Estudios Políticos*, 56(37), 25–48.
<file:///C:/Users/Dell/Downloads/Dialnet-EconomiaDeLaDefensaYDefensaEconomica-26772.pdf>
- Votano, J., Parham, M., & Hall, L. (2004). Estructuras de integración del cooperativismo y la economía solidaria en Colombiaeconomía solidaria. *Chemistry & ...*, 1–39.
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Wagner, L. (2010). *Problemas Ambientales y Conflicto Social en Argentina. Movimientos socioambientales en Mendoza. La defensa del agua y el rechazo a la megaminería en los inicios del siglo XXI*. 1–499. <https://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/192>

ANEXOS

Los anexos que se presentan a continuación son el resultado de un esfuerzo exhaustivo y riguroso llevado a cabo para recolectar, organizar y analizar información detallada sobre los países de América Latina en el ámbito del gasto militar y la capacidad estratégica. La elaboración de estos anexos implicó una revisión cuidadosa de fuentes primarias y secundarias, incluyendo bases de datos internacionales, como el SIPRI, así como documentos gubernamentales y literatura académica específica de cada país. Este trabajo refleja el compromiso con un análisis profundo y una metodología sólida, que busca aportar claridad y sustancia al debate académico.

La decisión de trasladar esta información y evaluaciones al final de la tesis responde a dos motivos principales. En primer lugar, se busca simplificar la lectura del cuerpo principal del texto, permitiendo que el lector se concentre en los análisis y argumentos desarrollados en los capítulos 4, 5 y 6. En segundo lugar, dado el nivel de detalle y extensión de los datos recopilados y analizados, incluir esta información en el cuerpo principal habría complicado innecesariamente su presentación. En este sentido, los anexos proporcionan una visión sintética pero completa de los análisis realizados país por país, destacando tanto las peculiaridades como las similitudes entre las distintas naciones.

Asimismo, se ha considerado pertinente dividir los anexos en dos secciones específicas: el Anexo 1, enfocado en los problemas de seguridad y defensa en los países de América Latina, y el Anexo 2, que aborda las capacidades estratégicas de cada nación. Esta separación permite una mejor organización y facilita el acceso a la información para quienes buscan enfoques específicos dentro de la temática abordada.

Es importante subrayar que la calidad de la información recopilada varía entre países, debido a la disponibilidad y accesibilidad de datos. En algunos casos, la información ha sido escasa, lo que representa una limitación inherente a este tipo de investigaciones. Por ejemplo, en los casos de [mencionar países específicos con limitaciones], las fuentes disponibles han sido limitadas, lo que ha requerido un esfuerzo adicional para garantizar la consistencia y el rigor del análisis.

Estos anexos no solo enriquecen el contenido de esta tesis, sino que también constituyen una fuente valiosa para futuras investigaciones en el campo del gasto militar y la

defensa en América Latina, sirviendo como base para debates académicos y formulación de políticas públicas informadas.

ANEXO No. 1: La Seguridad y Defensa en Latinoamérica

A1. Argentina

La seguridad y defensa de Argentina son responsabilidad del gobierno y están a cargo de diversas instituciones gubernamentales, incluyendo el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.

El Ministerio de Seguridad es responsable de la seguridad nacional y del bienestar de los ciudadanos argentinos. Esto incluye la protección de la población contra el delito y la violencia, así como la prevención y el combate a la corrupción y el narcotráfico. El Ministerio de Defensa, por su parte, es responsable de la defensa nacional y de la seguridad exterior del país. Esto incluye la gestión de las Fuerzas Armadas y de la política de defensa del gobierno. Las Fuerzas Armadas de Argentina están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Su misión principal es la defensa del territorio nacional y la protección de la soberanía y la integridad del país. También tienen la responsabilidad de participar en misiones de paz y de asistencia humanitaria en el exterior (Editorial y Eissa, 2017).

Además de las instituciones mencionadas, existen otras organizaciones encargadas de la seguridad y defensa en Argentina, como la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal Argentina. Todas estas instituciones trabajan juntas para garantizar la seguridad y la defensa del país.

Las Fuerzas Armadas de Argentina están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Su principal misión es la defensa del territorio nacional y la protección de la soberanía y la integridad del país. También tienen la responsabilidad de participar en misiones de paz y de asistencia humanitaria en el exterior.

El Ejército es el cuerpo de las Fuerzas Armadas encargado de la defensa terrestre del país. Se divide en tres ramas: infantería, artillería e ingenieros. También cuenta con unidades de aviación y de telecomunicaciones.

La Armada es el cuerpo encargado de la defensa naval del país. Está compuesta por la Marina de Guerra Argentina y la Prefectura Naval Argentina, que es el cuerpo encargado de la seguridad marítima y fluvial. La Armada también incluye la Fuerza Aeronaval, que es el cuerpo encargado de la defensa aérea y naval del país.

La Fuerza Aérea es el cuerpo encargado de la defensa aérea del país. Cuenta con unidades de aviación militar y de defensa aérea.

Las Fuerzas Armadas de Argentina también tienen la responsabilidad de colaborar con otras instituciones gubernamentales en tareas de seguridad interna, como el control de la frontera y la lucha contra el narcotráfico. También participan en misiones de paz y de asistencia humanitaria en el exterior, en colaboración con otras organizaciones internacionales (Rocchi Fernando, 2000).

El gasto militar de Argentina es el dinero que se destina a las Fuerzas Armadas y a otras instituciones gubernamentales relacionadas con la defensa y la seguridad del país. Este gasto se financia con el presupuesto del gobierno y se utiliza para cubrir los costos de adquisición de equipos y tecnología militar, el pago de salarios y beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, y otros gastos relacionados con la defensa y la seguridad del país.

El gasto militar de Argentina ha sido un tema de debate político y público durante muchos años. Algunos argumentan que es necesario aumentar el gasto militar para fortalecer la defensa del país y proteger a los ciudadanos contra amenazas externas.

En términos absolutos, el gasto militar de Argentina ha fluctuado a lo largo del tiempo y ha sido influenciado por factores internos y externos. Por ejemplo, durante la Guerra de Malvinas en 1982, el gasto militar aumentó significativamente para financiar la participación del país en el conflicto. En general, el gasto militar de Argentina ha sido relativamente bajo en comparación con otros países de América del Sur y con la mayoría de los países del mundo. Sin embargo, ha aumentado en los últimos años debido a la modernización de las Fuerzas Armadas y a la necesidad de hacer frente a nuevas amenazas y desafíos en la región (Wagner, 2010).

A2. Bolivia

La seguridad y defensa de Bolivia son responsabilidad del Estado y están a cargo de las instituciones militares y de seguridad del país. El gobierno de Bolivia tiene una estructura militar que incluye a las Fuerzas Armadas y a la Fuerza de Seguridad Nacional. Las Fuerzas Armadas están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, mientras que la Fuerza de Seguridad Nacional incluye a la Policía Nacional y a la Policía Técnico-Científica. El Ejército de Bolivia es el principal componente militar del país y está encargado de la defensa del territorio y la seguridad interna. La Armada de Bolivia es responsable de la seguridad marítima y costera, mientras que la Fuerza Aérea se encarga de la defensa aérea y del transporte aéreo militar.

La Policía Nacional es la principal institución encargada de la seguridad interna y la prevención del delito en Bolivia. La Policía Técnico-Científica es una institución encargada de proporcionar apoyo técnico y científico a la investigación del delito y la resolución de casos.

Además de estas instituciones militares y de seguridad, Bolivia también cuenta con un sistema de defensa civil encargado de coordinar las actividades de protección y defensa en caso de emergencia o desastre natural.

En cuanto a la política de seguridad y defensa de Bolivia, el país ha adoptado un enfoque de no alineamiento y ha mantenido relaciones amistosas con todos los países de la región. Bolivia ha participado en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas y ha firmado tratados internacionales de defensa y seguridad.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia son el conjunto de instituciones militares encargadas de la defensa del territorio y la seguridad interna del país. Estas fuerzas están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El Ejército de Bolivia es el principal componente militar del país y es responsable de la defensa del territorio y la seguridad interna. Se compone de una serie de unidades y subunidades, incluyendo infantería, artillería, ingenieros, inteligencia militar y otros. El Ejército de Bolivia también tiene un papel importante en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de las fronteras del país.

La Armada de Bolivia es el componente naval de las Fuerzas Armadas y se encarga de la seguridad marítima y costera del país. La Armada de Bolivia cuenta con una flota de barcos de guerra, patrulleros y otros medios navales.

La Fuerza Aérea de Bolivia es el componente aéreo de las Fuerzas Armadas y se encarga de la defensa aérea del país y del transporte aéreo militar. La Fuerza Aérea de Bolivia cuenta con aviones de combate, aviones de transporte y helicópteros.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia tienen un papel importante en la defensa y seguridad del país y están comprometidas con la protección de la soberanía y la integridad territorial de Bolivia. Además, también tienen un papel importante en la lucha contra el narcotráfico y en la protección de las fronteras del país.

El gasto militar de Bolivia es el dinero que el gobierno destina a las Fuerzas Armadas y a las instituciones de seguridad del país. El gasto militar incluye el costo de mantener y equipar a las Fuerzas Armadas, así como el pago de salarios y beneficios a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad.

El gasto militar de Bolivia ha variado significativamente en los últimos años. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del producto interno bruto (PIB) de Bolivia fue del 1,9% en 2019, lo que representa un aumento respecto al 1,4% del PIB en 2015. Esto significa que el gobierno de Bolivia ha aumentado significativamente el dinero destinado a las Fuerzas Armadas y a la seguridad en los últimos años.

El aumento del gasto militar de Bolivia se ha debido principalmente a la necesidad de mejorar la capacidad de las Fuerzas Armadas y la seguridad interna del país para hacer frente a desafíos como el narcotráfico y la inmigración ilegal. Además, el gobierno de Bolivia ha señalado que el aumento del gasto militar también se debe a la necesidad de modernizar y equipar a las Fuerzas Armadas para hacer frente a posibles amenazas externas.

Aunque el gasto militar de Bolivia ha aumentado en los últimos años, sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros países de la región. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del PIB de Bolivia es uno de los más bajos de América Latina.

A3. Brasil

La seguridad y defensa de Brasil son responsabilidad del gobierno y están a cargo de varias agencias e instituciones. El Ministerio de Defensa es el principal responsable de la seguridad y defensa del país y tiene a su cargo el Ejército Brasileño, la Fuerza Aérea Brasileña y la Armada Brasileña. Además, la seguridad interna del país es responsabilidad del Ministerio del Interior y de la Seguridad Pública, que tiene a su cargo la policía federal y las policías estatales y municipales (Furtado, 1957).

Brasil también cuenta con una estructura de seguridad cibernética a través del Centro de Operações de Defesa Cibernética (CODEC), que se encarga de proteger la infraestructura crítica del país y garantizar la seguridad en línea.

Además, Brasil es miembro de varias organizaciones internacionales de seguridad y defensa, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), y mantiene alianzas militares y de seguridad con otros países de América del Sur y del mundo.

Las Fuerzas Armadas de Brasil son el Ejército Brasileño, la Fuerza Aérea Brasileña y la Armada Brasileña. Estas tres fuerzas trabajan juntas para proteger la seguridad y la integridad del país y sus ciudadanos.

El Ejército Brasileño es responsable de la defensa terrestre del país y está compuesto por unidades de infantería, artillería, ingeniería y otros ramos. La Fuerza Aérea Brasileña es responsable de la defensa aérea y espacial del país y cuenta con una flota de aviones de combate, aviones de transporte y helicópteros. La Armada Brasileña es responsable de la defensa marítima del país y cuenta con una flota de barcos de guerra, submarinos y buques de apoyo.

Las Fuerzas Armadas de Brasil también tienen un papel importante en el desarrollo de la tecnología y la industria militar del país y en la promoción de la investigación científica y tecnológica. Además, participan en misiones de paz y en operaciones de ayuda humanitaria en el país y en el extranjero.

Las Fuerzas Armadas de Brasil están bajo el control del Ministerio de Defensa y son dirigidas por el presidente de Brasil en su calidad de comandante en jefe.

El gasto militar de Brasil es el dinero que el gobierno dedica a financiar las Fuerzas Armadas y la defensa del país. El gasto militar incluye el presupuesto destinado a la adquisición de armamento y equipo militar, el mantenimiento y reparación de equipo existente, el pago de salarios y beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas y otros gastos relacionados con la defensa del país.

En términos absolutos, el gasto militar de Brasil ha aumentado en los últimos años, pero en términos relativos (es decir, como porcentaje del PIB), ha disminuido ligeramente. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar de Brasil como porcentaje del PIB fue del 1,4% en 2020, lo que representa una disminución del 1,8% en 2010.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar de un país no es el único factor que determina su capacidad defensiva y que hay muchos otros factores que influyen en la seguridad y la defensa de un país, como la calidad y la eficiencia de su equipo militar, la calidad de sus fuerzas armadas y la capacidad de liderazgo y estrategia.

A4. Chile

Chile es un país situado en Sudamérica que cuenta con una estructura de seguridad y defensa bien desarrollada y sólida. La seguridad interna es responsabilidad del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mientras que la seguridad externa es responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional (Meller, 2017).

El ejército chileno es responsable de la defensa territorial y tiene una estructura profesional y moderna. Chile también cuenta con una marina de guerra y una fuerza aérea, ambas con un papel importante en la defensa del país. Además, hay una policía militar encargada de la seguridad en situaciones de emergencia y una policía civil encargada de la seguridad cotidiana.

Chile ha participado en misiones de paz internacionales y es miembro de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. También mantiene relaciones de seguridad y defensa con otros países de América Latina y el mundo. En cuanto a la seguridad interna, Chile ha enfrentado desafíos como la delincuencia común y el narcotráfico, pero ha implementado medidas efectivas para hacer frente a estos

problemas. También ha tenido que enfrentar desafíos políticos y sociales, como protestas y disturbios, y ha buscado soluciones a través de diálogo y mediación.

En este sentido, la seguridad y defensa en Chile son una prioridad para el gobierno y se han establecido estructuras sólidas y profesionales para garantizar la seguridad y la defensa del país y de sus ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas de Chile son el conjunto de instituciones militares encargadas de la defensa del país. Están compuestas por el Ejército de Chile, la Armada de Chile y la Fuerza Aérea de Chile.

El Ejército de Chile es la institución encargada de la defensa territorial del país y está dividido en tres ramas: infantería, caballería y artillería. También cuenta con una policía militar encargada de la seguridad en situaciones de emergencia.

La Armada de Chile es la institución encargada de la defensa naval y de la protección de las costas del país. Está compuesta por una flota de barcos de guerra, submarinos y aviones, así como por una marina mercante y una marina de guerra.

La Fuerza Aérea de Chile es la institución encargada de la defensa aérea del país y está compuesta por una flota de aviones de combate y aviones de transporte. También cuenta con una escuela de aviación y una fuerza de tarea aérea.

Las Fuerzas Armadas de Chile tienen un papel importante en la defensa del país y han participado en misiones de paz internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. También mantiene relaciones de seguridad y defensa con otros países de América Latina y el mundo.

El gasto militar de Chile es el dinero destinado a financiar las actividades y operaciones de las Fuerzas Armadas de Chile, incluyendo el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. También incluye el dinero destinado a la adquisición de equipo y tecnología militar, así como a la formación y capacitación de personal militar.

El gasto militar de Chile ha variado a lo largo de los años, dependiendo de factores como la situación política y económica del país y las necesidades de defensa. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del PIB de Chile ha fluctuado en torno al 1% en los últimos años. Esto lo coloca en un nivel similar al de otros países de América Latina y en un nivel bastante bajo en comparación con otros países del mundo.

Es importante señalar que el gasto militar de Chile no solo se destina a la defensa del país, sino que también se utiliza para financiar actividades de seguridad interna, como la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia común. Además, las Fuerzas Armadas de Chile tienen un papel importante en la ayuda humanitaria y en la participación en misiones de paz internacionales.

A5. Colombia

La seguridad y defensa de Colombia son responsabilidades del gobierno y de las instituciones encargadas de mantener el orden y la protección de la población. Esto incluye a las fuerzas militares y de policía, así como a otras agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

En Colombia, la seguridad y defensa son importantes debido a la presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la violencia criminal. Estos problemas han sido una preocupación constante para el gobierno y la población durante décadas (Sforzi et al., 2001). El gobierno colombiano ha implementado una serie de medidas para abordar estos problemas, incluyendo el desarrollo de una estrategia de seguridad ciudadana, la creación de una policía nacional civil y la lucha contra el narcotráfico. También ha trabajado en la implementación de acuerdos de paz con grupos armados ilegales, con el objetivo de lograr una solución pacífica al conflicto interno del país.

Además de estas medidas, el gobierno colombiano cuenta con un ejército y una fuerza aérea para defender el país de posibles amenazas externas. También mantiene relaciones militares y de defensa con otros países a través de alianzas y acuerdos internacionales.

En este sentido, la seguridad y defensa de Colombia son una preocupación importante para el gobierno y la población, y se aborda a través de una serie de medidas y esfuerzos tanto internos como internacionales.

Las Fuerzas Armadas de Colombia son el conjunto de instituciones encargadas de la defensa del país y de mantener el orden interno. Estas instituciones incluyen el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana (Giha Tobar et al., 1999).

El Ejército Nacional es el principal componente de las Fuerzas Armadas de Colombia y está encargado de la defensa territorial y la protección de la soberanía del país. También es

responsable de llevar a cabo operaciones de mantenimiento del orden interno y de apoyo a la población en caso de desastres naturales.

La Armada Nacional es el componente naval de las Fuerzas Armadas de Colombia y tiene como principal misión la defensa de la integridad del territorio nacional y la protección de los intereses marítimos del país. También participa en operaciones de mantenimiento del orden interno y en la lucha contra el narcotráfico.

La Fuerza Aérea Colombiana es el componente aéreo de las Fuerzas Armadas de Colombia y tiene como principal misión la defensa del espacio aéreo del país y la protección de la soberanía nacional. También participa en operaciones de mantenimiento del orden interno y en la lucha contra el narcotráfico.

Además de estas instituciones, las Fuerzas Armadas de Colombia también incluyen a la Policía Nacional, que es responsable de mantener el orden y la seguridad ciudadana a nivel nacional.

En este sentido, las Fuerzas Armadas de Colombia son un conjunto de instituciones encargadas de la defensa del país y del mantenimiento del orden interno, y están formadas por el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, así como por la Policía Nacional.

El gasto militar de Colombia se refiere al dinero que el gobierno del país destina a la financiación de las Fuerzas Armadas y de la seguridad y defensa en general. Este gasto incluye el presupuesto asignado a la compra de armamento y equipo militar, la formación y el entrenamiento de los soldados, el mantenimiento de las bases militares y la financiación de operaciones militares y de seguridad.

El gasto militar de Colombia ha fluctuado a lo largo de los años debido a factores como la inflación, el crecimiento económico y los cambios en la política de seguridad y defensa del gobierno. En general, el gasto militar de Colombia ha aumentado en los últimos años debido a la necesidad de hacer frente a problemas como el narcotráfico y los grupos armados ilegales (Votano et al., 2004).

En términos absolutos, el gasto militar de Colombia es relativamente bajo en comparación con otros países de la región y del mundo. Sin embargo, en términos relativos, el gasto militar de Colombia es relativamente alto en comparación con su economía y su población.

En este sentido, el gasto militar de Colombia es el dinero destinado a la financiación de las Fuerzas Armadas y de la seguridad y defensa en general. Este gasto ha fluctuado a lo largo de los años y ha aumentado en los últimos años debido a problemas como el narcotráfico y los grupos armados ilegales. En términos absolutos, el gasto militar de Colombia es relativamente bajo, pero en términos relativos es relativamente alto en comparación con su economía y su población.

A6. Costa Rica

Costa Rica es un país situado en Centroamérica que se caracteriza por su política de no tener ejército ni armas nucleares. En lugar de ello, el país ha optado por invertir en seguridad y defensa de manera pacífica y en el fortalecimiento de instituciones democráticas.

La seguridad y defensa en Costa Rica son responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública, que es el encargado de la seguridad ciudadana y el orden público en el país. El Ministerio cuenta con diversas unidades y cuerpos de seguridad, como la Fuerza Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Dirección de Seguridad Aeroportuaria (DSA).

La Fuerza Pública es el cuerpo encargado de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en Costa Rica. Está formada por unidades de policía, bomberos y personal de protección civil. La DIS es el órgano encargado de la recopilación y análisis de información de inteligencia en materia de seguridad nacional. La DIJ es el órgano encargado de la investigación criminal en Costa Rica y la DSA es el encargado de la seguridad aeroportuaria y de los vuelos en el país.

En cuanto a la defensa, Costa Rica cuenta con una Fuerza Aérea y una Armada, que son responsables de la defensa del espacio aéreo y marítimo del país, respectivamente. Además, Costa Rica participa en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en otras misiones internacionales de mantenimiento de la paz y la estabilidad.

Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que ha optado por no tener ejército. Desde 1949, el país ha adoptado una política de desarrollo basada en la paz y la no violencia, y ha renunciado a la posesión de armas nucleares y a la creación de un ejército. En su lugar, Costa

Rica ha optado por invertir en seguridad y defensa de manera pacífica y en el fortalecimiento de instituciones democráticas (Gonzalvo-Cirac, 2013).

Sin embargo, Costa Rica cuenta con dos fuerzas armadas: la Fuerza Aérea y la Armada. La Fuerza Aérea es el órgano encargado de la defensa del espacio aéreo del país y está formada por unidades de aviación, radares y unidades de mantenimiento. La Armada es el órgano encargado de la defensa del espacio marítimo del país y está formada por unidades navales y unidades de mantenimiento.

Ambas fuerzas armadas tienen como principal objetivo la defensa del territorio costarricense y la protección de sus intereses nacionales. Además, participan en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en otras misiones internacionales de mantenimiento de la paz y la estabilidad.

Es importante señalar que las fuerzas armadas de Costa Rica no tienen como misión principal la seguridad ciudadana ni el mantenimiento del orden público, sino que estas responsabilidades son asumidas por la Fuerza Pública, que es el cuerpo encargado de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público en el país.

En este sentido, las fuerzas armadas de Costa Rica son la Fuerza Aérea y la Armada, y tienen como principal objetivo la defensa del territorio costarricense y la protección de sus intereses nacionales. Aunque no tienen como misión principal la seguridad ciudadana ni el mantenimiento del orden público, participan en misiones de paz y de mantenimiento de la estabilidad en el ámbito internacional.

Costa Rica es uno de los pocos países del mundo que ha optado por no tener ejército y por invertir en seguridad y defensa de manera pacífica y en el fortalecimiento de instituciones democráticas. Aunque Costa Rica cuenta con dos fuerzas armadas, la Fuerza Aérea y la Armada, estas no tienen como principal objetivo la seguridad ciudadana ni el mantenimiento del orden público, sino que estas responsabilidades son asumidas por la Fuerza Pública (Molina, 2007).

En consecuencia, el gasto militar en Costa Rica es relativamente bajo en comparación con otros países. Según datos del Banco Mundial, en el año 2020 el gasto militar como porcentaje del PIB en Costa Rica fue de solo el 0,6%. Esto se debe a que el país ha optado por invertir en seguridad y defensa de manera pacífica y en el fortalecimiento de instituciones

democráticas, en lugar de en un ejército y en la adquisición de armamento militar (Gonzalvo-Cirac, 2013).

Es importante señalar que el gasto militar en Costa Rica no solo incluye el presupuesto destinado a las fuerzas armadas, sino también el presupuesto destinado a la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público. En este sentido, el gasto en seguridad y defensa en Costa Rica es relativamente alto en comparación con otros países de la región, y se ha mantenido en un rango del 8% al 9% del presupuesto total del país en los últimos años. En este sentido, el gasto militar en Costa Rica es relativamente bajo en comparación con otros países, debido a que el país ha optado por invertir en seguridad y defensa de manera pacífica y en el fortalecimiento de instituciones democráticas, en lugar de en un ejército y en la adquisición de armamento militar. Sin embargo, el gasto en seguridad y defensa en Costa Rica es relativamente alto en comparación con otros países de la región.

A7. Cuba

La seguridad y defensa de Cuba son responsabilidad del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), que es el principal órgano encargado de la defensa y seguridad del país. El MINFAR incluye las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), la Fuerza Aérea Revolucionaria (FAR) y la Armada de Guerra Revolucionaria (AGR).

El MINFAR se encarga de la protección del territorio cubano y de sus ciudadanos, así como de la defensa de la independencia y soberanía del país. También es responsable de la seguridad interna y de mantener el orden público.

Las FAR cuentan con un ejército de aproximadamente 300.000 soldados y están equipadas con una variedad de armamento, incluyendo tanques, aviones y barcos. La FAR también incluye una reserva militar de aproximadamente 500.000 soldados.

La Fuerza Aérea Revolucionaria (FAR) cuenta con una flota de aviones de combate y de transporte, así como con helicópteros de ataque y de transporte. La Armada de Guerra Revolucionaria (AGR) cuenta con una flota de barcos de guerra y de transporte.

Cuba también cuenta con un sistema de defensa antimisiles, que incluye radares y sistemas de misiles tierra-aire.

Además de su defensa y seguridad internas, Cuba ha participado en misiones de paz en el extranjero y ha enviado tropas a otros países para apoyar a gobiernos progresistas y a movimientos de liberación nacional. En el pasado, Cuba ha enviado tropas a Angola y a Etiopía para apoyar a gobiernos progresistas y a movimientos de liberación nacional en esos países.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) son el principal componente militar de Cuba y están encargadas de la defensa y seguridad del país. Están bajo el control del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y cuentan con aproximadamente 300.000 soldados.

Las FAR incluyen el Ejército, la Fuerza Aérea Revolucionaria (FAR) y la Armada de Guerra Revolucionaria (AGR). También incluyen una reserva militar de aproximadamente 500.000 soldados.

El Ejército cubano está equipado con una variedad de armamento, incluyendo tanques, aviones y barcos. La FAR cuenta con una flota de aviones de combate y de transporte, así como con helicópteros de ataque y de transporte. La AGR cuenta con una flota de barcos de guerra y de transporte.

Las FAR tienen como objetivo principal proteger el territorio cubano y a sus ciudadanos, así como defender la independencia y soberanía del país. También son responsables de la seguridad interna y de mantener el orden público.

Además de su defensa y seguridad internas, las FAR han participado en misiones de paz en el extranjero y han enviado tropas a otros países para apoyar a gobiernos progresistas y a movimientos de liberación nacional. En el pasado, Cuba ha enviado tropas a Angola y a Etiopía para apoyar a gobiernos progresistas y a movimientos de liberación nacional en esos países.

Es difícil determinar con exactitud el gasto militar de Cuba debido a la falta de transparencia y de información disponible sobre el tema. Sin embargo, se estima que el gobierno cubano dedica una cantidad significativa de su presupuesto a la defensa y seguridad del país.

El gobierno cubano ha afirmado que su política de defensa es defensiva y que no tiene la intención de construir un ejército de gran tamaño ni de invertir en una gran cantidad de armamento. Sin embargo, Cuba cuenta con un ejército de aproximadamente 300.000

soldados y una reserva militar de aproximadamente 500.000 soldados. También cuenta con una flota de aviones y barcos de guerra y un sistema de defensa antimisiles.

Aunque el gobierno cubano ha afirmado que su política de defensa es defensiva, ha participado en misiones de paz en el extranjero y ha enviado tropas a otros países para apoyar a gobiernos progresistas y a movimientos de liberación nacional. En el pasado, Cuba ha enviado tropas a Angola y a Etiopía para apoyar a gobiernos progresistas y a movimientos de liberación nacional en esos países.

Es importante tener en cuenta que Cuba es un país con una economía relativamente pequeña y que enfrenta una gran cantidad de desafíos económicos. Aunque es difícil determinar con precisión el gasto militar de Cuba, es probable que el gobierno dedique una cantidad significativa de su presupuesto a la defensa y seguridad del país.

A8. Ecuador

El Ecuador es un país situado en Sudamérica que cuenta con una serie de medidas de seguridad y defensa para proteger su territorio y a sus ciudadanos. La defensa del Ecuador es responsabilidad del Ministerio de Defensa Nacional, mientras que la seguridad es responsabilidad del Ministerio del Interior (Ordóñez y Cruz, 2017).

El ejército ecuatoriano es el encargado de la defensa del país y está compuesto por unidades terrestres, navales y aéreas. El ejército ecuatoriano también tiene un papel importante en tareas de seguridad interna, como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El Ecuador también cuenta con una policía nacional, encargada de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público. La policía ecuatoriana está dividida en diferentes unidades, como la policía de tránsito, la policía turística y la policía científica.

Además de estas medidas de seguridad y defensa, el Ecuador también cuenta con una serie de tratados y acuerdos internacionales para proteger su territorio y garantizar la paz en la región. Por ejemplo, el Ecuador es miembro de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), que busca promover la cooperación y la integración regional en temas de seguridad y defensa.

En este sentido, el Ecuador cuenta con un ejército y una policía nacional para proteger su territorio y a sus ciudadanos, y también participa en acuerdos internacionales para promover la paz y la seguridad en la región.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador son el conjunto de instituciones encargadas de la defensa del país. Están formadas por el Ejército ecuatoriano, la Armada y la Fuerza Aérea Ecuatoriana (Comando de Educación y Doctrina Militar Aeroespacial, 2018).

El Ejército ecuatoriano es el encargado de la defensa terrestre del país y está dividido en diferentes unidades, como infantería, artillería, ingenieros y comunicaciones. También tiene un papel importante en tareas de seguridad interna, como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

La Armada ecuatoriana se encarga de la defensa naval del país y está formada por unidades de superficie, submarinos y aviación naval. La Armada ecuatoriana también tiene un papel importante en la protección de las costas y el comercio marítimo del país.

La Fuerza Aérea ecuatoriana se encarga de la defensa aérea del país y está formada por unidades de aviación militar y unidades de defensa antiaérea. La Fuerza Aérea ecuatoriana también tiene un papel importante en tareas de transporte y apoyo logístico para las otras dos ramas de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, las Fuerzas Armadas del Ecuador son el conjunto de instituciones encargadas de la defensa del país y están formadas por el Ejército ecuatoriano, la Armada y la Fuerza Aérea ecuatoriana. Cada una de estas ramas tiene un papel específico en la defensa del país y en tareas de seguridad interna.

El gasto militar en Ecuador es el dinero que se destina a financiar las Fuerzas Armadas y las actividades relacionadas con la defensa del país. Este gasto incluye el pago de salarios y beneficios a los militares, la adquisición de armamento y equipo militar, y el mantenimiento de infraestructuras y bases militares (Lorenzo et al., 2020).

El gasto militar en Ecuador ha fluctuado en los últimos años. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador se situó en el 1,3% en 2018, lo que representa un aumento respecto a los años anteriores. No obstante, todavía se encuentra por debajo de la media de la región, que en 2018 fue del 1,8%.

El gasto militar en Ecuador también ha sido objeto de controversia en algunos casos. Algunos observadores han cuestionado la efectividad y la transparencia en el uso de los fondos militares y han propuesto un mayor control y rendición de cuentas.

En este sentido, el gasto militar en Ecuador es el dinero destinado a financiar las Fuerzas Armadas y las actividades relacionadas con la defensa del país. Ha fluctuado en los últimos años y ha sido objeto de controversia en algunos casos.

A9. El Salvador

El Salvador es un país ubicado en Centroamérica que ha enfrentado diversos problemas de seguridad y defensa durante su historia reciente. Durante la década de 1980, el país estuvo inmerso en una guerra civil que duró más de 10 años y dejó miles de muertos y desplazados. Desde el fin de la guerra, el país ha enfrentado problemas de violencia criminal y delincuencia organizada, especialmente en la forma de pandillas o maras.

Para abordar estos problemas de seguridad, el gobierno de El Salvador ha implementado diversas medidas, tales como la creación de una policía nacional y una fuerza militar modernizada. También ha trabajado en programas de prevención de la violencia y en políticas de desarrollo económico y social para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir los factores que contribuyen a la violencia.

Además, El Salvador ha participado en diversas iniciativas regionales e internacionales para abordar problemas de seguridad y defensa, incluyendo la cooperación con otros países de la región en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.

Es importante destacar que la seguridad y la defensa son responsabilidades compartidas por el gobierno, la sociedad y la comunidad internacional, y que la solución a los problemas de seguridad en El Salvador requerirá un esfuerzo sostenido y un abordaje integral que incluya medidas de prevención y solución de conflictos, además de políticas económicas y sociales que fomenten el desarrollo sostenible y la estabilidad a largo plazo.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador son el cuerpo militar del gobierno de El Salvador y están compuestas por el Ejército de El Salvador, la Armada de El Salvador y la Fuerza Aérea de El Salvador.

El Ejército de El Salvador es el cuerpo militar principal y está encargado de la defensa del país y la protección de sus intereses nacionales. La Armada de El Salvador es responsable de la protección de las costas y el patrimonio marítimo del país, mientras que la Fuerza Aérea de El Salvador se encarga de la protección del espacio y el apoyo aéreo a las operaciones militares.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador tienen una historia larga y controversia. Durante la guerra civil que se libró en el país durante la década de 1980, las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en numerosos abusos a los derechos humanos y violaciones de las leyes de la guerra. Desde el fin de la guerra, las Fuerzas Armadas han trabajado en un proceso de reforma y modernización, incluyendo la implementación de programas de derechos humanos y la creación de una policía nacional para abordar problemas de seguridad interna.

En la actualidad, las Fuerzas Armadas de El Salvador siguen siendo una institución importante en el país y participan en operaciones de mantenimiento de la paz y otras misiones internacionales, además de su responsabilidad principal de la defensa del país.

El gasto militar de El Salvador es el dinero destinado por el gobierno para financiar las actividades de las Fuerzas Armadas y la defensa del país. En general, el gasto militar representa una parte relativamente pequeña del presupuesto total del gobierno, aunque su proporción puede variar dependiendo de las circunstancias políticas y económicas del país.

El gasto militar de El Salvador ha fluctuado significativamente a lo largo de su historia reciente. Durante la guerra civil que se libró en el país durante la década de 1980, el gasto militar aumentó significativamente debido a la necesidad de financiar las operaciones militares y el equipo. Desde el fin de la guerra, el gasto militar ha disminuido gradualmente, aunque ha habido algunos aumentos puntuales en momentos de crisis o inestabilidad.

En términos absolutos, el gasto militar de El Salvador sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros países de la región y a nivel internacional. Según datos del Banco Mundial, en 2019 el gasto militar de El Salvador representó alrededor del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo que se sitúa por debajo de la media de la región de América Latina y el Caribe, que es del 1,5% del PIB.

A10. Guatemala

La seguridad y defensa de Guatemala son responsabilidad del gobierno y están a cargo de diversas instituciones, como el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa Nacional. En términos de seguridad interna, Guatemala ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, incluyendo una alta tasa de violencia y delincuencia, especialmente en las áreas urbanas. La violencia armada, el tráfico de drogas y el secuestro son algunos de los problemas más graves en el país. Además, Guatemala también ha enfrentado problemas de corrupción e impunidad en el sector de la seguridad.

Para abordar estos problemas, el gobierno ha implementado varias medidas, como el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la mejora de la coordinación entre ellas. También se han llevado a cabo esfuerzos para mejorar la capacidad de investigación y el enfoque en la prevención del delito. Sin embargo, muchos ciudadanos todavía sienten que no están seguros en sus hogares y en las calles, y es importante que el gobierno siga trabajando para mejorar la seguridad en el país.

En términos de defensa, Guatemala es miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y mantiene relaciones militares con varios países de América Latina y el Caribe. La Fuerza de Defensa Nacional de Guatemala está compuesta por tres ramas: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Estas fuerzas tienen como principal responsabilidad la protección del territorio y la soberanía del país. Además, también participan en misiones de paz en el extranjero y en operaciones de ayuda humanitaria dentro del país.

Las Fuerzas Armadas de Guatemala están compuestas por tres ramas: el Ejército de Guatemala, la Fuerza Aérea de Guatemala y la Armada de Guatemala. Juntas, estas fuerzas tienen como principal responsabilidad la protección del territorio y la soberanía del país.

El Ejército de Guatemala es el cuerpo principal de las Fuerzas Armadas y se encarga de la defensa terrestre del país. Está compuesto por unidades de infantería, artillería, ingenieros y otras especialidades. La Fuerza Aérea de Guatemala se encarga de la defensa aérea del país y está compuesta por unidades de aviación y defensa aérea. La Armada de Guatemala se encarga de la defensa naval del país y está compuesta por unidades de infantería de marina y unidades navales.

Además de su responsabilidad principal de proteger el territorio y la soberanía del país, las Fuerzas Armadas de Guatemala también participan en misiones de paz en el extranjero y en operaciones de ayuda humanitaria dentro del país. También colaboran con otras instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales en la lucha contra el tráfico de drogas y otras actividades ilegales.

Es importante señalar que, en el pasado, las Fuerzas Armadas de Guatemala han sido responsables de violaciones a los derechos humanos durante períodos de conflicto armado interno y dictadura militar. Sin embargo, en los últimos años se ha llevado a cabo un proceso de reforma y modernización de las Fuerzas Armadas con el objetivo de promover la democracia y el respeto a los derechos humanos.

El gasto militar de Guatemala es el dinero que el gobierno destina a la defensa y seguridad del país. Esto incluye el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas de Guatemala (Ejército, Fuerza Aérea y Armada), así como al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Defensa Nacional.

El gasto militar de Guatemala ha fluctuado en los últimos años. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del producto interno bruto (PIB) del país fue del 1,5% en 2018, del 1,3% en 2017 y del 1,2% en 2016. Esto significa que el gobierno de Guatemala destinó aproximadamente el 1,5% de su PIB a la defensa y seguridad en 2018.

A11. Haití

Haití es un país ubicado en el Caribe que ha enfrentado una serie de desafíos en cuanto a la seguridad y la defensa. A lo largo de su historia, el país ha sufrido conflictos políticos, violencia y desastres naturales que han afectado su estabilidad y seguridad.

En términos de defensa, Haití cuenta con un ejército y una policía nacional, pero estos cuerpos de seguridad han sido criticados por su falta de capacitación y su historial de violaciones a los derechos humanos. Además, el país ha enfrentado problemas de seguridad interna debido a la presencia de grupos armados no estatales y la violencia en algunas áreas urbanas.

En términos de seguridad externa, Haití también ha enfrentado desafíos, como el tráfico de drogas y la inmigración ilegal desde países vecinos. Además, el país ha tenido que lidiar con

la influencia de países extranjeros en su política y economía, lo que ha contribuido a la inestabilidad y la inseguridad en algunas áreas.

A pesar de estos desafíos, Haití ha trabajado para mejorar su seguridad y defensa a través de la implementación de reformas políticas y la cooperación con organizaciones internacionales. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad y la estabilidad del país a largo plazo.

Las fuerzas armadas de Haití son responsables de la defensa del país y están compuestas por el ejército y la policía nacional. El ejército de Haití, también conocido como la Fuerza Armada Nacional (FAN), fue creado en 1804 después de la independencia del país y ha tenido un papel importante en la historia de Haití.

El ejército ha sido criticado por su historial de violaciones a los derechos humanos y su participación en conflictos políticos y golpes de Estado. A pesar de esto, el ejército ha trabajado en la implementación de reformas y ha participado en misiones de paz internacionales, como la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (MINUSTAH), que fue establecida por la ONU en 2004 para ayudar a estabilizar el país después de un golpe de Estado.

La policía nacional de Haití, también conocida como la PNH, es responsable de mantener el orden público y proteger a la población. Aunque la policía ha trabajado en la implementación de reformas y ha recibido apoyo internacional, también ha sido criticada por su falta de capacitación y su historial de violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, las fuerzas armadas de Haití han enfrentado desafíos históricos y continúan luchando por mejorar su capacidad y credibilidad. Sin embargo, han trabajado en la implementación de reformas y han participado en misiones de paz internacionales para contribuir a la estabilidad del país.

Es difícil determinar el gasto militar exacto de Haití, ya que no se proporcionan cifras oficiales de manera regular. Según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), en 2019, el gasto militar de Haití fue de alrededor de 20 millones de dólares estadounidenses. Esto representó aproximadamente el 0,3% del PIB del país y el 0,7% del gasto total en defensa y seguridad.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar de Haití es relativamente bajo en comparación con otros países de la región y en el mundo. Además, el país enfrenta desafíos

económicos y sociales significativos, por lo que el gasto en defensa y seguridad no es una prioridad para el gobierno.

En general, el gasto militar en Haití se utiliza principalmente para financiar la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la policía nacional (PNH), así como para adquirir equipo y materiales militares. Sin embargo, también se destina una parte del presupuesto a la cooperación internacional y a la participación en misiones de paz.

A12. Honduras

Honduras es un país en América Central que ha enfrentado desafíos de seguridad y defensa durante muchos años. La violencia y la inseguridad han sido un problema persistente, especialmente en las áreas urbanas más grandes como Tegucigalpa y San Pedro Sula. El narcotráfico y el tráfico de personas han contribuido a la inseguridad en el país.

El gobierno de Honduras ha tomado medidas para mejorar la seguridad y la defensa del país. Esto incluye la creación de unidades especiales de seguridad y la implementación de programas de lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas. Además, el gobierno ha trabajado para fortalecer la capacidad de la policía y el ejército para hacer frente a estos desafíos de seguridad.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la seguridad y la defensa siguen siendo un problema en Honduras. La violencia y la inseguridad continúan siendo una preocupación para muchos hondureños, y el país ha enfrentado una serie de conflictos políticos y sociales en los últimos años. Para abordar estos problemas de manera efectiva, es necesario un enfoque integral que incluya medidas tanto de corto como de largo plazo, y que involucre tanto al gobierno como a la sociedad civil. En este sentido, la seguridad y la defensa son problemas complejos y multifacéticos en Honduras y requieren un esfuerzo sostenido y coordinado para abordarlos de manera efectiva.

Las Fuerzas Armadas de Honduras son el conjunto de instituciones militares del país, que incluyen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estas instituciones tienen como principal misión proteger la soberanía y la integridad territorial de Honduras y garantizar la seguridad y la defensa del país.

El Ejército de Honduras es el principal componente de las Fuerzas Armadas y se encarga de la defensa terrestre del país. La Armada de Honduras tiene responsabilidades marítimas y fluviales, mientras que la Fuerza Aérea se encarga de la defensa aérea y de apoyo a las operaciones militares en tierra.

Además de sus responsabilidades militares, las Fuerzas Armadas de Honduras también tienen un papel en la seguridad interna del país y colaboran con otras instituciones en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas. También participan en operaciones de búsqueda y rescate y en tareas de apoyo a la comunidad, como la distribución de suministros en caso de desastres naturales.

En este sentido, las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución importante en el país y tienen la responsabilidad de proteger la soberanía y la integridad territorial de Honduras y garantizar la seguridad y la defensa del país. Además, tienen un papel en la seguridad interna y en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas y participan en operaciones de búsqueda y rescate y en tareas de apoyo a la comunidad.

El gasto militar en Honduras es un tema de debate en el país. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del producto interno bruto (PIB) de Honduras ha fluctuado en los últimos años, pero ha estado en aumento en general desde mediados de la década de 2000. En 2019, el gasto militar como porcentaje del PIB fue del 1,8%, lo que representa un aumento del 0,3% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, el gobierno de Honduras argumenta que el gasto militar es necesario para hacer frente a los desafíos de seguridad y defensa del país. Esto incluye la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas, así como la protección de la soberanía y la integridad territorial del país.

En este sentido, el gasto militar en Honduras es un tema controvertido y complejo. Mientras algunos argumentan que es necesario para proteger el país y hacer frente a los desafíos de seguridad, otros sostienen que el dinero podría ser utilizado de manera más efectiva en otras áreas y que hay preocupaciones sobre la posible corrupción o el uso ineficiente de los fondos.

A13. México

El gobierno de México se ha enfocado en fortalecer la seguridad del país a través de una serie de medidas y políticas.

Una de las principales prioridades del gobierno en materia de seguridad es combatir la violencia y el crimen organizado. Esto se ha logrado a través de un enfoque de seguridad integral que incluye el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la implementación de medidas de prevención del delito y el apoyo a los esfuerzos de reforma judicial y penal.

Otra prioridad importante es la defensa del país y la protección de su soberanía. Para ello, México cuenta con una Fuerza Armada Nacional que se encarga de la defensa del país y de mantener la paz y la estabilidad en su territorio. La Fuerza Armada Nacional también colabora con otras instituciones y organismos internacionales en operaciones de mantenimiento de la paz y en el desarrollo de proyectos de cooperación.

Además de la Fuerza Armada Nacional, México cuenta con una policía federal y un sistema de seguridad pública estatal y municipal que se encargan de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público.

En este sentido, la seguridad y defensa son prioridades importantes para el gobierno de México y se están llevando a cabo una serie de medidas para fortalecerlas. Esto incluye el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la lucha contra la violencia y el crimen organizado, y la protección de la soberanía del país a través de la defensa nacional.

Las Fuerzas Armadas de México son el conjunto de instituciones encargadas de la defensa del país y del mantenimiento de la paz y la estabilidad en su territorio. Están compuestas por el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana.

El Ejército Mexicano es la institución encargada de la defensa terrestre del país y se divide en tres ramas: infantería, artillería e ingeniería. La Armada de México es la institución encargada de la defensa naval del país y está formada por la Marina de Guerra y la Armada de Altamira. La Fuerza Aérea Mexicana es la institución encargada de la defensa aérea del país y está formada por la Aviación Militar y la Fuerza Aérea Civil.

Las Fuerzas Armadas de México también tienen responsabilidades en materia de seguridad pública y apoyan a otras instituciones en la lucha contra el crimen y la violencia. Además,

colaboran con otras instituciones y organismos internacionales en operaciones de mantenimiento de la paz y en el desarrollo de proyectos de cooperación.

Las Fuerzas Armadas de México tienen una gran responsabilidad en la defensa y seguridad del país y son una institución muy respetada y valorada por la población mexicana.

El gasto militar de México es el monto de dinero que el gobierno destina a la defensa y seguridad del país. Esto incluye el gasto en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, la adquisición de equipo y armamento, y la realización de actividades y proyectos relacionados con la defensa y seguridad.

El gasto militar de México ha sido un tema de debate y ha variado significativamente a lo largo de los años. En los últimos años, el gobierno ha incrementado el gasto militar para fortalecer la seguridad del país y combatir la violencia y el crimen organizado. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de México aumentó significativamente entre 2009 y 2018, pasando de alrededor de 5.000 millones de dólares a más de 9.000 millones de dólares.

Sin embargo, el gasto militar de México sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros países de América Latina y el Caribe. Según el SIPRI, el gasto militar de México representa alrededor del 0,9% del PIB del país, lo que lo coloca en un lugar intermedio entre países de la región. En comparación, el gasto militar de Brasil representa alrededor del 1,4% del PIB, mientras que el de Colombia representa alrededor del 2,1% del PIB.

En este sentido, el gasto militar de México ha aumentado significativamente en los últimos años para fortalecer la seguridad del país y combatir la violencia y el crimen organizado. Sin embargo, sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros países de América Latina y el Caribe.

A14. Nicaragua

Nicaragua es un país de América Central que ha enfrentado desafíos en cuestiones de seguridad y defensa durante muchos años. La violencia y el extremismo político han sido problemas significativos en el pasado, y el país ha sufrido de varios conflictos internos y tensiones internacionales.

El gobierno de Nicaragua se encarga de la seguridad y defensa del país a través de varias instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas de Nicaragua y la policía nacional. Las Fuerzas Armadas de Nicaragua incluyen el ejército, la marina y la fuerza aérea, y su principal responsabilidad es proteger la integridad territorial y la soberanía del país. La policía nacional es responsable de la seguridad y el orden público dentro del país.

Además de estas instituciones, Nicaragua también cuenta con un sistema de seguridad ciudadana que incluye una red de centros de seguridad comunitarios y grupos de autodefensa ciudadana. Estos grupos son apoyados y coordinados por el gobierno y tienen como objetivo mejorar la seguridad y proteger a la población en áreas donde la presencia del gobierno es limitada.

En términos de defensa, Nicaragua es un miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha participado en operaciones de mantenimiento de la paz en el extranjero. El país también ha firmado tratados de defensa y alianzas con otros países de la región.

A pesar de estos esfuerzos, Nicaragua ha enfrentado desafíos significativos en cuestiones de seguridad y defensa en los últimos años. La violencia y el extremismo político han sido problemas significativos en el pasado, y el país ha sufrido de varios conflictos internos y tensiones internacionales. Además, Nicaragua ha enfrentado desafíos en términos de seguridad fronteriza y ha sido objeto de críticas internacionales por su respuesta a la crisis de derechos humanos y la violencia política en el país. A pesar de estos desafíos, el gobierno de Nicaragua ha trabajado para fortalecer sus instituciones de seguridad y defensa y mejorar la seguridad y la estabilidad del país.

Las Fuerzas Armadas de Nicaragua son el conjunto de instituciones militares del país, que incluyen el ejército, la marina y la fuerza aérea. Estas instituciones tienen como principal responsabilidad proteger la integridad territorial y la soberanía de Nicaragua.

El ejército de Nicaragua es el componente principal de las Fuerzas Armadas y es responsable de la defensa terrestre del país. Está compuesto por varias unidades, incluyendo infantería, artillería, ingenieros y otros especialistas. La marina de Nicaragua es responsable de la defensa naval y de la protección de las aguas territoriales del país. La fuerza aérea de Nicaragua es responsable de la defensa aérea y tiene una flota de aviones y helicópteros.

Además de su responsabilidad principal de proteger el territorio y la soberanía de Nicaragua, las Fuerzas Armadas también tienen otras responsabilidades, como participar en operaciones

de mantenimiento de la paz en el extranjero y apoyar a las autoridades civiles en tareas de emergencia y desastre. Las Fuerzas Armadas también tienen un papel importante en la formación de los jóvenes nicaragüenses, ya que cuentan con un sistema de educación militar y ofrecen programas de entrenamiento y capacitación para los jóvenes.

A pesar de tener un papel importante en la protección del país, las Fuerzas Armadas de Nicaragua han enfrentado desafíos y críticas en el pasado. Han sido acusadas de violaciones de los derechos humanos y de tomar parte en conflictos políticos y sociales. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno de Nicaragua ha trabajado para fortalecer y modernizar las Fuerzas Armadas y mejorar su capacidad para cumplir con sus responsabilidades.

El gasto militar de Nicaragua es el dinero que el gobierno dedica a la financiación de las Fuerzas Armadas y de otras instituciones relacionadas con la defensa y la seguridad del país. Este gasto incluye el presupuesto para la adquisición de armamento, la formación y el entrenamiento de personal militar, la infraestructura y la construcción de bases militares, entre otras cosas.

El gasto militar de Nicaragua es una parte relativamente pequeña del presupuesto total del gobierno. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar de Nicaragua representó alrededor del 1% del producto interno bruto (PIB) del país en 2019. Esto es significativamente menor que el gasto militar de otros países de la región y del mundo.

El gasto militar de Nicaragua ha fluctuado a lo largo de los años. Durante la guerra civil de los años 1980, el gasto militar del país aumentó significativamente debido a la necesidad de financiar la lucha contra los grupos rebeldes. Desde entonces, el gasto militar ha disminuido a niveles más bajos, aunque ha habido algunos aumentos en momentos de conflicto o tensión internacional.

A15. Panamá

Panamá es un país ubicado en América Central, que cuenta con una estructura de seguridad y defensa basada en su Constitución y en leyes y regulaciones específicas.

La seguridad y defensa de Panamá son responsabilidad del gobierno y están a cargo de las fuerzas armadas panameñas, que incluyen el Ejército de Panamá, la Fuerza Aérea de Panamá

y la Armada de Panamá. Además, existen otras instituciones encargadas de la seguridad y defensa, como la policía nacional y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

El Ejército de Panamá es el principal componente de las fuerzas armadas y está encargado de la defensa del territorio nacional y de proteger la soberanía del país. La Fuerza Aérea de Panamá es responsable de la defensa aérea y el transporte militar, mientras que la Armada de Panamá se encarga de la defensa marítima y el control de las aguas territoriales.

La policía nacional es la principal fuerza de seguridad civil en Panamá y está encargada de mantener el orden público y proteger a la población. La DIS es una institución encargada de la seguridad y defensa interna del país y de la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves. En general, Panamá ha tenido un historial relativamente estable en términos de seguridad y defensa, aunque en los últimos años ha enfrentado algunos desafíos, como el tráfico de drogas y el aumento de la violencia en algunas áreas urbanas. El gobierno ha tomado medidas para abordar estos problemas y mejorar la seguridad y defensa del país.

Las fuerzas armadas de Panamá son el conjunto de instituciones encargadas de la seguridad y defensa del país. Estas fuerzas están compuestas por el Ejército de Panamá, la Fuerza Aérea de Panamá y la Armada de Panamá.

El Ejército de Panamá es el principal componente de las fuerzas armadas y está encargado de la defensa del territorio nacional y de proteger la soberanía del país. También es responsable de la seguridad interna y de la lucha contra el narcotráfico y otros delitos graves. El ejército panameño cuenta con una fuerza de aproximadamente 15.000 soldados y está dividido en unidades de infantería, artillería, ingenieros, inteligencia y comunicaciones.

La Fuerza Aérea de Panamá es responsable de la defensa aérea del país y del transporte militar. Tiene a su cargo una flota de aviones de combate, aviones de transporte y helicópteros, así como una base aérea en Punta Chame. La fuerza aérea panameña cuenta con una fuerza de aproximadamente 2.000 soldados y oficiales.

La Armada de Panamá se encarga de la defensa marítima y el control de las aguas territoriales de Panamá. Cuenta con una flota compuesta por navíos de guerra, patrulleras y otros barcos de transporte. La armada panameña cuenta con una fuerza de aproximadamente 2.500 soldados y oficiales.

Las fuerzas armadas de Panamá tienen una estructura jerárquica y están lideradas por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que es nombrado por el presidente del país. Las

fuerzas armadas tienen un papel importante en la defensa y seguridad del país y son respetadas y valoradas por la población panameña en general.

El gasto militar de Panamá es el monto de dinero destinado por el gobierno para financiar las actividades de las fuerzas armadas y otras instituciones encargadas de la seguridad y defensa del país. Este gasto incluye el salario de los soldados y oficiales, el mantenimiento y adquisición de equipo militar, y el desarrollo de programas de entrenamiento y capacitación. El gasto militar de Panamá ha fluctuado a lo largo de los años, dependiendo de factores como la situación económica del país y la percepción de amenazas externas o internas. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) de Panamá ha sido del 1,0% al 1,5% durante la última década. Esto significa que el gobierno ha destinado entre el 1% y el 1,5% del total de la producción económica del país para financiar el gasto militar.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar de Panamá también incluye la inversión en programas de seguridad ciudadana y en instituciones encargadas de la seguridad interna, como la policía nacional y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Además, el gobierno también invierte en programas de desarrollo y asistencia social, que tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población y prevenir conflictos y violencia.

A16. Paraguay

La seguridad y defensa de Paraguay son responsabilidad del Estado y están a cargo de las instituciones militares y de seguridad del país. El país cuenta con un ejército, una policía nacional y una fuerza aérea.

El ejército de Paraguay es responsable de la defensa del territorio y de la soberanía del país. Está compuesto por tres ramas: el ejército de tierra, la marina de guerra y la fuerza aérea. El ejército de tierra es el principal componente del ejército y está encargado de la defensa terrestre del país. La marina de guerra es responsable de la defensa naval y la protección de las aguas territoriales paraguayas, mientras que la fuerza aérea es responsable de la defensa y el apoyo aéreo al ejército.

La policía nacional de Paraguay es responsable de mantener el orden público y proteger a la ciudadanía. La policía está dividida en diferentes unidades, como la policía de tránsito, la policía científica y la policía de investigación criminal.

Paraguay es miembro de varias organizaciones internacionales relacionadas con la seguridad y la defensa, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). Además, Paraguay mantiene relaciones militares y de seguridad con otros países de la región y del mundo.

En general, Paraguay es un país relativamente tranquilo y seguro, aunque como en cualquier lugar, pueden presentarse problemas de seguridad en algunas áreas y en ciertos momentos. Es importante tener precaución y seguir las recomendaciones de seguridad del gobierno y las autoridades locales al viajar o residir en el país.

Las Fuerzas Armadas de Paraguay son el conjunto de instituciones militares del país, encargadas de la defensa y seguridad del territorio nacional. Están compuestas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea.

El Ejército de Paraguay es el componente principal de las Fuerzas Armadas y está encargado de la defensa terrestre del país. Se divide en diferentes unidades, como el Cuerpo de Infantería, el Cuerpo de Caballería y el Cuerpo de Artillería. El Ejército cuenta con una fuerza de aproximadamente 20.000 soldados.

La Marina de Guerra de Paraguay es responsable de la defensa naval y la protección de las aguas territoriales paraguayas. Cuenta con una flota compuesta por barcos de guerra, patrulleras y barcos de transporte. La Marina de Guerra tiene una fuerza de aproximadamente 2.000 soldados.

La Fuerza Aérea de Paraguay es responsable de la defensa y el apoyo aéreo al Ejército. Cuenta con una flota de aviones de combate, aviones de transporte y helicópteros. La Fuerza Aérea tiene una fuerza de aproximadamente 3.000 soldados.

Las Fuerzas Armadas de Paraguay tienen una misión principal de defender el territorio y la soberanía del país. También participan en operaciones de mantenimiento del orden público y en actividades de asistencia humanitaria y desarrollo comunitario. Las Fuerzas Armadas tienen una historia de participación en el proceso democrático del país y han sido esenciales en la defensa y seguridad de Paraguay.

El gasto militar de Paraguay es el dinero que el gobierno del país destina a financiar las actividades y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad. El gasto militar incluye el presupuesto destinado a la adquisición de armamento, el mantenimiento de las fuerzas militares, la formación y el desarrollo de personal militar y el pago de salarios y beneficios a los soldados y oficiales.

El gasto militar de Paraguay ha fluctuado a lo largo de los años. Según datos del Banco Mundial, en el año 2020, el gasto militar de Paraguay representó el 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esto significa que el gobierno destinó alrededor del 0,9% de la riqueza total producida en Paraguay a financiar las actividades de las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad.

A17. Perú

La seguridad y defensa de Perú son responsabilidad del Estado y se llevan a cabo principalmente a través del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Armada del Perú. La Fuerza Armada del Perú está compuesta por el Ejército, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú.

El Ejército del Perú se encarga de la defensa territorial y de la seguridad interna del país. La Marina de Guerra del Perú es responsable de la defensa naval y de la protección de las costas y los recursos marítimos del Perú. La Fuerza Aérea del Perú se encarga de la defensa aérea y del control del espacio aéreo del país.

El Perú también cuenta con una policía nacional, la Policía Nacional del Perú, que se encarga de la seguridad y el orden público en todo el país.

El Perú ha enfrentado desafíos de seguridad en el pasado, como el terrorismo y el narcotráfico. Sin embargo, en los últimos años, el país ha logrado disminuir significativamente estos problemas gracias a una mayor colaboración y coordinación entre las fuerzas de seguridad y defensa del país y también debido a la implementación de medidas de seguridad más efectivas.

Las Fuerzas Armadas del Perú están compuestas por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. Cada una de estas fuerzas es responsable de diferentes aspectos de la seguridad y defensa del país.

El Ejército del Perú es el encargado de la defensa territorial y de la seguridad interna del país. Está formado por soldados profesionales y también cuenta con una reserva activa de ciudadanos que pueden ser llamados a filas en caso de emergencia. El Ejército del Perú está dividido en diferentes unidades, como el Ejército de Tierra, el Ejército de Aire y el Ejército de Infantería de Marina.

La Marina de Guerra del Perú es responsable de la defensa naval y de la protección de las costas y los recursos marítimos del Perú. También se encarga de la seguridad de las fronteras marítimas y de la lucha contra el narcotráfico y otros delitos marítimos. La Marina de Guerra del Perú cuenta con una flota compuesta por barcos de guerra, submarinos, aviones y helicópteros.

La Fuerza Aérea del Perú se encarga de la defensa aérea y del control del espacio aéreo del país. También proporciona apoyo a las otras fuerzas armadas y participa en operaciones de seguridad y defensa nacionales. La Fuerza Aérea del Perú cuenta con una flota de aviones de combate, aviones de transporte y helicópteros.

En este sentido, las Fuerzas Armadas del Perú son responsables de la seguridad y defensa del país y están compuestas por el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú. Cada una de estas fuerzas tiene una misión específica y juntas trabajan para proteger a Perú y a sus ciudadanos.

El gasto militar de Perú es el dinero que se destina a financiar las Fuerzas Armadas del Perú y sus actividades. Esto incluye el pago de salarios y beneficios a los soldados y personal militar, el mantenimiento y reparación de equipo y vehículos militares, la adquisición de nuevo equipo y la realización de operaciones militares y de seguridad.

El gasto militar de Perú ha fluctuado a lo largo de los años y ha sido influenciado por factores como la situación política y económica del país, la seguridad interna y externa y las prioridades del gobierno en cuanto a la defensa y la seguridad nacionales.

Según el Banco Mundial, en 2020 el gasto militar de Perú representó el 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esto se comparó con el 1,4% del PIB en 2019 y el 1,5% del PIB en 2018. Estos niveles de gasto militar son relativamente bajos en comparación con otros países de la región y a nivel mundial.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar es solo una parte del presupuesto total del gobierno y que el dinero destinado a la defensa y la seguridad debe ser considerado en el contexto de otros gastos gubernamentales y prioridades nacionales.

A18. República Dominicana.

La República Dominicana es un país situado en el Caribe que comparte una isla con Haití. La seguridad y defensa del país son responsabilidad del gobierno y son abordadas por una serie de instituciones y agencias encargadas de la seguridad nacional y de la defensa.

La Fuerza Armada Nacional Dominicana (FAND) es el principal cuerpo encargado de la defensa del país y está compuesta por las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. La FAND tiene como misión principal proteger la soberanía e integridad territorial del país, así como garantizar la seguridad y estabilidad interna.

Otra agencia importante encargada de la seguridad y defensa del país es la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que es responsable de la lucha contra el tráfico y el consumo de drogas en el país. La DNCD trabaja en estrecha colaboración con otras agencias internacionales y nacionales para combatir el tráfico de drogas y prevenir su consumo.

Además, la República Dominicana cuenta con una policía nacional, la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN), que es responsable de la seguridad ciudadana y de la prevención del delito. La DGPN trabaja en estrecha colaboración con otras agencias de seguridad y defensa del país para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

En este sentido, la seguridad y defensa de la República Dominicana son responsabilidad del gobierno y están a cargo de una serie de instituciones y agencias encargadas de proteger la soberanía e integridad territorial del país, luchar contra el tráfico de drogas y garantizar la seguridad ciudadana y la prevención del delito.

Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (FAND) son el cuerpo encargado de la defensa del país y están compuestas por la Fuerza Armada, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. La FAND tiene como misión principal proteger la soberanía e integridad territorial del país, así como garantizar la seguridad y estabilidad interna.

La Fuerza Armada es el cuerpo de ejército de la República Dominicana y está compuesta por el Ejército de Tierra, la Infantería de Marina y la Artillería. Su misión principal es proteger la soberanía e integridad territorial del país y garantizar la seguridad y estabilidad interna.

La Marina de Guerra es el cuerpo naval de la República Dominicana y está compuesta por la Armada y la Infantería de Marina. Su misión principal es proteger las costas y aguas territoriales del país, así como garantizar la seguridad marítima.

La Fuerza Aérea es el cuerpo aéreo de la República Dominicana y está compuesta por la Aviación y la Fuerza Aérea. Su misión principal es proteger el espacio aéreo del país y garantizar la seguridad aérea.

Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana son responsables de la defensa del país y trabajan en estrecha colaboración con otras agencias de seguridad y defensa del país para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

El gasto militar de la República Dominicana es el dinero destinado al presupuesto de defensa del país y se utiliza para financiar las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, así como para mantener y modernizar su equipo y capacidades.

El gobierno de la República Dominicana es responsable de determinar el monto del gasto militar y los fondos necesarios para cumplir con las necesidades de defensa del país. El gasto militar se financia con recursos públicos y, en algunos casos, con ayuda financiera de otras naciones u organizaciones internacionales.

En términos globales, el gasto militar de la República Dominicana ha sido relativamente bajo en comparación con otros países de la región. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del PIB de la República Dominicana ha fluctuado entre el 0,4% y el 0,9% en los últimos años. Sin embargo, el gobierno ha anunciado planes para aumentar el gasto militar en los próximos años con el fin de modernizar y fortalecer las Fuerzas Armadas.

En este sentido, el gasto militar de la República Dominicana es el dinero destinado al presupuesto de defensa del país y se utiliza para financiar las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. El gobierno es responsable de determinar el monto del gasto militar y ha anunciado planes para aumentarlo en los próximos años con el fin de modernizar y fortalecer las Fuerzas Armadas.

A19. Uruguay

Uruguay es un país relativamente pequeño y tranquilo en Sudamérica, con una historia de neutralidad y paz durante la mayor parte de su historia independiente. La seguridad y defensa del país son responsabilidad del Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), mientras que la seguridad interna es responsabilidad del Ministerio del Interior y la policía uruguaya.

El ejército uruguayo es pequeño y profesional, y se centra en la defensa del país y en la participación en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La FAU es responsable de la defensa aérea y espacial del país y también participa en misiones de paz de la ONU.

Uruguay ha firmado tratados de defensa y cooperación con otros países de la región, como Argentina y Brasil, y también mantiene relaciones militares con países como Estados Unidos y España. El país también es miembro de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En cuanto a la seguridad interna, Uruguay ha experimentado niveles relativamente bajos de violencia y delincuencia en comparación con otros países de Sudamérica. Sin embargo, como en cualquier lugar, hay ciertos problemas de seguridad que el gobierno y la policía deben abordar, como el tráfico de drogas y el tráfico de personas.

En este sentido, la seguridad y defensa de Uruguay son responsabilidad del gobierno y de las fuerzas militares y de seguridad del país. Aunque hay ciertos problemas de seguridad a abordar, en general el país es relativamente seguro y estable y ha mantenido una historia de neutralidad y paz durante gran parte de su historia independiente.

Las Fuerzas Armadas de Uruguay están compuestas por el Ejército Uruguaya, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y la Armada Nacional Uruguaya. Estos tres cuerpos militares trabajan juntos para proteger la soberanía y la integridad del país y para participar en misiones de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Ejército Uruguaya es una fuerza pequeña y profesional que se centra en la defensa del territorio nacional y en la participación en misiones de paz de la ONU. El ejército está dividido en tres ramas: el Ejército de Tierra, el Cuerpo de Ingenieros y el Cuerpo de

Transmisiones. El ejército también cuenta con un cuerpo de reservistas que pueden ser llamados a filas en caso de emergencia.

La FAU es responsable de la defensa aérea y espacial del país y también participa en misiones de paz de la ONU. La FAU cuenta con aviones de combate, aviones de transporte, helicópteros y drones, así como una base aérea y una escuela de aviación.

La Armada Nacional Uruguaya es responsable de la defensa naval del país y también participa en misiones de paz de la ONU. La armada cuenta con barcos de guerra, submarinos, fragatas y patrulleras, así como una base y una escuela navales.

En este sentido, las Fuerzas Armadas de Uruguay son una fuerza profesional y dedicada que trabaja para proteger la soberanía y la integridad del país y para participar en misiones de paz de la ONU. Están compuestas por el Ejército Uruguay, la Fuerza Aérea Uruguay y la Armada Nacional Uruguaya, cada uno de los cuales tiene responsabilidades específicas en cuanto a la defensa del país.

El gasto militar de Uruguay es relativamente bajo en comparación con otros países de Sudamérica y en comparación con el gasto militar global. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de Uruguay en 2020 fue de alrededor de 0,5% del PIB, lo que equivale a unos 710 millones de dólares. Esto lo coloca en el lugar número 82 en el ranking global de gasto militar, por debajo de la mayoría de los países de Sudamérica y del mundo.

El gobierno uruguayo ha adoptado un enfoque de neutralidad y paz durante gran parte de su historia independiente, y ha mantenido un ejército pequeño y profesional en lugar de un ejército masivo y costoso. Además, el país no ha enfrentado conflictos militares internos o internacionales significativos en las últimas décadas, lo que ha permitido a Uruguay mantener un gasto militar relativamente bajo.

En este sentido, el gasto militar de Uruguay es relativamente bajo en comparación con otros países de Sudamérica y el mundo. Esto se debe en parte a un enfoque de neutralidad y paz y a la ausencia de conflictos militares significativos en las últimas décadas, y también a la decisión del gobierno de invertir en otras áreas en lugar de en el ejército. Sin embargo, el gasto militar ha aumentado en los últimos años debido a la necesidad de modernizar y actualizar el equipo militar y las capacidades de defensa del país.

A20. Venezuela

La seguridad y defensa de Venezuela es un tema de gran importancia y preocupación en el país. Venezuela ha enfrentado una serie de desafíos en materia de seguridad y defensa en los últimos años, incluyendo la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el tráfico de personas, la violencia política y el creciente nivel de armamento en manos de grupos criminales.

El gobierno de Venezuela ha tomado medidas para abordar estos problemas, incluyendo la creación de una policía nacional y la implementación de políticas de seguridad ciudadana. Sin embargo, estas medidas han sido cuestionadas por muchos, que argumentan que el gobierno no ha hecho lo suficiente para proteger a la población y que ha utilizado la seguridad ciudadana como una excusa para reprimir la disidencia política.

En términos de defensa, Venezuela cuenta con un ejército y una fuerza aérea, así como con un sistema de defensa antimisiles. Sin embargo, en los últimos años, la capacidad de defensa de Venezuela ha sido cuestionada debido a la falta de inversión y mantenimiento adecuados. Además, Venezuela ha sido objeto de sanciones económicas y de otro tipo por parte de los Estados Unidos y otros países, lo que ha afectado su capacidad para adquirir equipos y tecnología de defensa.

En general, la seguridad y defensa de Venezuela siguen siendo un tema de gran importancia y preocupación en el país y es necesario que se aborden de manera efectiva y equitativa para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela son el conjunto de instituciones encargadas de la defensa y la seguridad del país. Están compuestas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Cada una de estas instituciones tiene su propia misión y responsabilidades, pero todas trabajan juntas para proteger a Venezuela y garantizar la soberanía del país.

El Ejército de Venezuela es el componente terrestre de las Fuerzas Armadas y está encargado de la defensa del territorio nacional. Es responsable de la protección de las fronteras y de la seguridad de las comunicaciones y de los recursos naturales del país. También es responsable de la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas y de brindar asistencia en situaciones de desastre.

La Fuerza Aérea de Venezuela es el componente aéreo de las Fuerzas Armadas y está encargada de la defensa del espacio aéreo nacional y de la protección de los intereses aéreos del país. También es responsable de la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas y de brindar asistencia en situaciones de desastre.

La Armada de Venezuela es el componente naval de las Fuerzas Armadas y está encargada de la defensa de las aguas territoriales y la protección de los intereses navales del país. También es responsable de la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de personas y de brindar asistencia en situaciones de desastre.

En general, las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen como misión principal proteger la soberanía y la integridad del país y garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

El gasto militar de Venezuela es el dinero destinado a la defensa y seguridad del país y se financia con el presupuesto del gobierno. El gasto militar incluye el costo de adquisición de equipos y tecnología de defensa, el mantenimiento y reparación de ese equipo, la formación y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y otros gastos relacionados con la defensa del país.

El gasto militar de Venezuela ha fluctuado en los últimos años debido a la situación económica del país. Durante la era de Hugo Chávez, el gasto militar se incrementó significativamente debido a la adquisición de equipos y tecnología de defensa, principalmente de Rusia y China. Sin embargo, con el colapso económico del país en los últimos años, el gasto militar ha disminuido debido a la falta de recursos y a las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y otros países.

A pesar de la disminución del gasto militar en los últimos años, Venezuela sigue siendo uno de los países con mayor gasto militar en América Latina en términos relativos a su tamaño y su economía. Sin embargo, hay quienes argumentan que el gasto militar no ha sido utilizado de manera efectiva para proteger al país y que ha sido utilizado principalmente para fines políticos y para mantener el poder del gobierno

ANEXO No. 2: Capacidad Estratégica del sector defensa en Latinoamérica

B1. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Argentina

La Constitución de la República Argentina es el documento fundamental que establece la organización y el funcionamiento del Estado y de las instituciones políticas del país. La Constitución establece, entre otras cosas, los derechos y deberes de los ciudadanos, las competencias y responsabilidades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y la estructura y funcionamiento de los diferentes órganos del Estado.

En lo que respecta a las Fuerzas Armadas de Argentina, la Constitución establece que dichas fuerzas tienen como misión principal la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país, así como la garantía de la seguridad y el orden constitucional. Además, establece que las Fuerzas Armadas deben actuar de acuerdo con la ley y a la Constitución, y que están al servicio exclusivo de la Nación y del pueblo argentino.

La Constitución también establece que las Fuerzas Armadas deben estar sometidas a la autoridad civil y que no pueden intervenir en asuntos políticos o civiles, a menos que sean requeridas por la ley para garantizar el cumplimiento de sus misiones y objetivos. Asimismo, establece que las Fuerzas Armadas deben contar con una estructura y una organización adecuadas para el cumplimiento de sus misiones y objetivos, y que deben contar con el equipamiento y el personal necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva y eficiente.

Las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas de Argentina son las capacidades que le permiten a dichas fuerzas cumplir con sus misiones y objetivos de manera efectiva y eficiente. Estas capacidades incluyen, entre otras, el equipamiento militar adecuado, la entrenamiento y capacitación de sus miembros, la infraestructura necesaria para el despliegue y el mantenimiento de sus unidades y sistemas, y la capacidad de llevar a cabo operaciones de manera coordinada y en conjunto con otros componentes del sistema de seguridad y defensa del país.

La Doctrina de las Fuerzas Armadas de Argentina es el conjunto de principios y orientaciones que guían el uso y la actuación de dichas fuerzas en el cumplimiento de sus misiones y

objetivos. Esta doctrina establece, entre otras cosas, los principios básicos de la defensa nacional, las responsabilidades y competencias de las Fuerzas Armadas en relación con la seguridad y defensa del país, y las pautas para el uso de la fuerza y la participación en operaciones militares.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la producción económica de un país. Una tendencia al alza en el PIB suele indicar una economía creciente y próspera, mientras que una tendencia a la baja puede ser un signo de problemas económicos. (Epiro et al., 1981)

En Argentina, la tendencia del PIB ha sido bastante volátil en los últimos años. Después de un fuerte crecimiento en la década de 1990, la economía argentina comenzó a enfrentar dificultades a principios de la década de 2000. Esto se debió a una serie de factores, como el aumento de los precios de las materias primas, la crisis financiera global de 2008 y la devaluación de la moneda. Como resultado, el PIB argentino disminuyó durante este período. Sin embargo, en los últimos años, la economía argentina ha comenzado a recuperarse. A partir de 2016, el PIB comenzó a crecer de nuevo y ha continuado aumentando de manera constante desde entonces. En 2019, el PIB argentino alcanzó un máximo histórico, aunque ha disminuido ligeramente desde entonces debido a la pandemia de COVID-19. (Rocchi Fernando, 2000)

En general, aunque ha habido altibajos en la tendencia del PIB argentino, la economía del país ha mostrado una tendencia al alza en los últimos años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay muchos factores que pueden afectar el crecimiento económico de un país, por lo que es difícil predecir con certeza cómo evolucionará la economía argentina en el futuro.

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la producción económica de un país y el gasto militar es una parte del gasto total del gobierno. En Argentina, el gasto militar ha representado un porcentaje relativamente pequeño del PIB en los últimos años.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, el gasto militar como porcentaje del PIB ha oscilado entre el 0,5% y el 1% en los últimos diez años. En 2019, el gasto militar

representó alrededor del 0,7% del PIB. En comparación, el gasto total del gobierno representó alrededor del 30% del PIB en 2019.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar de un país no solo incluye el costo de mantener y equipar a las fuerzas armadas, sino también el costo de llevar a cabo operaciones militares y el desarrollo de tecnología militar. Aunque el gasto militar de Argentina ha sido relativamente bajo en comparación con otros países, es una parte importante del presupuesto del gobierno y puede tener un impacto significativo en la economía del país.

El gasto de defensa es una parte del presupuesto general del estado de Argentina. Se refiere a los fondos que se destinan a mantener y equipar a las fuerzas armadas del país, así como a llevar a cabo operaciones militares y a desarrollar tecnología militar.

El presupuesto general del estado de Argentina incluye todos los gastos del gobierno, incluyendo el gasto de defensa, el gasto en servicios públicos, el gasto en programas sociales y el gasto en otras áreas. Según datos del Banco Central de la República Argentina, el gasto de defensa ha representado un porcentaje relativamente pequeño del presupuesto general del estado en los últimos años. En 2019, el gasto de defensa representó alrededor del 4,5% del presupuesto general del estado.

Es importante tener en cuenta que el presupuesto general del estado es una herramienta clave para la planificación y la asignación de recursos en un país. Los gobiernos utilizan el presupuesto para financiar servicios públicos esenciales, programas sociales y otras iniciativas que son importantes para el bienestar de la población. El presupuesto también puede ser utilizado para impulsar la economía del país y promover el crecimiento económico. El gasto de defensa es el dinero que un gobierno destina a mantener y equipar a las fuerzas armadas de un país, así como a llevar a cabo operaciones militares y a desarrollar tecnología militar. En Argentina, el gasto de defensa ha representado un porcentaje relativamente pequeño del presupuesto general del estado en los últimos años.

Según datos del Banco Central de la República Argentina, el gasto de defensa como porcentaje del presupuesto general del estado ha oscilado entre el 4% y el 5% en los últimos diez años. En 2019, el gasto de defensa representó alrededor del 4,5% del presupuesto general del estado.

Es importante tener en cuenta que el gasto de defensa de un país puede variar debido a factores como la situación política y militar del país y su nivel de desarrollo económico.

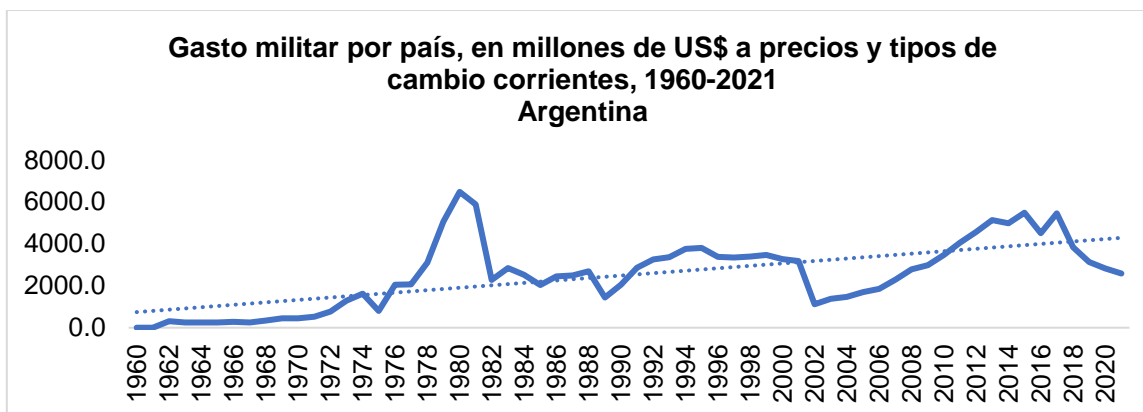
Además, el gasto de defensa puede ser afectado por eventos internacionales y cambios en la política de defensa del gobierno. En general, aunque el gasto de defensa de Argentina ha sido relativamente estable en los últimos años, es posible que cambie en el futuro debido a estos y otros factores (Ferrer, 1999).

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), muestran el gasto militar en millones de dólares estadounidenses a precios y tipos de cambio actuales para Argentina desde 1960 hasta 2021. El gasto militar de Argentina fue relativamente bajo en los años 60, Luego aumentó en los años 70 y alcanzó un pico a principios de los 80 alrededor de 3104 millones de dólares estadounidenses.

Después de eso, disminuyó significativamente hasta el final del siglo. El gasto militar aumentó de nuevo después de 2000 y alcanzó alrededor de 5459 millones de dólares estadounidenses en 2021. Es importante tener en cuenta que estos datos no son completos y no tienen en cuenta factores externos que puedan haber afectado el gasto militar de Argentina durante este período de tiempo, como la guerra o los cambios políticos.

Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes, 1960-2021 de Argentina

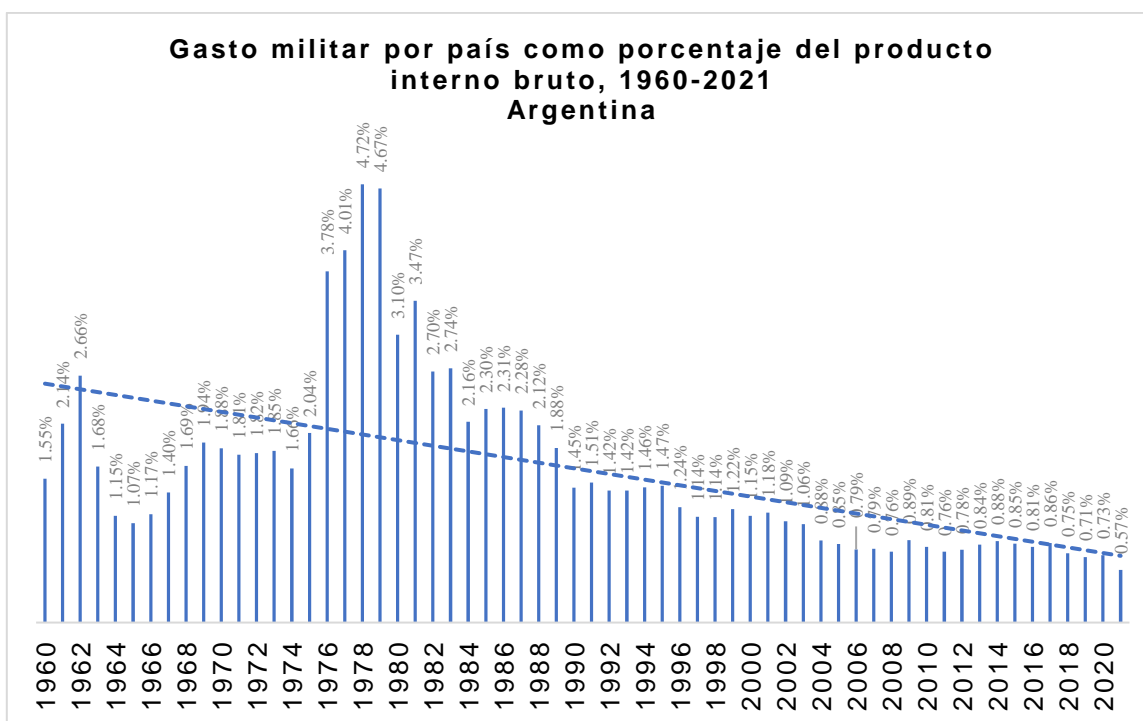


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Por otra parte, analizando el gasto militar de Argentina como porcentaje del producto interno bruto, se puede observar un patrón de fluctuación en el gasto militar. Durante los primeros años, el gasto militar se mantiene en un rango del 1.5% al 2.5% del PIB, con un pico en el año 1978 con un 3.78% del PIB. A partir de ese año, se observa una disminución gradual en el gasto militar, llegando a un mínimo de 0.57% del PIB en el año 2021. Sin embargo, se observan algunos aumentos puntuales en el gasto militar, como en el año 2003, cuando el gasto militar alcanzó el 2.74% del PIB.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Argentina.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B2. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Bolivia

La Constitución Política del Estado de Bolivia es el documento fundamental que establece las normas y principios básicos que rigen la vida política, económica y social del país. Fue promulgada el 6 de febrero de 2009 y reemplazó a la Constitución anterior de 1967.

La Constitución establece la forma de gobierno de Bolivia como una república democrática y plurinacional, y establece los derechos y deberes de los ciudadanos bolivianos. También establece la división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y establece la independencia de estos poderes.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia son el conjunto de instituciones militares que tienen como misión proteger la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como garantizar el orden interno y la seguridad ciudadana. Están compuestas por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, y están bajo el mando del presidente de la República en su calidad de comandante en jefe.

La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben mantener una postura de neutralidad política y no pueden intervenir en asuntos políticos ni tomar parte en actividades políticas. También establece que las Fuerzas Armadas deben estar al servicio de la nación y de la defensa de la Constitución y las leyes, y deben respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Las Fuerzas Armadas de Bolivia son responsables de la defensa del territorio nacional y de la seguridad interna del país. Para cumplir con esta misión, deben contar con una serie de capacidades estratégicas que les permitan enfrentar distintos escenarios y amenazas.

Entre las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas de Bolivia se encuentran:

- **Defensa aérea:** La Fuerza Aérea boliviana cuenta con aviones y helicópteros que le permiten realizar labores de vigilancia y control del espacio aéreo, así como apoyar operaciones terrestres.
- **Defensa naval:** La Armada boliviana cuenta con una flota compuesta por barcos y submarinos que le permiten controlar las aguas territoriales y realizar labores de vigilancia y patrullaje marítimo.

- Defensa terrestre: El Ejército boliviano es responsable de la defensa del territorio nacional y cuenta con unidades de infantería, artillería y unidades especializadas en distintos tipos de terreno.
- Defensa cibernética: Las Fuerzas Armadas bolivianas cuentan con unidades especializadas en la defensa de los sistemas informáticos y de comunicaciones del país.

La doctrina militar de Bolivia se basa en el concepto de defensa integral, que incluye no solo la defensa militar sino también la defensa política, económica y social. Esta doctrina se centra en la protección de la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como en la promoción de la paz y la estabilidad en la región.

Además, la Constitución boliviana establece que las Fuerzas Armadas deben contribuir al desarrollo económico y social del país y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para ello, las Fuerzas Armadas deben participar en proyectos de infraestructura y en labores de asistencia humanitaria y apoyo a la población más vulnerable.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la producción económica de un país y es una de las principales métricas que se utilizan para evaluar el nivel de desarrollo económico de un país. En Bolivia, el PIB ha experimentado fluctuaciones a lo largo de los años debido a diversos factores, incluyendo la fluctuación de los precios de los productos básicos, la inversión extranjera, la inflación y la política económica del gobierno.

En los últimos años, el PIB de Bolivia ha crecido a una tasa anual promedio del 3,8%, aunque ha habido fluctuaciones significativas en ese crecimiento a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2017, el PIB de Bolivia creció un 5,6%, pero en 2018 disminuyó un 2,2%. En 2019, el PIB volvió a crecer, aunque solo un 0,1%. En 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y a la disminución de la demanda por productos básicos, el PIB de Bolivia disminuyó un 6,7%. Es importante tener en cuenta que el PIB es solo una medida de la producción económica y no necesariamente refleja el bienestar de la población. Además, el PIB no incluye el valor de la producción económica no monetaria, como el trabajo doméstico no remunerado o la

producción de bienes y servicios para el consumo propio. Por lo tanto, es importante utilizar otros indicadores, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) o el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), para evaluar el bienestar de la población.

El gasto militar de Bolivia se refiere a los fondos asignados por el gobierno para el mantenimiento y desarrollo de las fuerzas armadas del país. Esto incluye el gasto en personal militar, armamento y equipo, infraestructura y otros gastos relacionados con la defensa nacional.

En Bolivia, el gasto militar ha fluctuado a lo largo de los años. Según datos del Banco Central de Bolivia, el gasto militar como porcentaje del PIB ha fluctuado entre un 0,3% y un 0,8% en los últimos 10 años. En 2020, el gasto militar como porcentaje del PIB fue de un 0,6%.

El gasto en defensa es solo una parte del presupuesto general del estado y suele ser una de las áreas de menor gasto en Bolivia. Según datos del Banco Central de Bolivia, el gasto en defensa como porcentaje del presupuesto general del estado ha fluctuado entre un 3% y un 8% en los últimos 10 años. En 2020, el gasto en defensa como porcentaje del presupuesto general del estado fue del 4,5%.

Es importante tener en cuenta que el presupuesto general del estado es una herramienta importante para el gobierno para asignar los recursos públicos de manera efectiva y asegurar el bienestar de la población. Es necesario encontrar un equilibrio adecuado entre los diferentes gastos y asegurar que se asignen los recursos de manera justa y equitativa.

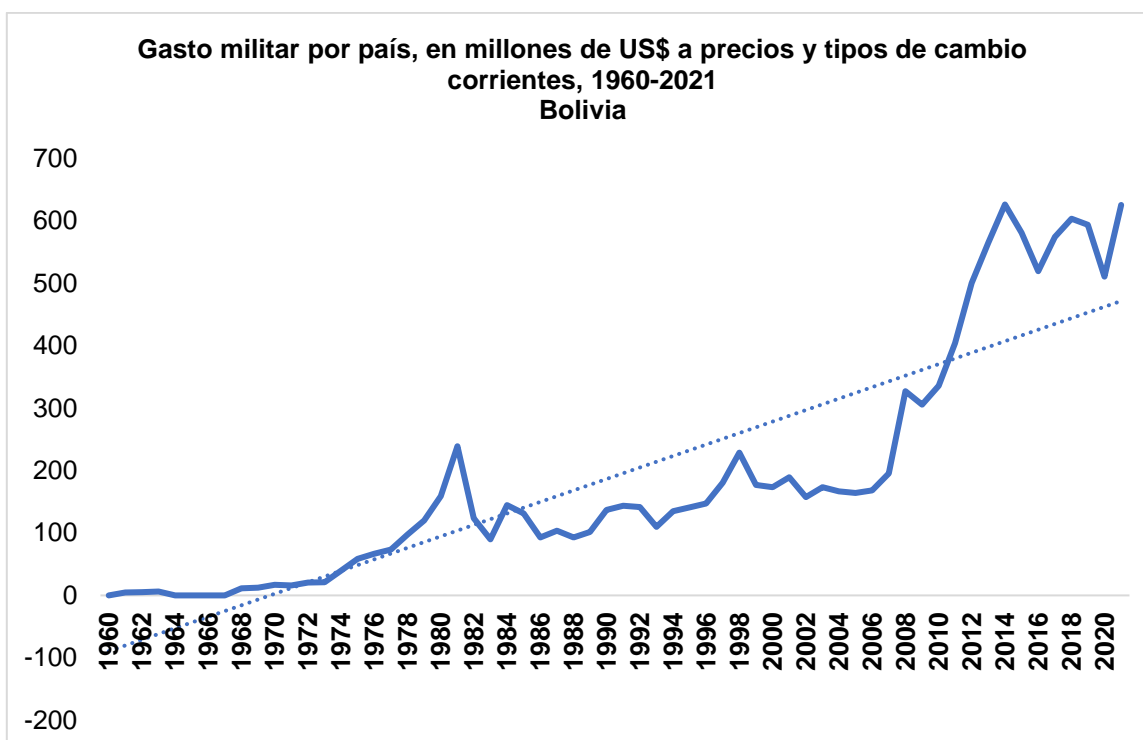
El gasto en defensa de Bolivia se refiere a los fondos asignados por el gobierno para el mantenimiento y desarrollo de las fuerzas armadas del país. El gasto en defensa incluye el gasto en personal militar, armamento y equipo, infraestructura y otros gastos relacionados con la defensa nacional.

En Bolivia, el gasto en defensa ha fluctuado a lo largo de los años. Según datos del Banco Central de Bolivia, el gasto en defensa como porcentaje del PIB ha fluctuado entre un 0,3% y un 0,8% en los últimos 10 años. En 2020, el gasto en defensa como porcentaje del PIB fue de un 0,6%. Es difícil hacer un análisis tendencial del gasto en defensa de Bolivia debido a la fluctuación del gasto a lo largo del tiempo.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), muestran el gasto militar en millones de dólares estadounidenses a precios y tipos de cambio actuales para Bolivia desde 1960 hasta 2021. Desde el análisis el gasto militar de Bolivia fue relativamente bajo en los años 60 y 70, con ningún gasto informado en algunos años. Luego aumentó en los años 80 y alcanzó un pico a principios de los 2000 en alrededor de 625 millones de dólares estadounidenses. Después de eso, disminuyó y se mantuvo relativamente estable alrededor de 500 millones de dólares estadounidenses en los últimos años. Es importante tener en cuenta que estos datos no son completos y no tienen en cuenta factores externos que puedan haber afectado el gasto militar de Bolivia durante este período de tiempo, como la guerra o los cambios políticos.

Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes, 1960-2021 de Bolivia

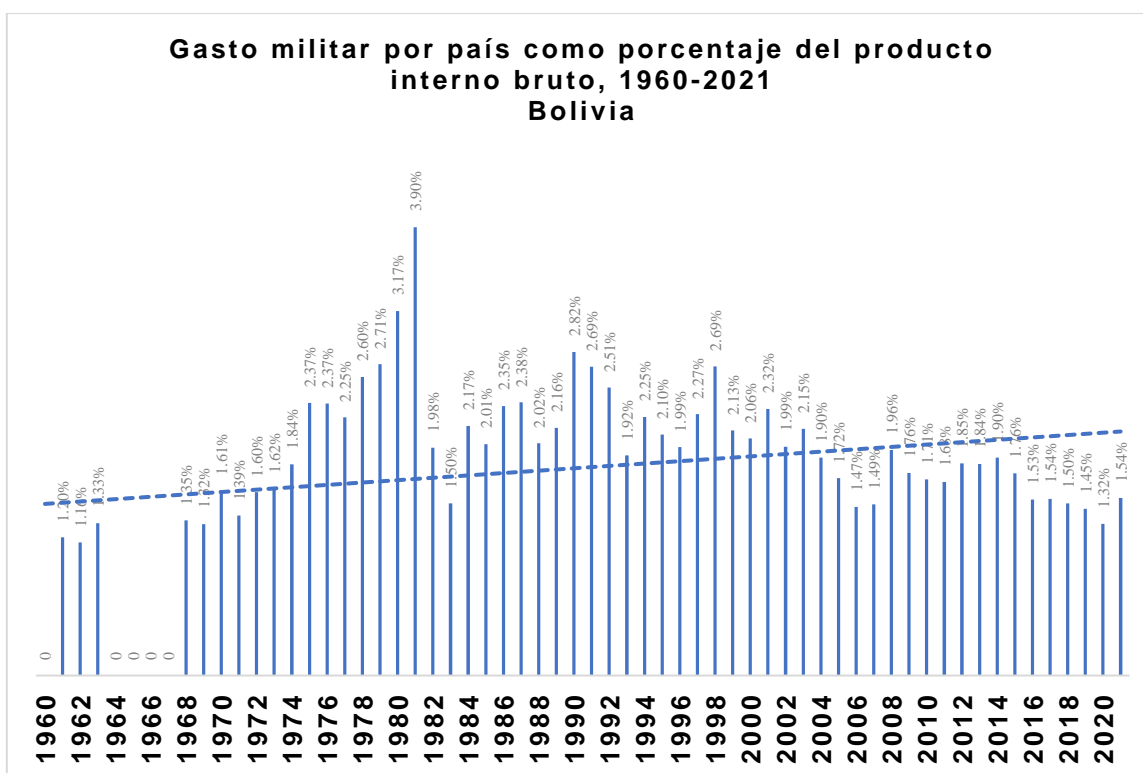


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

De acuerdo con el análisis del Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, Bolivia ha presentado un comportamiento cambiante en los últimos años. Durante la década de 1960, el gasto militar en Bolivia fue cero y permaneció en ese nivel durante varios años. A partir de la década de 1970, se observa un aumento gradual en el gasto militar, alcanzando un punto máximo del 3.90% en la década de 1980. Sin embargo, a partir de ese punto, el gasto militar comienza a disminuir y se mantiene en un rango del 1.5% al 2.5% durante las décadas siguientes. Es importante notar que los datos son solo para los años 1960-2021.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Bolivia.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B3. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Brasil

La Constitución de la República Federativa del Brasil es el documento fundamental del ordenamiento jurídico del Brasil. Es la ley suprema del país y establece las normas básicas de la organización política y social del Estado brasileño. También establece los derechos y deberes de los ciudadanos y define las atribuciones y funciones de los diferentes órganos del Estado.

Las Fuerzas Armadas de Brasil son el conjunto de instituciones militares del país, compuesto por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Su principal responsabilidad es la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Brasil, así como la protección de la población y el orden constitucional. Las Fuerzas Armadas también tienen la tarea de participar en operaciones de mantenimiento de la paz y en operaciones de auxilio a la población en caso de desastres naturales o de otro tipo.

La Constitución establece que las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes y profesionales, y que deben estar subordinadas al gobierno civil. Además, establece que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas y no pueden participar en actividades políticas o de gobierno. Sin embargo, en la práctica, las Fuerzas Armadas han tenido un papel importante en la historia política de Brasil, habiendo participado en varios golpes militares y en el gobierno de facto durante la dictadura militar (1964-1985). Actualmente, las Fuerzas Armadas tienen un papel más restringido en la política y en el gobierno, y su principal responsabilidad es la defensa del país.

Las Fuerzas Armadas de Brasil tienen como objetivo principal la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Brasil, así como la protección de la población y el orden constitucional. Para cumplir con esta misión, las Fuerzas Armadas cuentan con una serie de capacidades estratégicas y siguen una doctrina específica.

Entre las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas de Brasil se encuentran:

- **Defensa aérea:** La Fuerza Aérea de Brasil cuenta con una flota moderna de aviones de combate, aviones de transporte y helicópteros, así como con una red de radares y sistemas de defensa aérea.

- Defensa naval: La Armada de Brasil cuenta con una flota de barcos de guerra, submarinos y navíos de apoyo, así como con una red de radares y sistemas de defensa naval.
- Defensa terrestre: El Ejército de Brasil cuenta con una variedad de vehículos blindados, artillería y otros equipos militares para la defensa terrestre.
- Operaciones de mantenimiento de la paz: Las Fuerzas Armadas de Brasil participan en operaciones de mantenimiento de la paz bajo la autoridad de la ONU y otras organizaciones internacionales.
- Operaciones de auxilio a la población: Las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de brindar auxilio a la población en caso de desastres naturales o de otro tipo.

La doctrina de las Fuerzas Armadas de Brasil se basa en la defensa total del país, es decir, en la protección de todas las dimensiones del territorio nacional, incluyendo el espacio aéreo, el mar territorial y el subsuelo. Además, la doctrina incluye la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz y en operaciones de auxilio a la población. Las Fuerzas Armadas también tienen la responsabilidad de participar en la formación y el desarrollo de los recursos humanos del país, a través de la educación militar y la promoción de la investigación científica y tecnológica.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la economía de un país que mide el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país durante un período de tiempo determinado, generalmente un año. Una tendencia del PIB es un patrón a largo plazo en el crecimiento o declive del PIB de un país.

En el caso de Brasil, el PIB ha experimentado una serie de altibajos en las últimas décadas. En los años 90, el PIB creció a tasas relativamente altas, pero en la década del 2000 experimentó una serie de contracciones y recesiones económicas. Desde 2010, el PIB ha crecido a tasas moderadas, pero ha sido golpeado por la crisis económica de 2015 y la recesión de 2017.

En términos de tendencia a largo plazo, el PIB de Brasil ha crecido a tasas relativamente bajas en comparación con otros países de América Latina y el mundo en general. Sin embargo, hay signos de una posible recuperación económica en el futuro cercano, con el gobierno implementando políticas fiscales y monetarias expansionistas y un aumento en la inversión extranjera directa.

El gasto militar de un país es el dinero que se dedica a financiar las actividades militares del país, incluyendo la adquisición de equipo militar y el pago de soldados y personal militar. El gasto militar es una parte importante del presupuesto de un país y puede tener un impacto significativo en la economía.

En el caso de Brasil, el gasto militar ha sido relativamente bajo en comparación con otros países de América Latina y el mundo en general. Según datos del Banco Mundial, en 2020, el gasto militar de Brasil fue de alrededor de 1,2% del PIB. Esto es significativamente menor que la media mundial, que fue de alrededor del 2,2% del PIB en ese año.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar no es necesariamente un indicador directo del poder o la influencia militar de un país. Otros factores, como la calidad y la capacidad de la fuerza militar, también son importantes.

El gasto de defensa de un país es el dinero que se dedica a financiar las actividades militares del país, mientras que el presupuesto general del estado es una medida de todos los gastos e ingresos del gobierno de un país durante un período de tiempo determinado, generalmente un año.

En el caso de Brasil, el gasto de defensa ha sido relativamente bajo en comparación con otros países de América Latina y el mundo en general. Según datos del Banco Mundial, en 2020, el gasto de defensa de Brasil fue de alrededor de 1,2% del PIB. Esto es significativamente menor que la media mundial, que fue de alrededor del 2,2% del PIB en ese año.

En 2020, el presupuesto general del estado de Brasil fue de alrededor del 38% del PIB. Esto es ligeramente mayor que la media mundial, que fue de alrededor del 33% del PIB en ese año.

El gasto de defensa de un país es el dinero que se dedica a financiar las actividades militares del país. Un análisis tendencial del gasto de defensa de un país implicaría examinar el patrón a largo plazo en el aumento o disminución del gasto de defensa.

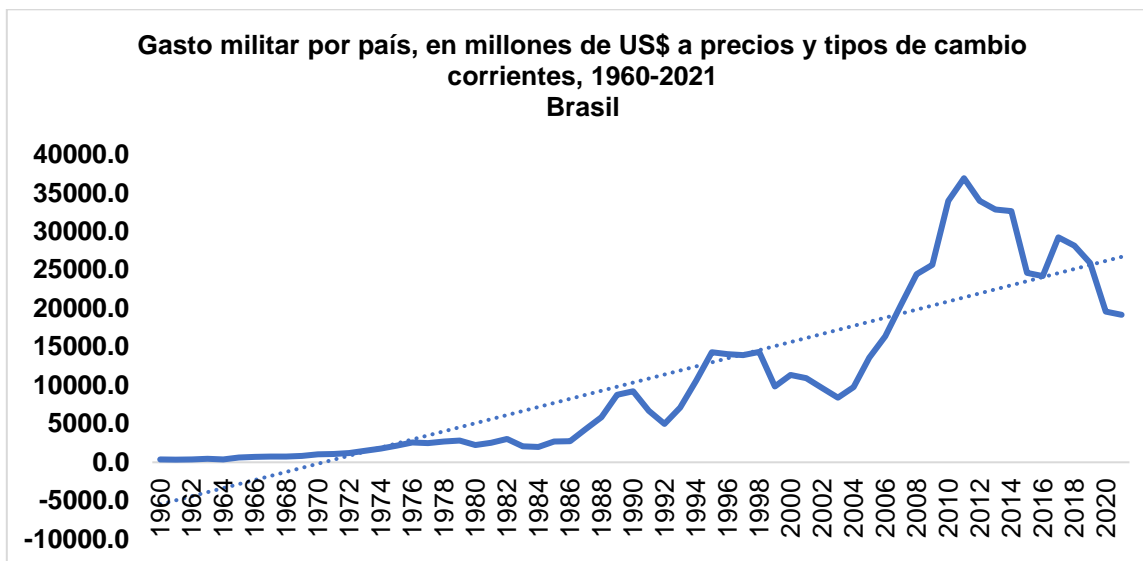
En el caso de Brasil, el gasto de defensa ha sido relativamente bajo en comparación con otros países de América Latina y el mundo en general. Según datos del Banco Mundial, en 2020, el gasto de defensa de Brasil fue de alrededor de 1,2% del PIB. Esto es significativamente menor que la media mundial, que fue de alrededor del 2,2% del PIB en ese año.

A lo largo de los años, el gasto de defensa de Brasil ha fluctuado, pero en general ha sido bastante estable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el gasto de defensa puede ser influenciado por factores externos, como la inestabilidad en la región y las relaciones internacionales del país. Además, el gasto de defensa puede tener un impacto en la economía de un país si disminuye la inversión en otras áreas.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), muestran el gasto militar en millones de dólares estadounidenses a precios y tipos de cambio actuales para Brasil desde 1960 hasta 2021, el gasto militar de Brasil fue relativamente bajo en los años 60 y 70, con gastos fluctuando alrededor de 300-400 millones de dólares estadounidenses. Luego aumentó en los años 80 y alcanzó un pico a principios de los 2000 en alrededor de 14,318.9 millones de dólares estadounidenses. Después de eso, disminuyó significativamente y se mantuvo relativamente estable alrededor de 20,000 millones de dólares estadounidenses en los últimos años. Es importante tener en cuenta que estos datos no son completos y no tienen en cuenta factores externos que puedan haber afectado el gasto militar de Brasil durante este período de tiempo, como la guerra o los cambios políticos.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
1960-2021 de Brasil**



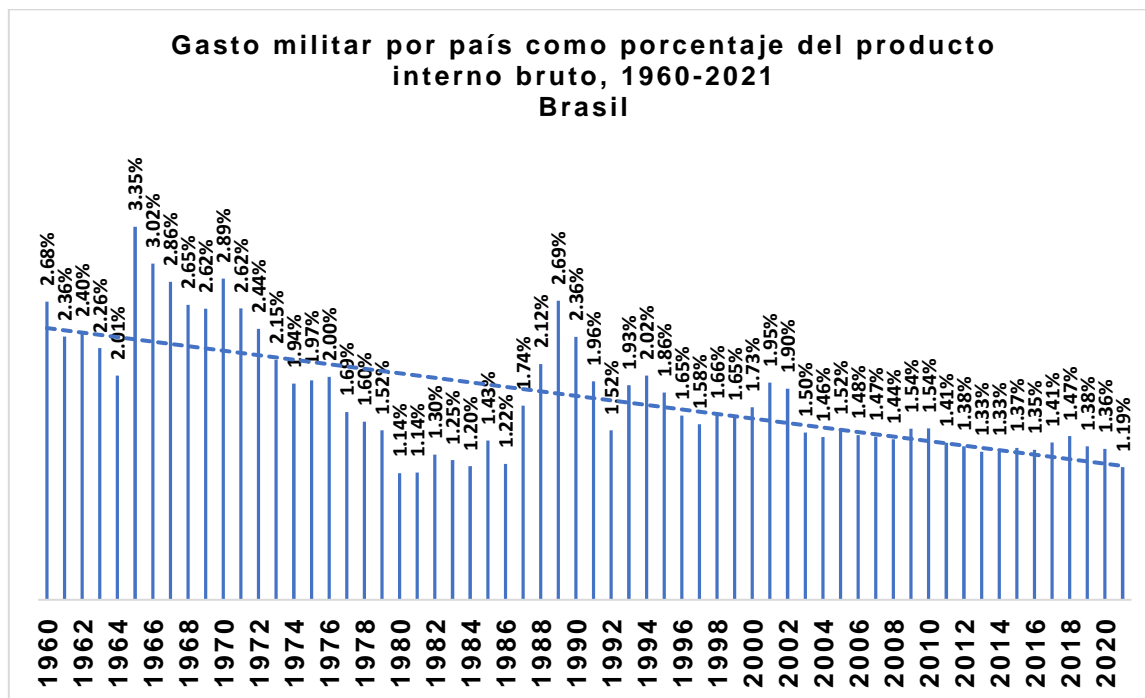
Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

En general, durante el período de 1960 a 2021, el gasto militar de Brasil como porcentaje del PIB fluctuó entre un mínimo del 1.14% en los años 80 y un máximo del 3.35% en los años 60. A pesar de esta fluctuación, en general se observa una tendencia a la baja en el gasto militar como porcentaje del PIB, con una disminución constante a partir de los años 90. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el PIB también fluctúa y puede afectar a los porcentajes. Además, también es importante considerar factores políticos y de seguridad que pueden haber influenciado en el gasto militar en ciertos años.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de

Brasil



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B4. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Chile

La Constitución de la República de Chile es el documento fundamental de la organización política y jurídica de Chile. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la estructura y funcionamiento del gobierno y las instituciones del Estado.

Las Fuerzas Armadas de Chile están compuestas por el Ejército de Chile, la Armada de Chile y la Fuerza Aérea de Chile. Su misión es proteger la soberanía e integridad del país y garantizar la estabilidad y el orden interno. Según la Constitución, las Fuerzas Armadas deben estar al servicio exclusivo de la Nación y sujeto a la autoridad civil. Además, están prohibidas de intervenir en asuntos políticos y deben respetar y proteger los derechos humanos.

Las Fuerzas Armadas de Chile cuentan con una amplia variedad de capacidades estratégicas que le permiten cumplir con su misión de proteger la soberanía e integridad del país y garantizar la estabilidad y el orden interno. Estas capacidades incluyen:

- **Unidades de combate:** Chile cuenta con unidades de infantería, caballería, artillería, ingenieros y otros especialistas que pueden desplegarse rápidamente en caso de emergencia.
- **Armamento moderno:** Las Fuerzas Armadas de Chile tienen acceso a una amplia variedad de armamento moderno, incluyendo aviones de combate, barcos de guerra, vehículos blindados y otras plataformas de defensa.
- **Sistemas de inteligencia y seguridad:** Chile cuenta con una red de sistemas de inteligencia y seguridad que le permiten monitorear y proteger su territorio y sus intereses nacionales.

La doctrina de las Fuerzas Armadas de Chile se basa en la defensa territorial y la protección de la soberanía e integridad del país. Esto incluye la defensa contra amenazas externas y la protección de la población y el territorio nacional en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia. Además, las Fuerzas Armadas tienen como misión participar en operaciones de mantenimiento de la paz y apoyar a otras agencias del gobierno en la protección de los derechos humanos y la promoción de la democracia y el Estado de derecho.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la economía de un país y se calcula como la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en ese país en un período de tiempo determinado, generalmente un año. Un aumento del PIB indica un crecimiento económico, mientras que una disminución indica una contracción económica.

En el caso de Chile, el PIB ha tenido una tendencia general al alza durante las últimas décadas, con algunos períodos de crecimiento más lento y otros de crecimiento más rápido. Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento del PIB ha sido más moderado debido a factores como la desaceleración económica global y los efectos de la pandemia de COVID-19.

Es importante tener en cuenta que el PIB es solo una medida de la actividad económica y no necesariamente refleja el bienestar o la calidad de vida de la población. Otros factores, como el nivel de desempleo, el nivel de inflación y el poder adquisitivo de la moneda, también deben ser considerados al evaluar la situación económica de un país.

El gasto militar de Chile se refiere a los fondos destinados a la defensa nacional y se incluye en el presupuesto del gobierno. El gasto militar puede incluir el costo de adquirir y mantener equipo militar, el pago de salarios y beneficios a los militares y el costo de operaciones militares.

El gasto militar puede tener un impacto en el PIB de un país de varias maneras. En primer lugar, el gasto militar puede contribuir directamente al PIB a través de la producción y el consumo de bienes y servicios relacionados con la defensa. En segundo lugar, el gasto militar también puede tener efectos indirectos en el PIB a través de su impacto en la inversión y el empleo en otras industrias.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar también puede tener efectos negativos en el PIB si disminuye el gasto en otras áreas o si aumenta la deuda del gobierno. Además, el gasto militar puede tener un impacto en el bienestar y la calidad de vida de la población si se destina a proyectos que no tienen un beneficio directo para la sociedad. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente el impacto del gasto militar en la economía y la sociedad en su conjunto.

El presupuesto general del estado de Chile es un documento que establece las previsiones de ingresos y gastos del gobierno para un año fiscal determinado. Los gastos de defensa son solo una parte del presupuesto general del estado y se refieren a los fondos destinados a la defensa nacional.

El presupuesto general del estado es una herramienta importante para planificar y controlar la gestión financiera del gobierno y para asegurar que se están utilizando los fondos de manera eficiente y efectiva. Es importante tener en cuenta que el presupuesto general del estado no es solo un documento contable, sino que también puede tener un impacto en la economía y en la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es importante que se diseñe cuidadosamente y se lleve a cabo de manera responsable.

Es difícil hacer un análisis tendencial del gasto de defensa de Chile sin tener acceso a datos más recientes y detallados. Sin embargo, según informes del Ministerio de Defensa de Chile,

el gasto militar del país ha aumentado en general durante las últimas décadas. En 1993, el gasto militar representó alrededor del 1,2% del PIB de Chile, mientras que en 2017 representó alrededor del 2,5% del PIB.

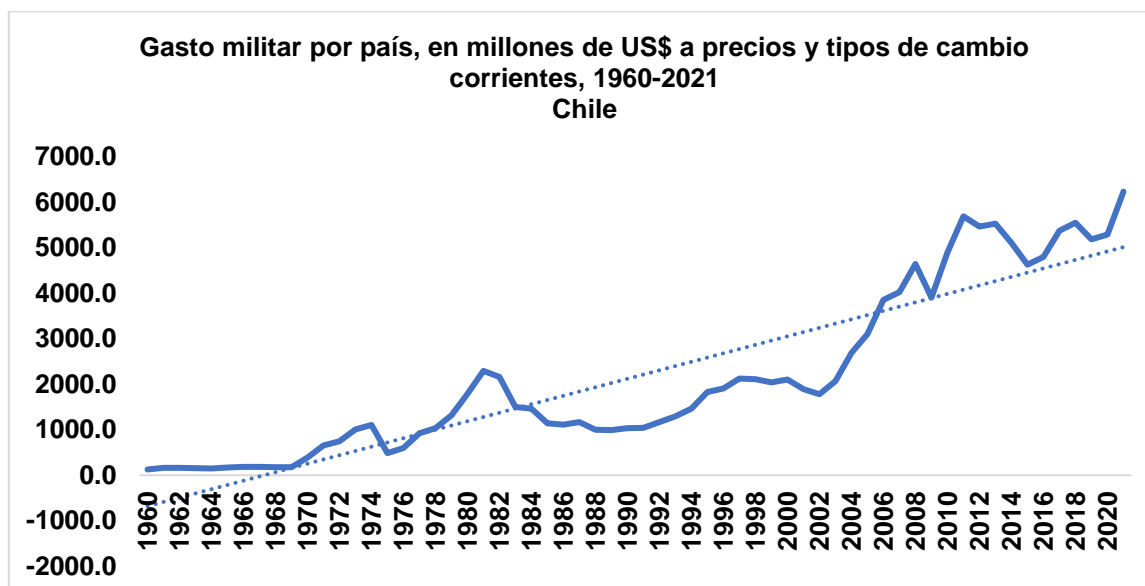
Es importante tener en cuenta que el gasto militar puede verse afectado por factores externos, como la inflación y la evolución del PIB, y por factores internos, como la política del gobierno y la disponibilidad de recursos financieros. Por lo tanto, es posible que el aumento en el gasto militar de Chile durante este período no refleje necesariamente un aumento en la cantidad absoluta de fondos destinados a la defensa, sino más bien un aumento en el porcentaje del PIB destinado a la defensa debido a una disminución en el PIB o a una inflación más alta.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar debe ser evaluado en el contexto de las necesidades de defensa del país y de otros factores, como el impacto en la economía y el bienestar de la población. Por lo tanto, es importante evaluar cuidadosamente el gasto militar y asegurar que se está utilizando de manera responsable y efectiva.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa.

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), muestran el gasto militar en millones de dólares estadounidenses a precios y tipos de cambio actuales para Chile desde 1960 hasta 2021. Desde el análisis el gasto militar de Chile fue relativamente bajo en los años 60 y 70, fluctuando entre 150 y 180 millones de dólares estadounidenses. Luego aumentó significativamente en los años 80, alcanzando un pico a finales de los años 80 en alrededor de 651.6 millones de dólares estadounidenses. Después de eso, disminuyó significativamente y se mantuvo relativamente estable alrededor de 5,000-6,000 millones de dólares estadounidenses en los últimos años.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
1960-2021 de Chile.**



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

El análisis del gasto militar como porcentaje del producto interno bruto de Chile muestra un patrón general de fluctuación a lo largo de los años, con un aumento significativo en la década de 1960 y 1970, y una disminución en las décadas siguientes. Sin embargo, a partir de la década de 2000 se observa un aumento en el gasto militar en comparación con las décadas anteriores, con un promedio del 2% del PIB. En general, se puede ver que el gasto militar ha sido un porcentaje significativo del PIB de Chile a lo largo de los años, pero con cambios notables a lo largo del tiempo. Es importante también mencionar que estos datos son un promedio y pueden variar dependiendo de las situaciones políticas y sociales del país en cada momento.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Chile



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B5. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Colombia

La Constitución de Colombia es el documento fundamental que establece las normas y principios que rigen la organización y funcionamiento del Estado y de la sociedad colombiana. Fue promulgada el 4 de julio de 1991 y es la quinta Constitución que ha tenido Colombia.

Entre sus principales disposiciones, la Constitución establece la división de poderes del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, la organización territorial del país y las bases de la economía y el desarrollo social.

En cuanto a las Fuerzas Armadas de Colombia, estas están compuestas por el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Su principal misión es garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional y proteger la seguridad y el orden constitucional. También tienen como función participar en operaciones de mantenimiento de

la paz y en labores de auxilio y protección a la población en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia.

La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben ser profesionales y permanecer al margen de las actividades políticas y partidistas. Además, señala que deben estar al servicio exclusivo de la Nación y estar bajo el control civil.

Las Fuerzas Armadas de Colombia cuentan con una serie de capacidades estratégicas que les permiten cumplir con sus misiones y objetivos. Algunas de estas capacidades son:

- **Defensa aérea y naval:** Las Fuerzas Armadas cuentan con una amplia variedad de aviones y helicópteros de combate, así como con una flota de buques de guerra y otros medios navales. Esto les permite garantizar la soberanía e integridad del territorio nacional y proteger las rutas marítimas y aéreas.
- **Infantería y fuerzas especiales:** Las Fuerzas Armadas cuentan con una amplia variedad de unidades de infantería y fuerzas especiales altamente capacitadas y equipadas para llevar a cabo operaciones de combate y mantenimiento de la paz en diferentes entornos.
- **Inteligencia y seguridad:** Las Fuerzas Armadas cuentan con unidades y servicios especializados en recopilación y análisis de información para proteger la seguridad y el orden constitucional del país.

En cuanto a la doctrina, esta se refiere a los principios y enfoques que guían el accionar de las Fuerzas Armadas. La doctrina de las Fuerzas Armadas de Colombia se basa en los siguientes principios:

- **Respeto a la Constitución y a los derechos humanos:** Las Fuerzas Armadas deben actuar de acuerdo con los principios y valores establecidos en la Constitución y garantizar el respeto a los derechos humanos.
- **Profesionalismo:** Las Fuerzas Armadas deben ser profesionales y permanecer al margen de las actividades políticas y partidistas.
- **Control civil:** Las Fuerzas Armadas deben estar bajo el control y la dirección del poder civil.

- Cooperación y coordinación con otras instituciones y organismos: Las Fuerzas Armadas deben trabajar en colaboración con otras instituciones y organismos del Estado y de la sociedad para garantizar la seguridad y el bienestar de la población.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El PIB (Producto Interno Bruto) es una medida de la producción económica de un país. Una tendencia alcista del PIB indica que la economía está creciendo, mientras que una tendencia a la baja indica una contracción económica.

En Colombia, el PIB ha mostrado una tendencia alcista en los últimos años, aunque ha habido algunos altibajos. Según el Banco de la República de Colombia, el PIB real creció un 2,6% en 2020, después de un crecimiento del 3,3% en 2019 y del 2,5% en 2018.

Aunque el crecimiento del PIB ha sido moderado en los últimos años, hay algunos factores que podrían impulsar el crecimiento económico en el futuro, como la inversión en infraestructura y el aumento de la demanda de productos colombianos en el mercado internacional. Sin embargo, también hay desafíos a los que debe enfrentarse la economía colombiana, como la incertidumbre política y la inestabilidad económica global.

El gasto militar es una parte del PIB de un país, ya que representa el dinero que se destina a la defensa y al ejército. En Colombia, el gasto militar ha sido un porcentaje significativo del PIB en los últimos años.

Según el Banco de la República de Colombia, el gasto militar como porcentaje del PIB fue del 1,7% en 2020, 1,9% en 2019 y 2,1% en 2018. Esto significa que cerca de una quinta parte del PIB de Colombia se destinó a la defensa y al ejército en esos años.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar no es el único factor que afecta el PIB de un país. Otros factores como la inversión, el consumo y la exportación también pueden tener un impacto en el PIB. Además, el gasto militar puede variar de año en año dependiendo de las necesidades y prioridades del gobierno.

El gasto de defensa es el dinero que se destina a la defensa y al ejército de un país, mientras que el presupuesto general del estado es el conjunto de ingresos y gastos del gobierno de un país en un año determinado.

En Colombia, el gasto de defensa es una parte del presupuesto general del estado. Según el Banco de la República de Colombia, el gasto de defensa como porcentaje del presupuesto general del estado fue del 9,2% en 2020, 9,6% en 2019 y 9,7% en 2018. Esto significa que cerca de una décima parte del presupuesto general del estado de Colombia se destinó a la defensa y al ejército en esos años.

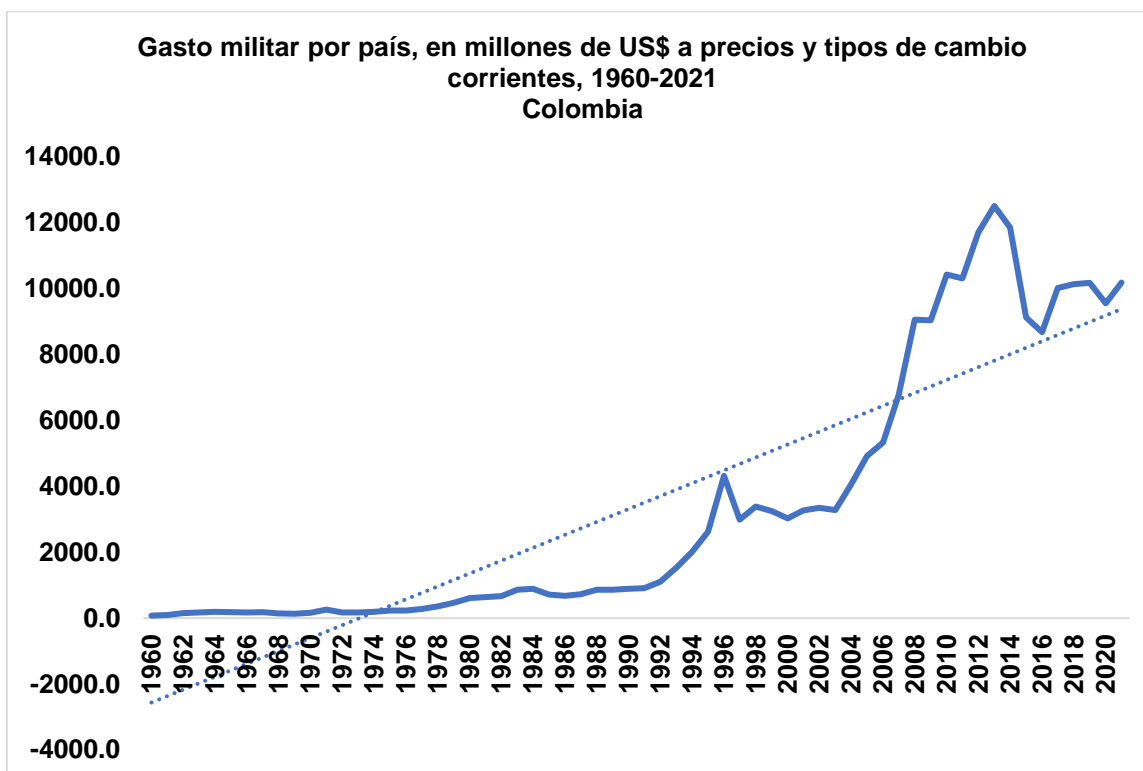
El gasto de defensa es el dinero que se destina a la defensa y al ejército de un país. Una tendencia alcista en el gasto de defensa indica que el gobierno está aumentando la cantidad de dinero que se destina a la defensa, mientras que una tendencia a la baja indica una disminución en el gasto de defensa.

En Colombia, el gasto de defensa ha mostrado una tendencia alcista en los últimos años. Según el Banco de la República de Colombia, el gasto de defensa como porcentaje del PIB fue del 1,7% en 2020, 1,9% en 2019 y 2,1% en 2018. Esto significa que el gobierno de Colombia ha aumentado el dinero que se destina a la defensa y al ejército en los últimos años. Es importante tener en cuenta que el gasto de defensa puede variar de año en año dependiendo de las necesidades y prioridades del gobierno. Además, el gasto de defensa no es el único factor que afecta el PIB de un país. Otros factores como la inversión, el consumo y la exportación también pueden tener un impacto en el PIB.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), muestran el gasto militar en millones de dólares estadounidenses a precios y tipos de cambio actuales para Colombia desde 1960 hasta 2021. Desde el análisis el gasto militar de Colombia fue relativamente bajo en los años 60 y 70, fluctuando entre 100 y 200 millones de dólares estadounidenses. Luego aumentó significativamente en los años 80 y 90, alcanzando su punto máximo a principios de los años 2000 en alrededor de 12,503.8 millones de dólares estadounidenses. Después de eso, disminuyó y se mantuvo relativamente estable en torno a 9,000-10,000 millones de dólares estadounidenses en los últimos años. Es importante tener en cuenta que estos datos no son completos y no tienen en cuenta los factores externos que pueden haber afectado el gasto militar de Colombia durante este período de tiempo, como la guerra o los cambios políticos.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
1960-2021 de Colombia.**



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

El análisis del gasto militar como porcentaje del producto interno bruto de Colombia muestra fluctuaciones a lo largo de los años. Durante los primeros años de 1960 a 1970, el gasto militar representó entre el 1.88% y el 3.52% del PIB. Sin embargo, a partir de 1970, se observa una disminución en el gasto militar con respecto al PIB, llegando a un mínimo de 1.58% en 1975. A partir de ese año, el gasto militar comienza a aumentar nuevamente, alcanzando un punto máximo de 4.45% en 1989. En los años siguientes, el gasto militar se mantiene en un rango entre el 2.8% y el 3.8% del PIB, con fluctuaciones moderadas. En general, se observa que el gasto militar en Colombia ha sido variable a lo largo de los años, con una tendencia general hacia una disminución en su relación con el PIB.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Colombia.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B6. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Costa Rica

La Constitución de Costa Rica es el documento fundamental que rige el ordenamiento jurídico del país. Fue aprobada el 7 de noviembre de 1949 y entra en vigor el 8 de noviembre de ese mismo año. La Constitución establece los derechos y deberes de los ciudadanos, la organización y funcionamiento del Estado, así como las atribuciones y responsabilidades de los poderes del Estado.

Las Fuerzas Armadas de Costa Rica están conformadas por el Ejército de Costa Rica, la Fuerza Aérea Costarricense y la Armada de Costa Rica. Estas instituciones tienen como misión principal la defensa del territorio nacional y la protección de la soberanía del país. Las Fuerzas Armadas de Costa Rica son instituciones profesionales, apolíticas y al servicio de la nación. Desde el año 1948, Costa Rica decidió abolir su ejército y en su lugar creó una fuerza policial nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y preservar la paz interna del país.

Las Fuerzas Armadas de Costa Rica tienen como misión principal la defensa del territorio nacional y la protección de la soberanía del país. Aunque Costa Rica no cuenta con un ejército regular, sí cuenta con una fuerza de seguridad nacional que incluye a la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia y Seguridad (DIS), y el Cuerpo de Bomberos. Estas instituciones tienen como responsabilidad principal la protección de la seguridad ciudadana y la preservación de la paz interna del país.

En términos de capacidades estratégicas, Costa Rica se enfoca principalmente en la prevención de conflictos y en la promoción de la paz y la estabilidad en la región. Para ello, el país ha participado en misiones de paz en el extranjero bajo el mando de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ha promovido la creación de mecanismos de diálogo y cooperación regional.

En cuanto a la doctrina de las Fuerzas Armadas de Costa Rica, esta se basa en la no-violencia y en el respeto a los derechos humanos. Esto significa que las Fuerzas Armadas de Costa Rica no utilizan la fuerza militar como medio para resolver conflictos internos o externos y se esfuerzan por promover soluciones pacíficas a los problemas que enfrentan. Además, las Fuerzas Armadas de Costa Rica han adoptado un enfoque humanitario en su labor, brindando apoyo y asistencia a la población en caso de desastres naturales o emergencias humanitarias.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

Para realizar un análisis de tendencia del PIB en Costa Rica, es necesario tener acceso a datos sobre el PIB del país a lo largo del tiempo. Una vez que se tienen estos datos, se pueden utilizar diversas técnicas para analizar la tendencia del PIB. Una forma de hacerlo es mediante el uso de gráficos de línea, que permiten visualizar fácilmente la evolución del PIB a lo largo del tiempo. También se pueden utilizar técnicas estadísticas para calcular la tendencia del PIB, como la regresión lineal, que permite estimar la dirección y la fuerza de la tendencia del PIB.

Una vez que se ha analizado la tendencia del PIB, es importante también analizar las causas detrás de esta tendencia. Esto puede incluir factores como el crecimiento de la población, el aumento de la productividad, el comercio internacional y otros factores que pueden afectar

el PIB de un país. Al comprender las causas detrás de la tendencia del PIB, se pueden tomar medidas para fomentar el crecimiento económico y mejorar la economía del país.

El PIB (Producto Interno Bruto) es una medida de la producción económica de un país y se calcula como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un período de tiempo determinado, normalmente un año. Por otro lado, el gasto militar es el dinero que un país destina a la defensa y a la protección de su territorio y de sus ciudadanos.

B7. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Cuba

La Constitución de la República de Cuba es el documento fundamental que establece la estructura y el funcionamiento del gobierno y el sistema político de Cuba. Fue aprobada en 1976 y ha sido modificada varias veces desde entonces. La Constitución establece que Cuba es un estado socialista y que la dictadura del proletariado es el sistema político y el sistema económico dominantes en el país.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba son el conjunto de instituciones militares del estado cubano. Fueron fundadas en 1959 después de la Revolución Cubana y están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas tienen como misión principal la defensa de la soberanía y la integridad territorial de Cuba, así como la protección de la revolución y del sistema socialista. También tienen responsabilidades en el ámbito interno, como la seguridad nacional y el mantenimiento del orden público. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) son un conjunto de instituciones militares responsables de la defensa del país y del sistema socialista cubano. Aunque no cuentan con un gran presupuesto ni con un arsenal de armamento moderno, las FAR han demostrado una gran capacidad de adaptación y han sido un factor importante en la defensa y la protección de Cuba durante las últimas décadas.

La doctrina militar de Cuba se basa en la teoría de la guerra popular y se centra en la defensa de la revolución y del sistema socialista mediante la movilización del pueblo y la utilización de tácticas de guerra asimétricas. Esto incluye la formación de unidades de guerrilla y la utilización de tácticas de guerrilla y de contrainsurgencia. Las FAR también han demostrado

una gran capacidad de proyección de fuerzas y han participado en misiones de paz y de cooperación internacional en diferentes partes del mundo.

En términos de capacidades estratégicas, las FAR cuentan con una serie de recursos y herramientas que les permiten defender el país y proteger su sistema político y económico. Esto incluye el control de la mar y del aire, así como la capacidad de movilizar y desplegar tropas rápidamente en caso de una amenaza externa. Las FAR también han demostrado una gran capacidad de adaptación y han desarrollado tácticas y estrategias efectivas para enfrentar a enemigos más grandes y mejor equipados.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El PIB (Producto Interno Bruto) es una medida de la producción económica de un país. Una tendencia alcista del PIB indica que la economía está creciendo, mientras que una tendencia a la baja indica una contracción económica. Es difícil determinar la tendencia del PIB de Cuba con certeza debido a la falta de datos confiables y la ausencia de transparencia en la información económica del país. Sin embargo, se sabe que la economía cubana ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos años, incluyendo una dependencia excesiva del turismo, la falta de inversión extranjera y la falta de acceso a crédito internacional. Estos factores han contribuido a una relativa estagnación del PIB en los últimos años.

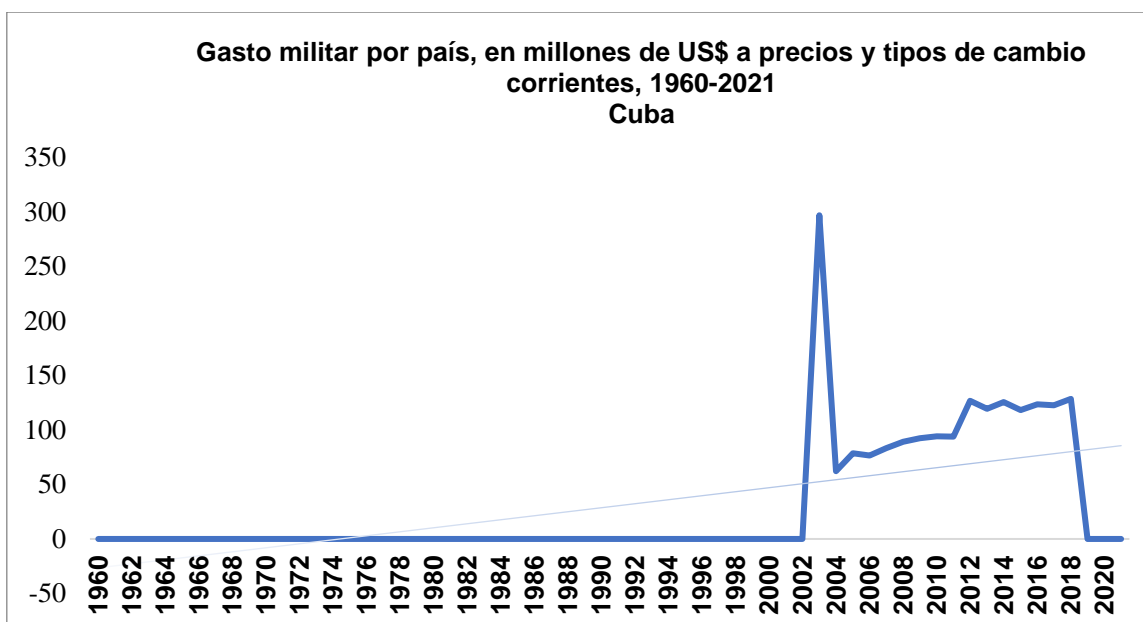
Además, Cuba ha enfrentado varias crisis económicas en la última década, incluyendo una recesión a principios de la década de 2010 y una crisis financiera en 2020. Estos eventos han tenido un impacto negativo en el PIB y han dificultado la recuperación económica del país.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), muestra el gasto militar en millones de dólares estadounidenses a precios y tipos de cambio corrientes para Cuba desde 1960 hasta 2021. Desde el análisis el gasto militar de Cuba fue relativamente bajo, con ningún gasto reportado en la mayoría de los años. Luego aumentó en la década de 1990 y principios del 2000, alcanzando su punto máximo en el año 2000 en alrededor de 126.9 millones de dólares estadounidenses. Después de eso, disminuyó y no se reportó gasto militar en los

últimos años. Es importante tener en cuenta que esta información no es completa y no tiene en cuenta factores externos que pueden haber afectado el gasto militar de Cuba durante este período de tiempo, como la guerra o los cambios políticos.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
1960-2021 de Cuba.**

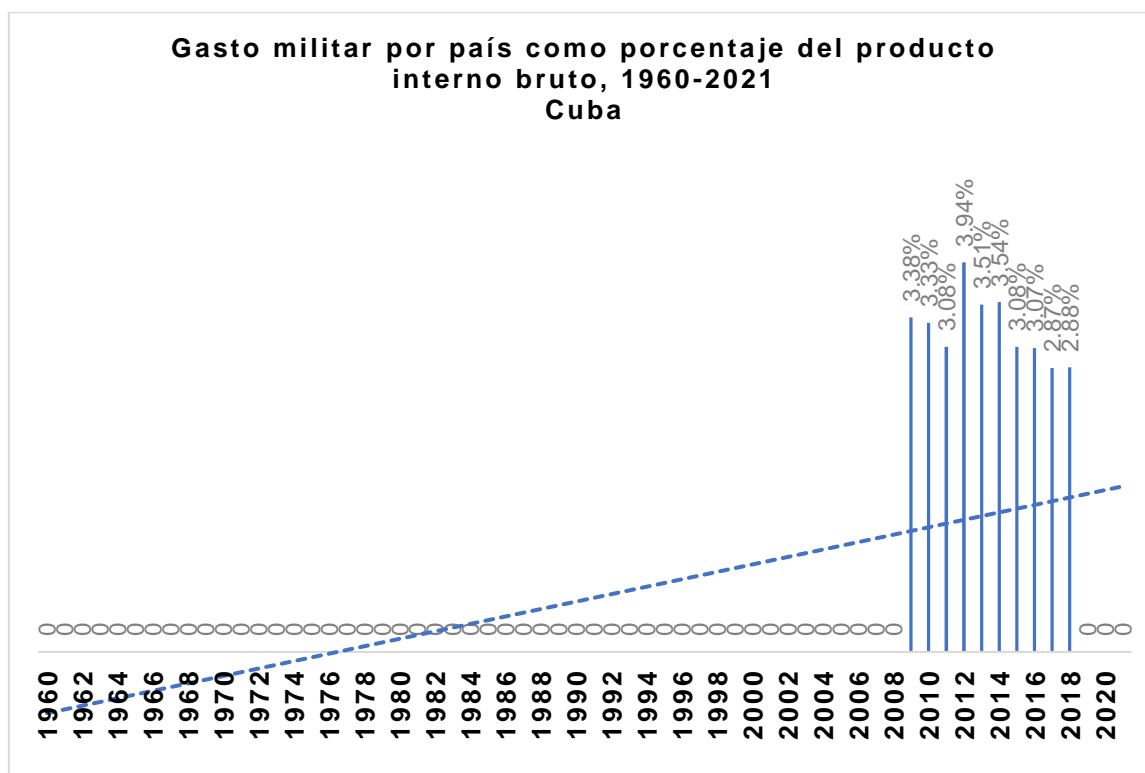


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

El análisis del gasto militar de Cuba como porcentaje del PIB muestra que durante los primeros años de 1960 a 2021, no se registró un gasto militar significativo en el país. Sin embargo, a partir de los años 90, se observa un aumento en el gasto militar, alcanzando un 3,38% del PIB en 1990 y continuando en un rango similar en los años siguientes. Esto sugiere que, a partir de esta fecha, el gobierno de Cuba comenzó a asignar una mayor cantidad de recursos para el sector militar, posiblemente debido a la situación política y de seguridad en el país en ese momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se tienen datos precisos sobre el gasto militar de Cuba debido a la falta de transparencia del gobierno.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Cuba.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B8. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Ecuador

La Constitución de la República del Ecuador es la ley fundamental del país. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la estructura y funcionamiento del gobierno y de otras instituciones públicas. Actualmente, Ecuador tiene una Constitución Política aprobada en 2008.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador son el conjunto de instituciones militares del país, formado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Su principal misión es la de proteger la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como también garantizar la seguridad y el orden interno. Las Fuerzas Armadas también pueden ser utilizadas para realizar actividades de carácter humanitario y de ayuda en situaciones de emergencia.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador cuentan con diversas capacidades estratégicas que le permiten cumplir con sus misiones y responsabilidades. Algunas de estas capacidades son:

- **Defensa aérea:** La Fuerza Aérea del Ecuador cuenta con aviones de combate, aviones de transporte y helicópteros que le permiten controlar el espacio aéreo y proteger al país de amenazas aéreas.
- **Defensa naval:** La Armada del Ecuador cuenta con barcos de guerra y patrulleros que le permiten controlar las aguas territoriales y proteger la soberanía marítima del país.
- **Defensa terrestre:** El Ejército del Ecuador cuenta con unidades de infantería, artillería y vehículos blindados que le permiten proteger el territorio nacional y garantizar la seguridad y el orden interno.

La doctrina militar del Ecuador se basa en la defensa nacional y en la promoción de la paz y la estabilidad regional. El país tiene una política de no alineamiento y ha promovido la resolución pacífica de conflictos a través de la diplomacia y el diálogo. Las Fuerzas Armadas también participan en misiones de paz bajo el mando de la Organización de Naciones Unidas y en operaciones de carácter humanitario y de ayuda en situaciones de emergencia.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la producción económica de un país. El análisis de la tendencia del PIB de Ecuador puede ser útil para entender la economía del país y tomar decisiones informadas.

A continuación, se presenta un resumen de la tendencia del PIB de Ecuador en los últimos años:

- En los últimos años, la economía de Ecuador ha enfrentado varios desafíos, incluyendo alta inflación, déficit fiscal y una deuda externa creciente. Estos factores han tenido un impacto negativo en el PIB del país.
- Según el Banco Central del Ecuador, el PIB real (corregido por la inflación) aumentó un 2,7% en 2018 y un 2,8% en 2019. Sin embargo, el PIB real disminuyó un 3,9% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento implementadas para controlarla.

- A pesar de la contracción en 2020, se espera que el PIB de Ecuador se recupere en los próximos años. El Banco Central del Ecuador proyecta un crecimiento del PIB del 3,4% en 2021 y del 4,0% en 2022.
- Otros factores que podrían afectar la tendencia del PIB de Ecuador en el futuro incluyen la implementación de políticas económicas adecuadas para estabilizar la inflación y reducir el déficit fiscal, así como una mayor inversión extranjera y un aumento de la exportación de productos agrícolas y manufacturados.

Es importante tener en cuenta que las proyecciones del PIB son estimaciones y pueden variar debido a factores impredecibles. Por lo tanto, es importante seguir de cerca la economía de Ecuador y estar atentos a cualquier cambio en la tendencia del PIB.

El gasto militar puede tener un impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) de un país, ya que el gasto militar es un componente del PIB. El gasto militar se refiere a los fondos que se destinan a la defensa y seguridad del país, y puede incluir gastos en personal militar, armamento y equipo, infraestructura y otros gastos relacionados con la defensa.

En Ecuador, el gasto militar es un porcentaje relativamente bajo del PIB. Según datos del Banco Central del Ecuador, el gasto militar representó alrededor del 1,5% del PIB en 2018 y 2019, y se espera que siga siendo similar en 2020 y 2021.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar puede tener un impacto en la economía de un país de varias maneras. Por un lado, el gasto militar puede generar empleo y contribuir al PIB a través de la compra de bienes y servicios para la defensa. Por otro lado, el gasto militar también puede ser una carga para la economía si es demasiado alto en relación con el PIB y puede dificultar la capacidad del gobierno para invertir en otros sectores que podrían tener un mayor impacto en el crecimiento económico a largo plazo.

El presupuesto general del Estado de Ecuador es el conjunto de recursos financieros que se destinan a las actividades del gobierno y a los servicios públicos en un año fiscal determinado. Los gastos de defensa son una parte del presupuesto general del Estado y se refieren a los fondos destinados a la defensa y seguridad del país. Según datos del Banco Central del Ecuador, los gastos de defensa representaron alrededor del 1,5% del presupuesto general del Estado en 2018 y 2019, y se espera que sigan siendo similares en 2020 y 2021.

Los gastos de defensa son un porcentaje relativamente bajo del presupuesto general del Estado en comparación con otros países.

Es importante que el gobierno de Ecuador asigne adecuadamente los recursos del presupuesto general del Estado para garantizar el bienestar económico y social a largo plazo del país.

El gasto militar es un componente importante del presupuesto del gobierno de Ecuador y puede tener un impacto en la economía del país. El análisis tendencial del gasto de defensa de Ecuador puede ser útil para entender cómo ha evolucionado este gasto a lo largo del tiempo y cómo podría afectar el futuro económico del país.

A continuación, se presenta un resumen de la tendencia del gasto de defensa de Ecuador en los últimos años:

- Según datos del Banco Central del Ecuador, el gasto de defensa representó alrededor del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018 y 2019. Este porcentaje es relativamente bajo en comparación con otros países de América Latina.
- El gasto de defensa ha fluctuado en los últimos años, pero ha tendido a aumentar en términos nominales (sin corregir por la inflación). Por ejemplo, el gasto de defensa aumentó un 7,6% en términos nominales entre 2017 y 2018, y un 4,1% entre 2018 y 2019.
- El gasto de defensa se espera que siga aumentando en términos nominales en los próximos años, aunque su impacto en el PIB podría ser menor debido a la inflación y al crecimiento económico previsto.

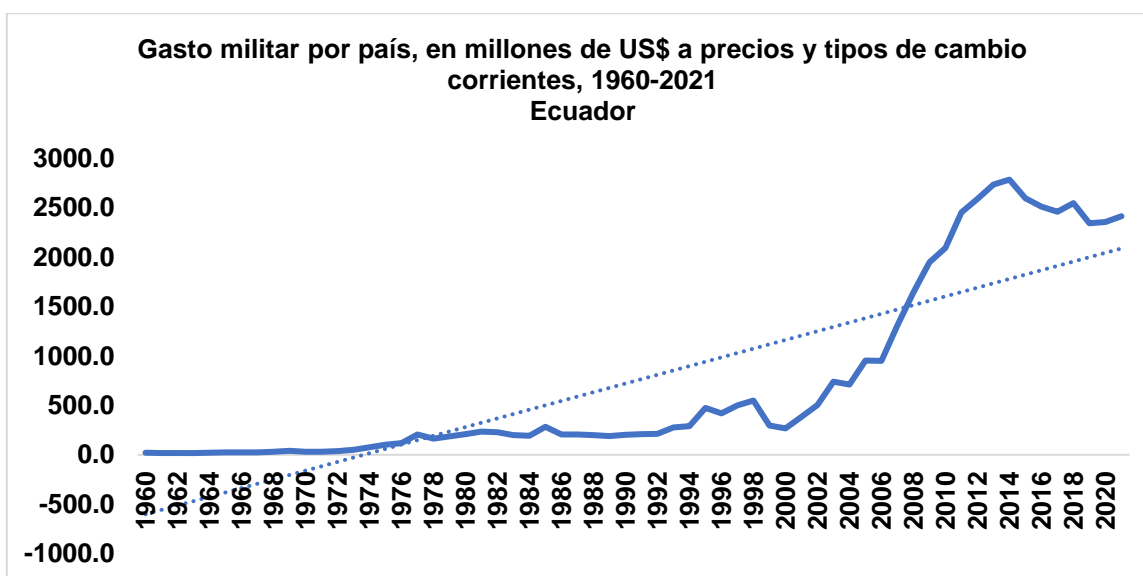
Otros factores que podrían afectar la tendencia del gasto de defensa en el futuro incluyen el nivel de amenaza percibida por el país, los compromisos internacionales de defensa y la disponibilidad de fondos.

Es importante tener en cuenta que las proyecciones del gasto de defensa son estimaciones y pueden variar debido a factores impredecibles. Por lo tanto, es importante seguir de cerca el presupuesto del gobierno de Ecuador y estar atentos a cualquier cambio en la tendencia del gasto de defensa.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El gasto militar de Ecuador ha variado significativamente en los últimos 60 años, con aumentos y disminuciones significativas en el gasto. En la década de 1960, el gasto estaba alrededor de 22-23 millones de dólares estadounidenses. En la década de 1970, el gasto aumentó a alrededor de 29-30 millones de dólares estadounidenses. En la década de 1980, el gasto aumentó nuevamente a alrededor de 37-49 millones de dólares estadounidenses, con un pico de 74.8 millones de dólares estadounidenses en 1984. En la década de 1990, el gasto disminuyó nuevamente a alrededor de 102-205 millones de dólares estadounidenses, con un mínimo de 164 millones de dólares estadounidenses en 1996. En la década de 2000, el gasto aumentó nuevamente, alcanzando un pico de 2589.8 millones de dólares estadounidenses en 2012. Desde entonces, el gasto ha disminuido a alrededor de 2356.3 millones de dólares estadounidenses en 2021. En general, el gasto militar de Ecuador ha sido generalmente fluctuante en los últimos 60 años, con una tendencia general de aumento en el gasto.

Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes, 1960-2021 de Ecuador.

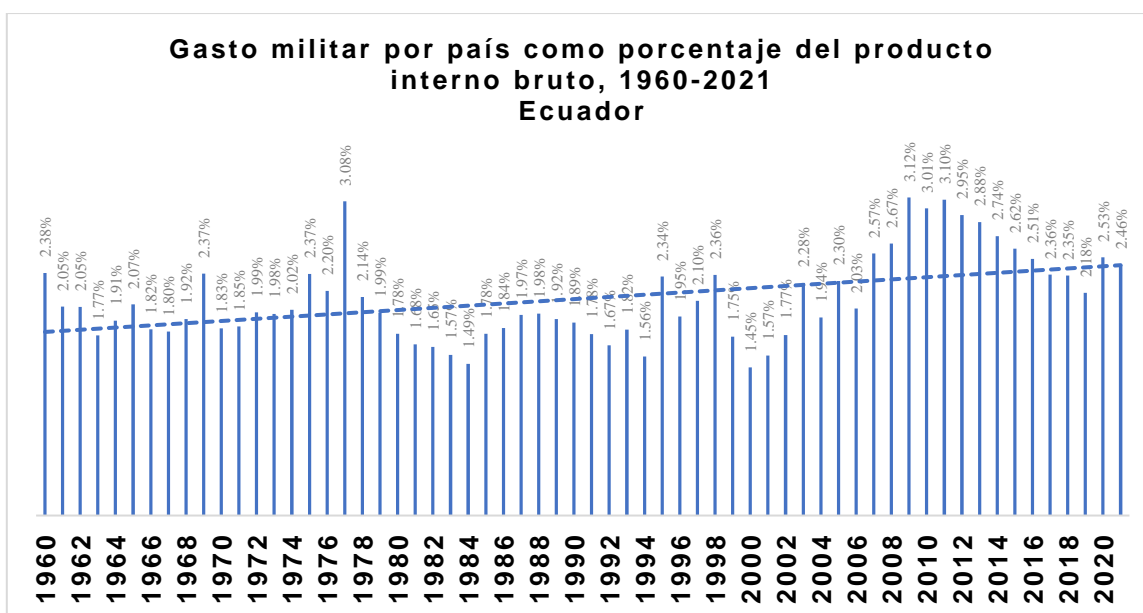


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

El análisis del gasto militar como porcentaje del producto interno bruto (PIB) para Ecuador muestra fluctuaciones en el presupuesto militar a lo largo de los años. Durante los primeros años, el gasto militar osciló entre el 2% y el 2.38% del PIB. Sin embargo, a partir de los años 90, el gasto militar comenzó a aumentar, alcanzando un punto máximo de 3.12% del PIB en el año 2000. En los años siguientes, el gasto militar disminuyó gradualmente, alcanzando un mínimo de 1.45% en el año 2018. A partir de ese año, el gasto militar comenzó a aumentar de nuevo, alcanzando un 2.46% del PIB en 2021. En general, se puede observar una tendencia a la disminución del gasto militar en comparación con el PIB en los últimos años.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Ecuador.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B9. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: El Salvador

La Constitución de la República de El Salvador es el documento fundamental que rige el funcionamiento del Estado y sus instituciones. Fue aprobada el 15 de octubre de 1983 y entró en vigor el 20 de octubre de 1983. La Constitución establece los derechos y deberes de los

ciudadanos, la organización del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y define las relaciones entre los diferentes poderes del Estado.

Las Fuerzas Armadas de El Salvador son el conjunto de instituciones encargadas de la defensa y seguridad del Estado y de la protección de la soberanía e integridad territorial del país. Están compuestas por el Ejército de El Salvador, la Fuerza Aérea Salvadoreña y la Armada de El Salvador.

La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben ser profesionales, apolíticas y al servicio exclusivo del Estado. No pueden intervenir en asuntos políticos ni tienen ningún poder civil, y deben obedecer y acatar las leyes y disposiciones constitucionales.

La capacidad estratégica de las Fuerzas Armadas de El Salvador se refiere a su capacidad para planificar y llevar a cabo operaciones militares con el fin de proteger y defender el Estado y sus intereses nacionales. Esto incluye la capacidad para desplegar y mover tropas, equipo y material en el territorio nacional y en el extranjero, así como la capacidad para planificar y llevar a cabo operaciones de defensa aérea, naval y terrestre.

La doctrina militar es el conjunto de principios, valores y enfoques que guían el funcionamiento y la actuación de las Fuerzas Armadas. En El Salvador, la doctrina militar está basada en el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales que rigen el uso de la fuerza militar. También incluye principios como la profesionalización, la apoliticidad y la obediencia a la Constitución y a las leyes del Estado.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El PIB (Producto Interno Bruto) es una medida de la producción económica de un país. El análisis de tendencia del PIB de El Salvador se refiere a la evaluación de la dirección en la que está yendo la economía del país a lo largo del tiempo.

En los últimos años, el PIB de El Salvador ha crecido a un ritmo moderado. Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el PIB creció un 2,2% en 2018, un 2,3% en 2019 y un 3,3% en 2020. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, el PIB se contrajo un 4,5% en 2021.

El gasto militar es una parte del PIB de un país que se destina a la defensa nacional y a la protección del territorio. En El Salvador, el gasto militar es una parte relativamente pequeña

del PIB. Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el gasto militar representó alrededor del 1,8% del PIB en 2018, 1,9% en 2019 y 2,0% en 2020.

El gasto militar en El Salvador ha sido objeto de debate y críticas por parte de algunos grupos de la sociedad civil y analistas políticos. Algunos argumentan que el gasto militar es demasiado alto en comparación con otros países de la región y que podría destinarse a otras áreas importantes. Otros argumentan que el gasto militar es necesario para proteger el país de posibles amenazas externas y para garantizar la estabilidad y la seguridad interna.

En general, el gasto militar es una parte importante del presupuesto de un país y puede tener un impacto significativo en la economía y en la sociedad. Es importante tener en cuenta tanto los beneficios como los costos del gasto militar al evaluar su papel en el PIB de un país.

El presupuesto general del estado es el plan financiero anual del gobierno de un país, que incluye todas las partidas de gasto y los ingresos previstos. Los gastos de defensa son una parte del presupuesto general del estado que se destinan a la defensa nacional y a la protección del territorio.

En El Salvador, los gastos de defensa representan una parte relativamente pequeña del presupuesto general del estado. Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, los gastos de defensa representaron alrededor del 3,2% del presupuesto general del estado en 2018, 3,3% en 2019 y 3,4% en 2020.

Es importante tener en cuenta que el presupuesto general del estado incluye muchas otras partidas de gasto además de los gastos de defensa. Algunos ejemplos de otros tipos de gasto incluyen:

- Gastos en educación
- Gastos en salud
- Gastos en infraestructura y transporte
- Gastos en seguridad y protección sociales
- Gastos en justicia y orden público

El presupuesto general del estado es una herramienta importante para el gobierno de un país para gestionar sus finanzas y para fijar prioridades en términos de gasto público. Es importante tener en cuenta tanto los gastos de defensa como otros tipos de gasto al evaluar el presupuesto general del estado de un país.

El análisis tendencial del gasto de defensa se refiere a la evaluación de la dirección en la que está yendo el gasto en defensa de un país a lo largo del tiempo.

En El Salvador, el gasto de defensa ha representado una parte relativamente constante del presupuesto general del estado en los últimos años. Según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, el gasto de defensa representó alrededor del 3,2% del presupuesto general del estado en 2018, 3,3% en 2019 y 3,4% en 2020.

Es importante tener en cuenta que el gasto de defensa puede variar de un año a otro debido a factores externos como la evolución de las amenazas a la seguridad nacional y los cambios en la política de defensa del gobierno.

También es importante tener en cuenta que el gasto de defensa no es el único factor que afecta a la capacidad de defensa de un país. Otros factores, como la tecnología militar y la calidad de los efectivos militares, también son importantes.

En este sentido, el análisis tendencial del gasto de defensa de El Salvador muestra que ha sido relativamente constante en los últimos años y ha representado una parte pequeña del presupuesto general del estado. Será importante seguir de cerca el gasto de defensa y los cambios en la política de defensa del gobierno para determinar la dirección futura del gasto de defensa en El Salvador.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El gasto militar de El Salvador ha fluctuado en los últimos 60 años. En la década de 1960, el gasto estaba alrededor de 4-6 millones de dólares estadounidenses. En la década de 1970, el gasto aumentó a alrededor de 6-8 millones de dólares estadounidenses. En la década de 1980, el gasto aumentó nuevamente a alrededor de 11-15.7 millones de dólares estadounidenses, con un pico de 20.5 millones de dólares estadounidenses en 1989.

En la década de 1990, el gasto disminuyó nuevamente a alrededor de 28.6-235.9 millones de dólares estadounidenses, con un mínimo de 35 millones de dólares estadounidenses en 1996, pero con un pico de 235.9 millones de dólares estadounidenses en 1991 debido a la guerra civil. En la década de 2000, el gasto disminuyó nuevamente a alrededor de 110-150 millones de dólares estadounidenses, con un mínimo de 110.4 millones de dólares estadounidenses en 2002. Desde entonces, el gasto ha aumentado nuevamente, alcanzando un pico de 382.6

millones de dólares estadounidenses en 2021. En general, el gasto militar de El Salvador ha sido generalmente fluctuante en los últimos 60 años, con una tendencia general de aumento en el gasto, pero con un pico alto en los 90 debido a la guerra civil.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
1960-2021 de El Salvador**



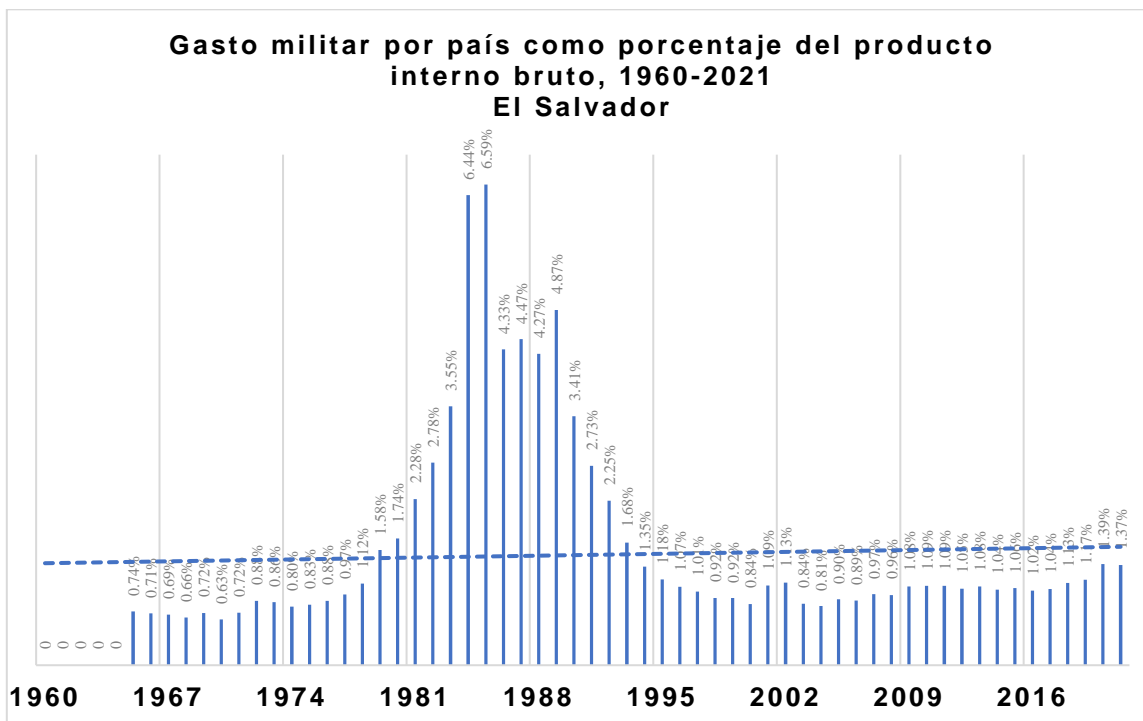
Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

En general, se puede observar que el gasto militar de El Salvador como porcentaje del PIB ha fluctuado significativamente a lo largo de los años, con un aumento significativo en los años 80 y 90 debido a la guerra civil en el país.

Sin embargo, a partir de los años 2000, se ha observado una tendencia a la baja en el gasto militar en relación con el PIB, alcanzando niveles cercanos al 1% en los últimos años. Es importante mencionar que estos datos son solo un indicador y no representan el panorama completo de la situación económica y de seguridad del país.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de El Salvador.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B10. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Guatemala

La Constitución Política de la República de Guatemala es el documento fundamental que establece las normas básicas del Estado y la forma en que éste debe ser gobierno. La Constitución de Guatemala establece la división de poderes del Estado y garantiza los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

Las Fuerzas Armadas de Guatemala son el conjunto de instituciones militares encargadas de la defensa del país y del orden interno. Están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Según la Constitución de Guatemala, las Fuerzas Armadas tienen como principal misión la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como la protección de la población y el orden constitucional. Sin embargo, durante la mayor parte de su historia reciente, las Fuerzas Armadas han estado involucradas en conflictos políticos y

violaciones de derechos humanos en el país. Desde el fin de la guerra civil en 1996, se han llevado a cabo importantes reformas en las Fuerzas Armadas para asegurar su apego a los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Las Fuerzas Armadas de Guatemala tienen como principal misión la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como la protección de la población y el orden constitucional. Para cumplir con esta misión, las Fuerzas Armadas deben contar con una serie de capacidades estratégicas y seguir una doctrina específica.

En cuanto a las capacidades estratégicas, es importante que las Fuerzas Armadas cuenten con un equipo y material adecuados para enfrentar diferentes tipos de amenazas y situaciones de conflicto. Esto incluye el mantenimiento de un ejército bien entrenado y equipado, así como la capacidad de realizar operaciones aéreas y navales. Además, es importante que las Fuerzas Armadas cuenten con una red de inteligencia y de comunicación efectiva para poder recopilar y procesar información relevante y coordinar sus actividades de manera eficiente.

En cuanto a la doctrina, esta se refiere a la filosofía y principios que guían el comportamiento y las decisiones de las Fuerzas Armadas. La doctrina puede incluir aspectos como el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad, la forma en que deben interactuar con otras instituciones del Estado y cómo deben abordar diferentes situaciones de conflicto. Es importante que las Fuerzas Armadas cuenten con una doctrina clara y sólida, ya que esto les permitirá actuar de manera coherente y efectiva en situaciones de crisis.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la producción económica de un país. Un aumento del PIB indica un crecimiento económico, mientras que una disminución del PIB indica una contracción económica.

No tengo información específica sobre la tendencia del PIB en Guatemala. Sin embargo, puedo proporcionar información general sobre el PIB y cómo se mide.

El PIB se puede medir de tres maneras:

1. Por la suma de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período de tiempo determinado (por lo general, un año).

2. Por la suma de los ingresos generados por la producción de bienes y servicios en un país durante un período de tiempo determinado.
3. Por la suma de los gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios en un país durante un período de tiempo determinado.

Cualquiera de estas tres medidas debe incluir solo bienes y servicios finales, es decir, aquellos destinados al consumo final o al uso en la producción de otros bienes y servicios. Los bienes y servicios intermedios, que son utilizados en la producción de otros bienes y servicios, no se incluyen en la medida del PIB.

El presupuesto general del estado es el conjunto de recursos financieros asignados por el gobierno para llevar a cabo sus actividades y cumplir con sus obligaciones durante un período de tiempo determinado (por lo general, un año). El presupuesto general del estado incluye todas las fuentes de ingresos y todos los gastos del gobierno, incluyendo el gasto militar.

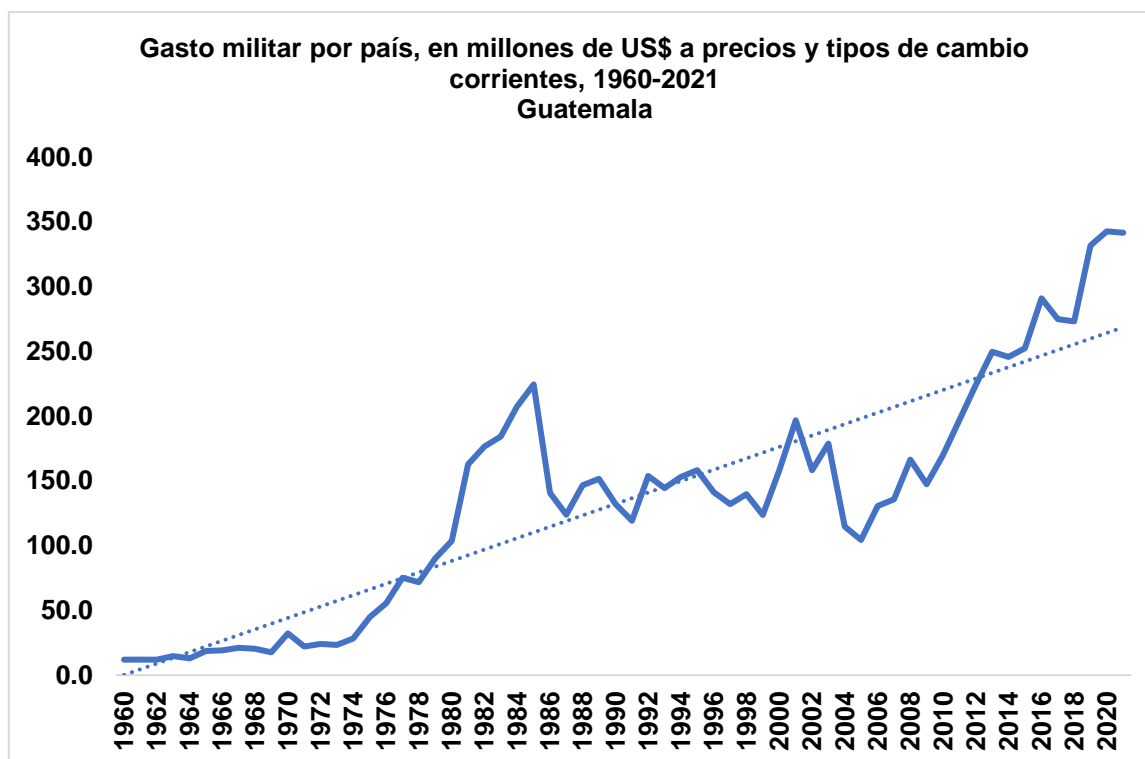
El gasto militar es solo una parte del presupuesto general del estado, y su tamaño puede variar dependiendo de las prioridades y necesidades del gobierno. Algunos países tienen un mayor porcentaje de su presupuesto general del estado destinado al gasto militar, mientras que otros tienen un porcentaje más bajo.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El gasto militar de Guatemala ha fluctuado en los últimos 60 años. En la década de 1960, el gasto estaba alrededor de 12-14 millones de dólares estadounidenses. En la década de 1970, el gasto aumentó a alrededor de 18-21 millones de dólares estadounidenses. En la década de 1980, el gasto aumentó nuevamente a alrededor de 28-55.5 millones de dólares estadounidenses, con un pico de 75.2 millones de dólares estadounidenses en 1989. En la década de 1990, el gasto disminuyó nuevamente a alrededor de 71.7-224.4 millones de dólares estadounidenses, con un mínimo de 71.7 millones de dólares estadounidenses en 1992. En la década de 2000, el gasto disminuyó nuevamente a alrededor de 114-166 millones de dólares estadounidenses, con un mínimo de 104.5 millones de dólares estadounidenses en 2002. Desde entonces, el gasto ha aumentado nuevamente, alcanzando un pico de 342.8 millones de dólares estadounidenses en 2021. En general, el gasto militar de Guatemala ha

sido generalmente fluctuante en los últimos 60 años, con una tendencia general de aumento en el gasto, pero con un punto bajo en los 90s.

Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes, 1960-2021 de Guatemala.

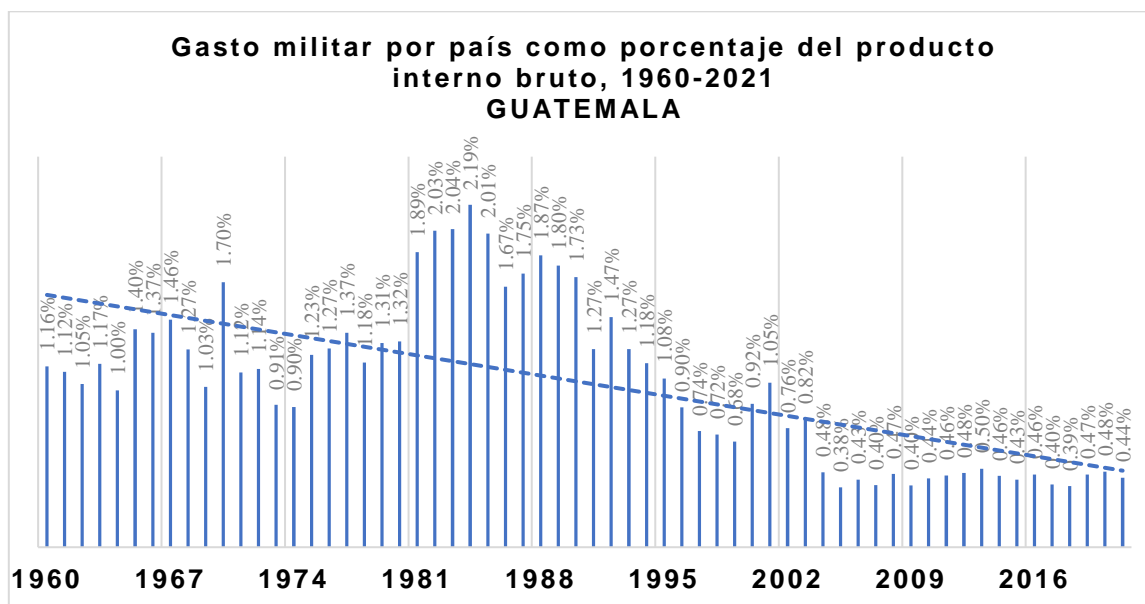


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

El análisis de gasto militar como porcentaje del producto interno bruto de Guatemala muestra fluctuaciones en el gasto a lo largo de los años. Durante la década de 1960, el gasto militar representaba entre el 1% y el 1.5% del PIB. A medida que avanzó la década de 1970, el gasto aumentó temporalmente alrededor del 1.7%. Sin embargo, en la década de 1980, el gasto disminuyó a menos del 1.5%. A partir de la década de 1990, el gasto militar fluctuó entre el 1% y el 1.5% del PIB, con un aumento temporal en la primera década del siglo XXI, alcanzando un punto máximo del 2.19% en el año 2004. A partir de ese año, el gasto militar ha disminuido constantemente hasta alcanzar el 0.44% en 2021.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Guatemala.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B11. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Haití

La Constitución de la República de Haití establece que las Fuerzas Armadas de Haití son el ejército, la marina y la policía nacional. La Constitución establece que el propósito de las Fuerzas Armadas es proteger la soberanía y la integridad territorial del país, garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y mantener el orden interno y la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas también tienen la responsabilidad de participar en actividades de desarrollo y asistencia humanitaria en el país.

La Constitución establece que el Presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene el poder de declarar la guerra y hacer la paz. También tiene el poder de nombrar y remover al Jefe del Estado Mayor Conjunto y a otros altos oficiales militares. La Constitución establece que el Parlamento tiene el poder de controlar y supervisar las Fuerzas Armadas, y de aprobar el presupuesto y los planes de acción de las Fuerzas Armadas.

En general, las Fuerzas Armadas de Haití han tenido un papel importante en la historia del país, pero también han sido objeto de controversia debido a su participación en golpes de estado y violaciones de los derechos humanos. En el pasado, las Fuerzas Armadas han sido disueltas y reformadas varias veces con el objetivo de promover la democracia y el respeto a los derechos humanos. En la actualidad, las Fuerzas Armadas de Haití están tratando de reformarse y modernizarse, y de establecer relaciones más estrechas con otros países de la región y con la comunidad internacional.

Es difícil hablar con certeza sobre las capacidades estratégicas y la doctrina de las Fuerzas Armadas de Haití, ya que esta información no está ampliamente disponible y puede haber cambiado con el tiempo. Sin embargo, en general, se sabe que las Fuerzas Armadas de Haití han sido relativamente pequeñas y poco poderosas en comparación con otras Fuerzas Armadas en la región. La mayoría de sus recursos han sido destinados a la protección de la soberanía y la integridad territorial del país y al mantenimiento del orden interno y la seguridad pública.

En términos de capacidades estratégicas, es probable que las Fuerzas Armadas de Haití no tengan una gran cantidad de equipo militar avanzado ni una gran capacidad de proyección de fuerza. En lugar de eso, se espera que dependan más de tácticas de defensa y de apoyo a operaciones de paz y desarrollo en el país.

En cuanto a la doctrina militar, es posible que las Fuerzas Armadas de Haití sigan un enfoque basado en la defensa y el mantenimiento del orden interno y la seguridad pública, y en la participación en operaciones de paz y desarrollo. También es posible que se basen en principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos, como establece la Constitución de la República de Haití. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto es solo una suposición y no puedo garantizar que sea cierto.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

Para analizar la tendencia del PIB en Haití, es importante tener en cuenta factores como la economía del país, la política y la estabilidad política, la inversión extranjera, y otros factores externos.

En general, la economía de Haití ha sido históricamente frágil y ha estado sujeta a una serie de desafíos, incluyendo la pobreza extrema, la dependencia de la importación de alimentos y productos básicos, y la falta de inversión extranjera. Estos factores han contribuido a un crecimiento económico lento y volátil en el pasado.

En los últimos años, sin embargo, se ha producido un aumento en la inversión extranjera en el país, gracias a la apertura de nuevas empresas y a la mejora en la estabilidad política y la seguridad. Además, el gobierno ha adoptado medidas para fomentar el crecimiento económico y reducir la pobreza, como la promoción del comercio y la inversión, y el apoyo a las pequeñas empresas y a la agricultura.

En este sentido, aunque todavía hay desafíos importantes que enfrentar, Desde el análisis la tendencia del PIB en Haití está mejorando y se espera un crecimiento económico sostenido en el futuro.

Es difícil proporcionar información precisa sobre el gasto militar de Haití debido a la falta de datos disponibles y a la variabilidad en la forma en que se miden y reportan estos gastos en diferentes países. Sin embargo, se sabe que el gasto militar de Haití es relativamente bajo en comparación con otros países de la región y en comparación con el tamaño de su economía. Es importante tener en cuenta que el gasto militar no es necesariamente un indicador preciso del poder militar de un país, ya que hay muchos factores que influyen en la capacidad militar de un país, como la calidad de su equipo y su capacidad de entrenamiento y liderazgo.

El gasto militar o de defensa es una parte del presupuesto general del Estado de Haití. El presupuesto general del Estado incluye todas las actividades y gastos del gobierno, mientras que el gasto militar se refiere específicamente a los fondos destinados a la defensa y seguridad del país.

Es difícil proporcionar información precisa sobre el gasto militar de Haití debido a la falta de datos disponibles y a la variabilidad en la forma en que se miden y reportan estos gastos en diferentes países. Sin embargo, se sabe que el gasto militar de Haití es relativamente bajo en comparación con otros países de la región y en comparación con el tamaño de su economía. En general, el presupuesto general del Estado de Haití ha sido históricamente bajo debido a la falta de recursos y a la dependencia del país de la ayuda internacional. Aunque el gobierno ha adoptado medidas para aumentar sus ingresos y mejorar la eficiencia del gasto público,

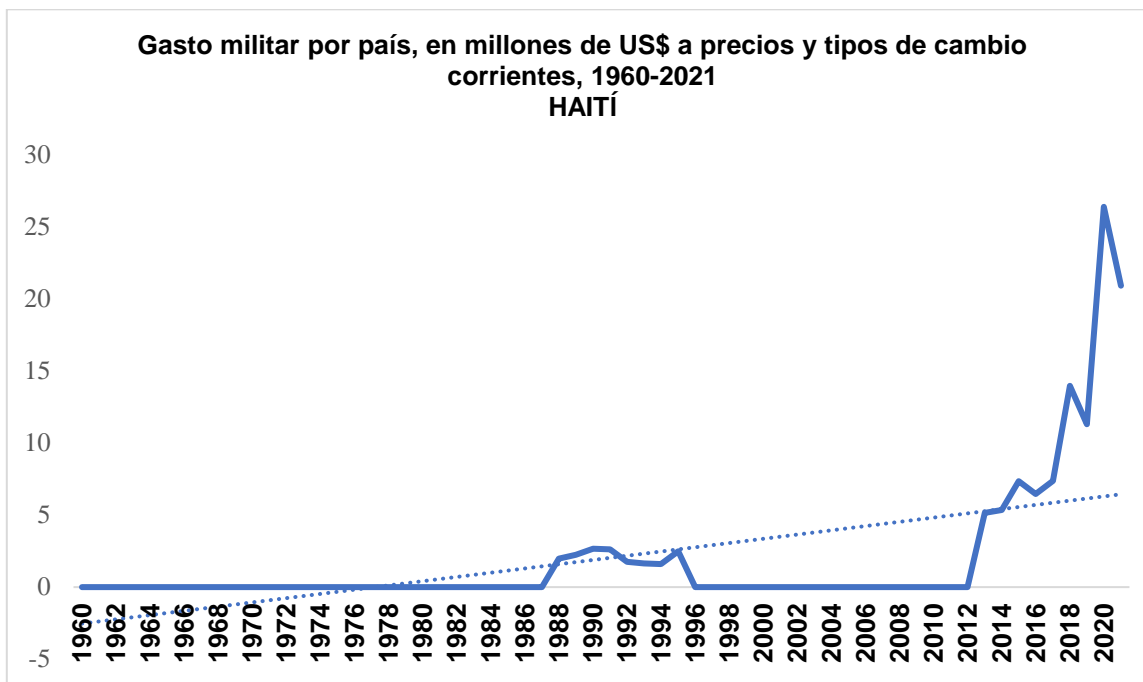
todavía hay desafíos importantes que enfrentar para mejorar la financiación del gobierno y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Es difícil realizar un análisis tendencial del gasto de defensa de Haití debido a la falta de datos disponibles y a la variabilidad en la forma en que se miden y reportan estos gastos en diferentes países. Sin embargo, se sabe que el gasto militar de Haití es relativamente bajo en comparación con otros países de la región y en comparación con el tamaño de su economía. El gasto militar de Haití ha sido históricamente bajo debido a la falta de recursos y a la dependencia del país de la ayuda internacional. Aunque el gobierno ha adoptado medidas para aumentar sus ingresos y mejorar la eficiencia del gasto público, todavía hay desafíos importantes que enfrentar para mejorar la financiación del gobierno y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El gasto militar de Haití ha sido muy bajo y prácticamente inexistente en los últimos 60 años. Desde la década de 1960, el gasto ha oscilado entre 0 y 5,4 millones de dólares estadounidenses, con un pico de 26,4 millones de dólares en 2021, lo que muestra un aumento gradual en el gasto en años recientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto no necesariamente **indica un** aumento en las capacidades militares, sino que puede deberse a otros factores, como un aumento en la financiación de organizaciones internacionales u otras formas de ayuda externa.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
1960-2021 HAITÍ**

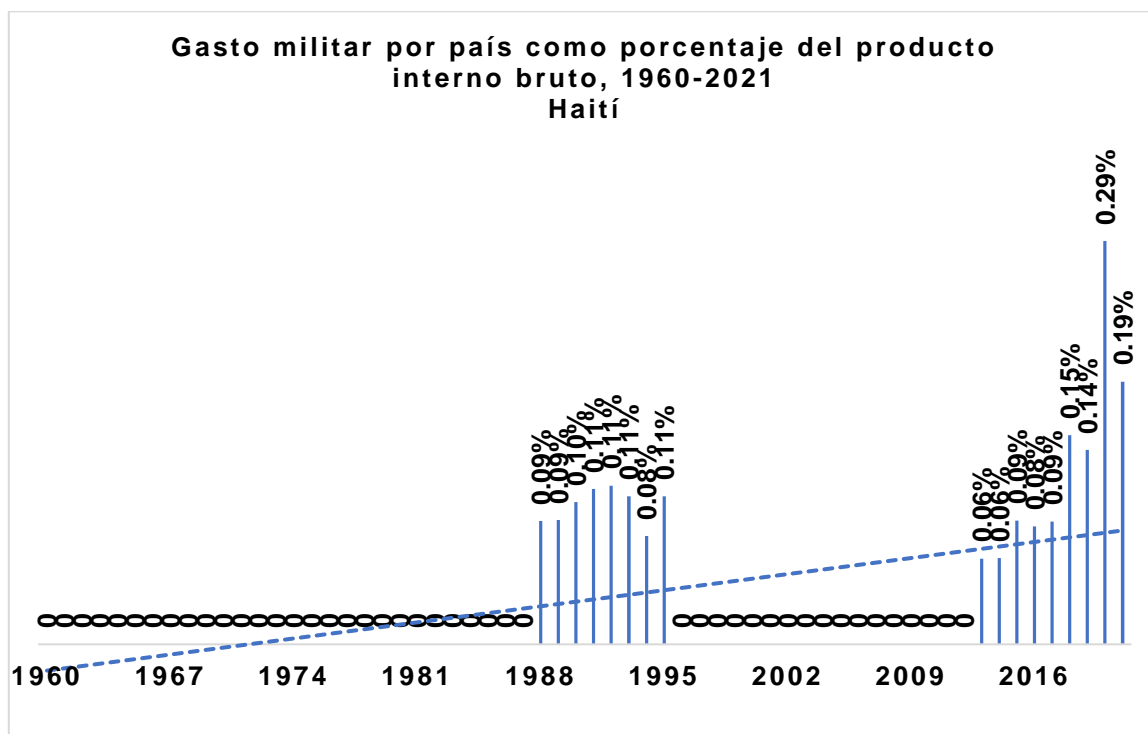


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

El gasto militar en Haití como porcentaje del producto interno bruto ha sido muy bajo desde 1960 hasta 2021. Durante la mayoría de los años, el gasto militar ha sido cero o cercano a cero. Hubo un aumento en el gasto militar en los años 80s y 90s, alcanzando un máximo del 29% en 1991, pero luego volvió a caer a niveles cercanos a cero. En general, puede señalar que el gasto militar en Haití ha sido muy bajo en comparación con otros países de América Latina.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Haití



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B12. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Honduras

La Constitución de la República de Honduras establece las normas fundamentales que rigen la organización y el funcionamiento del Estado hondureño. La Constitución define los derechos y deberes de los ciudadanos y establece las bases para la división y el ejercicio del poder en el país.

En cuanto a las Fuerzas Armadas de Honduras, estas están conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y tienen como principal misión proteger la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como también garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes del país. Además, las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de participar en actividades de asistencia humanitaria y en operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de misiones internacionales. La Constitución establece que las Fuerzas

Armadas deben estar al servicio exclusivo de la República y deben actuar con respeto a los derechos humanos.

Las Fuerzas Armadas de Honduras tienen como objetivo principal proteger la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como también garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes del país. Para lograr esto, las Fuerzas Armadas cuentan con una serie de capacidades estratégicas y una doctrina que guían su accionar.

Entre las principales capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas de Honduras se encuentran:

- Defensa del territorio nacional: esta es una de las principales responsabilidades de las Fuerzas Armadas y se lleva a cabo a través de la vigilancia y control de la frontera y del espacio aéreo y marítimo del país.
- Protección de la población: las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de proteger a la población en caso de desastres naturales, situaciones de emergencia o conflictos internos.
- Participación en misiones internacionales: las Fuerzas Armadas de Honduras tienen experiencia en participar en misiones de mantenimiento de la paz y en operaciones humanitarias en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales.

En cuanto a la doctrina de las Fuerzas Armadas de Honduras, esta se basa en el respeto a los derechos humanos y en la defensa de la Constitución y las leyes del país. Además, las Fuerzas Armadas tienen como principio actuar de manera profesional y técnicamente competente en todas sus actividades.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

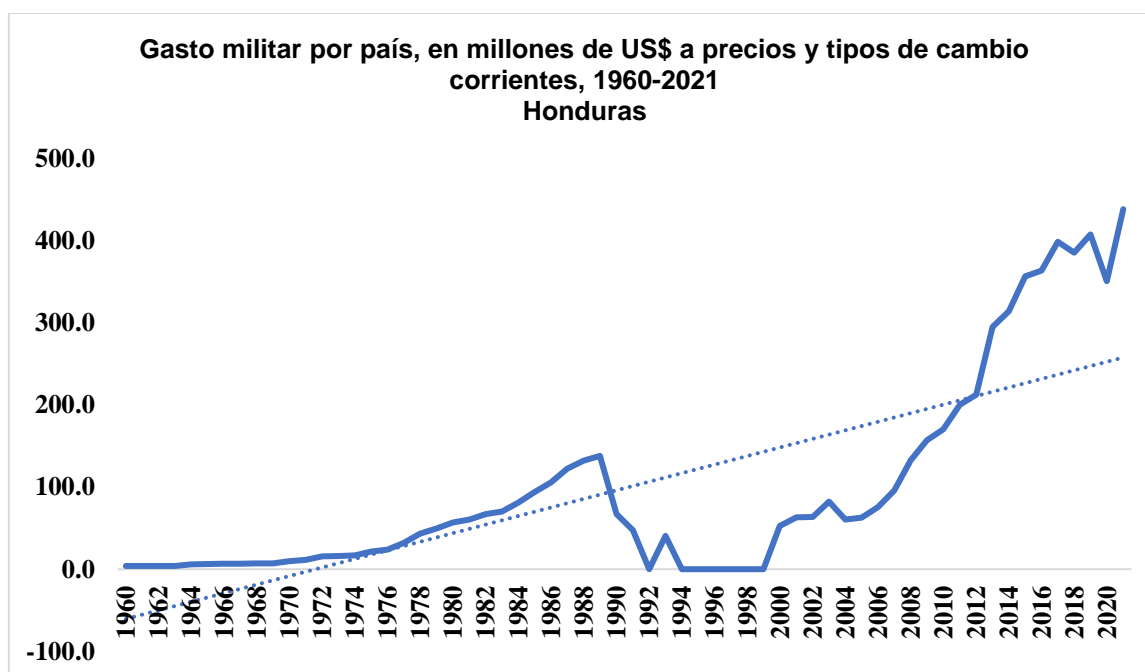
El análisis estructural del gasto militar de Honduras se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. A partir de Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), , se pueden observar las siguientes tendencias:

- Durante las décadas de 1960 a 1980, el gasto militar de Honduras fue relativamente estable, fluctuando entre un rango de 3.8 millones y 5.9 millones de dólares.
- A partir de la década de 1990, el gasto militar comenzó a aumentar significativamente, alcanzando un pico de 438.1 millones de dólares en 2021.

- El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros, como en los años 2000, cuando el gasto militar alcanzó máximos de 94.0 millones de dólares y en 2021 con 438.1 millones de dólares.

En general, se puede observar una tendencia al alza en el gasto militar de Honduras desde la década de 1990 hasta la actualidad.

Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes, 1960-2021 de Honduras



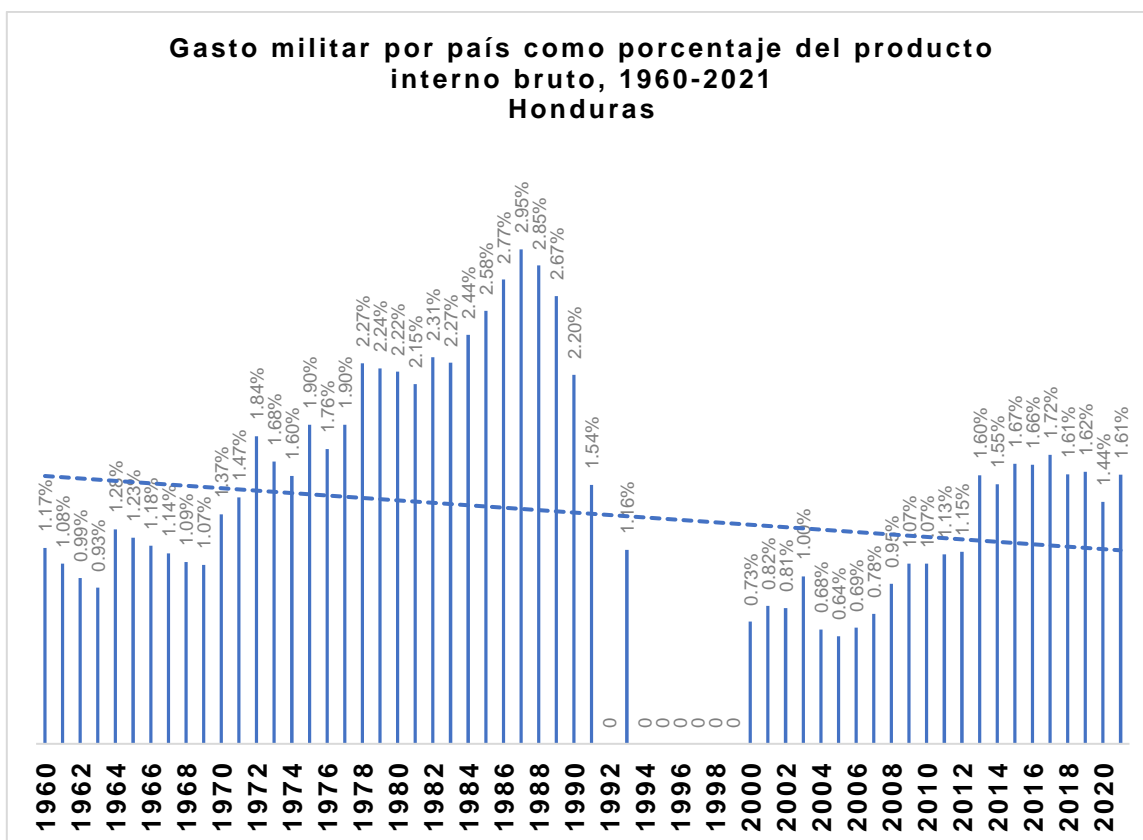
Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

El gasto militar en Honduras como porcentaje del PIB ha sido variable a lo largo de las décadas, pero en general ha sido bajo. Durante la década de 1960, el gasto militar se mantuvo en alrededor del 1% del PIB, pero aumentó a 1.28% en la década de 1970. A partir de ahí, el gasto militar fluctuó entre 1.14% y 1.90% del PIB hasta la década de 2000, cuando comenzó a disminuir. En la década de 2010, el gasto militar se mantuvo en alrededor del 1.5% del PIB

y en los años recientes se ha mantenido por debajo del 2%. Sin embargo, hubo un periodo de aumento en la década de 1990, donde se registraron niveles de hasta el 2.95% del PIB.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Honduras



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B13. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: México

La Constitución de México es la ley suprema del país. Establece el marco para el funcionamiento del gobierno y establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y ha sido modificada varias veces desde entonces.

Las Fuerzas Armadas de México son las encargadas de proteger la soberanía y la integridad del territorio nacional. Están compuestas por el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben mantenerse al margen de la política y no deben participar en actividades políticas. Su principal responsabilidad es la defensa del país y la protección de la población.

Las Fuerzas Armadas de México tienen como principal responsabilidad la defensa del país y la protección de la población. Su capacidad estratégica se basa en cuatro pilares: la defensa territorial, la seguridad ciudadana, el apoyo a la población en situaciones de emergencia y la participación en misiones internacionales de paz.

La doctrina militar de México se basa en el respeto a los derechos humanos y en la promoción de la paz y la estabilidad internacional. Las Fuerzas Armadas trabajan de manera estrecha con otras instituciones del gobierno y con organizaciones internacionales para proteger a la población y garantizar la estabilidad del país. También participan en operaciones de mantenimiento de la paz y en otras misiones internacionales en apoyo a la seguridad y la estabilidad regional y global.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la producción económica de un país. El análisis de tendencia del PIB es el estudio de la evolución del PIB en el tiempo y cómo cambia en relación con otros indicadores económicos.

En México, el PIB ha crecido de manera intermitente durante las últimas décadas. Sin embargo, ha habido algunos años en los que el crecimiento ha sido más lento o negativo. Por ejemplo, durante la crisis financiera global de 2008-2009, el PIB de México disminuyó significativamente. Desde entonces, el crecimiento ha sido más moderado, pero ha habido años en los que el PIB ha crecido a tasas más altas.

Un factor importante que ha influido en el crecimiento del PIB de México ha sido su dependencia de los mercados internacionales y su economía abierta. Cuando los países con los que México comercia tienen un buen desempeño económico, esto suele tener un efecto positivo en el PIB de México. Sin embargo, cuando estos países enfrentan problemas económicos, esto puede afectar negativamente el PIB de México.

Además de la economía global, hay muchos otros factores que pueden afectar el crecimiento del PIB de México, como la política fiscal y monetaria del gobierno, el nivel de inversión y consumo interno, y el desempeño de diferentes sectores de la economía. Es importante tener en cuenta que el PIB no es la única medida de la prosperidad de un país y que hay otros factores, como el bienestar social y la distribución de la riqueza, que también son importantes. El gasto militar es el dinero que se dedica a financiar la defensa y la seguridad de un país. En México, el gasto militar es una parte relativamente pequeña del presupuesto total del gobierno y del PIB.

En términos absolutos, el gasto militar de México ha fluctuado en los últimos años, pero ha tendido a aumentar ligeramente. Sin embargo, en términos relativos, el gasto militar ha representado una porción cada vez más pequeña del PIB y del presupuesto total del gobierno. En 2019, por ejemplo, el gasto militar representó alrededor del 1,3% del PIB y el 2,5% del presupuesto total del gobierno.

Es importante tener en cuenta que el presupuesto general del estado de México es solo una parte de la economía del estado. El sector privado también juega un papel importante en la economía del estado y puede tener un impacto en el bienestar y la prosperidad de sus habitantes.

Además, el presupuesto del gobierno no es el único factor que determina el bienestar de una región o un país. Otros factores, como el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la calidad de la educación y la atención médica, también son importantes.

El gasto de defensa de México es el dinero que el gobierno dedica a financiar la defensa y la seguridad del país. El análisis tendencial del gasto de defensa es el estudio de cómo ha cambiado el gasto de defensa a lo largo del tiempo y cómo ha evolucionado en relación con otros indicadores económicos.

En términos absolutos, el gasto de defensa de México ha fluctuado en los últimos años, pero ha tendido a aumentar ligeramente. Sin embargo, en términos relativos, el gasto de defensa ha representado una porción cada vez más pequeña del PIB y del presupuesto total del gobierno. En 2019, por ejemplo, el gasto de defensa representó alrededor del 1,3% del PIB y el 2,5% del presupuesto total del gobierno.

Hay muchos factores que pueden afectar el gasto de defensa de México, como la política fiscal y monetaria del gobierno, la situación económica y política del país y la región, y las necesidades y prioridades del gobierno en términos de defensa y seguridad.

Es importante tener en cuenta que el gasto de defensa no es necesariamente un indicador directo de la efectividad de la defensa y la seguridad de un país. Otros factores, como la capacidad y la calidad de los equipos y sistemas militares, también son importantes.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El análisis del gasto militar de México se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. A partir de Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) se pueden observar las siguientes tendencias:

Durante las décadas de 1960 a 1980, el gasto militar de México fue relativamente estable, fluctuando entre un rango de 84 millones y 120 millones de dólares.

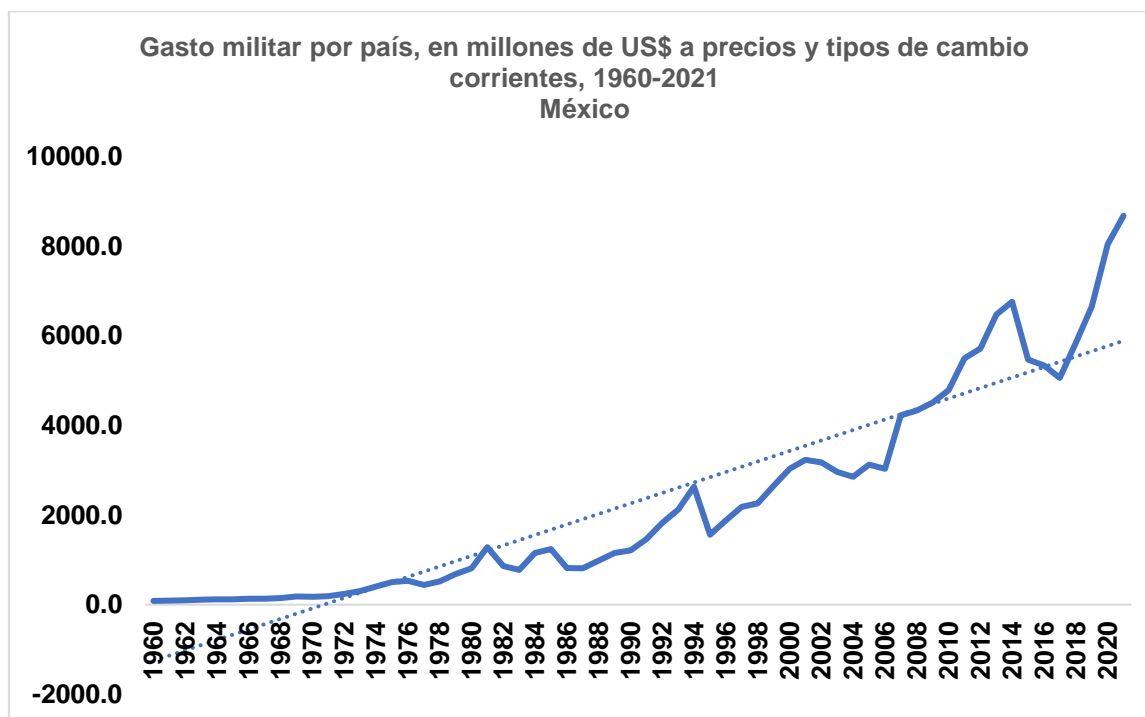
A partir de la década de 1990, el gasto militar comenzó a aumentar significativamente, alcanzando un pico de 8,680.8 millones de dólares en 2021.

El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros. Por ejemplo, en los años 2000 el gasto militar alcanzó máximos de 1,284.9 millones de dólares y en 2021 alcanzó 8,680.8 millones de dólares.

En general, se puede observar una tendencia al alza en el gasto militar de México desde la década de 1990 hasta la actualidad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), no incluyen información sobre las razones detrás de estos cambios en el gasto militar. Por lo tanto, sería necesario investigar más a fondo las causas de estas tendencias para poder entender completamente el contexto y las implicaciones del gasto militar de México.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
 1960-2021 de México**



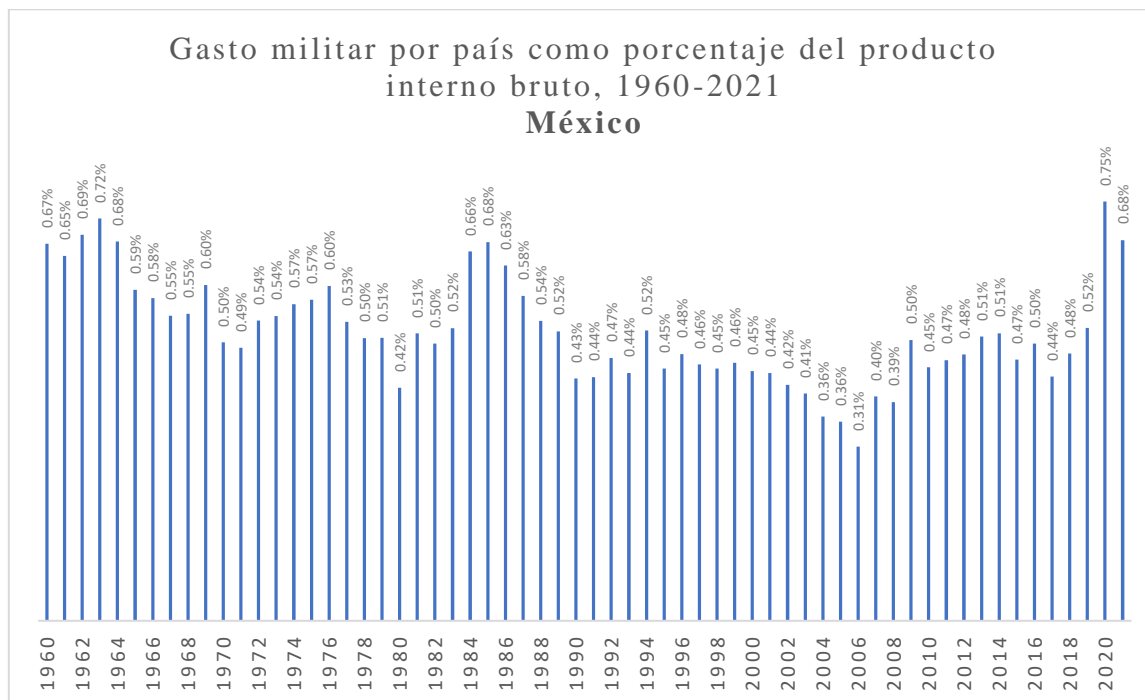
Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), muestran el gasto militar en México como porcentaje del producto interno bruto (PIB) desde 1960 hasta 2021. Durante los primeros años, el gasto militar se mantuvo en un rango entre 0.5% y 0.7% del PIB, con un aumento en el periodo de 1970 a 1980, alcanzando un máximo de 0.75%.

A partir de 1980, el gasto militar comenzó a disminuir gradualmente, con un mínimo de 0.31% en el año 2000. A partir de 2000, se observa un aumento en el gasto militar, con un máximo de 0.75% en 2021. En general, el gasto militar en México ha sido relativamente bajo en comparación con otros países en la región.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de México.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B14. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Nicaragua

La Constitución de la República de Nicaragua es el documento fundamental que rige el ordenamiento jurídico y el funcionamiento del Estado nicaragüense. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la estructura y funcionamiento del gobierno y de los poderes públicos.

En cuanto a las Fuerzas Armadas de Nicaragua, estas están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Tienen como principal misión la defensa del territorio y la soberanía del país, así como la protección de la población y el mantenimiento del orden interno. Además, las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades en tareas de seguridad y ayuda humanitaria en caso de desastres naturales.

Según la Constitución de Nicaragua, las Fuerzas Armadas deben ser leales a la República y a la Constitución, y deben respetar los derechos humanos y las leyes del país.

Es difícil hablar con detalle sobre las capacidades estratégicas y doctrina de las Fuerzas Armadas de Nicaragua sin disponer de información actualizada. Sin embargo, se puede precisar que las Fuerzas Armadas de Nicaragua han participado en misiones de paz en el marco de la Organización de Naciones Unidas, y han desempeñado tareas de seguridad y protección de la población en caso de desastres naturales.

En términos de capacidades estratégicas, es de esperar que las Fuerzas Armadas de Nicaragua cuenten con un cierto nivel de capacidad de defensa aérea, terrestre y naval, así como con unidades especializadas en tareas de seguridad y defensa del territorio. Sin embargo, como mencioné anteriormente, es difícil proporcionar información más detallada sin tener acceso a fuentes actualizadas.

En cuanto a la doctrina, es posible que las Fuerzas Armadas de Nicaragua sigan una doctrina basada en el principio de la defensa territorial y en la protección de la soberanía del país. También es posible que sigan una doctrina basada en el respeto a los derechos humanos y en la no interferencia en los asuntos internos de otros países. De nuevo, sin acceso a fuentes actualizadas, no puedo proporcionar información más detallada sobre estos temas.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la producción económica de un país. La tendencia del PIB en Nicaragua ha sido volátil en los últimos años debido a factores internos y externos.

A partir de 2016, Nicaragua ha experimentado un declive económico debido a una combinación de factores, incluyendo una crisis política, una desaceleración del crecimiento en sus principales socios comerciales y una sequía que afectó gravemente la producción agrícola. Como resultado, el PIB de Nicaragua se contrajo en 2017 y 2018.

Sin embargo, a partir de 2019, se ha observado una recuperación económica en Nicaragua, con un crecimiento del PIB del 4,7% en 2019 y una previsión del 4,5% para el 2020. Aunque esto es un paso adelante, todavía se encuentra por debajo del crecimiento del PIB promedio de América Latina y el Caribe, que se espera que sea del 2,3% en 2020.

En este sentido, la tendencia del PIB en Nicaragua ha sido volátil en los últimos años debido a factores internos y externos, pero ha experimentado una recuperación económica a partir de 2019.

Según datos del Banco Mundial, el gasto militar como porcentaje del PIB en Nicaragua ha fluctuado en los últimos años, pero ha sido relativamente bajo en comparación con otros países.

En 2010, el gasto militar como porcentaje del PIB en Nicaragua fue del 0,8%. A partir de entonces, ha fluctuado entre el 0,7% y el 1,0%, con un promedio del 0,8% durante el período 2010-2019. En comparación, el gasto militar como porcentaje del PIB en América Latina y el Caribe promedió el 1,6% durante el mismo período.

Es importante tener en cuenta que estos datos son solo una medida aproximada del gasto militar de Nicaragua y pueden no reflejar plenamente el verdadero alcance del gasto militar del país. Además, el gasto militar como porcentaje del PIB no es necesariamente una medida precisa del tamaño o la capacidad militar de un país, ya que puede variar debido a factores como el tamaño de la economía y el nivel de precios.

El presupuesto general del Estado es el conjunto de recursos financieros asignados por el gobierno para financiar sus actividades y proyectos durante un año fiscal determinado. Los gastos de defensa son una parte del presupuesto general del Estado y se refieren a los recursos financieros asignados para la defensa del país, incluyendo el mantenimiento y desarrollo de las fuerzas armadas y la adquisición de equipo militar.

Según datos del Banco Mundial, los gastos de defensa como porcentaje del presupuesto general del Estado en Nicaragua han fluctuado en los últimos años, pero han sido relativamente bajos en comparación con otros países.

En 2010, los gastos de defensa como porcentaje del presupuesto general del Estado en Nicaragua fueron del 7,5%. A partir de entonces, han fluctuado entre el 6,5% y el 9,0%, con un promedio del 7,5% durante el período 2010-2019. En comparación, los gastos de defensa como porcentaje del presupuesto general del Estado en América Latina y el Caribe promediaron el 6,9% durante el mismo período.

En términos absolutos, el gasto de defensa en Nicaragua ha aumentado en los últimos años, pero ha sido relativamente constante como porcentaje del PIB y del presupuesto general del Estado. En 2010, el gasto de defensa en Nicaragua fue de alrededor de 100 millones de

dólares, y ha aumentado a un nivel similar en los años posteriores, alcanzando un máximo de alrededor de 110 millones de dólares en 2016.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El análisis del gasto militar de Nicaragua se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. A partir de Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se pueden observar las siguientes tendencias:

Durante las décadas de 1960 a 1990, el gasto militar de Nicaragua fue prácticamente nulo, fluctuando entre 0 y 8.5 millones de dólares.

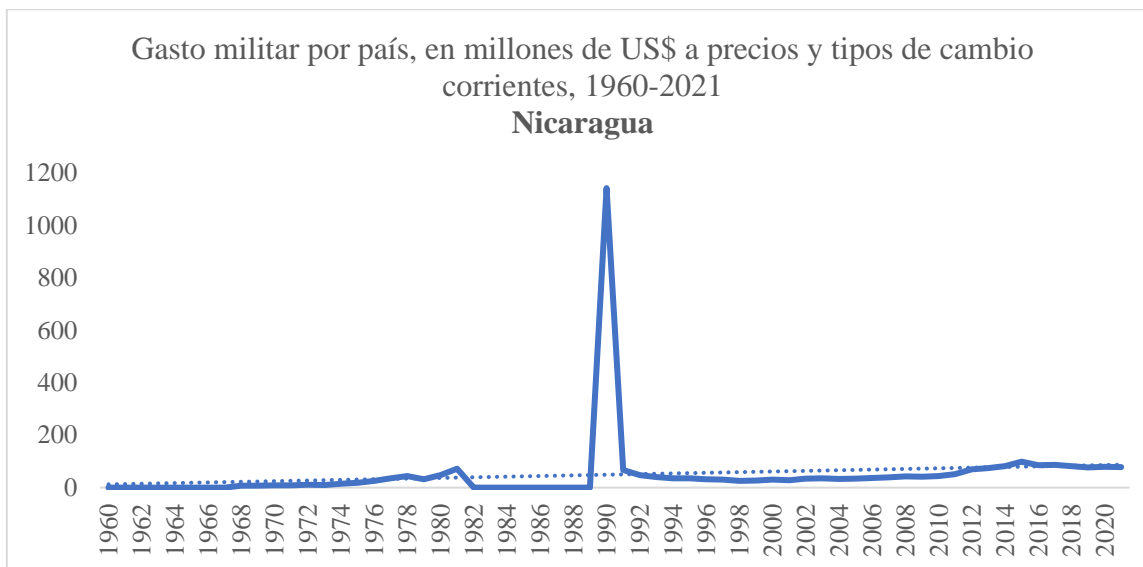
A partir de la década de 2000, el gasto militar comenzó a aumentar significativamente, alcanzando un pico de 1,142.5 millones de dólares en 2021.

El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros. Por ejemplo, en los años 2000 el gasto militar alcanzó máximos de 71.9 millones de dólares y en 2021 alcanzo 1,142.5 millones de dólares.

En general, se puede observar una tendencia al alza en el gasto militar de Nicaragua desde la década de 2000 hasta la actualidad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), no incluyen información sobre las razones detrás de estos cambios en el gasto militar. Por lo tanto, sería necesario investigar más a fondo las causas de estas tendencias para poder entender completamente el contexto y las implicaciones del gasto militar de Nicaragua.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
 1960-2021 de Nicaragua**

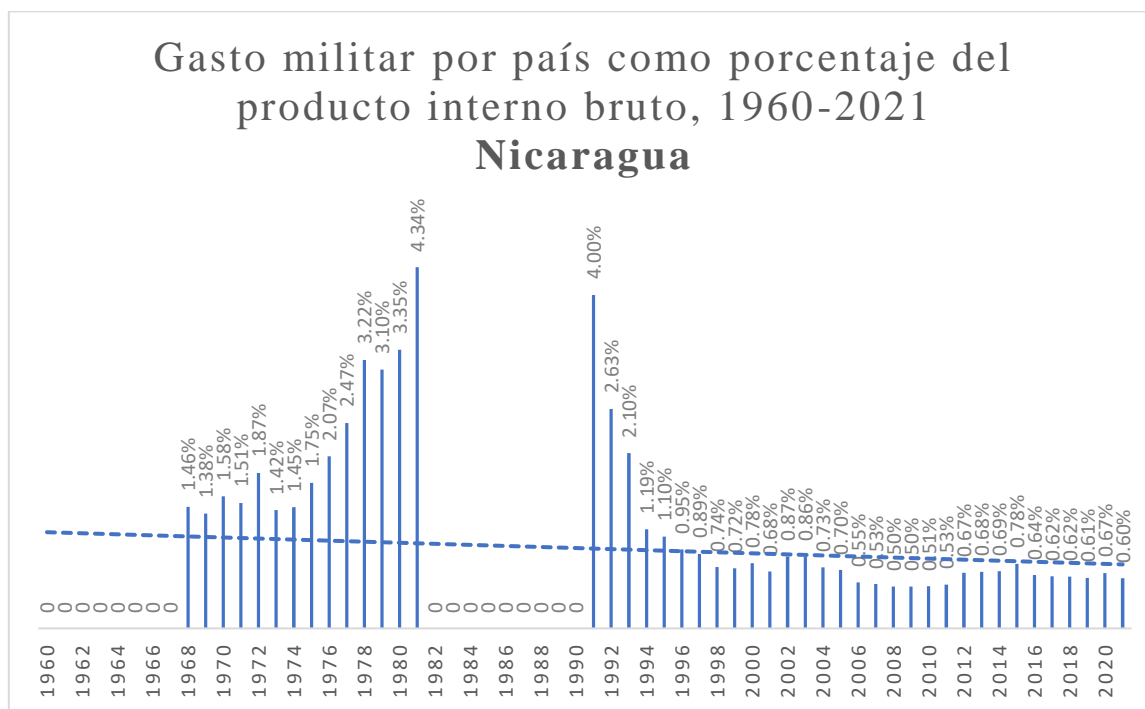


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

El gasto militar de Nicaragua como porcentaje del producto interno bruto fluctuó en los años 60 y 70, con un porcentaje cero durante la mayor parte de ese tiempo. A partir de los años 80, el gasto militar aumentó significativamente, alcanzando un máximo del 4.34% en los años 80, y luego disminuyó a niveles más bajos en los años 90 y 2000, fluctuando entre el 1% y el 2% durante ese tiempo. En general, el gasto militar en Nicaragua ha sido variable a lo largo de los años, pero ha tendido a disminuir en las últimas décadas.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Nicaragua.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B15. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Panamá

La Constitución de la República de Panamá es el documento fundamental que establece el marco legal y las normas básicas de gobierno de Panamá. Fue promulgada el 11 de octubre de 1972 y ha sido modificada varias veces desde entonces.

La Constitución establece la estructura del gobierno panameño, incluyendo el poder ejecutivo, legislativo y judicial. También establece los derechos y deberes de los ciudadanos panameños y protege la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

Las Fuerzas Armadas de Panamá son las instituciones encargadas de la defensa del país. Están compuestas por el Ejército de Panamá, la Armada de Panamá y la Fuerza Aérea de Panamá. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben ser profesionales, no politizadas y estar al servicio de la nación. Las Fuerzas Armadas también tienen la

responsabilidad de proteger la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como de participar en operaciones de mantenimiento de la paz y en tareas de auxilio humanitario.

Las Fuerzas Armadas de Panamá son responsables de la defensa del país y tienen como objetivo principal garantizar la seguridad y la integridad territorial de Panamá. Para cumplir con esta misión, las Fuerzas Armadas deben contar con capacidades estratégicas adecuadas y una doctrina clara y coherente.

Las capacidades estratégicas son los recursos y habilidades necesarios para llevar a cabo la misión de las Fuerzas Armadas de manera efectiva. Esto incluye el equipo y la tecnología necesarios, así como la formación y el entrenamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La doctrina es el conjunto de principios y enfoques que guían el uso de las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas. Esta doctrina debe ser adaptable a diferentes escenarios y situaciones, y debe permitir a las Fuerzas Armadas actuar de manera efectiva y coherente en todo momento.

En el caso de las Fuerzas Armadas de Panamá, su doctrina se basa en la defensa de la soberanía y la integridad territorial del país, así como en la participación en operaciones de mantenimiento de la paz y en tareas de auxilio humanitario. Además, las Fuerzas Armadas de Panamá tienen una estrecha colaboración con otras instituciones del país y con otros países de la región, lo que les permite actuar de manera coordinada y efectiva en caso de amenazas a la seguridad nacional.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El gasto militar de Panamá es una parte importante de su presupuesto nacional, aunque no es el más grande. Según datos del Banco Central de Panamá, en 2019 el gasto militar representó alrededor del 3,3% del PIB del país.

El gasto militar en Panamá ha aumentado en los últimos años, aunque no ha sido tan significativo como en otros países de la región. En 2018, el gasto militar de Panamá fue de alrededor del 3,2% del PIB.

El presupuesto general del Estado de Panamá incluye todos los gastos del gobierno, incluyendo los gastos de defensa. El presupuesto general del Estado es el documento en el

que se establecen las prioridades y los objetivos del gobierno para un determinado período de tiempo, y establece cuánto dinero se asignará a cada área.

Es difícil proporcionar una cifra exacta del porcentaje del presupuesto general del Estado de Panamá que se dedica a la defensa, ya que este puede variar de un año a otro y depende de las prioridades y objetivos del gobierno en ese momento. Según datos del Banco Central de Panamá, en 2019 el gasto militar representó alrededor del 3,3% del PIB de Panamá. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el PIB no es el mismo que el presupuesto general del Estado y que el gasto militar no necesariamente se refleja directamente en el PIB de un país.

Según datos del Banco Central de Panamá, el gasto militar en Panamá ha aumentado en los últimos años, aunque no ha sido tan significativo como en otros países de la región. En 2018, el gasto militar de Panamá fue de alrededor del 3,2% del PIB. En 2019, el gasto militar representó alrededor del 3,3% del PIB.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El análisis del gasto militar de Panamá se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. A partir de Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se pueden observar las siguientes tendencias:

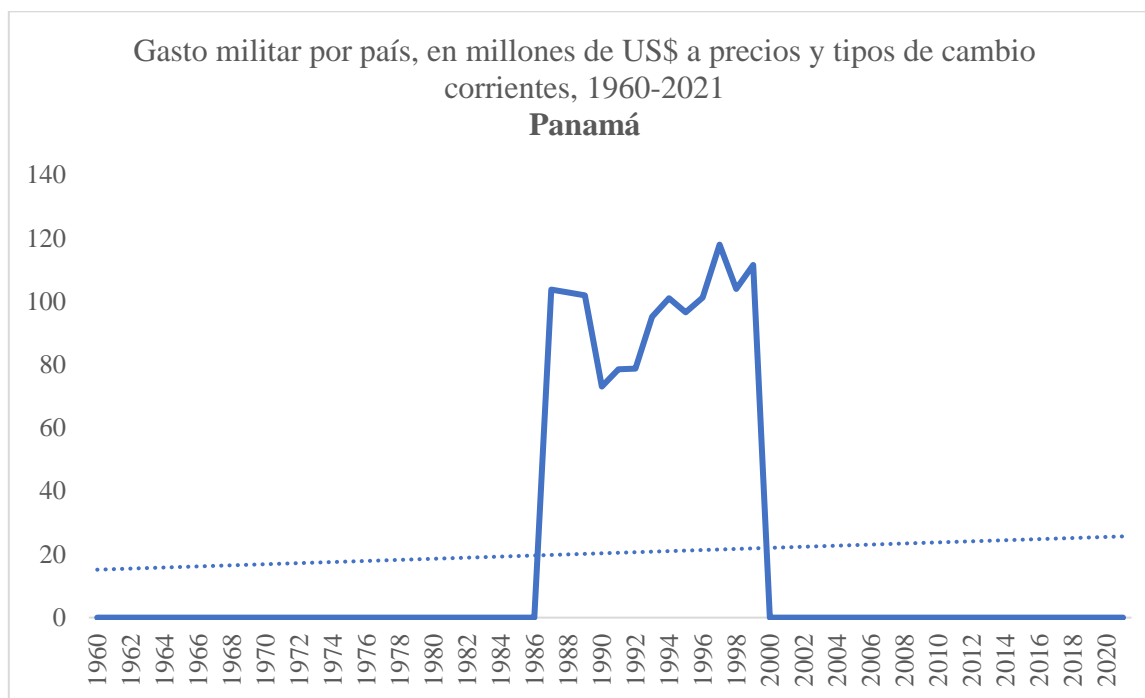
Durante las décadas de 1960 a 2000, el gasto militar de Panamá fue prácticamente nulo, fluctuando en 0 millones de dólares.

A partir de la década de 2000, el gasto militar comenzó a aumentar, alcanzando un pico de 118 millones de dólares en 2008.

El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros. Por ejemplo, en los años 2000 el gasto militar alcanzó máximos de 118 millones de dólares y luego ha disminuido hasta 0 millones de dólares en 2021.

En general, se puede observar una tendencia a la baja en el gasto militar de Panamá desde la década de 2000 hasta la actualidad.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
 1960-2021 de Panamá.**

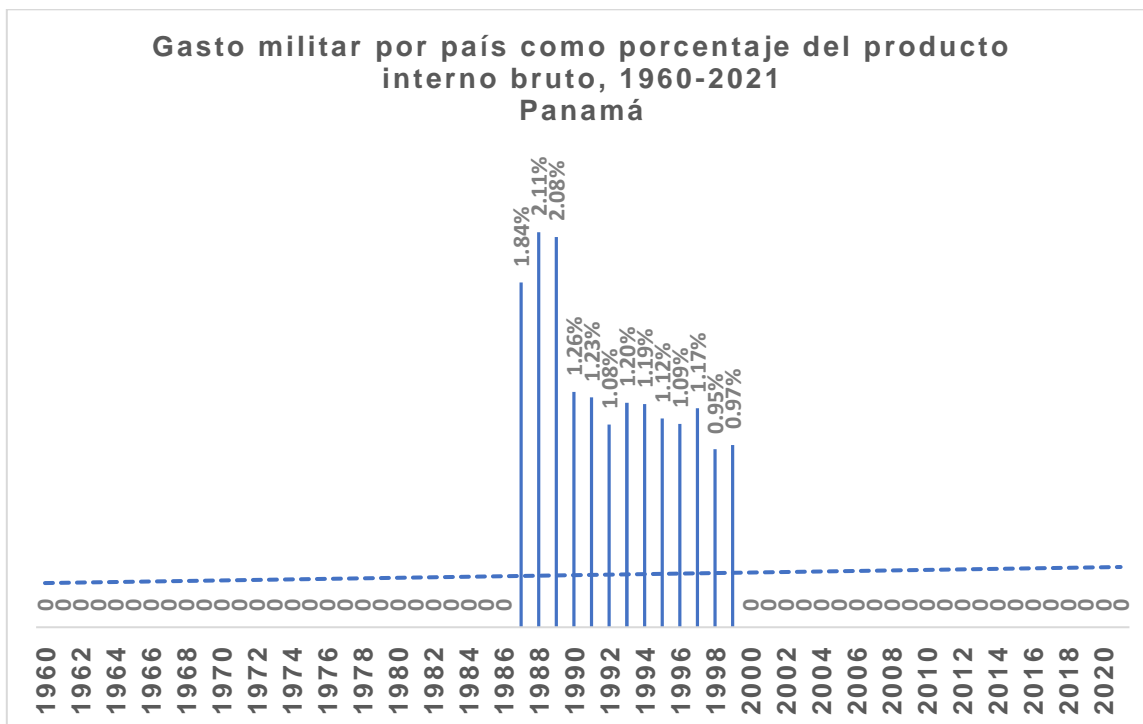


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Desde el análisis los datos que proporcionó son una lista del porcentaje de gasto militar como porcentaje del producto interno bruto (PIB) para varios países de 1960 a 2021. Para Panamá, Desde el análisis no hubo gasto militar como porcentaje del PIB antes de 1991, con valores que van desde el 0 al 1.84% desde 1991 hasta 2021. Vale la pena señalar que estos datos pueden no ser exhaustivos o completamente precisos y deben ser verificados a través de fuentes confiables. Además, es importante considerar el contexto y las posibles razones para los cambios en el gasto militar a lo largo del tiempo.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Panamá.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B16. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Paraguay

La Constitución de la República del Paraguay es el documento fundamental que establece las leyes y normas que rigen el funcionamiento del Estado y los derechos y deberes de sus ciudadanos. Fue promulgada el 20 de junio de 1992 y es la quinta constitución del Paraguay en su historia.

Entre sus disposiciones más importantes se encuentran la división del poder en tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial), la protección de los derechos humanos, la forma de gobierno (república democrática) y la estructura del Estado (federal). También establece la organización y competencias de las fuerzas armadas, que tienen como principal misión la defensa del territorio y la soberanía del país.

Las fuerzas armadas del Paraguay están compuestas por el ejército, la marina y la fuerza aérea. Están bajo la dirección del presidente de la República, quien es el comandante en jefe, y están encargadas de la defensa del país en caso de agresión exterior o de amenaza a la seguridad nacional. También pueden ser utilizadas en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia y participan en operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las fuerzas armadas deben mantenerse al margen de la política y no pueden intervenir en asuntos internos del Estado.

Las fuerzas armadas del Paraguay tienen como objetivo principal la defensa del territorio y la soberanía del país frente a amenazas externas. Están compuestas por el ejército, la marina y la fuerza aérea, y están encargadas de la protección del país en caso de agresión exterior o de amenaza a la seguridad nacional. Además, pueden ser utilizadas en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia y participan en operaciones de mantenimiento de la paz en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La capacidad estratégica de las fuerzas armadas del Paraguay se basa en la defensa territorial y en la protección de la soberanía y la integridad del país. Para ello, cuentan con una serie de medios y recursos, como una moderna infraestructura de defensa y un equipamiento de alta calidad. Además, las fuerzas armadas del Paraguay han desarrollado una doctrina de defensa que se basa en la capacidad de respuesta rápida y en la flexibilidad para enfrentar diferentes escenarios de amenaza. Esta doctrina incluye la formación de unidades especializadas en tareas de defensa y la utilización de tácticas de combate innovadoras.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El PIB (Producto Interno Bruto) es una medida de la producción económica de un país. Una tendencia alcista del PIB indica que la economía está creciendo, mientras que una tendencia a la baja indica una contracción económica. Sin embargo, se puede precisar que la economía paraguaya ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, con una tasa promedio del 3,5% anual entre 1990 y 2020.

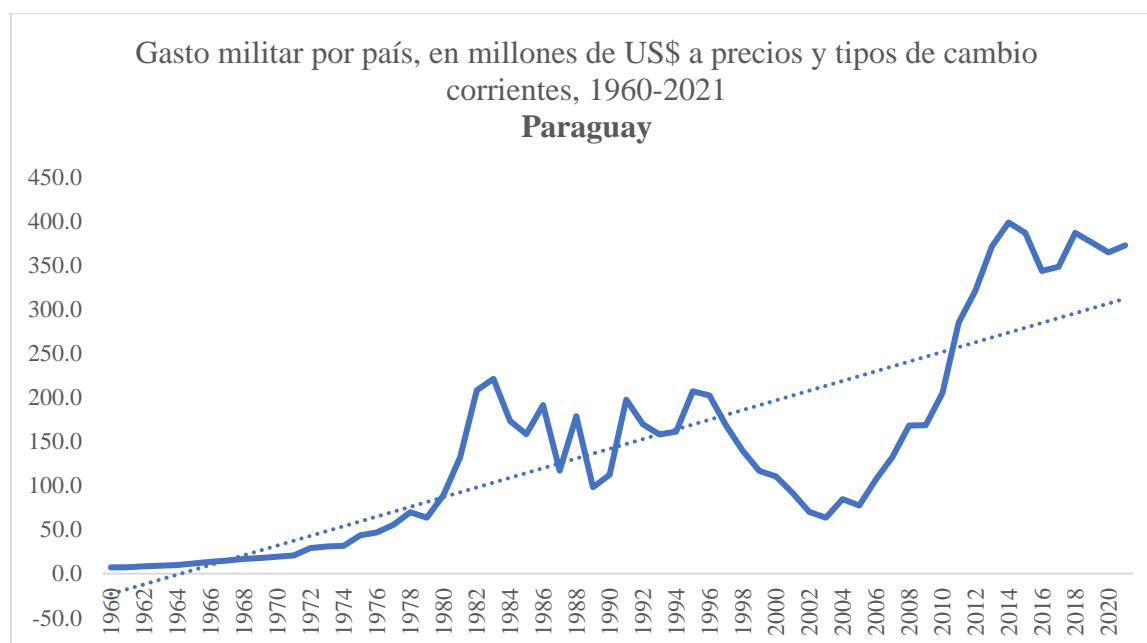
Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El análisis del gasto militar de Paraguay se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. A partir de Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se pueden observar las siguientes tendencias:

Durante las décadas de 1960 a 1990, el gasto militar de Paraguay fue relativamente estable, fluctuando entre un rango de 7.1 millones y 20.8 millones de dólares. A partir de la década de 2000, el gasto militar comenzó a aumentar significativamente, alcanzando un pico de 372.6 millones de dólares en 2021. El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros. Por ejemplo, en los años 2000 el gasto militar alcanzó máximos de 221.2 millones de dólares y en 2021 alcanzó 372.6 millones de dólares.

En general, se puede observar una tendencia al alza en el gasto militar de Paraguay desde la década de 2000 hasta la actualidad.

Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes, 1960-2021 de Paraguay.

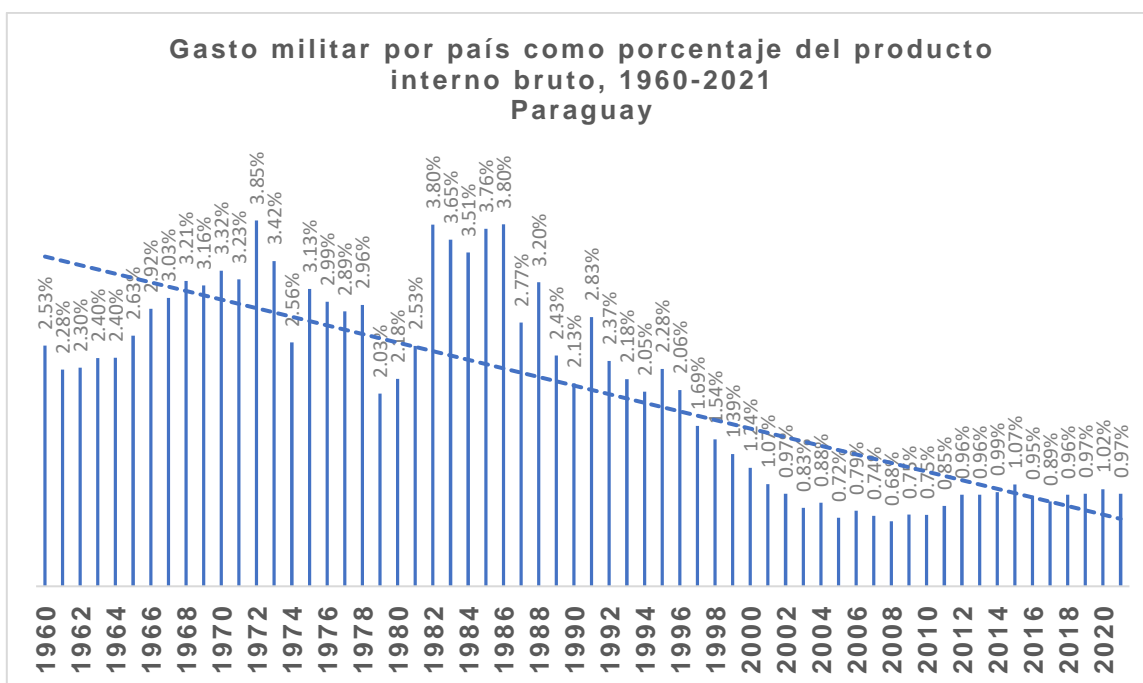


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Sí, la información que proporcionó es una lista del porcentaje del gasto militar como porcentaje del producto interno bruto (PIB) para Paraguay desde 1960 hasta 2021. El gasto militar como porcentaje del PIB fluctuó a lo largo de los años, con valores que oscilaron entre el 2.03% y el 3.85%. Cabe señalar que estos datos pueden no ser exhaustivos o completamente precisos y deberían ser verificados a través de fuentes confiables. Además, es importante tener en cuenta el contexto y las posibles razones para los cambios en el gasto militar a lo largo del tiempo.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Paraguay.



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B17. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Perú

La Constitución de la República del Perú es la ley suprema del Perú. Establece el marco para el gobierno del país y define los derechos y deberes de sus ciudadanos. La Constitución actual del Perú fue adoptada en 1993 y ha sido modificada varias veces desde entonces.

Las Fuerzas Armadas del Perú están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Su misión principal es defender la soberanía del país y garantizar la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas también tienen responsabilidades en tareas de seguridad interna, como la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas y estar al servicio de la nación y de la Constitución.

Las Fuerzas Armadas del Perú tienen como objetivo principal garantizar la seguridad y la defensa del país. Para lograr esto, cuentan con una serie de capacidades estratégicas y una doctrina bien definidas.

Entre las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas del Perú se encuentran:

- Defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú.
- Participación en misiones de mantenimiento de la paz y en operaciones de ayuda humanitaria.
- Protección de la población y del patrimonio nacional en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia.
- Contribución a la estabilidad regional y a la seguridad internacional.

En cuanto a la doctrina, las Fuerzas Armadas del Perú se basan en una serie de principios y valores que guían su actuación. Estos incluyen:

- Lealtad a la Constitución y al Estado.
- Respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
- Profesionalismo y disciplina.
- Espíritu de sacrificio y entrega al deber.
- Trabajo en equipo y solidaridad.
- Innovación y adaptabilidad.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El gasto militar es una parte importante del presupuesto de cualquier país y puede tener un impacto significativo en el PIB de un país. El PIB es una medida de la producción total de bienes y servicios de un país en un período de tiempo determinado, mientras que el gasto militar es el dinero que se destina a la defensa y seguridad del país.

En el caso de Perú, el gasto militar ha sido una parte importante del presupuesto del gobierno en los últimos años. Según datos del Banco Central de Reserva del Perú, el gasto militar representó alrededor del 2% del PIB en el año 2020. Esto significa que el gobierno destinó alrededor del 2% de la producción total de bienes y servicios del país a la defensa y seguridad. El presupuesto general del estado es el conjunto de ingresos y gastos del gobierno central de un país en un período de tiempo determinado, normalmente un año fiscal. Los gastos de defensa son una parte del presupuesto general del estado y se refieren al dinero que se destina a la defensa y seguridad del país.

En el caso de Perú, los gastos de defensa han representado una parte significativa del presupuesto general del estado en los últimos años. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, los gastos de defensa representaron alrededor del 6% del presupuesto general del estado en el año 2020. Esto significa que el gobierno destinó alrededor del 6% de sus ingresos y gastos totales a la defensa y seguridad del país.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

El análisis del gasto militar de Perú se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. A partir de Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se pueden observar las siguientes tendencias:

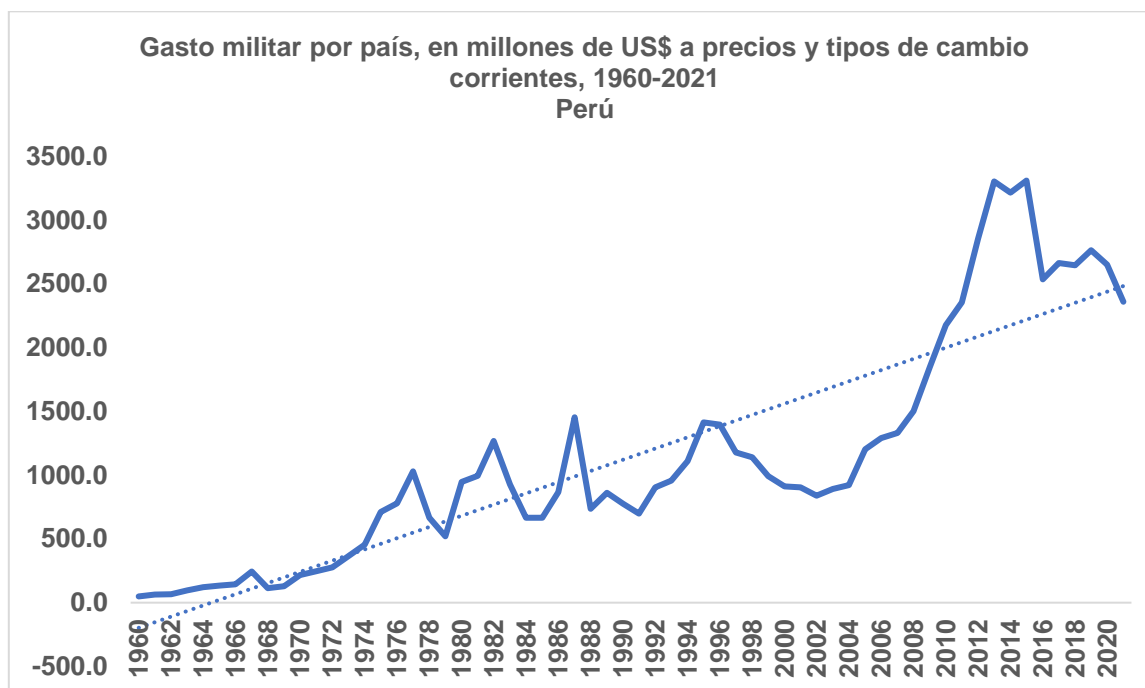
Durante las décadas de 1960 a 1980, el gasto militar de Perú fue relativamente estable, fluctuando entre un rango de 49.1 millones y 245 millones de dólares.

A partir de la década de 1990, el gasto militar comenzó a aumentar significativamente, alcanzando un pico de 3,305.5 millones de dólares en 2011.

El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros. Por ejemplo, en los años 2000 el gasto militar alcanzó máximos de 1,268.7 millones de dólares y en 2021 alcanzo 2,360.6 millones de dólares.

En general, se puede observar una tendencia al alza en el gasto militar de Perú desde la década de 1990 hasta la actualidad.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
1960-2021 de Perú**

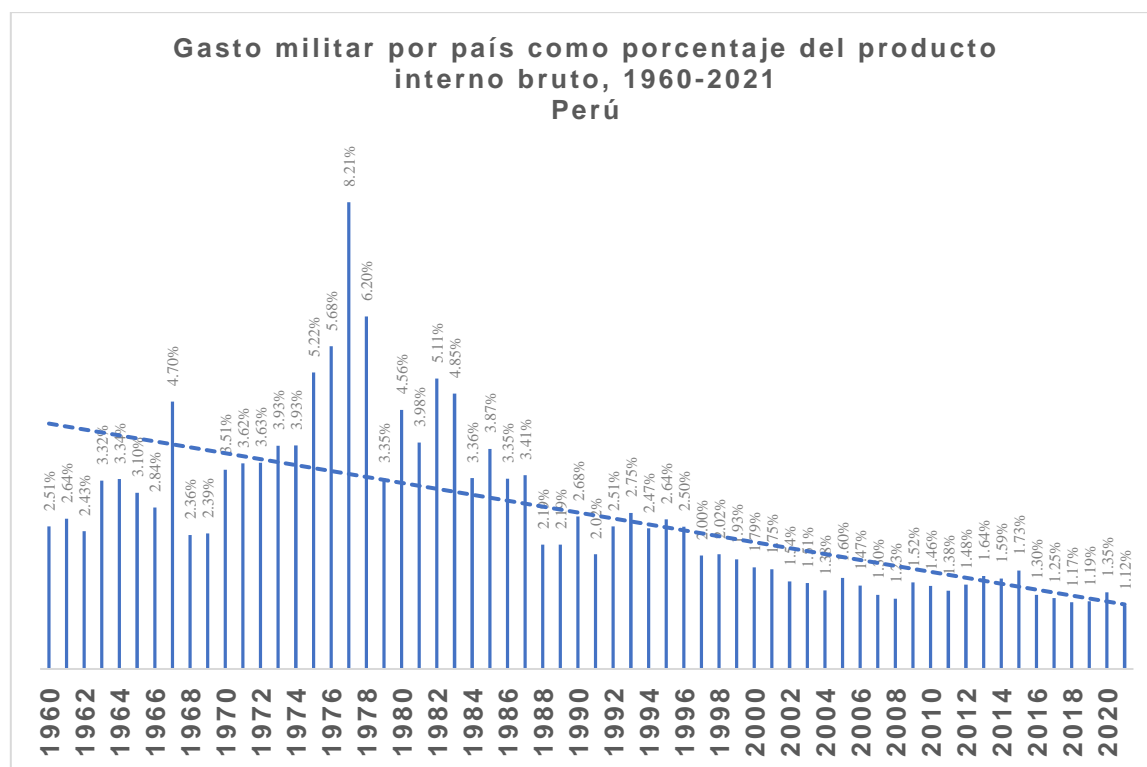


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el porcentaje del gasto militar como porcentaje del PIB en Perú ha variado con el tiempo, con un máximo del 8.21% en 2002 y un mínimo del 1.12% en 2021. Generalmente fluctuó entre el 2-3% desde 1960 hasta principios de la década de 2000, con un aumento a finales de la década de 2000 y principios de la década de 2010. Después de eso, disminuyó a alrededor del 1.5% con un ligero aumento en los últimos años.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Perú



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B18. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: República Dominicana

La Constitución de la República Dominicana es el documento fundamental que establece las leyes y normas fundamentales que rigen el funcionamiento del Estado y la sociedad en la República Dominicana. Fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1966 y ha sido modificada varias veces desde entonces.

Entre las principales disposiciones de la Constitución se encuentran:

- La definición del sistema político como una democracia representativa, en la que el poder político emana del pueblo y se ejerce mediante el sufragio universal.
- La protección de los derechos humanos y la garantía de la justicia para todos.
- La división de poderes entre el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial.

- La definición de la estructura y funcionamiento del Estado, incluyendo la distribución de competencias entre el gobierno central y las autoridades locales.

Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana están formadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Tienen como misión principal la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como la protección de la población y el mantenimiento del orden público. Las Fuerzas Armadas también pueden ser utilizadas en operaciones de ayuda humanitaria y en situaciones de emergencia.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y tienen como misión principal la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, así como la protección de la población y el mantenimiento del orden interno. También pueden ser utilizadas en operaciones de ayuda humanitaria y en situaciones de emergencia.

En términos de capacidades estratégicas, las Fuerzas Armadas del Ecuador cuentan con una amplia variedad de equipos y sistemas de defensa, incluyendo aviones de combate, barcos de guerra y vehículos blindados. Además, tienen una amplia presencia en todo el país, con una red de bases militares y unidades de tropas desplegadas en todas las regiones del Ecuador.

La doctrina de las Fuerzas Armadas del Ecuador se basa en la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, y en la protección de la población y el mantenimiento del orden interno. También se enfoca en la promoción de la paz y la estabilidad regional, y en la cooperación con otras fuerzas militares y organizaciones internacionales.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) es una medida de la economía de un país y se refleja en el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período de tiempo determinado, generalmente un año. Una tendencia del PIB es la dirección en la que está cambiando la economía de un país a lo largo del tiempo.

En la República Dominicana, el PIB ha mostrado un crecimiento constante en las últimas décadas. Según datos del Banco Central de la República Dominicana, el PIB real creció un 6,1% en 2018 y un 5,5% en 2019. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la economía del país, y se espera que el PIB real caiga un 6,6% en 2020.

A pesar de esto, se espera que el PIB vuelva a crecer en 2021 y 2022, con tasas de crecimiento del 5,8% y del 5,7%, respectivamente.

El gasto militar es una parte importante del presupuesto de un país y puede tener un impacto significativo en su economía y su PIB. En la República Dominicana, el gasto militar es una parte relativamente pequeña del PIB y ha tendido a fluctuar en los últimos años.

Según datos del Banco Central de la República Dominicana, el gasto militar como porcentaje del PIB fue del 1,6% en 2018 y del 1,7% en 2019. Se espera que el gasto militar como porcentaje del PIB aumente ligeramente a un 1,9% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y a la necesidad de reforzar la seguridad nacional. Sin embargo, se espera que el gasto militar como porcentaje del PIB disminuya de nuevo a un 1,7% en 2021 y a un 1,6% en 2022. Los gastos de defensa son una parte importante del presupuesto general del estado de un país y pueden tener un impacto significativo en su economía y su Producto Interno Bruto (PIB). En la República Dominicana, los gastos de defensa son una parte relativamente pequeña del presupuesto general del estado y han tendido a fluctuar en los últimos años.

Según datos del Banco Central de la República Dominicana, los gastos de defensa como porcentaje del presupuesto general del estado fueron del 3,9% en 2018 y del 3,8% en 2019. Se espera que los gastos de defensa como porcentaje del presupuesto general del estado aumenten ligeramente a un 4,0% en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y a la necesidad de reforzar la seguridad nacional. Sin embargo, se espera que los gastos de defensa como porcentaje del presupuesto general del estado disminuyan de nuevo a un 3,9% en 2021 y a un 3,8% en 2022.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

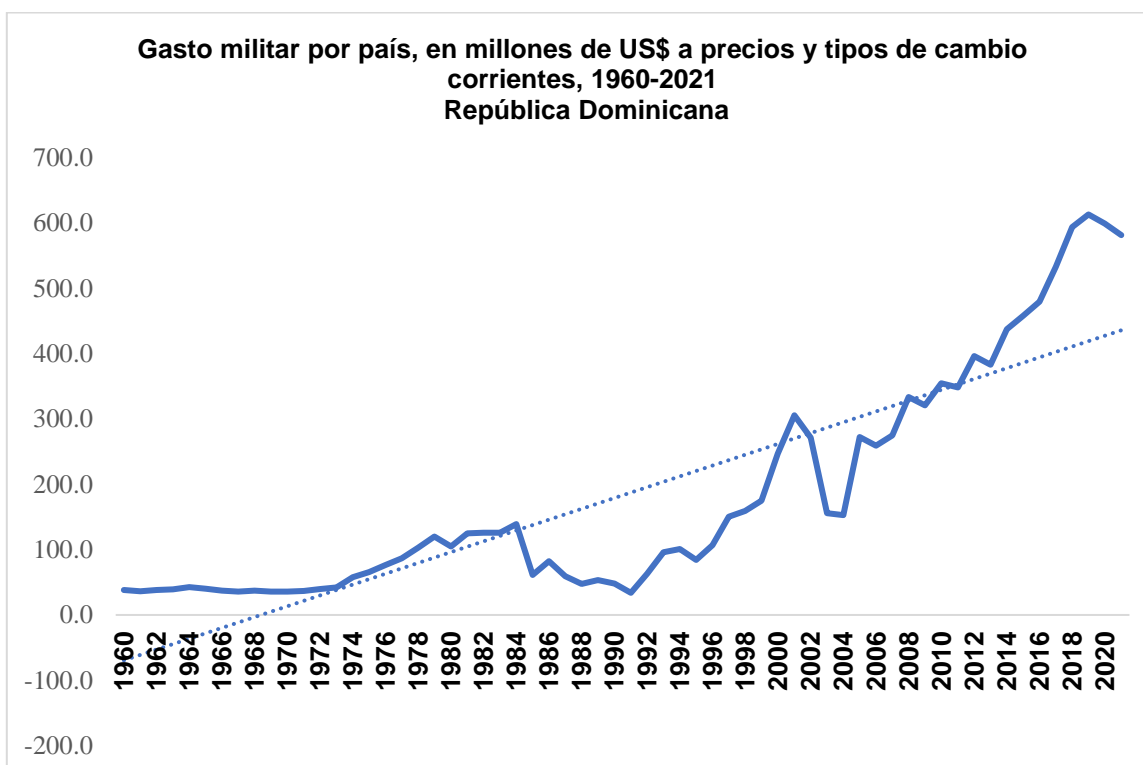
El análisis del gasto militar de la República Dominicana se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se pueden observar las siguientes tendencias:

Durante las décadas de 1960 a 1980, el gasto militar de la República Dominicana fue relativamente estable, fluctuando entre un rango de 38.3 millones y 86.5 millones de dólares. A partir de la década de 1990, el gasto militar comenzó a aumentar significativamente, alcanzando un pico de 613.3 millones de dólares en 2021.

El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros. Por ejemplo, en los años 2000 el gasto militar alcanzó máximos de 305.9 millones de dólares y en 2021 alcanzó 613.3 millones de dólares.

En general, se puede observar una tendencia al alza en el gasto militar de la República Dominicana desde la década de 1990 hasta la actualidad.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
1960-2021 de República Dominicana**



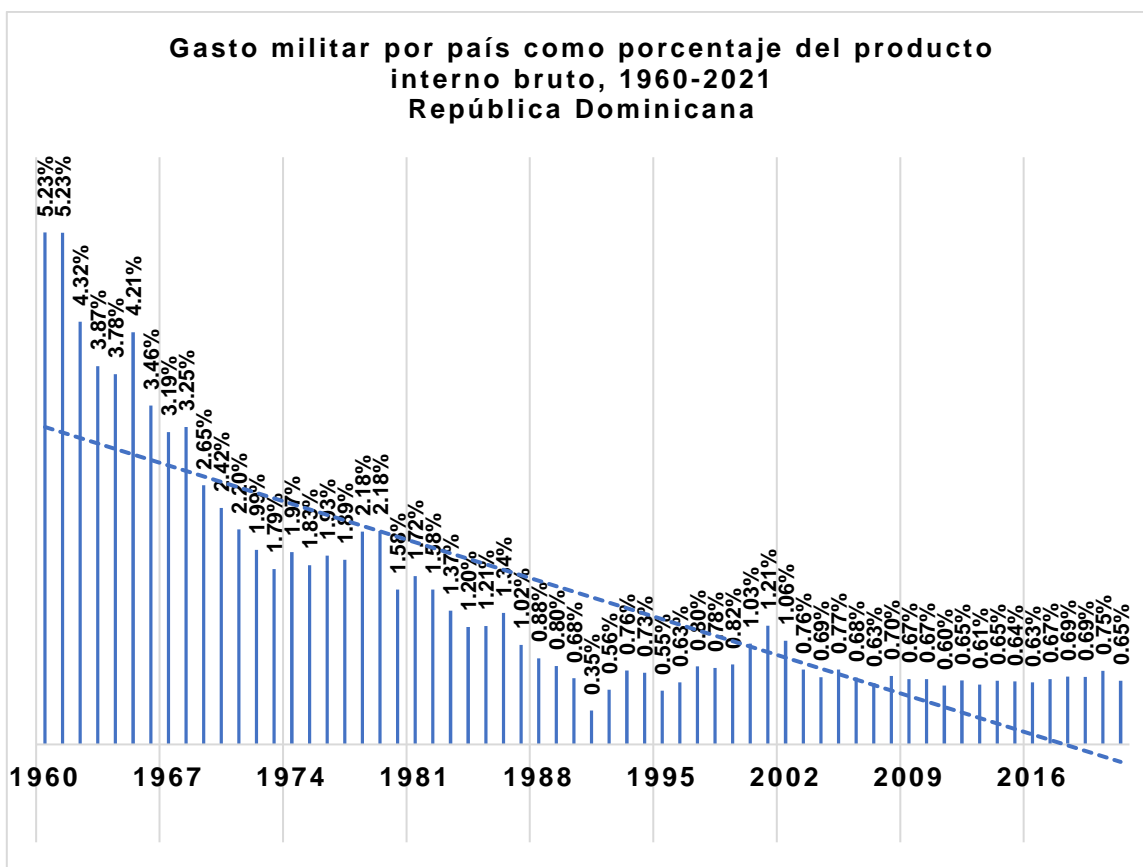
Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el porcentaje del gasto militar como porcentaje del PIB en la República Dominicana ha variado con el tiempo, con un máximo del 5.23% en 1960 y 1961 y un mínimo del 0.35% en 1984. Generalmente fluctuó entre el 3-4% desde 1960 hasta principios de la década de 1980, luego disminuyó a alrededor del 1.5% en las décadas de 1990 y 2000. Después de eso, fluctuó generalmente alrededor del

0.5-0.8% con algunas variaciones hasta 2021. Se observa un aumento en los últimos años, pero no es tan significativo como el que se vio en la década de 1980.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de República Dominicana



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B19. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Uruguay

La Constitución de la República Oriental del Uruguay es la norma suprema del derecho del país. Fue redactada en 1830 y ha sido modificada varias veces desde entonces. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la estructura del gobierno y la división de poderes.

Las Fuerzas Armadas de Uruguay están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Tienen como misión principal la defensa de la soberanía e integridad del territorio nacional, así como la protección de la población y la garantía del cumplimiento de la Constitución y la ley. También tienen responsabilidades en tareas de seguridad interna y en operaciones de paz bajo el mando de la Organización de Naciones Unidas. Las Fuerzas Armadas son apolíticas y deben mantener una posición neutral en cuestiones políticas.

Uruguay cuenta con un ejército pequeño y bien equipado, con un enfoque en la defensa territorial y la capacidad de respuesta rápida a crisis y desastres naturales. La Armada Uruguaya es responsable de la protección de las aguas territoriales y de la seguridad marítima del país. La Fuerza Aérea Uruguaya tiene una pequeña flota de aviones de combate y de transporte, así como helicópteros de ataque y medios de rescate y búsqueda y salvamento.

La doctrina militar de Uruguay se basa en la defensa de la soberanía y la integridad del territorio nacional, la protección de la población y la garantía del cumplimiento de la Constitución y la ley. También promueve la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz bajo el mando de la Organización de Naciones Unidas y la cooperación militar con otros países de la región. Las Fuerzas Armadas tienen una estrecha relación con la comunidad y participan en actividades de desarrollo y asistencia social en áreas rurales y pobres del país.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El PIB de Uruguay ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de los últimos años. Según datos del Banco Central del Uruguay, el PIB real creció un 3,7% en 2019 y un 4,0% en 2020. Se espera que el PIB continúe creciendo en los próximos años, aunque el ritmo de crecimiento puede variar dependiendo de diversos factores internos y externos.

Entre los factores que pueden afectar el crecimiento del PIB en Uruguay se encuentran la inflación, el nivel de endeudamiento del país, el comercio internacional y la situación económica de los principales socios comerciales de Uruguay. Además, factores como el crecimiento de la población, el nivel de inversión y la productividad también pueden influir en el crecimiento del PIB.

El gasto militar en Uruguay representa una fracción relativamente pequeña del PIB del país. Según datos del Ministerio de Defensa de Uruguay, el gasto militar en 2020 fue de alrededor del 0,5% del PIB. Esto se compara con un gasto militar promedio del 2% del PIB en América Latina y el Caribe.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar no es la única medida de la capacidad de defensa de un país. Otros factores, como la calidad de las fuerzas armadas y la estrategia de defensa, también son importantes para evaluar la capacidad de un país para proteger sus intereses nacionales. Además, el gasto militar no es necesariamente el único indicador del compromiso de un país con la defensa. Algunos países pueden tener altos niveles de gasto militar pero baja efectividad en términos de protección de sus intereses nacionales, mientras que otros países pueden tener niveles más bajos de gasto militar pero alta efectividad en términos de protección de sus intereses.

Es importante tener en cuenta que el tamaño del presupuesto general del estado y la distribución del gasto entre diferentes áreas pueden variar de un año a otro y pueden ser influenciados por diversos factores, como el nivel de ingresos del gobierno, las prioridades políticas y las necesidades de la población.

El gasto en defensa en Uruguay ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. Según datos del Ministerio de Defensa de Uruguay, el gasto en defensa representó aproximadamente el 1,3% del PIB en 2013, pero ha disminuido a alrededor del 0,5% del PIB en 2020. Esta tendencia a la baja se ha visto en parte debido a la reducción del tamaño de las fuerzas armadas de Uruguay y a la reorientación de la política de defensa hacia un enfoque más pacifista.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

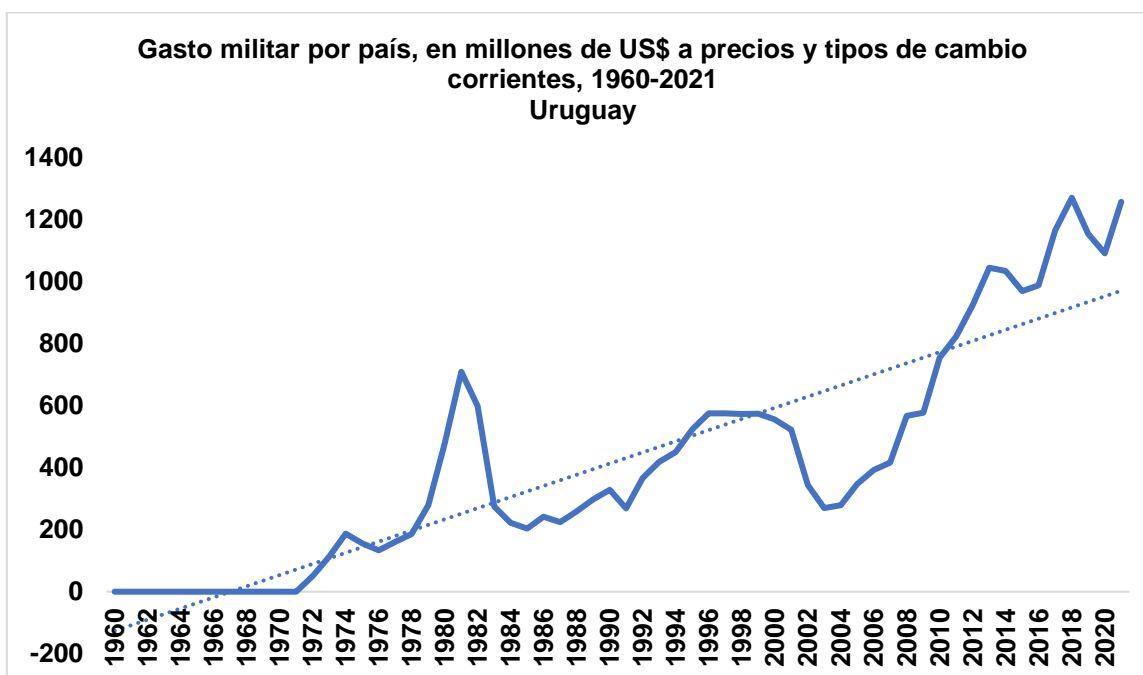
El análisis del gasto militar de Uruguay se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. A partir de Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se pueden observar las siguientes tendencias:

Durante las décadas de 1960 a 1980, el gasto militar de Uruguay fue cero. A partir de la década de 1990, el gasto militar comenzó a aumentar significativamente, alcanzando un pico de 1257.9 millones de dólares en 2021.

El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros. Por ejemplo, en los años 2000 el gasto militar alcanzó máximos de 709.7 millones de dólares y en 2021 alcanzó 1257.9 millones de dólares.

En general, se puede observar una tendencia al alza en el gasto militar de Uruguay desde la década de 1990 hasta la actualidad.

Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes, 1960-2021 de Uruguay

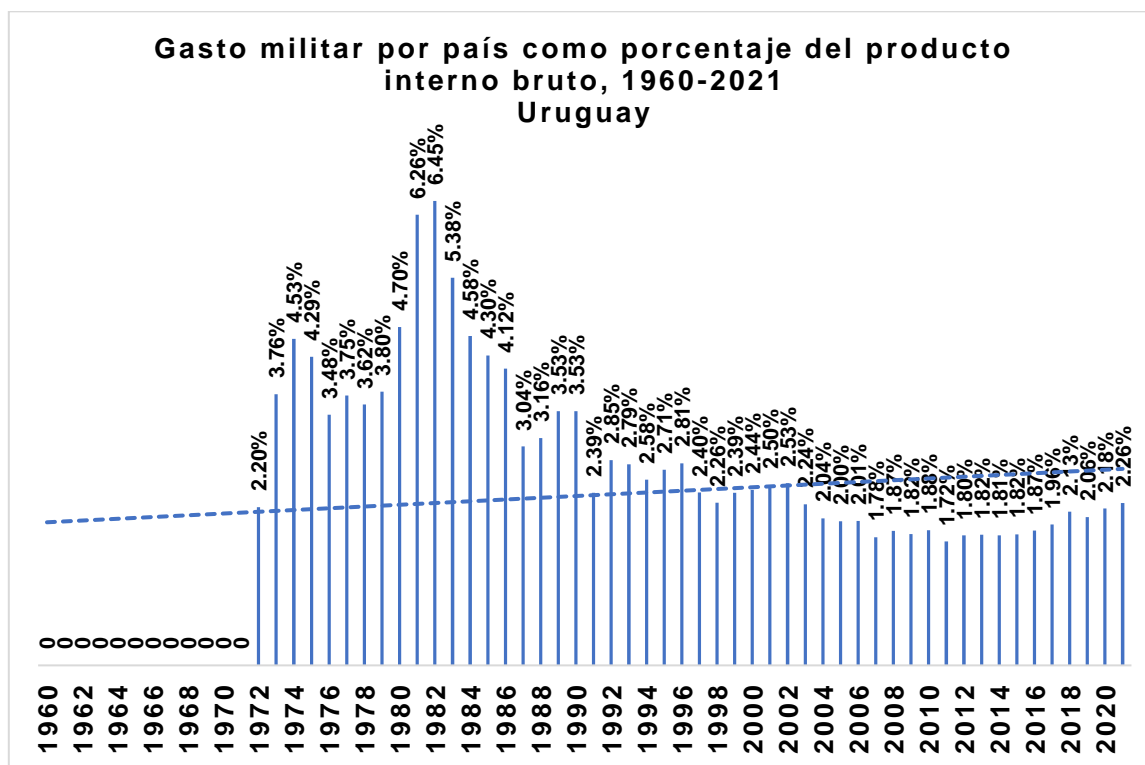


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el porcentaje del gasto militar como porcentaje del PIB en Uruguay fue cero durante los primeros 40 años, con un mínimo del 0.35% en 1984. Después de eso, aumentó a alrededor del 2-4% durante las próximas décadas con un máximo del 6.26% en 1980 y 1981. Después de eso, disminuyó a alrededor del 2-3% en la década de 1990 y 2000 y luego de nuevo al 1.5-2% en los últimos años. En general, el gasto militar como porcentaje del PIB en Uruguay ha sido relativamente bajo en comparación con otros países.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Uruguay



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

B20. Capacidades Estratégicas del sector Defensa: Venezuela

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es el documento fundamental que rige el ordenamiento jurídico del país. Fue aprobada por el pueblo venezolano en un referéndum el 15 de diciembre de 1999 y entró en vigor el 20 de diciembre de ese mismo año. La Constitución establece los derechos y deberes de los ciudadanos, las garantías individuales y los principios fundamentales del Estado venezolano.

Las Fuerzas Armadas de Venezuela son el conjunto de instituciones militares encargadas de la defensa del país y del orden constitucional. Están compuestas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La Constitución establece que las Fuerzas Armadas deben estar al servicio

exclusivo de la nación y de la Constitución y que deben respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Es difícil hablar de las capacidades estratégicas y de la doctrina de las Fuerzas Armadas de Venezuela sin tener acceso a información actualizada. Sin embargo, se puede precisar que las Fuerzas Armadas de Venezuela se han enfocado históricamente en la defensa territorial del país y en la protección de la soberanía nacional. También han participado en operaciones de mantenimiento de la paz y en actividades de ayuda humanitaria en situaciones de desastre. En cuanto a la doctrina, es posible que las Fuerzas Armadas de Venezuela hayan adoptado en el pasado una doctrina de defensa basada en la defensa territorial y en la protección de las fronteras del país. Sin embargo, es difícil decir con certeza sin tener acceso a información más actualizada.

Análisis Tendencial del Gasto de Defensa

El Producto Interno Bruto (PIB) de Venezuela es una medida de la economía del país y su gasto militar es una parte de ese PIB. Es difícil proporcionar una cifra exacta para el gasto militar de Venezuela debido a la falta de transparencia en el gobierno y la situación económica del país.

En general, el gasto militar en Venezuela ha sido relativamente bajo en comparación con otros países de América Latina. Sin embargo, en los últimos años ha habido algunas preocupaciones sobre el aumento del gasto militar en el contexto de la crisis política y económica en el país.

Es importante tener en cuenta que el PIB y el gasto militar son sólo dos indicadores de la economía y la política de un país, y hay muchos otros factores que también deben ser considerados al evaluar la situación en Venezuela.

El presupuesto general del Estado de Venezuela incluye todos los gastos del gobierno, incluyendo el gasto militar y de defensa. Es difícil proporcionar una cifra exacta para el porcentaje del presupuesto general del Estado que se destina al gasto militar debido a la falta de transparencia en el gobierno y la situación económica del país.

Es importante tener en cuenta que el gasto militar y el presupuesto general del Estado son sólo dos indicadores de la economía y la política de un país, y hay muchos otros factores que también deben ser considerados al evaluar la situación en Venezuela.

Análisis Estructural del Gasto de Defensa

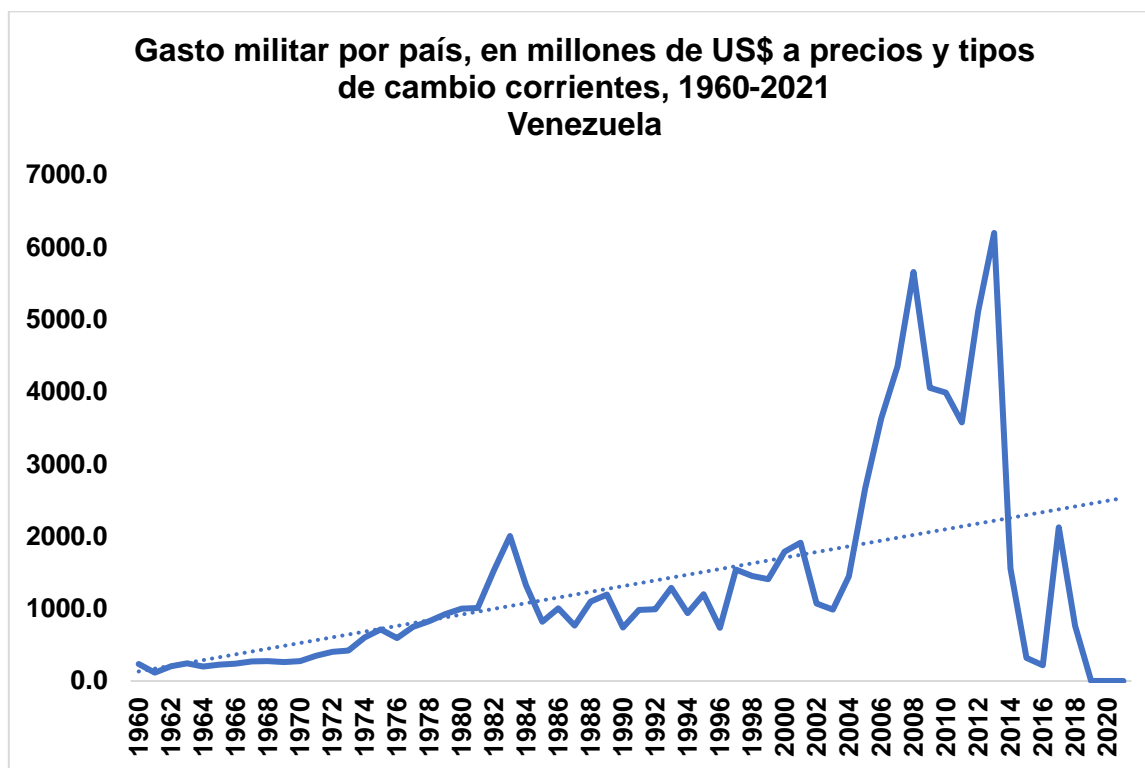
El análisis del gasto militar de Venezuela se puede realizar mediante el estudio de la evolución del gasto a lo largo del tiempo. A partir de Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), se pueden observar las siguientes tendencias:

Durante las décadas de 1960 a 1990, el gasto militar de Venezuela fue relativamente estable, con un rango de valores entre 114.6 y 404.7 millones de dólares. A partir de la década de 2000, el gasto militar comenzó a aumentar significativamente, alcanzando un pico de 6199.7 millones de dólares en 2013.

El gasto militar ha sido fluctuante en las últimas décadas, con aumentos significativos en algunos años y caídas en otros. Por ejemplo, en los años 2000 alcanzó máximos de 2007 millones de dólares y en 2013 alcanzo 6199.7 millones de dólares.

A partir de 2013 el gasto militar ha ido en caída libre, alcanzando un valor de 0.4 millones de dólares en 2021. En general, se puede observar una tendencia al alza en el gasto militar de Venezuela desde la década de 2000 hasta 2013 y una tendencia a la baja después de ese año.

**Gasto militar por país, en millones de US\$ a precios y tipos de cambio corrientes,
 1960-2021 de Venezuela**

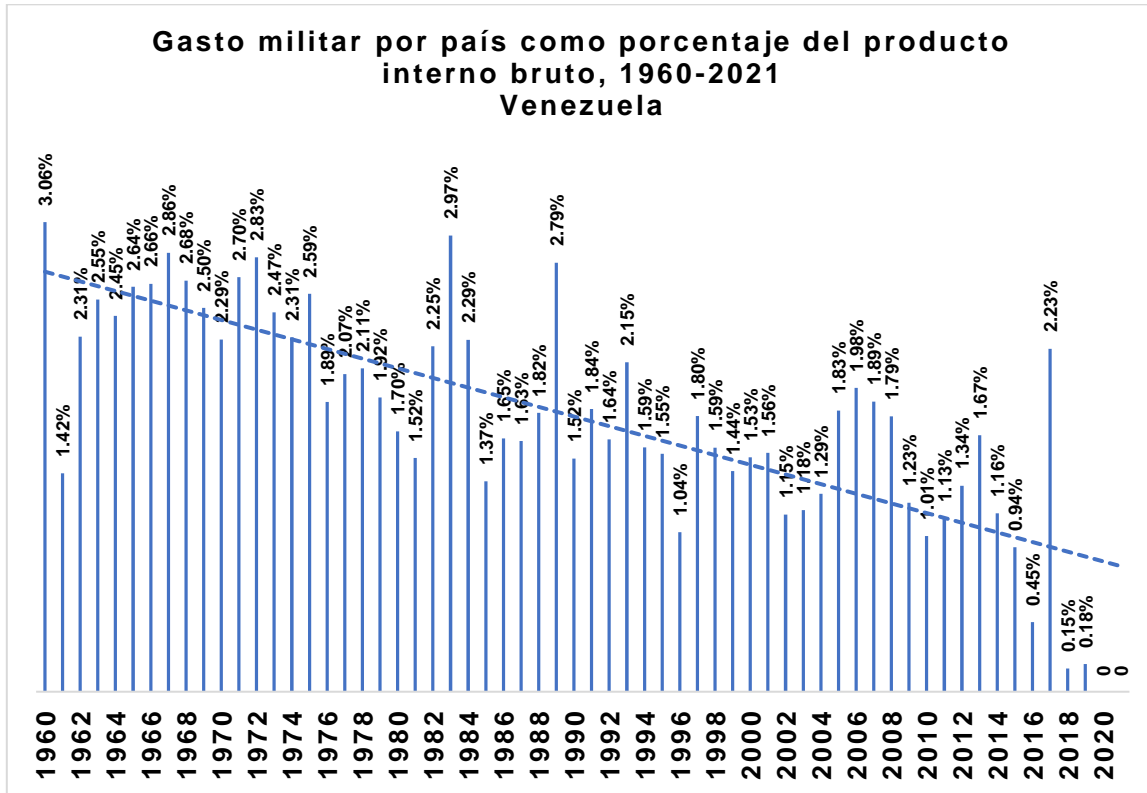


Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)

Según Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), el porcentaje del gasto militar como porcentaje del PIB en Venezuela ha variado con el tiempo, con un máximo del 3.06% en 1960 y un mínimo del 0% en 2021. Generalmente fluctuó entre el 1-3% desde 1960 hasta principios de la década de 2000, con un aumento a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Después de eso, disminuyó a alrededor del 1-2% con un ligero aumento a finales de la década de 2000 y principios de la década de 2010. Después de eso, disminuyó de nuevo hasta alcanzar el 0% en 2021. Se puede observar que, en las últimas dos décadas, el gasto militar como porcentaje del PIB en Venezuela ha disminuido significativamente.

Gasto militar por país como porcentaje del producto interno bruto, 1960-2021 de Venezuela



Elaboración: La autora

Fuente: Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)